

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS



DIARIO DE SESIONES CÁMARA DE DIPUTADOS

127º PERÍODO LEGISLATIVO

30 de agosto de 2.006

REUNIÓN Nro. 5 – 4ª ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL SEÑOR DIPUTADO: ORLANDO VÍCTOR ENGELMANN

SECRETARIO: ELBIO GÓMEZ

PROSECRETARIO: SERGIO CORNEJO

Diputados Presentes

ALDAZ, Julio César
ALLENDE, José Ángel
ALMADA, Juan Carlos
BAHILLO, Juan José
BESCOS, Daniel Raúl
BOLZAN, Jorge Daniel
CASTRILLÓN, Emilio Aroldo
CRESTO, Enrique Tomás
DEMONTE, Beatriz
ENGELMANN, Orlando Víctor
FERNANDEZ, Osvaldo
FUERTES, Adrián Federico
GIORGIO, Horacio
GRIMALT, Lucia Francisca
H AidAR, Alicia Cristina

LOPEZ, Alba
MONZÓN, Hugo
ROGEL, Fabián
SOLARI, Eduardo
TRAMONTIN, Ángel
VITTULO, Hernán Darío
ZACARÍAS, Juan Domingo
Diputados Ausentes
ADAMI, Rubén Francisco
FONTANA, Marcos Américo
GRILLI, Oscar Antonio
MAINEZ, Antonio
VERA, Arturo Eduardo
VILLAVEVERDE, Rubén

SUMARIO

- 1 – Prórroga inicio de la sesión
- 2 - Asistencia
- 3 - Apertura
- 4 - Izamiento de la Bandera
- 5 - Acta
- 6 – Asuntos Entrados

I - Comunicaciones

- a) Oficiales
- b) Particulares

II – Proyectos en revisión

- a) Proyecto de ley. Crear el Sistema de Soporte Alimentario HIV-SIDA. (Expte. Nro. 15.788).
- b) Proyecto de ley. Modificar el Artículo 4º de la Ley Nro. 8.336/90. (Expte. Nro. 15.789).
- c) Proyecto de ley. Implementar en la Provincia un proceso de tratamiento integral para los envases vacíos de productos químicos o biológicos, los que son utilizados en la agricultura. (Expte. Nro. 15.790).
- d) Proyecto de ley. Modificar la Ley Nro. 8.916. Marco Regulatorio Eléctrico Provincial. (Expte. Nro. 15.791).

III – Sanciones definitivas

- Proyecto de ley. Aprobar la incorporación al Plan de Obras a ejecutar con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, por hasta la suma de \$ 7.000.000 para la ejecución de las obras que se incluyen en el Programa de Desarrollo Regional y Generación de Empleo Ley Nro. 24.855.
- Proyecto de ley. Declarar el 19 de noviembre como “Día Provincial de la Prevención del Abuso Infantil”.
- Proyecto de ley. Autorizar al Poder Ejecutivo a transferir a Municipios y Juntas de Gobierno, los postes de hierro empleados para el sostenimiento de crucetas y los hilos de alambre del Servicio Telegráfico Provincial.
- Proyecto de ley. Incorporar al Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos los Artículos 249º bis – Reserva de Identidad – y 390º bis – Protección de Testigos.

Proyectos del Poder Ejecutivo

IV – Proyecto de ley. Autorizar al Poder Ejecutivo a realizar una permuta de un inmueble, ubicado en Colonia “El Potrero”, Departamento Gualeguaychú, el que será destinado para la construcción de la Colonia Penal “El Potrero”. (Expte. Nro. 15.784).

V – Proyecto de ley. Autorizar al I.A.P.V. a donar a la Municipalidad de Concordia inmuebles destinados para la construcción del Grupo Habitacional “Concordia 202 Viviendas”. (Expte. Nro. 15.794).

7 – Proyecto de resolución. Diputada Grimalt. Declarar de interés el “Programa Alimento Seguro” (PAS). (Expte. Nro. 15.809). Ingreso. Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (13).

8 – Proyecto de resolución. Diputada Grimalt. Declarar de interés el “Primer Encuentro Regional de Gastronomía y Turismo” y “Segundo Encuentro Nacional de Periodistas Gastronómicos y Turismo”. (Expte. Nro. 15.813). Ingreso. Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (13).

9 – Proyecto de resolución. Diputado Cresto. Declarar de interés el Encuentro de “Promoción del desarrollo emprendedor para jóvenes rurales”. (Expte. Nro. 15.812). Ingreso. Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (13).

10 – Ley Nro. 9.487. Expropiación Terrenos conexión física Rosario- Victoria. (Expte. Nro. 15.532). Ingreso dictamen de comisión. Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (14).

11 – Proyectos de los señores diputados. Ingreso. Reserva. Pase a comisión.

Proyectos de los señores diputados

VI – Proyecto de resolución. Diputados Giorgio, Vera y Rogel. Disponer en las rutas de todo el territorio provincial controles camineros de manera ambulante, periódicos y en distintos tramos. (Expte. Nro. 15.779). Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (13).

VII – Proyecto de resolución. Diputados Giorgio, Monzón y Vera. Realizar un control a las unidades de transporte de pasajeros. (Expte. Nro. 15.782). Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (13).

VIII – Proyecto de resolución. Diputado Villaverde. Declarar de interés las “Primeras Jornadas Provinciales sobre Patrimonio Arquitectónico: Patrimonio y Ciudad”. (Expte. Nro. 15.783). Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (13).

IX - Proyecto de resolución. Diputado Villaverde. Crear un sistema de liquidación de impuestos y su pago a través de la página web de la Dirección General de Rentas de la Provincia. (Expte. Nro. 15.785). Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (13).

X – Proyecto de ley. Diputados Fernández, Solari y diputada López. Modificar el Artículo 30° de la Ley Nro. 9.622. (Expte. Nro. 15.786).

XI – Proyecto de resolución. Diputados Fernández, Solari y diputada López. Reglamentar los Artículos 23° y 24° de la Ley Nro. 8.105. (Expte. Nro. 15.787). Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (13).

XII – Proyecto de ley. Diputada López. Crear la Regionalización de los Servicios de Salud de la Provincia de Entre Ríos. (Expte. Nro. 15.792).

XIII – Proyecto de resolución. Diputados Fernández, Solari y diputada López. Declarar de interés el “Octavo Simposio de Investigación en Educación en Física”. (Expte. Nro. 15.793). Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (13).

XIV – Proyecto de resolución. Diputados Giorgio, Monzón y Rogel. Solicitar al Poder Ejecutivo realice los trámites necesarios para que el Centro de Salud “Dr. Marcelo Marelli” de la localidad de La Criolla, Departamento Concordia, cuente con una guardia médica ambulatoria los días sábados, domingos y feriados. (Expte. Nro. 15.795). Moción de sobre tablas. Consideración. Aprobada. (13).

12 - Homenajes

- A la Madre Teresa de Calcuta
- A Fernando Crossa

15 – Cuarto intermedio

16 – Reanudación de la sesión

17 – Código Procesal Civil y Comercial. (Expte. Nro. 15.233). Consideración. Aprobada en general.

18 – Cuarto intermedio

19 – Reanudación de la sesión

–En Paraná, a 30 de agosto de 2.006, se reúnen los señores diputados.

–Siendo las 11 y 29, dice el:

1

PRORROGA INICIO DE LA SESIÓN

SR. VITTULO – Pido la palabra.

Solicito una prórroga de media hora para dar inicio a la sesión.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Así se hará, señor diputado.

-Eran las 11 y 30.

2

ASISTENCIA

-Siendo las 11 y 58, dice el:

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Por Secretaría se tomará asistencia.

-Se encuentran presentes los señores diputados: Aldaz, Allende, Almada, Bahillo, Bescos, Bolzán, Castrillón, Cresto, Demonte, Engelmann, Fernández, Fuertes, Giorgio, Grimalt, Haidar, López, Monzón, Rogel, Solari, Tramontín, Vittulo y Zacarías.

3**APERTURA**

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Con la presencia de veintidós señores diputados, queda abierta la 4ª sesión ordinaria del 127º Período Legislativo.

4**IZAMIENTO DE LA BANDERA**

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Invito al señor diputado Eduardo Solari a izar la Bandera Nacional.

-Así se hace. (Aplausos)

5**ACTA**

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Por Secretaría se dará lectura al acta de la sesión anterior.

-A indicación del señor diputado Castrillón se omite la misma dándose la por aprobada.

6**ASUNTOS ENTRADOS**

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados.

-Se lee:

I**COMUNICACIONES****a) Oficiales**

- El Poder Ejecutivo remite contestación al pedido de informes que trata sobre el estado de las actuaciones administrativas referidas a la compra de nuevas unidades móviles para la Policía de la Provincia de Entre Ríos. (Expte. Nro. 15.656).
- El Poder Ejecutivo remite contestación al pedido de informes sobre las medidas concretas que se encuentran vigentes para controlar la inseguridad ciudadana. (Expte. Nro. 15.658).
- El Poder Ejecutivo remite contestación al pedido de informes sobre Convenio de Conversión de Deuda Pública en Bonos Garantizados, ratificado por Decreto Nro. 200 MEHF del 02 de febrero de 2.006. (Expte. Nro. 15.553).
- El Poder Ejecutivo se dirige en referencia a la resolución sobre las obras de mantenimiento y refacción de la Ruta Provincial Nro. 4 desde la ciudad de Concordia a la localidad de Los Charrúas. (Expte. Nro. 14.642).
- El Poder Ejecutivo hace referencia a la resolución mediante la que se solicita que se realicen trabajos de mantenimiento en las banquetas y rutas de la Provincia. (Expte. Nro. 14.715).
- El Poder Ejecutivo remite contestación al pedido de informes el que trata sobre los descuentos que el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. venía practicando a los usuarios en concepto de "Seguro de Robo de Cajeros Automáticos". (Expte. Nro. 15.479).
- El Poder Ejecutivo remite contestación al pedido de informes el que trata sobre los fundamentos legales – jurisprudenciales y doctrinarios, acerca del desistimiento de las acciones judiciales caratuladas "Gobierno de la Provincia de Entre Ríos C/Municipalidad de Paraná y Otros S/Sumario por Nulidad y Reivindicación". (Expte. Nro. 15.393).

- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se dirige en relación a la resolución por medio de la que se solicitaba al Poder Ejecutivo analice la posibilidad de derogar o anular los Decretos de indulto dictados por el ex Presidente Menem. (Expte. Nro. 15.580).
- El Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos remite contestación al pedido de informes referido a la denuncia que efectuó el periodista de la ciudad de Santa Elena, Carlos Furman en el Juzgado de la ciudad de La Paz. (Expte. Nro. 15.688).
- El Poder Ejecutivo remite contestación al pedido de informes sobre los casos de hepatitis detectados en el 2.004 y 2.005 en el Barrio "Cuchilla II" de la localidad de Gualaguaychú. (Expte. Nro. 15.328).

-A sus antecedentes

- El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villaguay remite copia de la Resolución Nro. 504 por la que se adhiere a las gestiones que realiza el diputado Fuertes para que se re-asfalten los Accesos Norte y Sur a la ciudad de Villaguay.
- La Cámara de Diputados de Catamarca remite copia por la que se declara de interés el documento "Aportes al Proyecto de la Futura Ley de Educación", elaborado por los representantes de los Pueblos Originarios.
- El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas remite información fiscal, correspondiente a los siguientes temas: a) Régimen de Responsabilidad Fiscal Ley Nro. 25.917, Artículo 7º y b) Convenio de Asistencia Financiera, habiendo sido elaborado por la Contaduría General de la Provincia y otros organismos del Ministerio.
- El Ministerio de Obras y Servicios Públicos remite copia del Decreto Nro. 5.027/06 MGJEOYSP, por el cual se modifica el Presupuesto General de Gastos por la suma de \$ 976.959,33 de la Dirección Provincial de Vialidad.
- El Poder Ejecutivo remite copia del proyecto de ley por el que se crean en el ámbito de la Jurisdicción 20: Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos, Programa 31, Jefatura de Policía: trescientos cincuenta cargos de Agentes de Policía y cien cargos de Oficial Ayudante.
- El Poder Ejecutivo remite para conocimiento copia del proyecto de ley por el que se modifica el Artículo 15º de la Ley Nro. 9.728 (referente a la Ley Nro. 3.001, Orgánica de Municipios).

-En Secretaria a disposición de los señores diputados

- El H. Senado mediante Nota Nro. 071 comunica la designación del señor senador Hugo Berthet como Presidente del Bloque Frente para la Victoria y del señor senador Carlos Orlandi como Vicepresidente 1º del mismo.
- El H. Senado mediante Nota Nro. 037 comunica la designación del señor senador Héctor José Strassera como Presidente del Bloque Justicialista y del señor senador Héctor Darío Argain como Vicepresidente 1º del mismo.
- El H. Senado mediante Nota Nro. 033 comunica la designación del señor senador Víctor Firpo como Vicepresidente 1º y de la señora senadora Teresa Ferrari como Vicepresidenta del Cuerpo.

-Quedan enterados los señores diputados

b) Particulares

- El Colegio de Martilleros Públicos de Entre Ríos expresa su opinión sobre el proyecto de ley por el cual se modifica el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia. (Expte. Nro. 15.233).
- El Colegio de Abogados de Entre Ríos hace referencia a la reforma del Código Procesal, Civil de la Provincia. (Expte. Nro. 15.233).
- El Centro de Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos -CEMERAC- dependiente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos manifiesta su posición ante la reforma del Código Procesal, Civil y Comercial de la Provincia. (Expte. Nro. 15.233).

-A sus antecedentes

**II
PROYECTOS EN REVISIÓN**

a)

**PROYECTO DE LEY
(Expte. Nro. 15.788)****LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY**

Art. 1º - Créase el Sistema de Soporte Alimentario H.I.V. (Virus Inmunodeficiencia Humana) - SIDA (Síndrome Inmunodeficiencia Humana) que estará constituido por un conjunto de nutrientes, vitaminas y oligoelementos necesarios e indispensables para reducir los efectos del bajo peso y desnutrición que sufren las personas portadoras del H.I.V. - SIDA.

Art. 2º - Impleméntase en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, el Sistema de Soporte Alimentario H.I.V. - SIDA, cuyos destinatarios son aquellas personas de escasos recursos económicos, portadoras del virus o que padezcan la enfermedad y se encuentren bajo tratamiento ambulatorio y/o en internación en hospitales públicos de esta Provincia.

Art. 3º - El Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes en el área de Salud y Acción Social, deberá arbitrar los medios para atender la ejecución del mencionado Sistema en todos los casos comprendidos en las previsiones de la presente ley.

Art. 4º - Facúltase al Poder Ejecutivo a adecuar las partidas presupuestarias necesarias para atender la implementación del Sistema creado por la presente.

Art. 5º - Comuníquese, etcétera.

Paraná, Sala de Sesiones, 16 de agosto de 2.006.

-A la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Drogadicción y Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

b)

**PROYECTO DE LEY
(Expte. Nro. 15.789)****LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY**

Art. 1º - Modifíquese el Artículo 4º de la Ley Nro. 8.336/90, texto ordenado por Ley Nro. 8.523/91, el que quedará redactado de la siguiente manera.

"Artículo 4º. El Directorio del Instituto Autárquico Becario Provincial (IN.AU.BE.PRO) estará integrado por dos (2) funcionarios representantes del Consejo General de Educación, un (1) representante por las Universidades Nacionales con funcionamiento en el territorio de la Provincia, un (1) representante por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, un (1) funcionario representante por el Instituto de Investigación y Transferencias Tecnológicas de la Provincia, tres (3) representantes de la Asociación de Profesionales de Entre Ríos y un (1) legislador por cada una de las Cámaras de la Honorable Legislatura de la Provincia de Entre Ríos. Este Directorio tendrá carácter ad honórem y será administrado por un Director Ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo. Los funcionarios de los Organismos estatales provinciales, serán propuestos por los Presidentes de los respectivos Organismos y nombrados por el Poder Ejecutivo. Los representantes de la Legislatura serán elegidos por la Cámara de Senadores y Diputados respectivamente y los que representen a las Universidades y Asociaciones Profesionales serán designados por sus correspondientes órganos superiores."

Art. 2º - Comuníquese, etcétera.

Paraná, Sala de Sesiones, 16 de agosto de 2.006.

-A las Comisiones de Legislación General y de Educación, Ciencia y Tecnología y Peticiones, Poderes y Reglamento.

c)

PROYECTO DE LEY
(Expte. Nro. 15.790)**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY**

Art. 1º - Impleméntese en la Provincia de Entre Ríos, un proceso de tratamiento integral de los envases vacíos de productos químicos o biológicos (fitosanitarios) utilizados en la producción agrícola, a fin de proteger la salud humana, los recursos naturales, los procesos ecológicos y el patrimonio de terceros de los daños contaminantes que pudieran ocasionarse como consecuencia de la dispersión de dichos envases por el territorio provincial.

Art. 2º - A efectos de la presente ley se considera:

a) **Producto químico o biológico de uso agropecuario:** a todo producto químico orgánico e inorgánico o biológico que se emplee para combatir o prevenir la acción de insectos, ácaros, malezas, hongos, bacterias, roedores u otros organismos de origen animal o vegetal considerados perjudiciales para la producción agraria. Esta definición incluye también a los productos químicos utilizados como fertilizantes e inoculantes, exceptuando los productos de uso veterinario.

b) **Proceso de tratamiento integral de envases vacíos:** al triple lavado o lavado a presión de envases vacíos; la recolección; el acopio y la disposición final de los mismos.

Art. 3º - A los fines de esta ley, adhiérese la Provincia de Entre Ríos al Programa Agrolimpio (Programa de Recolección y Disposición Final de los Envases Vacíos de Agroquímicos) diseñado y organizado por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) el que incluye dos (2) fases:

1) Fase de Recolección y Acopio, comprende:

a) Triple lavado o lavado a presión de los envases (TL).

b) Traslado a Centros de Acopio Transitorios y Centros de Acopio Principales (CAP).

c) Verificación de condiciones de limpieza y separación de materiales según su naturaleza (plástico, vidrio, metal, cartón, papel, etcétera) en los CAP.

2) Fase de Reciclado, comprende:

a) Procesamiento periódico de los materiales acumulados para la reducción de sus volúmenes.

b) Disposición final.

Art. 4º - El Decreto reglamentario de la presente, establecerá los aspectos operativos que hacen a la aplicación de esta norma y determinará los plazos para su aplicación.

Art. 5º - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las reasignaciones presupuestarias que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley.

Art. 6º - Comuníquese, etcétera.

Paraná, Sala de Sesiones, 16 de Agosto de 2.006.

-A la Comisión de Tierra y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

d)

PROYECTO DE LEY
(Expte. Nro. 15.791)**LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY**

Art. 1º - Modifíquese los Artículos 3º, 15º y 69º de la Ley Nro. 8.916 los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"**Artículo 3º:** La distribución de electricidad deberá preferentemente ser realizada por personas jurídicas de carácter privado a las que el Poder Ejecutivo les haya otorgado la correspondiente concesión, debiendo contar su operador con una licencia técnica que otorgará el Ente Provincial Regulador de la Energía, facultándolo a dictar disposiciones reglamentarias de su otorgamiento y revocación."

"**Artículo 15º:** Ningún distribuidor podrá abandonar total ni parcialmente las instalaciones destinadas a la distribución de electricidad, ni dejar de prestar los servicios a su cargo, sin contar con la autorización del Ente Provincial Regulador de la Energía, quien a su exclusivo

criterio sólo la otorgará después de comprobar que las instalaciones o servicios a ser abandonados no resultan necesarios para el servicio público."

"Artículo 69º: Las violaciones o incumplimientos de los contratos de concesión de distribución de electricidad serán sancionados con las penalidades previstas en los respectivos contratos de concesión, los que deberán prever la caducidad cuando se encuentre comprometida la prestación del servicio."

Art. 2º - Intégrese el Artículo 41º de la Ley Nro. 8.916 incorporando como nuevos incisos los siguientes:

f) Límites de endeudamiento.

g) Determinar los bienes esenciales para la prestación del servicio.

h) En su caso, las inversiones obligatorias en materia de infraestructura e instalaciones.

Art. 3º - Intégrese el Artículo 48º apartado A, Facultades Normativas, de la Ley Nro. 8.916 incorporando como nuevos incisos los siguientes:

7) Regular el régimen de los bienes esenciales afectados a la prestación del servicio público.

8) Establecer las normas de la Contabilidad Regulatoria a la que los concesionarios deberán ajustar sus registros e informes contables.

9) Requerir un plan de Inversiones exigidas por el servicio.

Art. 4º - Intégrese el Artículo 48º apartado B, Facultades Fiscalizadoras, de la Ley Nro. 8.916, incorporando como nuevo inciso el siguiente:

8) Auditar el límite de endeudamiento dispuesto por el concesionario, conforme a las normas que dicte que tendrán por fin evitar que el servicio se encuentre comprometido por esta causal.

Art. 5º - Comuníquese, etcétera.

Paraná, Sala de Sesiones, 16 de agosto de 2.006.

-A la Comisión de Legislación General.

SR. ALDAZ - Pido la palabra.

Solicito, señor Presidente, que este proyecto sea remitido también a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Si no hay oposición así se hará, señor diputado.

-Asentimiento.

PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO

IV

PROYECTO DE LEY

(Expte. Nro. 15.784)

A la Honorable Legislatura:

Tengo el agrado de dirigirme a esa Honorable Legislatura a fin de remitir a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a permutar un inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por otro propiedad de la señora Anzorreguy de MacFarlane Margarita, D.N.I. Nro.18.367.189, para la Construcción de la Nueva Colonia Penal El Potrero en el departamento Gualeguaychú.

Es del caso destacar que esta permuta es sumamente beneficiosa para el Estado Provincial, atento a lo informado por el Servicio Penitenciario Provincial en las actuaciones; teniendo en cuenta que el inmueble ofrecido cuenta con claras ventajas en cuanto a ubicación y servicios de los que el inmueble del Estado Provincial carece, con lo que se logra una mejor ubicación y accesibilidad, para este tipo de establecimientos.

Por lo expresado remito a consideración el adjunto proyecto de ley, estimando que si esa Honorable Legislatura comparte lo propuesto, solicito el tratamiento y sanción del proyecto de ley que se pone a consideración.

Jorge P. Busti –Sergio D. Urribarri

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Art. 1º - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar la permuta con la señora Anzorreguy de MacFarlane Margarita D.N.I. Nro. 18.367.189 de un inmueble propiedad de ésta, ubicado en el Dto. Costa Uruguay Norte, departamento Gualeguaychú, Colonia El Potrero Lote U, Partida Nro. 127.059, Plano 62.211, Ruta Nacional Nro. 136 y Calle Nro. 6, con destino al Servicio Penitenciario Provincial, para la ejecución de la obra "Construcción Colonia Penal El Potrero", por un inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, ubicado en el Departamento Gualeguaychú, Distrito Costa Uruguay Norte, Lote 100, Colonia El Potrero, Lote 100, Partida Nro. 126.307, Plano 47.519, Ruta Nacional 136. Los Inmuebles precitados constan:

a) El inmueble perteneciente a la señora Anzorreguy de MacFarlane, según Plano de Mensura Nro. 62.211, posee una superficie de 81Hs. 10 As. 00 Cs. y se ubica dentro de los siguientes límites y linderos:

Norte: Linda mediante recta (1-2) rumbo S 88º 28' 40" E de 825,40 Mts. con calle 6.

Este: Linda mediante recta (2-5) rumbo S 00º 13' 30" O de 492,00 Mts. con Manuel Gago.

Sur: Linda mediante cinco rectas a los siguientes rumbos y distancias: (5-9) N 88º 28' 50" O de 435,40 Mts; (9-8) S 00º 21' 15" O de 208,85 Mts; (8-7) N 89º 25' 47" O de 252,90 Mts; (7-6) S 00º 14' 00" O de 60,45 Mts. y (6-4) N 50º 41' 30" O de 176,00 Mts, con el Lote 2 de esta subdivisión mediante las cuatro primeras rectas y con Ruta Nacional Nro. 136 la restante.

Oeste: Linda mediante recta (4-1) rumbo N 00º 14' 00" E de 657,60 Mts. con Berta K. Bauer y Otros.

b) El inmueble perteneciente al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos según Plano de Mensura Nro. 47.519, posee una superficie de 100 Has. 42 As. 32 Cs.

Art. 2º - Déjase establecido que la propietaria señora Anzorreguy de MacFarlane Margarita, D.N.I. Nro. 18.367.189, deberá depositar en la cuenta Nro. 5.711/3 del Nuevo Banco de Entre Ríos Sucursal Gualeguaychú, denominada Unidad Penal Nro. 2 Talleres, perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial la suma de Pesos seiscientos sesenta y dos mil (\$ 662.000), diferencia resultante a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, conforme a la Tasación realizada por el Consejo de Tasaciones de la Provincia, de los inmuebles a permutar y conforme lo dispuesto en Resolución Nro. 2.540/06 del citado Organismo, previo a la escrituración definitiva.

Art. 3º - Dispónese que el importe obtenido de la presente permuta y que se menciona en el Artículo 2º, sea invertido exclusivamente en el equipamiento de la Nueva Granja Penal, facultando al Servicio Penitenciario Provincial a realizar las tramitaciones que sean necesarias dentro de la normativa vigente, para cumplir con este cometido.

Art. 4º - Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

BUSTI - URRIBARRI

-A la Comisión de Legislación.

V**PROYECTO DE LEY**

(Expte. Nro. 15.794)

A la Honorable Legislatura:

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad, sometiendo a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se, autoriza al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de la Provincia de Entre Ríos, a donar a favor de la Municipalidad de Concordia, inmuebles de su propiedad con destino a espacio verde y calles del Grupo Habitacional Concordia 202 Viviendas - CGT - Sector I - 80 Viviendas, ubicados en el departamento y ciudad de Concordia - Planta Urbana: Lote destinado a espacio verde: Plano Nro. 55.268 - Partida Nro. 146.060 - Lote Nro. 5, Manzana 33 "Norte" - 28 "Oeste" Nro.787 - Fracción "L" - Lote Nro. 5, Domicilio Parcelario calle J. Liebermann esquina calle Pública. Lotes destinados a calles: Plano Nro. 55.270 - Partida: calle Lote Nro. 19, Manzana 34 "Norte" - 27 y 28 "Oeste" Nro. 737 y Nro. 738; Plano Nro. 55.269 - Partida calle - Lote Nro. 19 - Manzana 32 y 33 "Norte" - 27 y 28 "Oeste" Nro. 787, 788, 839 y 840 -, Lote Nro. 19.

La autorización que se solicita se encuadra dentro de la normativa del Artículo 45º de la Constitución Provincial, Ley Nro. 5.140, Capítulo V, de la Gestión de los Bienes de la Provincia, Artículo 55º modificada por Ley Nro. 8.964, Ley de Administración Financiera de los Bienes y Contrataciones, Reglamentada por el Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 404/95 MEOySP, (TUO Ley Nro. 5.140).

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

Jorge P. Busti – Sergio D. Urribarri

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Art. 1º - Autorízase al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, a donar a la Municipalidad de Concordia los inmuebles de su propiedad, con destino a: Espacio verde y calles del Grupo Habitacional Concordia 202 Viviendas - CGT - Sector I - 80 Viviendas, estableciéndose que la donación se realiza atendiendo a la utilidad pública, que significa destinar los terrenos indicados a los fines encomendados en la donación, conforme lo establece el Artículo 45º de la Constitución Provincial, los que se ubican e identifican de la siguiente forma:

A) Lote con destino a espacio verde:

1) Plano Nro. 55.268 - Partida Nro. 146.060 - Lote Nro. 5 - Localización: Provincia de Entre Ríos - Departamento y ciudad de Concordia - Planta urbana - Manzana 33 "Norte" 28 "Oeste" Nro. 787 - Fracción "L" - Lote Nro. 5 - Domicilio parcelario: calle J. Liebermann esquina calle Pública - Superficie: 2.116, 91 Mts² (dos mil ciento dieciséis metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados).

Observaciones: Este Lote será transferido a la Municipalidad de la Ciudad de Concordia.

Límites y linderos:

Norte: Recta (213-214) al rumbo S 79º 00' E de 62,88 metros lindando con calle Jacobo Liebermann.

Este: Recta (214-215) al rumbo S 11º 00' O de 34,21 metros lindando con calle Pública 51.

Sur: Recta (215-216) al rumbo N 79º 00' O de 61,88 metros lindando con calle Pública.

Oeste: Recta (216-213) al rumbo N 11º 00' E de 34,21 metros lindando con Lotes 3 y 2 de esta misma propiedad.

B) Lotes destinados a calles:

2) Plano Nro. 55.270 - Partida Nro. Calle - Lote Nro. 19 - Localización: Provincia de Entre Ríos - departamento y ciudad de Concordia – Planta urbana - Manzana 34 "Norte" 27 y 28 "Oeste" Nro. 737 y 738 - Lote Nro. 19 - Lote destinado a calles públicas - Superficie: 2.928,4480 Mts² (dos mil novecientos veintiocho metros cuadrados con cuatro mil cuatrocientos ochenta centímetros cuadrados).

Observaciones: Este lote será destinado a calle pública vehicular y donado a la Municipalidad de Concordia.

Límites y linderos:

Norte: Recta (10-11) al rumbo S 79º 00' E de 12,12 metros, lindando con calle 11 de Noviembre.

Este: Cinco rectas. (11-94) al rumbo S 11º 00' O de 34,21 metros y recta (94-22) al rumbo S 79º 00' E de 80,53 metros ambas lindando con Fracción B del IAPV; recta (22-23) al rumbo S 11º 00' O de 12,12 metros lindando con calle Presbítero Jorge Odiard; recta (23-111) al rumbo N 79º 00' O de 80,54 metros y recta (111-34) al rumbo S 11º 00' O de 34,21 metros lindando ambas con fracción C del IAPV.

Sur: Recta (34-35) al rumbo N 79º 00' O de 12,12 metros lindando con calle Jacobo Liebermann.

Oeste: Cinco rectas: (35-112) al rumbo N 11º 00' O de 34,21 metros y recta (112-46) al rumbo N 79º 00' O de 80,54 metros lindando ambas con fracción C del IAPV; recta (46-47) al rumbo N 11º 00' E de 12,12 metros lindando con calle 2 de Abril; recta (47-93) al rumbo S 79º 00' E de 80,54 metros y recta (93-10) al rumbo N 11º 00' E de 34,21 metros lindando ambas con fracción A del IAPV.

3) Plano Nro. 55.269 - Partida Nro. calle - Lote Nro. 19 - Localización: Provincia de Entre Ríos - Departamento y ciudad de Concordia – Planta urbana - Manzana 32 y 33 "Norte" - 27 y 28 "Oeste" Nro. 787, 789, 839 y 840 - Lote Nro. 19 - Lote destinado a calles públicas - Superficie:

5.200,81 Mts² (cinco mil doscientos metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados).

Observaciones: Este lote será destinado a calle pública vehicular y donado a la Municipalidad de Concordia.

Límites y linderos:

Norte: Recta (214-1) al rumbo S 79° 00' E de 12,12 metros lindando con calle Jacobo Liebermann.

Este: Trece rectas: (1-21) al rumbo S 11° 00' O de 34,21 metros y recta (21-21) al rumbo S 79° 00' E de 80,54 metros ambas lindando con fracción E del IAPV; recta (12-40) al rumbo S 11° 0' de 12,12 metros lindando con calle Presbítero Jorge Odiard; recta (40-31) al rumbo N 79° 00' O de 80,54 metros; recta (31-51) al rumbo S 11° 00' O de 34,21 metros y recta (51-42) al rumbo S 79° 00' O de 80,54 metros todas lindando con fracción F del IAPV; recta (42-70) al rumbo S 11° 00' O de 12,12 metros lindando con calle Presbítero Jorge Odiard; recta (70-61) al rumbo N 79° 00' O de 80,54 metros; recta (61-81) al rumbo S 11° 00' O de 34,21 metros; recta (81-72) al rumbo S 79° 00' E de 80,54 metros todas lindando con fracción G del IAPV, recta (72-100) al rumbo S 11° 00' O de 12,12 metros lindando con calle Presbítero Jorge Odiard; recta (100-91) al rumbo N 79° 00' O de 80,54 y recta (91-111) al rumbo S 11° 00' O de 34,21 metros ambas lindando con fracción H del IAPV.

Sur: Recta (111-132) al rumbo N 79° 00' O de 12,12 metros lindando con calle Juan José Valle.

Oeste: Trece rectas: (132-130) al rumbo N 11° E de 34,21 metros y recta (130-121) al rumbo N 79° 00' O de 80,54 metros lindando ambas con fracción I del IAPV; recta (121-171) al rumbo N 11° 00' E de 12,12 metros lindando con calle 2 de Abril; recta (171-162) al rumbo S 79° 00' E de 80,54 metros; recta (162-160) al rumbo N 11° 00' E de 34,21 metros; recta (160-151) al rumbo N 79° 00' O de 80,54 metros todas lindando con fracción J del IAPV; recta (151-201) al rumbo N 11° 00' E de 12,12 metros lindando con calle 2 de Abril; recta (201-192) al rumbo S 79° 00' E de 80,54 metros; recta (192-190) al rumbo N 11° 00' E de 34,21 metros; recta (190-181) al rumbo N 79° 00' O de 80,54 metros todas lindando con fracción K del IAPV; recta (181-218) al rumbo N 11° 00' E de 12,12 metros lindando con calle 2 de Abril; recta (218-215) al rumbo S 79° 00' E de 80,54 metros y recta (215-214) al rumbo N 11° 00' E de 34,21 metros ambas lindando con fracción L del IAPV.

Los límites, medidas, linderos y demás circunstancias de individualización se encuentran descriptos en sus respectivas fichas y se dan aquí por reproducidos.

Art. 2º - La presente donación es con el cargo de que los inmueble donados sean efectivamente destinados a espacio verde y calles públicas, caso contrario se producirá la reversión automática a favor del IAPV.

Art. 3º - Autorízase a la Escribanía Mayor de Gobierno a proceder a instrumentar la correspondiente escritura traslativa de dominio, de conformidad a lo dispuesto precedentemente.

Art. 4º - Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

BUSTI - URRIBARRI

-A la Comisión de Legislación General.

7

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Ingreso (Expte. Nro. 15.809)

SRA. GRIMALT - Pido la palabra.

Solicito el ingreso y la reserva en Secretaría del proyecto de resolución –Expte. Nro. 15.809–, por el que se declara de interés Legislativo el Programa Alimento Seguro, del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Si hay asentimiento, se la dará ingreso.

-Asentimiento.

-Se lee:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS RESUELVE:

Art. 1º – Declarar de interés legislativo al “Programa Alimento Seguro” (PAS) del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos.

Art. 2º – Remitir copia de la presente, al Colegio de Bioquímicos de la provincia de Entre Ríos.

Art. 3º – De forma.

GRIMALT

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Desde los orígenes de la humanidad, los alimentos fueron producidos para satisfacer las necesidades biológicas que los individuos manifestaban en sus comunidades reducidas. La concentración urbana, el aumento de la población y el simultáneo incremento de la demanda hicieron que se aplicaran nuevas tecnologías adecuadas para lograr una elaboración a gran escala.

En el mundo actual, y como consecuencia de todos estos fenómenos, el consumidor obtiene cada vez en menor proporción su alimento directamente de las fuentes naturales. En la mayoría de los casos el alimento llega hasta el consumidor luego de haber recorrido una serie de modificaciones y transformaciones. En todas las etapas de la cadena alimentaria - producción, preparación, distribución, venta y consumo- se debe aplicar el concepto de inocuidad de alimentos que constituye un factor clave para garantizar la salud de la población.

Según lo establecido por el Codex Alimentarius, la inocuidad: es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Los alimentos y el agua son los vehículos principales de exposición de agentes diversos, pudiendo tratarse de sustancias químicas (plaguicidas, fertilizantes, antibióticos, micotoxinas, conservantes, colorantes o aditivos prohibidos, etc.), de contaminación física debida a restos de vidrios, metales, piedras, etc., y por múltiples microorganismos (virus, parásitos, hongos y bacterias). Por otro lado, tanto los alimentos irradiados como los transgénicos se encuentran actualmente muy cuestionados. Cuando resultan contaminados en niveles inadmisibles conllevan riesgos sustanciales para la salud de los consumidores, y representan grandes cargas económicas para las naciones.

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son una de las principales causas de morbilidad en los países de América Latina y el Caribe. El desarrollo económico y la globalización del mercado mundial, las alteraciones de los hábitos alimentarios con el auge de los alimentos industrializados y comidos fuera de los domicilios, la introducción de medidas básicas de saneamiento, entre otros factores, han alterado el perfil epidemiológico de las ETA, exponiendo a la población a diferentes tipos de contaminantes.

Las enfermedades diarreicas, están señaladas entre los principales problemas de salud pública, donde los alimentos y el agua contaminados son fuentes importantes de contagio. La información disponible en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que las ETA están entre las primeras cinco causas de muerte en niños menores de cinco años, tienen una incidencia de cuatro episodios diarreicos anuales por niño y muestran anualmente un franco aumento de morbi-mortalidad.

Así, las enfermedades transmitidas por alimentos, constituyen una preocupación para la Salud Pública ya que afectan la salud de millones de personas. De igual manera tienen una repercusión económica, ya que inciden directa o indirectamente en las disputas por espacios de mercado o en actividades afines como por ejemplo el turismo.

Cabe señalar que en un informe sobre nutrición y salud pública emitido por autoridades del gobierno estadounidense en 1.999 se indicó que “los costos económicos de las enfermedades asociadas con alimentos, ascendieron a la suma de U\$S 23.000 millones, excluidos los costos para la industria”.

En nuestro país, entre los años 1.993 y 2.002, fueron notificados al Sistema Regional de Vigilancia Epidemiológica de las ETA (OPS-OMS), 155 brotes de ETA que ocasionaron 3.525 enfermos de los cuales 5 fallecieron. En dicho período se informa un número total de 2.053.276, los agentes etiológicos involucrados fueron Salmonella sp Trichinella spiralis, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Staphylococo aureus, Salmonella tiphy, Shigella flexneri, Shigella sp, Staphylococo sp y Clostridium botulinum, Shigella sonnei, Saxitoxina,

Salmonella typhimurium, A. Histolytica, Salmonella arizonae, Coniformes, Clostridium perfringens, Bacillus cereus.

En la Provincia de Entre Ríos, en el mismo período, hubo 40.680 casos de ETA, lo que representó el 2 por ciento del total de casos denunciados en el país. Sin embargo, tal como se mencionó, hay que considerar en la evaluación sanitaria de la incidencia de este problema los subregistros que existen. La OMS estima que actualmente se reconoce sólo una mínima proporción y se notifica aún una menor, indicando que en los países en desarrollo, la relación entre los casos ocurridos y notificados es de 100 a 1.

La calidad de los alimentos:

El término de calidad ha ido evolucionando con el tiempo. Es así que la calidad pasó de ser una función de control aplicada al final de los procesos a ser un instrumento preventivo aplicado a lo largo de la cadena de producción convirtiéndose en una herramienta de gestión.

La implementación de sistemas de calidad en la industria alimenticia es fundamental no sólo para la elaboración de alimentos sanos e inocuos, sino para mejorar la calidad de vida y la satisfacción del consumidor. Por otra parte las empresas encuentran elementos diferenciadores respecto a la competencia, que les permiten ganar cuotas de mercado o situarse en un plano de igualdad frente a aquellos.

Existen innumerables legislaciones y normas que se actualizan en forma permanente y pretenden proteger al público de fraudes, adulteraciones y enfermedades, a pesar de ellas el control de los alimentos continúa siendo un problema para la industria alimenticia.

El camino hacia la calidad de una industria o servicio de alimentos, se debería iniciar con el cumplimiento de la normativa madre que rige el tema en nuestro país, el Código Alimentario Argentino (CAA). El mismo exige, por ejemplo, que todo el personal involucrado en la manipulación de alimentos, materias primas, utensilios y equipos debe contar con un curso instructivo de Manipulación de Alimentos. Esto puede considerarse como un punto de partida al momento de involucrarse en la actividad alimenticia. Además el CAA fija la aplicación de las BPM para establecimientos elaboradores de alimentos que comercializan sus productos en dicho mercado. Las Buenas Prácticas de Elaboración, son los procedimientos necesarios para lograr alimentos inocuos, saludables y sanos. Por este motivo aquellos que estén interesados en participar en el mercado global deben contar con BPM. Paralelamente a ello, el ajuste de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), se plantean como pre-requisitos para acceder a la implementación de un sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).

Rol del COBER y del Bioquímico frente a la Seguridad de Alimentos:

El Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, a través de su accionar permanente ha demostrado su preocupación por contribuir a mejorar la salud de la población, esto además se expresa en la propia ley que lo constituye Ley Nro. 5.639 que entre sus funciones establece en el Artículo 4º, inc. 8, que "el Colegio debe contribuir con proposiciones al mejoramiento del sistema de salud realizando cuanta gestión fuese necesaria para lograr este objetivo".

En relación a la problemática de la inocuidad de los alimentos antes descripta, nuestra Institución desde hace años se encuentra trabajando en el tema, actualizando a los profesionales en control de calidad de agua, microbiología de alimentos, análisis bromatológicos entre otros.

A partir del corriente año el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos implementó el Programa Alimento Seguro (PAS), el mismo propone poner en práctica acciones tendientes a contribuir a que la población entrerriana acceda a un alimento seguro, sano y de calidad. Comprende todas las actividades encaminadas a obtener una adecuada provisión de alimentos inocuos, nutritivos, y agradables para la prevención de enfermedades y promoción de la salud de los consumidores, sumando estas acciones a las que desde diversas áreas del Estado Provincial y de los Municipios se vienen realizando.

Es oportuno recordar que los bioquímicos nos encontramos habilitados para desarrollar tareas en el campo del análisis de alimentos ya que nuestra formación curricular es integral, y abarca, entre otras, las áreas de bromatología, toxicología, parasitología, microbiología, clínica, contando por tanto con los conocimientos teóricos y de resolución de análisis que permiten resolver los diferentes problemas que se pueden presentar en un alimento contaminado.

Uno de los ejes principales del Programa se centra en capacitar a la población en general para que al momento de elegir, seleccionar, procesar o manipular un alimento lo pueda

realizar en la forma más adecuada; asegurando su salud y previniendo las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Por otra parte, el bioquímico, puede hacerse cargo responsablemente de capacitaciones específicas y/o de acompañar con el asesoramiento y control a aquellas empresas o servicios que les interese lograr las certificaciones de POES, BPM y HACCP.

Sumado a las acciones de capacitación y asesoramiento, el Programa ofrece la posibilidad de la ejecución de análisis físico-químicos, microbiológicos, toxicológicos que contemplen a las materias primas, el agua, superficies, operadores, los productos intermedios y finales, así como el estudio de la contaminación ambiental, o el control de insumos, entre otros, tanto de los procesos industriales como de los servicios de alimentos. Es muy importante destacar que la cantidad y distribución de laboratorios montados en toda la provincia pueden dar una respuesta rápida a los requerimientos de control alimentario. Estos establecimientos ya han certificado la calidad de su trabajo clínico, forman parte de la red de laboratorios integrantes del Programa de Mejoramiento de la Calidad, lo que pone en evidencia el interés y el entrenamiento de los profesionales por brindar servicios de excelencia.

Como en todo, cada individuo, cada organización, cada empresario tiene su cuota de responsabilidad, por ello el COBER, a través del PAS pretende aportar a la sociedad una herramienta que permita contribuir en la Seguridad de los Alimentos.

Objetivo General:

El Programa propone poner en práctica acciones tendientes a que la población entrerriana acceda a un alimento seguro, sano y de calidad.

Objetivos particulares:

- Capacitar a la población en general para que al momento de la elección, selección, procesamiento, o manipulación de un alimento lo realice de la forma más adecuada; asegurando su salud y previniendo las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA).
 - Capacitar a quienes se encuentran vinculados con algún punto de la cadena alimenticia, tanto públicos como privados: productores, elaboradores, fraccionadores, transportistas, servicios con el fin de obtener y comercializar un alimento inocuo y de calidad.
- Asesorar a los establecimientos relacionados con los alimentos para que implementen Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).
- Verificar periódicamente el proceso de elaboración de alimentos y las instalaciones de los establecimientos que logren certificar u adaptar los procedimientos.

Generalidades Del Programa Alimento Seguro:

El Programa Alimento Seguro estará constituido por tres Subprogramas:

- * La Calidad de Alimentos y la población.
- * La Calidad de Alimentos y las Empresas.
- * La Calidad de Alimentos y los Bioquímicos.

I. La Calidad de Alimentos y la población:

Se contemplan las siguientes actividades del Programa Alimento Seguro dirigidas a la Comunidad:

- Implementar una campaña de difusión en relación al consumo y manipulación de alimentos seguros, y prevención de las ETAs.
- Capacitar a través de talleres y cursos en: escuelas, vecinales, comedores escolares y comunitarios, jardines maternos, guarderías, clubes, centros de jubilados, entre otros.
- Difundir listas con las empresas y servicios que han adherido al PAS aplicando procedimientos seguros en la elaboración de los productos.

II. La Calidad de Alimentos y las Empresas:

Las principales actividades del Programa Alimento Seguro dirigidas a empresas y/o servicios de alimentos son:

- Capacitar a los responsables y el personal de empresas y servicios (públicos y privados) en torno a los procedimientos y acciones a implementar para obtener un alimento inocuo y de calidad. Informar la legislación vigente.
- Asesorar para que logren adaptar sus procedimientos para obtener alimentos inocuos.
- Realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos de los alimentos, insumos y ambiente.
- Realizar auditorías periódicas a quienes hayan adaptado algún procedimiento a los efectos de verificar que se continúa trabajando asegurando la inocuidad de los alimentos.

III. La Calidad de Alimentos y los Bioquímicos:

Todas las actividades del Programa Alimento Seguro, ya sea las dirigidas a la Comunidad como a Comercios, Fábricas y/o Establecimientos serán realizadas por Profesionales Bioquímicos matriculados en el COBER y habilitados por el PAS.

De tal manera, que podrán realizar:

- Actividades de capacitación hacia la comunidad, las empresas y servicios que soliciten las mismas.
- Asesoramiento a empresas y servicios que deseen implementar alguno de los procedimientos (POES, BPM, HACCP), de manera de guiarlos según un protocolo preestablecido.
- Actividades de auditoría que actúen control interno del PAS.
- Realización de análisis físico, químico, microbiológico de materias primas, productos intermedios y finales, medio ambiente.

Como queda detallado, para participar del Programa no es imprescindible contar con un laboratorio ya que abre la posibilidad de trabajo a bioquímicos que no lo dispongan a través de la participación en las otras actividades.

Se implementará la figura de auditor que actuará verificando todas las actividades del Programa.

Aquellos bioquímicos que quieran adherir al PAS, deberán realizar la capacitación y/o actualización correspondiente.

Impactos Esperados del PAS:

- A la comunidad le permitirá contar con mayor información y posibilidad de acceder a un alimento más inocuo y de calidad.
- A las empresas y servicios les permitirá
 - Mejorar la calidad del producto que ofrecen.
 - Adaptarse a las exigencias del Código Alimentario Argentino, SENASA, y/o otros entes de Control Nacionales O Internacionales.
 - Diferenciar la calidad dando a conocer que sus producto/procedimientos son controlados por el COBER.
 - Reducir los costos, evitando reprocesos, seleccionando mejor a los proveedores, minimizando las devoluciones, entre otros.
 - Mejorar la imagen empresarial.
 - Motivar al personal.
 - Disminuir las inspecciones de los clientes.

Funcionamiento:

- El PAS funcionará en el COBER, España 234, Paraná, Entre Ríos. Teléfono 0343 4230203. E mail vfernad@arnet.com.ar, ssobrero@fbc.unl.edu.ar
- El PAS tendrá funcionamiento administrativamente centralizado, mientras que su ejecución será descentralizada a través de los bioquímicos de toda la Provincia que adhieran al PAS.
- Las empresas, servicios, Entes Oficiales, Tercer Sector, que requieran adherirse al PAS deberán solicitarlo al mismo.

Lucía F. Grimalt

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Que reservado en Secretaría.

8

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Ingreso (Expte. Nro. 15.813)

SRA. GRIMALT – Pido la palabra.

En igual sentido, solicito se dé entrada y su reserva en Secretaría, al proyecto de resolución –Expte. Nro. 15.813–, declarando de interés legislativo el Primer Encuentro Regional de Gastronomía y Turismo y Segundo Encuentro Regional de Periodistas Gastronómicos y Turismo, que se desarrollará en la ciudad de Paraná los próximos días 8, 9 y 10 de septiembre.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Si hay asentimiento se le dará ingreso.

-Asentimiento.

-Se lee:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS RESUELVE:

Art. 1º – Declarar de interés legislativo el “Primer Encuentro Regional de Gastronomía y Turismo” y “Segundo Encuentro Nacional de Periodistas Gastronómicos y Turismo”, el que se desarrollará en la ciudad de Paraná durante los días 8, 9 y 10 de septiembre del corriente año.

Art. 2º – Remitir copia de la presente a la Secretaría de Turismo de la ciudad de Paraná, entidad organizadora.

Art. 3º – De forma.

GRIMALT

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

La realización del Primer Encuentro de la Gastronomía Regional y el Turismo y del Segundo Encuentro Nacional de Periodistas de Turismo y Gastronomía, que se realizarán los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2.006 en Paraná, reuniendo por primera vez en el litoral argentino a periodistas especializados, chefs internacionales, cocineros, empresarios, hoteleros y gastronómicos, trabajadores del sector, profesionales en turismo, hotelería y gastronomía, estudiantes de tales carreras, operadores turísticos, entre otros, convirtiéndolos en eventos sin precedentes.

El objetivo del Primer Encuentro de la Gastronomía Regional y el Turismo es analizar las distintas experiencias regionales y expectativas de la gastronomía como atractivo turístico de relevancia.

Que formando parte del encuentro estarán presentes los principales periodistas especializados del país, participando del “Segundo Encuentro Nacional de Periodistas de Turismo y Gastronomía”.

Que estos encuentros cuentan con los necesarios avales académicos y el respaldo del sector público y privado para constituirse en un punto de inflexión sobre esta temática dentro del ámbito del turismo nacional.

Que el turismo es una actividad generadora de riquezas, tanto económicas como socioculturales, debido a su alto impacto en los diferentes sectores de la sociedad, la cual se halla sujeta a una constante dinámica de cambio, a la que eventos de este tipo facilitan su comprensión y posterior adaptación.

Lucía F. Grimalt

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Queda reservado en Secretaría.

9

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Ingreso (Expte. Nro. 15.812)

SR. CRESTO - Pido la palabra.

Solicito el ingreso del proyecto de resolución –Expte. Nro. 15.812–, por el que se declara de interés Parlamentario y Cultural por la Cámara de Diputados de la Provincia, el Encuentro de Promoción del Desarrollo Emprendedor para Jóvenes Rurales, que se va a realizar en los días 4 y 5 de septiembre en la ciudad de La Paz, y por una cuestión de plazos solicito que el mismo sea reservado en Secretaría para solicitar oportunamente su tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Si hay asentimiento se dará ingreso, quedando reservado en Secretaría.

-Asentimiento.

-Se lee:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS RESUELVE:

Art. 1º - Declarar de interés Parlamentario y Cultural de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, al encuentro de "Promoción del Desarrollo Emprendedor para Jóvenes Rurales" que se realizará en el local feria de la Sociedad Rural de la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, los días 4 y 5 de septiembre del corriente y que es organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca de la Nación, INTA, Instituto Nacional de Educación Técnica y es auspiciada por UATRE y Municipio de La Paz, con el acuerdo conjunto entre FADER-AFA y Federación Agraria Argentina.

Art. 2º - Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del/los organismos competentes se le otorgue el necesario y conveniente apoyo, a efectos de garantizar el éxito y la jerarquía que el evento se merece.

Art. 3º - Comuníquese, etcétera.

CRESTO

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

El actual contexto macroeconómico es favorable para la creación de nuevos negocios. Sin embargo estas oportunidades no se pueden aprovechar si no existen emprendedores motivados, capacitados y con recursos para desarrollar nuevas empresas. Los nuevos escenarios económicos y sociales exigen un protagonismo cada vez mayor de la sociedad y el Estado. Los nuevos emprendedores no nacen por generación espontánea. Es necesario apoyarlos con una adecuada metodología de intervención en las distintas etapas del proceso emprendedor. Promover nuevos emprendimientos, contribuir a la innovación y la búsqueda de oportunidades, es también promover la generación de nuevos puestos de trabajo. En el ámbito rural se percibe la necesidad de reducir la migración de los jóvenes, de igualar las oportunidades y de generar un desarrollo sostenible. Estos desafíos plantean la necesidad de implementar un proyecto específico para jóvenes emprendedores rurales. La diversificación productiva, las nuevas alternativas, el agregado de valor a la producción primaria y la innovación en el sector agropecuario argentino permitirán el aumento de la base empresaria. El desafío de la Municipalidad de La Paz, juntamente con UATRE, es que los nuevos actores de este proceso sean los jóvenes del campo, y que a través del Proyecto de Jóvenes Emprendedores Rurales se logra contribuir a la promoción de estos, para que incorporen conceptos y metodologías orientadas hacia la creación de nuevos emprendimientos.

Por todo lo expuesto, señores diputados, es que solicito a mis pares la sanción del presente proyecto de resolución.

Enrique T. Cresto

10

LEY NRO. 9.487. EXPROPIACIÓN TERRENOS CONEXIÓN FÍSICA ROSARIO – VICTORIA

Ingreso dictamen de comisión (Expte. Nro. 15.532)

SR. ALMADA - Pido la palabra.

Solicito el ingreso y reserva en Secretaría, del dictamen de comisión en el proyecto de ley –Expte. Nro. 15.532–, que refiere a la ratificación de la Ley Nro. 9.487, expropiación de terrenos comprendidos en el nexo conexión física Victoria – Rosario.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Si hay asentimiento se dará ingreso.

-Asentimiento.

-Se lee:

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley –Expte. Nro. 15.532–, de cual es autor el Poder Ejecutivo, por el que se ratifica la Ley Nro. 9.487,

declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles afectados por la obra: Nexo conexión física Rosario – Victoria; y por las razones que dará su miembro informante, aconseja su aprobación con las modificaciones introducidas.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Art. 1º - Ratifícase la Ley Nro. 9.487, ratificatoria de la Ley Nro. 9.284, ratificatoria de las Leyes Nros. 9.101 y 9.187, que declararon oportunamente de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles afectados por la obra: "Nexo conexión física Victoria – Rosario (cabecera Victoria) y la variante de la Ruta Provincial Nro. 11 desde Km. 110.

Art. 2º - Comuníquese, etcétera.

Sala de Comisiones, Paraná, 30 de agosto de 2.006

CRESTO – FUERTES – CASTRILLÓN – HAIDAR – VITTULO –
ALMADA – ALDAZ – BESCOS

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Queda reservado en Secretaría.

11

PROYECTOS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

Ingreso. Reserva. Pase a comisión

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Por Secretaría se dará lectura a los proyectos de los señores diputados.

SR. BAHILLO - Pido la palabra.

Mociono que la totalidad de los proyectos de resolución de los señores diputados queden reservados en Secretaría para solicitar oportunamente su tratamiento sobre tablas y aprobación en bloque. Respecto de los proyectos de ley, que los mismos pasen a las comisiones respectivas.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Bahillo.

-Resulta afirmativa. (*)

(*) Proyectos de los señores diputados:

VI

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

(Expte. Nro. 15.779)

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS RESUELVE:

Art. 1º - Dispóngase en todas las rutas nacionales que surcan el territorio provincial y en la rutas provinciales, de los respectivos controles camineros, de modo ambulante, periódicos y en distintos tramos de sus recorridos, con el objeto de verificar los papeles que acrediten la propiedad del vehículo automotor, el seguro y su constancia de pago, el estado del vehículo, luces, frenos, cubiertas, dirección fundamentalmente, e informen sobre las normas de tránsito en las rutas.

Art. 2º - Se confeccione un registro de control, cuya base sirva para la realización de estadísticas, sobre el estado de la circulación de los vehículos en las rutas provinciales.

Art. 3º - Se publiquen semestralmente las estadísticas.

Art. 4º - Se tomen los datos recopilados como base para el diseño de una política de prevención de accidentes y de control del tránsito vehicular.

Art. 5º - De forma.

GIORGIO – ROGEL - VERA

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Los muertos por causa de accidentes de tránsito en nuestra provincia ascienden ya a 147, más otra cantidad de heridos con perjuicios graves en estado físico de las víctimas sobrevivientes de estos accidentes. Podemos decir, con estos resultados, que esta causa de muertes supera las de cualquier brote epidémico y las provocadas por otras enfermedades arraigadas en nuestra población.

Las causas de estos accidentes son variadas, pero pueden reducirse a dos variables: el incremento del tránsito vehicular, con el consiguiente deterioro de las rutas y su estreche para albergar en su tránsito camiones de gran porte y automóviles con gran velocidad final. Por la otra, la falta de cuidado por parte de quienes manejan, con la consiguiente falta de observación de las normas mínimas de tránsito en rutas, como así también la falta de mantenimiento y de cuidado del estado de los vehículos: luces, frenos, cubiertas, dirección y los papeles que acrediten la habilitación para conducir, la propiedad del auto y el seguro al día para evitar irresponsabilidades en los casos de producirse el evento dañoso.

Para dar respuesta al primer problema, somos conscientes que llevaría dinero y tiempo, tanto para mejorar las rutas y ensancharlas, así como volver a dar viabilidad a los otros medios de transporte más seguro, más barato y menos contaminante, como son el transporte fluvial y el transporte ferroviario.

Pero a la segunda causa, podemos responder inmediatamente con políticas de prevención e información y una severa política de control en las rutas.

Hemos observado, que sólo se controla en los puestos camineros establecidos, que de hecho son pocos, y que tampoco establecen controles en forma continua, lo cual hace necesario establecer controles sorpresivos y en lugares inesperados.

Somos conscientes que estos controles no son simpáticos y que en muchas ocasiones causan el fastidio de los conductores. Pero más fastidio y dolor causan las irreparables víctimas fatales producto de esta falta de controles.

Sería deseable que estos controles no sólo sirvan para la detección ocasional de alguna anomalía, sino que también constituyan la base de datos para la confección de una estadística sobre el tránsito vehicular en nuestra provincia. Y de este punto de partida tener más claro cuáles deben ser los puntos principales de las políticas de información y de prevención y sobre qué tipo de controles hacer hincapié.

Por estos motivos solicitamos a todos los diputados que sancionen este proyecto de resolución.

Horacio A. Giorgio – Fabián D. Rogel – Arturo Vera

VII**PROYECTO DE RESOLUCIÓN**

(Expte. Nro. 15.782)

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS RESUELVE:

Art. 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través de su Secretaria de Transporte, el control de las unidades de transportes de pasajeros, en los puntos de partidas, de paradas intermedias y terminales de destino.

Art. 2º - En referencia al Artículo anterior, se solicita que dicho control esté destinado a verificar el estado general del vehículo, las condiciones mínimas de seguridad, cubiertas, luces, dirección, amortiguación, las comodidades ofrecidas, según la categoría del servicio, el tiempo de cumplimiento en su recorrido; y requerir o recoger de los pasajeros las quejas y sugerencias, respecto del viaje efectuado.

Art. 3º - De forma.

GIORGIO – MONZÓN - VERA

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Los usuarios del transporte de pasajeros de media y larga distancia, en la provincia de Entre Ríos, vienen soportando el aumento constante de tarifas, con el agravante que a pesar de la eminente suba autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional, no han percibido mejoras en el servicio por parte de los prestatarios; por mencionar algunas de las falencias, no funcionan los sistemas de calefacción ni refrigeración, en épocas de intenso frío y/o calor.

Los transportistas en tanto, no sólo han gozado del beneficio del aumento de las tarifas, sino también de los subsidios al gasoil. Estas prerrogativas no se han visto reflejadas en mejoras y son constantes las quejas por incumplimiento de horarios, la irresponsabilidad de algunos choferes en la conducción de las unidades, poniendo en riesgo la integridad física de los pasajeros.

No se observan controles en puestos camineros ni existe verificación del cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para el traslado de vidas humanas.

Los usuarios se encuentran en una situación de clara desventaja, no sólo por la modalidad ya referida, la mala implementación de servicio, etcétera, sino por el carácter monopólico que se va configurando por parte de los prestadores del servicio en la Provincia.

Se pretende por lo tanto equilibrar la relación entre usuarios y transportistas y entre pasajeros y conductores de vehículos, apuntando al tan ansiado objetivo de contribuir a la seguridad del tránsito por las rutas de la Provincia.

Horacio A. Giorgio – Héctor H. Monzón – Arturo Vera

VIII
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(Expte. Nro. 15.783)

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS RESUELVE:

Art. 1º - Declarar de interés legislativo las Primeras Jornadas Provinciales sobre Patrimonio Arquitectónico: "Patrimonio y Ciudad", organizadas por el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos y la Asociación Cultural "Albacea", a desarrollarse durante los meses de septiembre y octubre del corriente, a través de tres encuentros consecutivos en las ciudades de Concepción del Uruguay (1º de septiembre); Concordia (6 de octubre) y Paraná (27 y 28 de octubre) en los que se desarrollará sucesiva y respectivamente el siguiente temario: "Patrimonio, Ciudad y Sociedad", "Protección del Patrimonio Edificado" e "Intervención en el Patrimonio Edificado".

Art. 2º - Notifíquese a las entidades organizadoras mediante entrega de copia de la presente en sus respectivos legales de Libertad 149 y San Martín 1.435., 7º piso.

Art. 3º - Comuníquese, etcétera.

VILLAVERDE

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

El presente proyecto procura declarar de Interés Legislativo la actividad de dos instituciones no gubernamentales de la Provincia: el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos y la recientemente creada asociación cultural "Albacea", que han unido sus esfuerzos para realizar las Primeras Jornadas Provinciales sobre Patrimonio Arquitectónico: "Patrimonio y Ciudad".

Dichas Jornadas se presentan como preparatorias del futuro "Primer Congreso Provincial de Patrimonio Arquitectónico de Entre Ríos" previsto para el año próximo y procuran contribuir a la capacitación profesional sobre la materia. Para ello se propone utilizar como modalidades de trabajo la exposición de panelistas expertos, la presentación de ponencias e instancias de reflexión.

La actividad está destinada a profesionales y estudiantes de arquitectura, ingeniería y carreras afines a las ciencias sociales, gestores culturales, funcionarios públicos de las áreas pertinentes e integrantes de ONGs.

El temario de las mencionadas Jornadas se desarrollará en tres encuentros consecutivos a llevarse a cabo en las localidades provinciales de Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná y, en ellas, se abordarán respectivamente los siguientes ejes temáticos:

“Patrimonio, Ciudad y Sociedad”, “Protección del Patrimonio Edificado” e “Intervención en el Patrimonio Edificado”.

Parece propicio declarar de interés legislativo esta actividad producida en forma coordinada por dos entidades de la sociedad civil, que coadyuva con la obligación constitucional del Estado de preservar “...el patrimonio natural y cultural...” (Art. 41 de la Constitución Nacional) al tiempo que acerca los conocimientos especiales de la temática a los municipios entrerrianos, primeros custodios del patrimonio edificado.

Por lo expuesto descontamos un pronto tratamiento de la iniciativa.

Rubén A. Villaverde

IX
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(Expte. Nro. 15.785)

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS RESUELVE:

Art. 1º - Ínstase al Poder Ejecutivo a impulsar la sanción de la medida legal pertinente a los efectos de crear un Sistema de Emisión de boletas para el pago de Impuestos Provinciales y liquidaciones de deuda, a través de la página Web de la Dirección General de Rentas de la Provincia.

Art. 2º - Considérese incluido en el contenido de la presente, sus fundamentos, los que como Anexo forman parte de la presente.

Art. 3º - Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.

VILLAVERDE

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Ponemos a vuestra consideración el adjunto proyecto de resolución por el cual se propicia instar al Poder Ejecutivo a sancionar la medida legal que corresponda a los efectos de crear un “Sistema de Emisión de boletas para el pago de Impuestos Provinciales y liquidaciones de deuda”, a través de la página Web de la Dirección General de Rentas de la Provincia.

La disponibilidad de esta información en línea constituiría para los contribuyentes una herramienta importante pues permitiría acceder, buscar, consultar y actualizar la información en forma dinámica e inteligente. La utilidad de ésta se sustentaría en la oportunidad para obtenerla, ya que son múltiples las quejas de contribuyentes que no reciben en tiempo y forma las boletas de pago en sus domicilios.

Este sistema aumentaría el nivel de cumplimiento de las obligaciones, teniendo en cuenta los contribuyentes que dejan de pagar sus obligaciones porque no reciben las boletas correspondientes.

Normalmente cada vez que un contribuyente necesita conocer el estado de su deuda o disponer de una boleta de pago no recibida, debe constituirse personalmente en la oficina responsable de atender la demanda. Es necesario cumplir una serie de pasos administrativos y de presentación de requisitos para iniciar el trámite que hacen que la persona se deba trasladar desde su domicilio a las agencias de servicios con consecuentes pérdidas de tiempo y de dinero. A través del sistema digital se elimina o morigera las concurrencias del público a las dependencias del Estado y se privilegia la atención desde el domicilio del particular.

Para que todos los contribuyentes puedan acceder al beneficio puede convenirse la prestación del servicio de emisión a través de locutorios o cibernets y desde el Gobierno fomentar su difusión.

Las reimpresiones de boletas y listados de deuda disminuirían notablemente dado que toda la información inherente al impuesto se almacenaría en una base de datos, la que es consultada a requerimiento del contribuyente en cualquier momento.

Es importante destacar que otras Direcciones de Rentas Provinciales, como las de la provincia de Córdoba y Buenos Aires están aplicando con éxito el sistema de emisión de

boletas de pago y liquidaciones de deuda vía Internet y que la Dirección General de Rentas de Entre Ríos cuenta con una página Web desarrollada que le permitiría incorporar este servicio.

Los pagos de los contribuyentes se seguirían realizando en los bancos de idéntica forma que en el presente. En un futuro podría avanzarse en la alternativa de pago vía Internet, que implicaría realizar el pago desde cualquier PC conectada a Internet siguiendo el mismo procedimiento de un home banking, es decir pagando el impuesto con dinero electrónico depositado en una cuenta corriente o caja de ahorro que puede extraerse luego de cargar claves de acceso personal que acreditan la autorización a pagar por el titular.

Por la naturaleza del proyecto presentado, descontamos un pronto tratamiento del mismo.

Rubén A. Villaverde

X
PROYECTO DE LEY
(Expte. Nro. 15.786)

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Art. 1º - Modifíquese el Artículo 30º de la Ley Nro. 9.622, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 30º: Fíjase en Pesos ciento veinte mil (\$ 120.000,00) el importe a que se refiere el Artículo 247º, Incisos b) e i) del Código Fiscal (T.O. 2.000)".

Art. 2º - De forma.

FERNÁNDEZ – LÓPEZ - SOLARI

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Las personas discapacitadas, o su familia directa, pueden adquirir vehículos automotores y ser beneficiadas con la exención del pago del Impuesto Automotor de la Provincia. El valor actualmente establecido (\$ 60.000) está muy por debajo del costo de los vehículos que, en su mayoría deben ser importados dado que los fabricados en el país no brindan las comodidades necesarias, con lo que se limita la compra de estos automóviles dado que cuando aquel aforo es superado el gravamen debe abonarse en un 100% y no sobre la diferencia entre el valor fijado por la legislación y el valor del automóvil. Cabe destacar que la legislación nacional establece las condiciones y requisitos que las personas discapacitadas deben cumplir para acogerse a los beneficios que facilitan la adquisición de automotores para uso personal. Los mismos se encuentran reglados por la Ley Nacional Nro. 19.279 y sus modificaciones introducidas por las Leyes Nro. 22.499 y Nro. 24.183, Decreto Nro. 1.313/93, Resolución Nro. 795/94 y complementarias, Ley Nro. 22.431 (Artículo 21º, inciso c), pese a esto, el pago del Impuesto a los Automotores viene a contradecir el espíritu de las mismas, atento a que aquellas son de beneficio y éste es de imposición.

En las provincias que conforman la denominada Región Centro, este beneficio es total en el caso de Santa Fe (Ley Nro. 3.456, Artículo 277º, inciso e), donde la legislación no ha fijado un valor máximo del vehículo a adquirir, y en el caso de Córdoba ese valor es de hasta \$ 90.000 (Ley Nro. 9.269, Artículo 35º). En oportunidad de la reforma del Código Fiscal y la Ley Impositiva, devenida en las Leyes Nro. 9.621 y Nro. 9.622, se buscó armonizar las legislaciones de las tres provincias, llegando en el caso del impuesto automotor a reducir la alícuota aplicable en nuestra provincia a los automotores 0 km. para que estuviera en los valores de las otras dos provincias.

A los efectos de una mejor ilustración de lo mencionado, a continuación se transcriben textualmente las normas provinciales a las que se hace alusión:

“PROVINCIA DE CORDOBA

Ley Nro. 6.006 (T.O. Dec. 270/04)

Código Tributario.

Capítulo Cuarto.

Exenciones.

Exenciones Subjetivas.

Artículo 237º.- Están exentos del pago del impuesto establecido en este título:

2) Los automotores de propiedad exclusiva de personas ciegas, amblíopes, sordas, sordomudas, paráliticas, espásticas, inválidas o con dificultades físicas y/o psíquicas destinados exclusivamente a su uso, siempre que el grado de disminución, en todos los casos, sea de un sesenta y seis por ciento (66%) o más y sea de carácter permanente y acreditada fehacientemente con certificado médico de instituciones estatales.

La presente exención se limitará hasta un máximo de un automotor por titular de dominio, cuyo valor, a los fines del impuesto, no exceda el monto establecido por Ley Impositiva.

Ley Nro. 9.269.

Ley Impositiva Año 2.006.

Artículo 35º.- Fijase en Pesos noventa mil (\$ 90.000,00) el importe a que se refiere el inciso 2) del Artículo 237º del Código Tributario Provincial”.

“PROVINCIA DE SANTA FE

Ley Nro. 3.456 - Código Fiscal.

Capítulo V - De las exenciones.

Artículo 277º - Exenciones. Quedan exentos del pago de Patente Única sobre Vehículos y del impuesto a la transferencia del derecho de propiedad sobre los mismos:

e) Los vehículos de propiedad de personas minoradas físicamente que se encuentren afectados a su uso personal exclusivo. Dicha exención corresponderá a uno solo por persona discapacitada.”

Lamentablemente, las personas con discapacidad en Argentina constituyen hoy un grupo vulnerable porque salvo contadas excepciones, no gozan de una situación de equidad respecto del resto de la sociedad para desenvolverse en la vida cotidiana.

Es por ello que consideramos imprescindible que el Estado Provincial implemente la modificación objeto del presente proyecto a los efectos de permitir que quienes padecen este tipo de problemas puedan adquirir un vehículo para uso personal con la exención al impuesto automotor dado que con un aforo de ciento veinte mil Pesos (\$ 120.000,00), estarían comprendidos los automóviles nacionales o internacionales aptos para discapacitados.

Oswaldo D. Fernández – Alba López – Eduardo M. Solari

-A las Comisiones de Legislación General y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.

XI

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

(Expte. Nro. 15.787)

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS RESUELVE:

Art. 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación de los Artículos 23º y 24º de la Ley Nro. 8.105, haciendo posible los beneficios para el personal de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de acceso al sistema previsional de la Provincia y al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (I.O.S.P.E.R.), como lo fuera requerido mediante un proyecto de resolución presentado en fecha 4 de junio de 2.004, bajo Expte. Nro. 13.943 de la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado el día 15 de junio de 2.004.

Art. 2º - Se disponga un incremento de la partida presupuestaria de la que proviene el subsidio anual para todos los cuerpos de Bomberos Voluntarios existentes en la provincia de Entre Ríos.

Art. 3º - Se otorgue una asignación presupuestaria de emergencia para la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, para la compra de seis (6) Trajes Encapsulados Nivel A, marca Hazmat, Equipos de Respiración Autónoma, marca Scott, más cilindro de oxígeno complementario, como así también Equipos Complementarios (botas, casco, traje Nomex completo), que se encuentran vencidos.

Art. 4º - De forma.

FERNÁNDEZ – LÓPEZ – SOLARI

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

El presente proyecto tiene la finalidad de optimizar el servicio prestado por los Bomberos Voluntarios, como así también mejorar sus condiciones de trabajo.

La Ley Nro. 8.105 definió a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios como instituciones civiles sin fines de lucro cuya misión es prestar un servicio público gratuito. En el Capítulo VII se determinaron Beneficios para el personal de Bomberos Voluntarios, siendo ellos el acceso al sistema previsional provincial mediante convenios a celebrar con el Poder Ejecutivo y al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (I.O.S.P.E.R.) siendo abonados los aportes, en este último caso, por el Gobierno Provincial. Lamentablemente hasta la fecha no se han reglamentado las normas mencionadas en el Artículo primero de la presente.

Mas allá de la discusión sobre la operatividad de artículos de una ley que no han sido objeto de reglamentación, corresponde no demorar aún más la aplicación de los beneficios reconocidos para el personal de Bomberos Voluntarios, siendo imprescindible que el Poder Ejecutivo proceda a reglamentar aquellas normas, dando lugar a que los derechos de mención pasen de la letra de la ley a la realidad de la vida cotidiana, como le fuera requerido mediante resolución de fecha 4 de junio de 2.004, bajo Expediente Nro. 13.943 de la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado el día 15 de junio de 2.004, como así también el 4 de julio de 2.004 se presentó un proyecto de ley donde se instrumenta que los miembros de los cuerpos activos estarán exentos de pagar el Impuesto Inmobiliario correspondiente a los inmuebles que constituyan vivienda única, de ellos o de su grupo familiar.

Por otro lado, cabe destacar que en la actualidad el monto del subsidio anual que reciben estas instituciones por parte de la Provincia resulta insuficiente para afrontar los gastos que las mismas tienen en las prestaciones de sus servicios. Ante esta situación resulta indispensable que la partida presupuestaria que nutre a dicho subsidio sea incrementada de manera tal que la prestación del servicio no se vea amenazada por la falta de recursos económicos.

En relación al requerimiento de una asignación presupuestaria de emergencia para la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualaguaychú, la misma tiene la finalidad de adquirir Trajes Encapsulados Nivel A, marca Hazmat, Equipos de Respiración Autónoma, marca Scott, más cilindro de oxígeno complementario, como así también Equipos Complementarios (botas, casco, traje Nomex completo). El costo del equipamiento para un bombero vestido para afrontar siniestros con presencia de sustancias tóxicas y/o peligrosas es de diez mil cincuenta pesos (\$10.050). Estos trajes que en la actualidad se encuentran vencidos, son utilizados en situaciones específicas como lo son, por ejemplo, el manejo de sustancias peligrosas, entre otras, considerando que en la jurisdicción de este cuartel de Bomberos se encuentran depósitos de sustancias agroquímicas, como así también las Rutas Internacional Nro. 136 y Nacional Nro. 14, las cuales son vías fundamentales para las importaciones y exportaciones de todo tipo de mercaderías.

Es por ello que consideramos que el Estado debe dar una respuesta urgente a estos requerimientos de manera tal que el servicio que prestan los Bomberos Voluntarios sea eficazmente reconocido y a su vez se garantice la integridad física de los bomberos que con sacrificio y vocación están a disposición de toda la ciudadanía a lo largo y ancho de la Provincia.

Oswaldo D. Fernández – Alba López – Eduardo M. Solari

XII
PROYECTO DE LEY
(Expte. Nro. 15.792)

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Art. 1º - Crear la Regionalización de los Servicios de Salud de la Provincia de Entre Ríos, con centralización normativa y descentralización ejecutiva.

Art. 2º - Para implementar la regionalización en la Provincia de Entre Ríos se divide en cuatro Regiones que tendrán como principal efector un Hospital Cabecera de Región, que tendrá la mayor complejidad y será quien reciba derivaciones de los Hospitales Intermedios, de menor complejidad que el anterior, que a su vez recibirá derivaciones de los centros de menor complejidad de la región.

Art. 3º - A estos fines se divide a la Provincia de Entre Ríos en cuatro regiones sanitarias.

Región I Departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá.

Región II Departamentos Concordia, Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Villaguay.

Región III Departamentos Uruguay, Colón y Tala.

Región IV Departamentos Gualeguaychú, Gualeguay e Islas.

La REGIÓN I tendrá como Hospitales Regionales:

Hospital Clínico Quirúrgico San Martín de Paraná.

Hospital Pediátrico San Roque de Paraná.

Hospital Psiquiátrico Dr. A. Roballos de Paraná.

La REGIÓN II tendrá como Hospitales Regionales:

Hospital Delicia Masvernat.

Hospital Clínico Quirúrgico Felipe Heras de Concordia.

Hospital Pediátrico Ramón Carrillo.

La REGIÓN III tendrá como Hospital Regional:

Hospital de zona Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay.

La REGIÓN IV tendrá como Hospital Regional:

Hospital General Clínico Centenario de Gualeguaychú.

Art. 4º - La Estructura Orgánica de la Región sanitaria regiones, las que estarán conformadas de la siguiente manera:

1 Director Regional

1 Responsable del Área de Atención Primaria de la Salud

1 Responsable del Área de Odontología

1 Responsable del Área de Bromatología

1 Responsable del Área de Enfermería

1 Responsable de Administración: Contable y Arancelamiento.

1 Responsable del Área Estadística.

1 Responsable de Recursos Humanos.

Asesoría Legal

Art. 5º - En el caso de la Región 1 por sus características, la misma contará dentro de su estructura orgánica con un Subdirector Regional dependiente de la Dirección de Atención Médica.

Art. 6º - Los responsables de cada una de las Áreas de las Regiones serán afectados de los recursos humanos de los Hospitales de cabecera de la región, y dependerán directamente de la Dirección de Atención Médica de la Secretaría de Salud, a excepción del Director de Región que será designado por el Poder Ejecutivo.

Art. 7º - Implementétese un sistema de referencia y contrarreferencia a fin de lograr un proceso integrador de urgencias médicas y de graves, que rectorice un proceso desde la comunidad hasta las unidades de las diferentes terapias inclusive, concluyendo con la solución del peligro vital, midiendo su satisfacción, flujo de demandas, morbilidades graves y letalidades integralmente.

Art. 8º - Los Hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque recibirán de los Hospitales de cabecera de las otras regiones los casos que presenten patologías neuroquirúrgicas, hematológicas, o por la no existencia de camas en los servicios de cuidados intensivos y neonatológicos, u otra situación muy bien justificada previa coordinación, dado que los hospitales zonales tienen capacidad suficiente de resolución salvo las excepciones mencionadas.

Art. 9º - Apruébese el sistema de información con su correspondiente hoja de referencia la cual deberá contener todos los datos inherentes a la internación.

Art. 10º - Implementar cursos de capacitación para adiestrar básicamente a los recursos humanos involucrados, en los niveles directivos de las regiones, en actividades de gestión, planificación y gerenciamiento para llevar actividades de salud que generen una mejor organización de los servicios, eficiencia en los costos, satisfacción de los usuarios y mejoramiento del estado de salud de la población.

Art. 11º - La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los sesenta días de sancionada.

Art. 12º - De forma.

LÓPEZ

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

El presente proyecto persigue mediante la jerarquía de una ley asegurar el cumplimiento y la preeminencia a este sistema de regionalización propuesto.

El análisis de la situación de salud y la evaluación de las instituciones en la Provincia de Entre Ríos permitió detectar que los principales problemas de salud en nuestra Provincia resultan de enunciar fallas en la organización, recolección, procesamiento e información de datos estadísticos, que conlleva a dificultades para un buen análisis del estado de salud de la población, ausencia de cobertura en la mayoría de los programas de salud, alta incidencia de embarazos en la adolescencia, alta deserción escolar, elevado porcentaje de población con algunas o varias de las características que la inscriben con necesidades básicas insatisfechas (NBI), falta de capacitación del personal de salud, en cuanto a conducción, programación y gerenciamiento.

Teniendo en cuenta la problemática enunciada y siendo necesario e imprescindible brindar soluciones a estas situaciones que conllevan a la mala atención en los servicios que se brindan, insatisfacción de los usuarios y deterioro del estado de salud de la población, se impone la reorganización de los servicios de salud para lograr una óptima utilización de los recursos, mayor eficiencia, equidad y calidad de atención, se propone la regionalización de los servicios de salud de la Provincia de Entre Ríos, con centralización normativa y descentralización ejecutiva.

De acuerdo a las políticas implementadas por OMS/OPS, se debe, con la idea de optimizar recursos humanos, materiales y financieros, tender a la prevención de las patologías prevalentes y evitables en el Primer Nivel de Atención; pero ya instalada la patología, ésta debe asistirse de acuerdo a su complejidad en el Centro de Salud que corresponda.

Con los medios de comunicación con que cuenta la provincia, no se puede permitir que camas de hospitales de alta complejidad se encuentren ocupadas por pacientes con patologías banales, que pueden, sin mucho esfuerzo, ser tratadas en su lugar de origen, lo que evitaría además el desarraigo del paciente y su familia.

Por eso solicito a los señores diputados que me acompañen con el presente proyecto de ley.

Alba López

-A la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Drogadicción y Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

XIII**PROYECTO DE RESOLUCIÓN**

(Expte. Nro. 15.793)

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS RESUELVE:

Art. 1º - Declarar de Interés Legislativo el "8vo. Simposio de Investigación en Educación en Física", que se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre de 2.006 en la ciudad de Galeguaychú, organizado por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina (A.P.F.A.) y la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Art. 2º - De forma.

LÓPEZ - FERNÁNDEZ – SOLARI

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2.006 se llevará a cabo en la ciudad de Galeguaychú, el "8vo. Simposio de Investigación en Educación en Física", organizado por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina (A.P.F.A.) y la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, contando además con el auspicio de la Municipalidad de

Gualedguaychú y la Universidad Nacional de Entre Ríos. El evento tendrá su sede principal en el Instituto Magnasco, estando previstas también actividades en el Teatro Gualedguaychú y en la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade, fijándose como sede administrativa del evento la Facultad de Bromatología.

Las distintas actividades previstas como presentación de trabajos de investigación y tesis, mesas redondas, paneles, talleres, conferencias y las conclusiones que se elaboren en el evento contribuirán sin dudas, no sólo al desarrollo de la investigación y a la innovación en el campo de la Física, sino fundamentalmente en la formación de recursos humanos en esa área. Para nuestra provincia es el primer evento científico relacionado con la enseñanza de la física, resultando por tanto de suma importancia para la divulgación de esta disciplina en toda la región, destacándose en esta edición del Simposio de Investigación en Educación en Física una innovación que permitirá aprovechar la presencia de los investigadores participantes del mismo. El objetivo general es el de ofrecer un ámbito de comunicación, de debate y de reflexión sobre la investigación en educación en física y su transferencia a la enseñanza, así como elaborar recomendaciones sobre distintos temas de interés en el ámbito de la investigación en física. La investigación educativa es hoy una actividad plenamente desarrollada, con la presencia y crecimiento constante de numerosos y prestigiosos equipos de investigadores.

Es por ello que consideramos importante que el estado promocióne estas actividades que significan un aporte fundamental a la investigación como así también a la educación.

Alba López - Osvaldo D. Fernández – Eduardo M. Solari

XIV
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
(Expte. Nro. 15.795)

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS RESUELVE:

Art. 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio a las autoridades pertinentes, a fin de que se proceda a arbitrar todas las medidas que sean necesarias para que el Centro de Salud "Dr. Marcelo Marelli" de la localidad de La Criolla, Departamento Concordia cuente con un servicio de atención médica ambulatoria los días sábados y domingos, como así también los días declarados feriados para el traslado de enfermos cuya atención y derivación a otro centro asistencial de mayor complejidad así lo requiera.

Art. 2º - Regístrese, comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.

ROGEL – MONZÓN - GIORGIO

12
HOMENAJES

SR. PRESIDENTE (Engelmann) - Corresponde el turno de los homenajes que los señores diputados deseen rendir.

-A la Madre Teresa de Calcuta

SR. BESCOS – Pido la palabra.

Señor Presidente, la solidaridad es uno de los principios básicos de la concepción cristiana y de la organización social y política. Su importancia radical para el buen desarrollo de una doctrina social sana tiene singular interés para el estudio de los hombres en sociedad y de la sociedad misma.

El 26 de agosto de cada año se celebra el Día de la Solidaridad que corresponde a la fecha de nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta modelo indiscutible de servicio y amor al prójimo. Ella fue testimonio vivo de amor a Jesucristo por su entrega total a servirle en los más pobres entre los pobres. Nos enseñó que la mayor pobreza la encontró no en los arrabales de Calcuta sino en los países más ricos, cuando falta el amor.

Merecedora del Premio Nobel de la Paz ayudó, acompañó y socorrió a todos, grandes y chicos, enfermos y moribundos. A ninguno le daba la espalda sino que les brindaba la mano

que tanto necesitaban. A instancia de ella se abrieron en todo el mundo centros para atender leprosos, ancianos, ciegos, personas que padecen sida y se fundaron orfanatos y escuelas para pobres y niños abandonados.

Señor Presidente, la vida de la Madre Teresa de Calcuta, que fue entrega total sin descanso, fue marcando el corazón de todos no sólo de quienes socorría sino de quienes la veían trabajar. A cada uno de nos dejó su mensaje de amor para que lo imitemos y practiquemos en cada momento de la vida. Ella decía "El fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz".

Una vez un crítico le sugirió que haría más para terminar con la pobreza si enseñara a pescar en vez de dar el pescado y ella le respondió: "Las personas que yo ayudo no se valen por sí mismas, no se pueden parar, no pueden sostener la caña; le daré el alimento y después se lo mandaré para que usted le enseñe a pescar".

Su ejemplo ha sido un reto a la conciencia de la humanidad. En un tiempo marcado por la rebelión, la Madre Teresa defendió fuertemente la fidelidad al Magisterio de la Iglesia, a la santidad de la vida humana, la familia y la moral, nos enseñó la verdadera dignidad de la mujer convirtiéndose en madre de todos. Ella escribía: "La vida sin amor no vale nada, la justicia sin amor te hace duro, la inteligencia sin amor te hace cruel, la amabilidad sin amor te hace hipócrita, la fe sin amor te hace fanático".

-A Fernando Crossa

SR. ALMADA – Pido la palabra.

Señor Presidente, quiero rendir este homenaje a un dirigente gremial que nos dejó hace cuatro años, al compañero Fernando Crossa que perdiera la vida en un momento en que acompañábamos e iniciábamos una lucha con el hoy Gobernador de la Provincia. Para los que conocemos de las luchas gremiales fue aleccionador haberlo conocido y por eso lo contamos entre los hombres valiosos que perdieron el gremialismo y la política.

A este dirigente que perdió la vida arriba de un escenario, acompañando su líder político, acompañando un proyecto, principalmente lo quiero reconocer como Secretario General de ATE de la ciudad de Victoria, donde luchó fervientemente por el hospital público y por sus compañeros trabajadores.

El 31 de agosto se cumplen 4 años de la pérdida física de este gran dirigente que todavía cuenta y va a contar con el reconocimiento de todos nosotros, los hombres del gremialismo entrerriano y en general de todos los hombres del peronismo que perdimos este dirigente en esa fecha tan triste para todos nosotros.

SR. ROGEL – Pido la palabra.

Señor Presidente, en adhesión al homenaje realizado a la Madre Teresa de Calcuta quiero hacer una sola mención sobre lo que se ha expresado.

El debate siempre estaba planteado en que si determinadas personas adquieren la dimensión moral y humana de tanta trascendencia sin haber dado opinión respecto de las cuestiones importantes, como en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, sobre lo ocurrido en el mundo, sobre lo ocurrido en la sociedad. Y por allí se mezclaba siempre la crítica, si realmente su tarea era tan revolucionaria en el compromiso, toda vez que la Madre Teresa de Calcuta esquivaba dar opiniones, en términos de lo que nosotros denominamos políticos, sobre lo que ocurría en el mundo.

Creo que las definiciones políticas por el valor de la palabra adquieren un sentido muy fuerte, pero si la actitud de compromiso y solidaridad no es acompañada en lo que son los hechos, pierden absoluto valor, cae la palabra, como se dice por allí. La dimensión humana de la Madre Teresa de Calcuta hace que cada uno de nosotros en absoluta soledad y con nuestra conciencia pensemos si hubiéramos soportado tan sólo una semana estar donde estuvo, si hubiéramos soportado, sinceramente, darle un beso, no ya una ayuda, darle un beso y tener en nuestros brazos a la catástrofe humana que ha tenido.

Por lo tanto, a quienes decían que de última la Madre Teresa de Calcuta terminaba apoyando a los modelos porque se encargaba solamente de atender la mendicidad y la pobreza del mundo, yo les digo: señores, los invito a que convivan, no 40 años en Calcuta, sino una semana, con semejante dolor. Y la frase que sintetizó esto es: hay que dar hasta que duela; porque lo que sobra muchos están dispuestos a dar.

Con esta reflexión adhiero al homenaje a tamaña mujer.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Si no se hace más uso de la palabra, con lo expresado por el diputado Bescos y la adhesión del diputado Rogel queda rendido homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, a su ejemplo, entrega, integridad y testimonio de vida; y el recordatorio del diputado Almada al dirigente gremial fallecido, Fernando Crossa.

13

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

Moción de sobre tablas. Consideración en bloque (Exptes. Nros. 15.779, 15.782, 15.783, 15.785, 15.787, 15.793, 15.795, 15.809, 15.812 y 15.813)

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Corresponde el turno de las mociones de preferencia y de sobre tablas.

Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de resolución, incluidos los presentados por el diputado Cresto y la diputada Grimalt.

SR. BAHILLO – Pido la palabra.

Mociono, señor Presidente, el tratamiento sobre tablas en conjunto de todos los proyectos de resolución, y su posterior consideración en bloque.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Bahillo. Se requieren los dos tercios de votos.

-Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – En consideración.

SR. ROGEL – Pido la palabra.

Señor Presidente, solicito que en el Artículo 1º del proyecto de resolución –Expte. Nro. 15.779–, la palabra “Dispóngase” sea reemplazada por “Solicitar al Poder Ejecutivo disponga”.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Con la modificación propuesta por el diputado Rogel se van a votar los proyectos de resolución en conjunto.

-Resulta afirmativa. (*)

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Quedan sancionados. Se harán las comunicaciones pertinentes.

(*) Proyectos de resolución aprobados en bloque.

Expte. Nro. 15.779 – Rutas nacionales y provinciales. Controles camineros ambulantes.

Expte. Nro. 15.782 – Transporte de pasajeros. Control de unidades.

Expte. Nro. 15.783 – Primeras Jornadas Provinciales sobre Patrimonio Arquitectónico: “Patrimonio y Ciudad”.

Expte. Nro. 15.785 – Impuestos provinciales. Emisión de boletas en página web.

Expte. Nro. 15.787 – Ley Nro. 8.105. Reglamentación. Beneficios del I.O.S.P.E.R. a bomberos voluntarios.

Expte. Nro. 15.793 – Octavo Simposio de Investigación en Educación Física.

Expte. Nro. 15.795 – Centro de Salud “Dr. Marcelo Marelli”. Atención médica ambulatoria.

Expte. Nro. 15.809 – Programa Alimento Seguro (PAS).

Expte. Nro. 15.812 – Promoción del Desarrollo Emprendedor para Jóvenes Rurales.

Expte. Nro. 15.813 – 1º Encuentro Regional de Gastronomía y Turismo. 2º Encuentro Nacional de Periodistas Gastronómicos y Turismo.

14

LEY NRO. 9.487. EXPROPIACIÓN TERRENOS CONEXIÓN FÍSICA ROSARIO – VICTORIA

Moción de sobre tablas. Consideración (Expte. Nro. 15.532)

SR. PRESIDENTE (Engelmann) - Se encuentra reservado el dictamen de comisión en el proyecto de ley –Expte Nro. 15.532– referido a la expropiación de inmuebles de la obra: “Nexo de conexión física Victoria–Rosario, y la variante de la Ruta Provincial Nro. 11”.

SR. ROGEL - Pido la palabra.

Al margen, señor Presidente, de alguna circunstancial distracción no propia de mi persona, en este Recinto, me sorprende por cuanto esto no fue conversado en Labor Parlamentaria, por lo que, con las disculpas del caso, le solicito al diputado Almada o al Presidente del Bloque explique en qué consiste.

SR. CASTRILLÓN - Pido la palabra.

Señor Presidente, es harto conocido y a través de varios años se viene dando, la necesidad mediante una medida de transferencia obligada como es la expropiación para obtener los terrenos necesarios para culminar con las obras complementarias de lo que es el nexo conexión física Victoria–Rosario.

En tal sentido se ha dictado en esta Honorable Cámara la Ley Nro. 9.487 que fuera ratificatoria de la Ley Nro. 9.284, que a su vez era ratificatoria de las Leyes Nros. 9.101 y 9.187 que declararan oportunamente de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados a la variante de la Ruta Provincial Nro. 11, desde kilómetro 110.

Lo que hace este proyecto de ley, ante la necesidad de contar con ello y a efectos de poner en marcha el procedimiento administrativo necesario para llevar adelante el proceso de expropiación previsto en la ley de expropiación Nro. 9.487 que a su vez es ratificatoria de las otras leyes que he citado con el sentido de posibilitar el inicio y el avance de la obra de la variante de la Ruta Provincial Nro. 11 desde el kilómetro 110 en adelante, dando lugar a la posibilidad de culminar las obras complementarias de la conexión física Victoria-Rosario.

SR. ROGEL - Pido la palabra.

¿En qué trámite parlamentario estaba esto, señor diputado Castrillón?

SR. CASTRILLÓN – Tiene dictamen de comisión pero no había ingresado en tiempo para esta sesión, pero ante la urgencia del departamento Victoria y de la Provincia, el legislador de ese departamento solicitó el tratamiento en esta sesión.

SR. ZACARÍAS - Pido la palabra.

Teniendo en cuenta la observación del señor diputado Rogel en el sentido de que no fue tratado en la reunión de Labor Parlamentaria, como aquí me lo confirma la señora diputada Demonte, me parece que el proyecto no deja de ser importante y necesario, fundamentalmente teniendo en cuenta la cantidad de accidentes que se están produciendo en esa arteria a partir de no haberse previsto algunas obras en la construcción de esta unión entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Esto ha traído como consecuencia lo que leemos en las páginas trágicas y policiales.

Por lo tanto, nuestro bloque va a acompañar el proyecto del diputado de Victoria.

15

CUARTO INTERMEDIO

SR. ROGEL - Pido la palabra.

Solicito, señor Presidente, que la Cámara pase a un breve cuarto intermedio a fin de intercambiar informaciones al respecto.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Rogel.

-Resulta afirmativa.

-Eran las 12 y 27.

16
REANUDACIÓN DE LA SESIÓN

-Siendo las 12 y 29, dice el:

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Continúa la sesión.

SR. ROGEL - Pido la palabra.

El Bloque de la Unión Cívica Radical, únicamente a los efectos de no quedar entrampados en cuestiones que puedan llegar a perjudicar, según las expresiones y argumentos del señor diputado Almada, va a viabilizar la posibilidad del tratamiento de este proyecto. Pero por obvios motivos y razones que demás está explicarlas y al no tener conocimiento del mismo, no vamos a acompañar con nuestro voto su aprobación.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Corresponde poner a votación el tratamiento sobre tablas del proyecto. Se requieren dos tercios de votos.

-Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Por Secretaría se dará lectura.

-Se lee nuevamente.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular a la vez, por constar de un solo artículo.

-Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Queda aprobado. Pasa en revisión al Senado.

SR. ROGEL - Pido la palabra.

Solicito que conste en la versión taquigráfica que el proyecto no ha tenido el acompañamiento de nuestro Bloque.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Se tendrá presente, señor diputado.

17
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
Consideración (Expte. Nro. 15.233)

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Corresponde considerar las preferencias acordadas para la presente sesión.

En primer lugar el proyecto de ley –Expte. Nro. 15.233– referido a la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.

Por Secretaría se dará lectura.

-Se lee:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Art. 1º - Apruébase y téngase por Ley de la Provincia el Código Procesal Civil y Comercial redactado por la Comisión Especial designada por el Decreto Nro. 4.265/04 Gob., integrada por los Dres. Leonor Pañeda, Juan José Papetti y Juan Carlos Arday como representantes del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia; los Dres. Ricardo Italo Moreni, Roberto Croux, Angel Luis Dieci, por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos; los Dres. Valentina Ramirez Amable, Graciela Aida Basaldua de Torrealday y Luis María Ortiz Mallo, por el Instituto Alberdi; el Dr. Guillermo Enderle por la Facultad Católica de Abogacía –Subsede Paraná–; los Dres. Oscar Daniel Benedetto, René Saadi Bonfils y Juan

Antonio Iruqueta, por el Colegio de Abogados de Entre Ríos; la Dra. María Mercedes Maiztegui Martínez, por el INECIP; el Dr. Enrique Genaro Máximo Pita, como especialista invitado y el Dr. Virgilio Alejandro Galanti, como coordinador de la misma.

Art. 2º - Créanse ocho cargos de Juez de Primera Instancia con competencia en la aplicación del presente Código de Procedimientos a los efectos de ser utilizados para asegurar las finalidades de la presente. Dichos cargos podrán ser distribuidos territorialmente conforme necesidades por el Superior Tribunal de la Provincia de Entre Ríos. El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas deberá proveer de las partidas presupuestarias correspondientes para atender las erogaciones de la utilización de estos cargos mediante asignaciones y reasignaciones presupuestarias.

Art. 3º - El Código Procesal Civil y Comercial aprobado por el Artículo 1º de la presente entrará en vigencia en las oportunidades previstas en sus Disposiciones Transitorias, Artículos 779º a 782º.

Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar la publicación de dos mil quinientos ejemplares de la edición oficial del Código Procesal Civil y Comercial imputándose el gasto a la partida correspondiente del Presupuesto de la Provincia.

Art. 5º - Comuníquese, etcétera.

PARTE GENERAL

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

Órgano Judicial

CAPÍTULO I

Competencia

Artículo 1º: Carácter.- La competencia atribuida a los tribunales provinciales es improrrogable. Sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales y por el Artículo 12º, inciso 4º, de la Ley Nro. 48, exceptúase la competencia territorial, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley.

Artículo 2º: Prórroga Expresa o Tácita.- La prórroga se operará si surgiere de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten explícitamente su decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden. Asimismo, para el actor, por el hecho de entablar la demanda; y respecto del demandado, cuando la contestare, dejare de hacerlo u opusiere excepciones previas sin articular la declinatoria.

Artículo 3º: Indelegabilidad.- La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas.

Los jueces de primera instancia y tribunales podrán cometer directamente dichas diligencias, si fuere el caso, a los jueces de paz o alcaldes de provincias.

Artículo 4º: Declaración de Incompetencia.- Toda demanda deberá interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio.

Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se remitirá la causa al juez tenido por competente.

En los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio.

Artículo 5º: Reglas Generales.- La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este Código y en otras leyes, será juez competente:

1º) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias, o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor.

La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio.

2º) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos.

3º) Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.

El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia.

4º) En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.

5º) En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.

6º) En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse, y no estando determinado, a elección del actor, el del domicilio de la administración o el del lugar en que se hubiere administrado el principal de los bienes. En la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla, pero si no estuviese especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá serlo también el del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor.

7º) En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas y salvo disposición en contrario, el del lugar del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. La conexidad no modificará esta regla.

8º) En las acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad de matrimonio así como las que versaren sobre los efectos del matrimonio, el del último domicilio conyugal efectivo o el del domicilio del cónyuge demandado, a elección del cónyuge actor. Si uno de los cónyuges no tuviera su domicilio en la República, la acción podrá ser intentada ante el juez del último domicilio que hubiera tenido en ella, si el matrimonio se hubiere celebrado en la República. No probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia.

En los procesos por declaración de incapacidad por demencia o sordomudez, y en los derivados de los supuestos previstos en el Artículo 152º bis del Código Civil, el del domicilio del presunto incapaz o inhabilitado; en su defecto, el de su residencia. En los de rehabilitación, el que declaró la interdicción.

9º) En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron.

10º) En la protocolización de testamentos, el del lugar donde debe iniciarse la sucesión.

11º) En las acciones que derivan de las relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto. Si la sociedad no requiere inscripción, el del lugar del domicilio fijado en el contrato; en su defecto o tratándose de sociedad irregular o de hecho, el del lugar de la sede social.

12º) En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promueven, salvo en el proceso sucesorio o disposición en contrario.

13º) Cuando se ejercite la acción por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cualquier otra acción derivada de la aplicación de ese régimen, el del lugar de la unidad funcional de que se trate.

Artículo 6º: Reglas Especiales.- A falta de otras disposiciones será tribunal competente:

1º) En los incidentes, tercerías, obligaciones de garantía, citación de evicción, cumplimiento de acuerdos de conciliación o transacción celebrados en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en el proceso, y acciones accesorias en general, el del proceso principal.

2º) En los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el del juicio de divorcio, separación personal o nulidad de matrimonio.

3º) En la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos y litisexpensas, el del juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio, mientras durare la

tramitación de estos últimos. Si aquellos se hubiesen iniciado con anterioridad, pasarán a tramitar ante el juzgado donde quedare radicado el juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio.

No existiendo juicio de divorcio, de separación personal o de nulidad de matrimonio en trámite, y no probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia.

Mediando juicio de inhabilitación, el pedido de alimentos contra el inhabilitado deberá promoverse ante el juzgado donde se sustancia aquél.

4º) En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal.

5) En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que aquél se hará valer.

6º) En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste.

7º) En el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en el Artículo 205º, el que decretó las medidas cautelares; en el supuesto del Artículo 193º, aquél cuya competencia para intervenir hubiese sido en definitiva fijada.

CAPÍTULO II

Cuestiones de Competencia

Artículo 7º Procedencia.- Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procederá la inhibitoria.

En uno y otro caso la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se reclama.

Elegida una vía no podrá en lo sucesivo usarse de otra.

Artículo 8º: Declinatoria e Inhibitoria.- La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente.

La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si aquel trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata.

Artículo 9º: Planteamiento y Decisión de la Inhibitoria.- Si entablada la inhibitoria el juez se declare competente, librará oficio o exhorto acompañando testimonio del escrito en que se hubiere planteado la cuestión, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia.

Solicitará, asimismo, la remisión del expediente o, en su defecto, su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda.

La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente.

Artículo 10º: Trámite de la Inhibitoria ante el Juez Requerido.- Recibido el oficio o exhorto, el juez requerido se pronunciará aceptando o no la inhibición.

Sólo en el primer caso su resolución será apelable. Una vez consentida o ejecutoriada, remitirá la causa al tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho.

Si mantuviese su competencia, enviará sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal requirente para que remita las suyas.

Artículo 11º: Trámite de la Inhibitoria ante el Tribunal Superior. - Dentro de los cinco días de recibidas las actuaciones de ambos jueces, el tribunal superior resolverá la contienda sin más sustanciación y las devolverá al que declare competente, informando al otro por oficio o exhorto.

Si el juez que requirió la inhibitoria no remitiere las actuaciones dentro de un plazo prudencial a juicio del tribunal superior, éste lo intimará para que lo haga en un plazo de diez a quince días, según la distancia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su pretensión.

Artículo 12º: Substanciación.- Las cuestiones de competencia se sustanciarán por vía de incidente. No suspende el procedimiento, el que seguirá su trámite por ante el juez que previno, salvo que se tratare de cuestiones de competencia en razón del territorio.

Artículo 13º: Contienda Negativa y Conocimiento Simultáneo.- En caso de contienda negativa o cuando dos o más jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en los Artículos 9º a 12º.

CAPÍTULO III

Recusaciones y Excusaciones

Artículo 14º: Recusación.- Serán causas legales de recusación de jueces y vocales:

1º) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.

2º) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.

3º) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.

4º) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales.

5º) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querrela contra el recusante, o denunciado o querrellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6º) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que se hubiere dispuesto dar curso a la denuncia.

7º) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

8º) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.

9º) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato.

10º) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después que hubiere comenzado a conocer del asunto.

Artículo 15º: Oportunidad.- El actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Si el demandado no cumpliera esos actos, no podrá ejercer en adelante la facultad que le confiere el artículo anterior.

Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro del quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia.

Los vocales del Superior Tribunal y cámaras de apelaciones sólo podrán ser recusados hasta el día siguiente de notificada la primera providencia que se dicte.

Artículo 16º: Tribunal Competente para Conocer de la Recusación.- Cuando se recusare a uno o más vocales del Superior Tribunal o de una cámara de apelaciones, conocerán los que queden hábiles, integrándose el tribunal, si procediere, en la forma prescripta por la ley orgánica.

De la recusación de los jueces de primera instancia conocerá la sala o la cámara de apelaciones respectiva.

Artículo 17º: Forma de Deducirla.- La recusación se deducirá ante el juez recusado y ante el Superior Tribunal y sus salas o cámaras de apelaciones, cuando lo fuese de uno de sus miembros.

En el escrito correspondiente, se expresarán las causas de la recusación, y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse.

Artículo 18º: Rechazo "in Limine".- Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el Artículo 14º, o la que se invoca fuere manifiestamente improcedente, o si se presentase fuera de las oportunidades previstas en el Artículo 15º, la recusación será desechada, sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella.

Artículo 19º: Informe del Magistrado Recusado.- Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese un vocal del Superior Tribunal o de cámara se le comunicará aquélla, a fin de que informe sobre las causas alegadas.

Artículo 20º: Consecuencias del Contenido del Informe.- Si el recusado reconociese los hechos, se le tendrá por separado de la causa.

Si los negase, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por expediente separado.

Artículo 21º: Apertura a Prueba.- El Superior Tribunal o cámara de apelaciones, integradas al efecto si procediere, recibirán el incidente a prueba por diez días, si hubiere de producirse dentro de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal. El plazo se ampliará en la forma dispuesta en el Artículo 155º.

Cada parte no podrá ofrecer más de tres testigos.

Artículo 22º: Resolución.- Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se dará vista al juez recusado y se resolverá el incidente dentro de cinco días de contestada aquélla o vencido el plazo para hacerlo.

Artículo 23º: Informe de los Jueces de Primera Instancia.- Cuando el recusado fuera un juez de primera instancia, remitirá a la cámara de apelaciones, dentro de los cinco días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas, y pasará el expediente al juez que sigue en el orden del turno o, donde no lo hubiere, al subrogante legal para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones.

Artículo 24º: Trámite de la Recusación de los Jueces de Primera Instancia.- Pasados los antecedentes, si la recusación se hubiese deducido en tiempo y con causa legal, la cámara de apelaciones, siempre que del informe elevado por el juez resultare la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa.

Si los negare, la cámara podrá recibir el incidente a prueba, y se observará el procedimiento establecido en los Artículos 21º y 22º.

Artículo 25º: Efectos.- Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al juez subrogante a fin de que devuelva los autos al juez recusado.

Si fuese admitida, el expediente quedará radicado ante el juez subrogante con noticia al juez recusado, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.

Cuando el recusado fuese uno de los vocales del Superior Tribunal o de las cámaras de apelaciones, seguirán conociendo en la causa él o los integrantes o sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación.

Artículo 26º: Recusación Maliciosa.- Desestimada una recusación, se aplicarán las costas y una multa de hasta ciento cincuenta juristas por cada recusación, si ésta fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria.

Artículo 27º: Excusación.- Todo vocal o juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el Artículo 14º deberá excusarse.

No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.

Artículo 28º: Oposición y Efectos.- Las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el juez subrogante entendiese que la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa.

Aceptada la excusación, el expediente quedará radicado en el juzgado que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.

Artículo 29º: Falta de Excusación.- Incurrirá en la causal de "mal desempeño" en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.

Artículo 30º: Ministerio Público.- Los funcionarios del ministerio público no podrán ser recusados. Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al juez o tribunal y éstos podrán separarlos de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos.

CAPÍTULO IV

Deberes y Facultades de los Jueces

Artículo 31º: Deberes.- Son deberes de los jueces:

1º) Asistir a la audiencia preliminar y realizar personalmente las demás diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviere autorizada.

2º) Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado.

3º) Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:

a) Las providencias simples, dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el Artículo 33º, inciso 1), e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente.

b) Las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez o veinte días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado.

c) Las sentencias definitivas en el juicio ordinario, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia, dictado en el

plazo de las providencias simples, quede firme; en el segundo, desde la fecha de sorteo del expediente, que se debe realizar dentro del plazo de quince días de quedar en estado.

d) Las sentencias definitivas en el juicio sumarísimo, dentro de los veinte o treinta días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado.

En todos los supuestos, si se ordenase prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento, reanudándose el decurso de los plazos suspendidos una vez cumplimentada la medida.

e) Si transcurridos los plazos establecidos precedentemente el juez o la cámara no se hubieren expedido, podrá requerirse pronto despacho. En tal caso, la resolución deberá dictarse dentro de los tres, cinco, diez o cinco días del requerimiento, según se trate de los casos de los incisos a), b), c) o d).

Si no se resolviere dentro de los plazos establecidos el litigante podrá ocurrir en queja ante la cámara o el Superior Tribunal, según el caso, acompañando copia del escrito y haciendo saber la fecha de presentación del mismo. La cámara o el Superior emplazará por medio de oficio o telegrama al juez o a la cámara remisos, para que resuelva en el plazo de diez días de recibida la comunicación, aplicando a los morosos, si correspondiere, sanción disciplinaria.

4º) Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.

5º) Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este Código:

a) Concentrar en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar.

b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar o sanear nulidades.

c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso.

d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.

e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal.

6º) Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieran incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.

Artículo 32º: Potestades Disciplinarias.- Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales deberán:

1º) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos, salvo que alguna de las partes o tercero interesado solicite que no se lo haga.

2º) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.

3º) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código y la ley orgánica. El importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este Código, se aplicará al que le fije el Superior Tribunal de Justicia. Hasta tanto dicho tribunal determine quiénes serán los funcionarios que deberán promover la ejecución de multas, esa atribución corresponde a los representantes del Ministerio Público Fiscal ante las respectivas jurisdicciones. La falta de ejecución dentro de los treinta días de quedar firme la resolución que las impuso, el retardo en el trámite o el abandono injustificado de éste, será considerado falta grave.

Artículo 33º: Deberes y Facultades Ordenatorias e Instructorias.- Aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales deberán:

1º) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.

2º) Sin perjuicio de lo que se dispone en el Capítulo VI del Título IV del presente Libro, intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos.

En cualquier momento podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación.

3º) Proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria. En todos los casos la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.

4) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A ese efecto, podrán:

a) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito;

b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos con arreglo a lo que dispone el Artículo 435º, peritos y consultores técnicos, para interrogarlos acerca de lo que creyeren necesario;

c) Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de terceros, en los términos de los Artículos 371º a 373º;

5º) Impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que los representantes legales de éstos o, en su caso, el defensor de menores, efectúen las propuestas que estimen más convenientes en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho funcionario con igual objeto.

6º) Corregir, en la oportunidad establecida en el Artículo 161º, incisos 1º) y 2º), errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo sustancial de la decisión.

Artículo 34º: Sanciones Conminatorias.- Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.

Podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece.

Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

CAPÍTULO V

Secretarios y Jefes de Despacho

Artículo 35º: Secretarios.- Los secretarios tendrán las siguientes funciones además de los deberes que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se les impone:

1º) Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los letrados respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados de distintas jurisdicciones.

Las comunicaciones dirigidas al Presidente de la Nación, gobernadores, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y magistrados judiciales, serán firmadas por el juez.

2º) Extender certificados, testimonios y copias de actas.

3º) Conferir vistas y traslados.

4º) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el Artículo 31º, inciso 3º) apartado a). En la etapa probatoria firmará todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba.

5º) Devolver los escritos presentados fuera de plazo.

Artículo 35º bis: Jefes de Despacho.- Los jefes de despacho o quien desempeñe cargo equivalente, tendrán las siguientes funciones además de los deberes que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se les impone:

1º) Firmar las providencias simples que dispongan:

a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares.

b) Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios que intervengan como parte.

2º) Devolver los escritos presentados sin copia.

Artículo 35º ter: Recurso.- Dentro del plazo de tres días, las partes podrán requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario o el jefe de despacho. Este pedido se resolverá sin substanciación. La resolución será inapelable.

Artículo 36º: Recusación.- Los secretarios de primera instancia podrán ser recusados por las causas previstas en el Artículo 14º.

Deducida la recusación el juez se informará sumariamente sobre el hecho en que se funde y sin más trámite dictará resolución que será inapelable.

Los secretarios del Superior Tribunal y los de las cámaras de apelaciones no serán recusables; pero deberán manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.

En todos los casos serán aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los jueces.

TITULO II**Partes****CAPITULO I**

Reglas Generales

Artículo 37º: Domicilio.- Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la planta urbana de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal.

Ese requisito se cumplirá en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene.

En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada. Se diligenciarán en el domicilio procesal todas las notificaciones por cédula que no deban serlo en el real.

El domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en el domicilio del constituyente.

Artículo 38º: Falta de Constitución y Denuncia de Domicilio.- Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el Artículo 129º, salvo la notificación de la audiencia para absolver posiciones y la sentencia.

Si la parte no denunciare su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplirán en el lugar en que se hubiere constituido, y en defecto también de éste, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 39º: Subsistencia de los Domicilios.- Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.

Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate, respectivamente, del domicilio procesal o del real.

Todo cambio de domicilio deberá notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tendrá por subsistente el anterior.

Artículo 40º: Muerte o Incapacidad.- Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho el juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el Artículo 50º, inciso 5º.

Artículo 41º: Sustitución de Parte.- Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no podrá intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Podrá hacerlo en la calidad prevista por los Artículos 87º inciso 1º) y 88º) primer párrafo.

Artículo 42º: Temeridad o Malicia.- Cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por alguna de las partes, el juez de oficio o a pedido del adversario, le impondrá a ella o a su letrado o a ambos conjuntamente, según las circunstancias del caso, una multa a favor de la otra parte valuada entre el cinco y el veinte por ciento del monto del objeto de la sentencia. En los casos en que el objeto de la pretensión no fuera susceptible de apreciación pecuniaria, el importe no podrá superar la suma equivalente a mil ochocientos juristas. Si mediare pedido de parte, se decidirá previo traslado a la contraria.

Sin perjuicio de considerar otras circunstancias que estime corresponder, el juez deberá ponderar la deducción de pretensiones, defensas, excepciones o interposición de recursos que resulten inadmisibles, o cuya falta de fundamento no se pueda ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad o encuentre sustento en hechos ficticios o irreales o que manifiestamente conduzcan a dilatar el proceso.

CAPITULO II

Representación Procesal

Artículo 43º: Justificación de la Personería.- La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.

Si se invocare la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el juez considerare atendibles las razones que se expresen, podrá acordar un plazo de hasta veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.

Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio, los emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.

Artículo 44º: Presentación de Poderes.- Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder. Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte podrá intimarse la presentación del testimonio original.

Cuando se trate de uno o varios asuntos o juicios determinados, podrá también acreditarse la personería mediante acta o carta poder con la firma autenticada por escribano de registro, juez de paz o secretario judicial de cualquier fuero o jurisdicción.

Artículo 45º: Gestor.- Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que acrediten la personalidad o la parte no ratificase la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido.

La nulidad, en su caso, se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.

Artículo 46º: Efectos de la Presentación del Poder y Admisión de la Personería.- Presentado el poder y admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare.

Artículo 47º: Obligaciones del Apoderado.- El apoderado estará obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste.

Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.

Artículo 48º: Alcance del Poder.- El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.

También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquellos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.

Artículo 49º: Responsabilidad por las Costas.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el mandatario deberá abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando éstas fueran declaradas judicialmente.

El juez podrá, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del mandatario con el letrado patrocinante.

Artículo 50º: Cesación de la Representación.- La representación de los apoderados cesará:

1º) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso el poderdante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del mandante no revoca el poder.

2º) Por renuncia en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de responder por daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el juez fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante.

3º) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante.

4º) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder.

5º) Por muerte o incapacidad del poderdante. En tales casos el apoderado continuará ejerciendo su personería hasta que los herederos o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado en este mismo inciso. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el juez señalará un plazo para que los

interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor en el segundo.

Cuando el deceso o la incapacidad hubieren llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al juez o tribunal dentro del plazo de diez días, bajo pena de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omite denunciar el nombre y domicilio de los herederos, o del representante legal si los conociere.

6º) Por muerte o inhabilidad del apoderado. Producido el caso, se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, citándolo en la forma dispuesta en el inciso anterior. Vencido el plazo fijado sin que el mandante satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio en rebeldía.

Artículo 51º: Unificación de la Personería.- Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el juez de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, les intimará a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fijará una audiencia dentro de los diez días y si los interesados no concurriesen o no se aviniesen en el nombramiento de representante único, el juez lo designará eligiendo entre los que intervienen en el proceso.

Producida la unificación, el representante único tendrá, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.

Artículo 52º: Revocación.- Una vez efectuado el nombramiento común podrá revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el juez a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.

La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario.

La unificación se dejará sin efecto cuando desaparecieren los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior.

CAPITULO III

Patrocinio Letrado

Artículo 53º: Patrocinio Obligatorio.- Los jueces letrados no proveerán ningún escrito de demanda, excepciones y sus contestaciones, alegatos, expresiones de agravios, pliegos de posiciones, o interrogatorios, ni aquellos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, ya sea en procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan firma de letrado.

Artículo 54º: Falta de Firma de Letrado.- Se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada personalmente o por cédula la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.

Ello tendrá lugar suscribiendo un abogado el mismo escrito ante el secretario o el jefe de despacho, quien certificará en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado.

Artículo 55º: Dignidad.- En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele.

CAPITULO IV

Rebeldía

Artículo 56º: Declaración de Rebeldía. Incomparecencia del Demandado no Declarado Rebelde.- La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarada en rebeldía a pedido de la otra.

Esta resolución se notificará por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas por ministerio de la ley.

Si no se hubiere requerido que el incompareciente sea declarado rebelde, se aplicarán las reglas sobre notificaciones, establecidas en el primer párrafo del Artículo 38º.

Artículo 57º: Efectos.- La rebeldía no alterará la secuela regular del proceso.

El rebelde podrá oponer la prescripción en los términos del Artículo 331º.

La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el Artículo 341º, inciso 1º. En caso de duda la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.

Serán a cargo del rebelde las costas causadas por su rebeldía.

Artículo 58º: Prueba.- Si el juez lo creyere necesario podrá recibir el pleito a prueba, o mandar practicar las medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos, autorizadas por este Código.

Artículo 59º: Notificación de la Sentencia.- La sentencia se hará saber al rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.

Artículo 60º: Medidas Precautorias.- Desde el momento en que un litigante haya sido declarado en rebeldía podrán decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el rebelde fuere el actor.

Artículo 61º: Comparecencia del Rebelde.- Si el rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, será admitido como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradar.

Artículo 62º: Subsistencia de las Medidas Precautorias.- Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el Artículo 60º, continuarán hasta la terminación del juicio, a menos que el interesado justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no hayan estado a su alcance vencer.

Serán aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.

Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitarán por incidente, sin detener el curso del proceso principal.

Artículo 63º: Prueba en Segunda Instancia.- Si el rebelde hubiese comparecido después de la oportunidad en que ha debido ofrecer la prueba y apelare de la sentencia, a su pedido se recibirá la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del Artículo 252º, inciso 5º, apartado a).

Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tendrá en cuenta la situación creada por el rebelde.

Artículo 64º: Inimpugnabilidad de la Sentencia.- Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admitirá recurso alguno contra ella.

CAPITULO V

Costas

Artículo 65º: Principio General.- La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria aun cuando ésta no lo hubiese solicitado.

Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.

Artículo 66º: Incidentes.- En los incidentes también regirá lo establecido en el artículo anterior.

No se sustanciarán nuevos incidentes promovidos por quien hubiere sido condenado al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga importe, o en su caso, lo dé a embargo.

No estarán sujetos a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias.

Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concederá en efecto diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.

Artículo 67º: Allanamiento.- No se impondrán costas al vencido:

1º) Cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación.

2º) Cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados.

Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.

Si de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no hubiere dado motivo a la promoción del juicio y se allanare dentro del plazo para contestar la demanda, cumpliendo su obligación, las costas se impondrán al actor.

Artículo 68º: Vencimiento Parcial y Mutuo.- Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos.

Artículo 69º: Pluspetición Inexcusable.- El litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas, si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia.

Si no hubiese existido dicha admisión o si ambas partes incurrieren en pluspetición, regirá lo dispuesto en el artículo precedente.

No se entenderá que hay pluspetición, a los efectos determinados en este artículo cuando el valor de la condena dependiese legalmente del arbitrio judicial, de juicio pericial o de rendición de cuentas o cuando las pretensiones de la parte no fuesen reducidas por la condena en más de un veinte por ciento.

Artículo 70º: Transacción. Conciliación. Desistimiento. Caducidad de Instancia.- Si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado respecto de quienes celebraron el avenimiento; en cuanto a las partes que no lo suscribieron, se aplicarán las reglas generales.

Si el proceso se extinguiere por desistimiento, las costas serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiere exclusivamente a cambios de legislación o jurisprudencia y se llevare a cabo sin demora injustificada.

Exceptúase, en todos los casos, lo que pudieren acordar las partes en contrario.

Declarada la caducidad de la primera instancia, las costas del juicio deberán ser impuestas al actor.

Artículo 71º: Nulidad.- Si el procedimiento se anulare por causa imputable a una de las partes, serán a su cargo las costas producidas desde el acto o la omisión que dio origen a la nulidad.

Artículo 72º: Litisconsorcio.- En los casos de litisconsorcio, las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria.

Cuando el interés que cada uno de ellos representase en el juicio ofreciere considerables diferencias, podrá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés.

Artículo 73º: Prescripción.- Si el actor se allanase a la prescripción opuesta, las costas se distribuirán en el orden causado.

Artículo 74º: Alcance de la Condena en Costas.- La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación.

Los correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó u originó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal.

No serán objeto de reintegro los gastos superfluos o inútiles.

Si los gastos fuesen excesivos, el juez podrá reducirlos prudencialmente.

Los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento de los honorarios que le fueran regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 462º.

CAPITULO VI

Beneficio de Litigar sin Gastos

Artículo 75º: Procedencia.- Los que carecieren de recursos podrán solicitar la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo, antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso hasta la audiencia preliminar o la declaración de puro derecho, salvo que se aleguen y acrediten circunstancias sobrevinientes.

No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuere el origen de sus recursos.

Artículo 76º: Requisitos de la Solicitud. - La solicitud contendrá:

1º) La mención de los hechos en que se fundare, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del cónyuge o de hijos menores, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir.

2º) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Deberá acompañarse el interrogatorio de los testigos y su declaración en los términos de los Artículos 423º primera parte, 424º y 426º, firmada por ellos.

En la oportunidad prevista en el Artículo 77º el litigante contrario o quien haya de serlo, y el organismo de determinación y recaudación de la tasa de justicia, podrán solicitar la citación de los testigos para corroborar su declaración.

Artículo 77º: Prueba.- El juez ordenará sin más trámite las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor brevedad y citará al litigante contrario o a quien haya de serlo, y al organismo de determinación y recaudación de la tasa de justicia, quienes podrán fiscalizarla y ofrecer otras pruebas.

Artículo 78º: Traslado y Resolución.- Producida la prueba se dará traslado por cinco días comunes al peticionario, a la otra parte, y al organismo de determinación y recaudación de la tasa de justicia. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez resolverá acordando el beneficio total o parcialmente, o denegándolo. En el primer caso la resolución será apelable al solo efecto devolutivo.

Sí se comprobare la falsedad de los hechos alegados como fundamento de la petición del beneficio de litigar sin gastos, se impondrá al peticionario una multa que se fijará en el doble del importe de la tasa de justicia que correspondiera abonar, no pudiendo ser esta suma inferior al equivalente a sesenta juristas. El importe de la multa se destinará a la biblioteca del Poder Judicial.

Artículo 79º: Carácter de la Resolución.- La resolución que denegare o acordare el beneficio no causará estado.

Si fuere denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución. La que lo concediere, podrá ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada, cuando se demostrare que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio.

La impugnación se sustanciará por el trámite de los incidentes.

Artículo 80º: Beneficio Provisional. Efectos del Pedido.- Hasta que se dicte resolución la solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de impuestos y sellado de actuación.

Estos serán satisfechos así como las costas, en caso de denegación. El trámite para obtener el beneficio no suspenderá el procedimiento, salvo que así se solicite al momento de su interposición.

Artículo 81º: Alcance. Cesación.- El que obtuviere el beneficio estará exento, total o parcialmente, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna; si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba.

Los profesionales podrán exigir el pago de sus honorarios a la parte condenada en costas, y a su cliente, en el caso y con la limitación señalada en este artículo.

En todos los casos la concesión del beneficio tendrá efectos retroactivos a la fecha de promoción de la solicitud del mismo, respecto de las costas o gastos judiciales no satisfechos.

Artículo 82º: Defensa del Beneficiario.- La representación y defensa del beneficiario será asumida por el defensor oficial, salvo que aquél desee hacerse patrocinar o representar por abogado o procurador de la matrícula. En este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el apoderamiento que se otorgare de conformidad al Artículo 44º será libre de tributos.

Artículo 83º: Extensión a otra Parte.- A pedido del interesado, el beneficio podrá hacerse extensivo para litigar contra otra persona en el mismo juicio, si correspondiere, con citación de ésta.

CAPITULO VII

Acumulación de Acciones y Litisconsorcio

Artículo 84º: Acumulación Objetiva de Acciones.- Antes de la notificación de la demanda el actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte, siempre que:

1º) No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra.

2º) Correspondan a la competencia del mismo juez.

3º) Puedan sustanciarse por los mismos trámites.

Artículo 85º: Litisconsorcio Facultativo.- Podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso cuando las acciones sean conexas por el título, o por el objeto, o por ambos elementos a la vez.

Artículo 86º: Litisconsorcio Necesario.- Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso.

Si así no sucediere, el juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que

señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita al litigante o litigantes omitidos.

CAPITULO VIII

Intervención de Terceros

Artículo 87º: Intervención Voluntaria.- Podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien:

1º) Acredite sumariamente que la sentencia pudiere afectar su interés propio.

2º) Según las normas del derecho sustancial, hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en el juicio.

Artículo 88º: Calidad Procesal de los Intervinientes.- En el caso del inciso 1º) del artículo anterior, la actuación del interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a quien apoyare, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta.

En el caso del inciso 2º del mismo artículo, el interviniente actuará como litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades procesales.

Artículo 89º: Procedimiento Previo.- El pedido de intervención se formulará por escrito, con los requisitos de la demanda, en lo pertinente. Con aquél se presentarán los documentos y se ofrecerán las demás pruebas de los hechos en que se fundare la solicitud. Se conferirá traslado a las partes y, si hubiese oposición, se la sustanciará en una sola audiencia. La resolución se dictará dentro de los diez días.

Artículo 90º: Efectos.- En ningún caso la intervención del tercero retrogradará el juicio ni suspenderá su curso.

Artículo 91º: Intervención Obligada.- El actor en el escrito de demanda, y el demandado dentro del plazo para contestar la demanda, podrán solicitar la citación de aquél a cuyo respecto consideraren que la controversia es común. La citación se hará en la forma dispuesta por los Artículos 326º y siguientes.

Artículo 92º: Efectos de la Citación.- La citación de un tercero suspenderá el procedimiento hasta su comparecencia o hasta el vencimiento del plazo que se le hubiere señalado para comparecer.

Artículo 93º: Recursos. Alcance de la Sentencia.- Será inapelable la resolución que admita la intervención de terceros. La que la deniegue será apelable en efecto devolutivo.

En todos los supuestos, después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, la sentencia dictada lo alcanzará como a los litigantes principales.

Se podrá condenar al tercero si al sustanciarse el pedido de su intervención, el actor hubiese ampliado la demanda solicitando su condena.

CAPITULO IX

Tercerías

Artículo 94º: Fundamento y Oportunidad.- Las tercerías deberán fundarse en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia al embargante.

La de dominio deberá deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de mejor derecho, antes de que se pague al acreedor.

Si el tercerista dedujere la demanda después de diez días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, abonará las costas que originare su presentación extemporánea, aunque correspondiere imponer las del proceso a la otra parte por declararse procedente la tercería.

Artículo 95º: Admisibilidad. Requisitos. Reiteración.- No se dará curso a la tercería si quien la deduce no probare, con instrumentos fehacientes o en forma sumaria, la verosimilitud del derecho en que se funda. No obstante, aún no cumplido dicho requisito, la tercería será admisible si quien la promueve diere fianza para responder de los perjuicios que pudiere producir la suspensión del proceso principal.

Desestimada la tercería, no será admisible su reiteración si se fundare en título que hubiese poseído y conocido el tercerista al tiempo de entablar la primera. No se aplicará esta regla si la tercería no hubiese sido admitida sólo por falta de ofrecimiento o constitución de la fianza.

Artículo 96º: Efectos Sobre el Principal de la Tercería de Dominio.- Si la tercería fuese de dominio, consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se suspenderá el procedimiento principal, a menos que se tratare de bienes sujetos a desvalorización o desaparición o que irrogaren excesivos gastos de conservación, en cuyo caso, el producto de la venta quedará afectado a las resultas de la tercería.

El tercerista podrá, en cualquier momento, obtener el levantamiento del embargo dando garantía suficiente de responder al crédito del embargante por capital, intereses y costas, en caso de que no probare que los bienes embargados le pertenecen.

Artículo 97º: Efectos Sobre el Principal de la Tercería de Mejor Derecho.- Si la tercería fuese de mejor derecho, previa citación del tercerista, el juez podrá disponer la venta de los bienes, suspendiéndose el pago hasta que se decida sobre la preferencia, salvo si se otorgare fianza para responder a las resultas de la tercería, o se tratare de preferencia por inscripción en el Registro Público de boleto de compraventa de inmueble.

El tercerista será parte en las actuaciones relativas al remate de los bienes.

Artículo 98º: Demanda. Sustanciación. Allanamiento.- La demanda por tercería deberá deducirse contra las partes del proceso principal y se substanciará por el trámite del juicio ordinario o incidente, según lo determine el juez atendiendo a las circunstancias.

El allanamiento y los actos de admisión realizados por el embargado no podrán ser invocados en perjuicio del embargante.

Artículo 99º: Ampliación o Mejora del Embargo.- Deducida la tercería, el embargante podrá pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se adopten otras medidas precautorias necesarias.

Artículo 100º: Connivencia entre Tercerista y Embargado.- Cuando resultare probada la connivencia del tercerista con el embargado, el juez ordenará, sin más trámite, la remisión de los antecedentes a la justicia penal e impondrá al tercerista, al embargado o a los profesionales que los hayan representado o patrocinado, o a todos ellos, las sanciones disciplinarias que correspondan. Asimismo podrá disponer la detención del tercerista y del embargado hasta el momento en que comience a actuar el juez en lo penal.

Artículo 101º: Levantamiento del Embargo sin Tercería.- El tercero perjudicado por un embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio u ofreciendo sumaria información sobre su posesión, según la naturaleza de los bienes.

Del pedido se dará traslado al embargante.

La resolución será recurrible cuando haga lugar al desembargo. Si lo denegara, el interesado podrá deducir directamente la tercería, cumpliendo los requisitos exigidos por el Artículo 95º.

CAPITULO X

Citación de Evicción

Artículo 102º: Oportunidad.- Tanto el actor como el demandado podrán pedir la citación de evicción: el primero, al deducir la demanda; el segundo, dentro del plazo para oponer excepciones previas en el juicio ordinario, o dentro del fijado para la contestación de la demanda, en los demás procesos.

La resolución se dictará sin sustanciación previa. Sólo se hará lugar a la citación si fuere manifiestamente procedente.

La denegatoria será recurrible en efecto devolutivo.

Artículo 103º: Notificación.- El citado será notificado en la misma forma y plazo establecido para el demandado. No podrá invocar la improcedencia de la citación, debiendo limitarse a asumir o no la defensa. Si no la ejerciere, su responsabilidad se establecerá en el juicio que corresponda.

Artículo 104º: Efectos.- La citación solicitada oportunamente suspenderá el curso del proceso durante el plazo que el juez fijare. Será carga del citante activar las diligencias necesarias para el conocimiento del citado. El plazo para oponer excepciones previas y la sustanciación de éstas no quedarán suspendidos.

Artículo 105º: Abstención y Tardanza del Citado.- Si el citado no compareciere o habiendo comparecido se resistiere a asumir la defensa, el juicio proseguirá con quien pidió la citación, salvo los derechos de éste contra aquél.

Durante la sustanciación del juicio, las dos partes podrán proseguir las diligencias para obtener la comparecencia del citado. Si éste se presentare, tomará la causa en el estado en que se encuentre. En la contestación podrá invocar las excepciones que no hubiesen sido opuestas como previas.

Artículo 106º: Defensa por el Citado.- Si el citado asumiere la defensa podrá obrar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación, en el carácter de litisconsorte.

Artículo 107º: Citación de Otros Causantes.- Si el citado pretendiese, a su vez, citar a su causante, podrá hacerlo en los primeros cinco días de haber sido notificado, sin perjuicio de la carga de proseguir el proceso por sí. En las mismas condiciones, cada uno de los causantes podrá requerir la citación de su respectivo antecesor.

Será admisible el pedido de citación simultánea de dos o más causantes.

Será ineficaz la citación que se hiciere sin la antelación necesaria para que el citado pueda comparecer antes de la sentencia de primera instancia.

CAPITULO XI

Acción Subrogatoria

Artículo 108º: Procedencia.- El ejercicio de la acción subrogatoria que prevé el Artículo 1196º del Código Civil no requerirá autorización judicial previa y se ajustará al trámite que prescriben los artículos siguientes.

Artículo 109º: Citación.- Antes de conferirse traslado al demandado, se citará al deudor por el plazo de diez días, durante el cual éste podrá:

1º) Formular oposición, fundada en que ya ha interpuesto la demanda o en la manifiesta improcedencia de la subrogación.

2º) Interponer la demanda, en cuyo caso se le considerará como actor y el juicio proseguirá con el demandado.

En este último supuesto, así como cuando el deudor hubiese ejercido la acción con anterioridad, el acreedor podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el primer apartado del Artículo 88º.

Artículo 110º: Intervención del Deudor.- Aunque el deudor al ser citado no ejerciere ninguno de los derechos acordados en el artículo anterior, podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta por el segundo apartado del Artículo 88º.

En todos los casos, el deudor podrá ser llamado a absolver posiciones y reconocer documentos.

Artículo 111º: Efectos de la Sentencia.- La sentencia hará cosa juzgada en favor o en contra del deudor citado, haya o no comparecido.

TITULO III

Actos Procesales

CAPITULO I

Actuaciones en General

Artículo 112º: Idioma. Designación de Intérprete.- En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o tribunal designará por sorteo un traductor público. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan darse a entender por lenguaje especializado.

Artículo 113º: Informe o Certificado Previo.- Cuando para dictar resolución se requiriese informe o certificado previo del secretario, el juez los ordenará verbalmente.

Artículo 114º: Anotación de Peticiones.- Podrá solicitarse la reiteración de oficios o exhortos, desglose de poderes o documentos, agregación de pruebas, entrega de edictos, y, en general, que se dicten providencias de mero trámite, mediante simple anotación en el expediente, firmada por el solicitante.

CAPITULO II

Escritos

Artículo 115º: Redacción.- Para la redacción y presentación de los escritos regirán las normas del reglamento para los juzgados civiles y comerciales.

Artículo 116º: Escrito Firmado a Ruego.- Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del interesado, el secretario o el jefe de despacho deberán certificar que el firmante, cuyo nombre expresarán, ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él.

Artículo 117º: Copias.- De todo escrito de que deba darse traslado y de sus contestaciones, de los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo que hayan unificado la representación.

Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devolverá al presentante, sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante el juez que autoriza el Artículo 35º, si dentro de los tres días siguientes a los de la notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión.

Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados que intervengan en el juicio. Deberán glosarse al expediente, salvo que por su volumen, formato u otras características resultare dificultoso o inconveniente, en cuyo caso se conservarán

ordenadamente en la secretaría. Sólo serán entregadas a la parte interesada, su apoderado o letrado que intervenga en el juicio, con nota de recibo.

Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia de esa circunstancia.

La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben conservarse las copias glosadas al expediente o reservadas en la secretaría.

Artículo 118º: Copias de Reproducción Dificultosa.- No será obligatorio acompañar la copia de documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión, o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el juez, a pedido formulado en el mismo escrito. En tal caso el juez arbitrará las medidas necesarias para obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias.

Cuando con una cuenta se acompañaren libros, recibos o comprobantes, bastará que éstos se presenten numerados y se depositen en la secretaría para que la parte o partes interesadas puedan consultarlos.

Artículo 119º: Expedientes Administrativos.- En el caso de acompañarse expedientes administrativos, deberá ordenarse su agregación sin el requisito exigido en el Artículo 117º.

Artículo 120º: Documentos en Idioma Extranjero.- Cuando se presentaren documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción realizada por traductor público.

Artículo 121º: Cargo. - El cargo puesto al pie de los escritos será autorizado por el encargado de mesa de entradas.

El órgano que ejerza la superintendencia podrá disponer que la fecha y hora de presentación de los escritos se registre con fechador mecánico. En este caso, el cargo quedará integrado con la firma del encargado de mesa de entradas, a continuación de la constancia del fechador.

El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo, sólo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las dos primeras horas del despacho.

CAPITULO III

Audiencias

Artículo 122º: Reglas Generales.- Las audiencias, salvo disposición en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas:

1º) Serán públicas, bajo pena de nulidad, pero el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que total o parcialmente, se realicen a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral, el orden público, la seguridad o el derecho a la intimidad. La resolución, que será fundada, se hará constar en el acta. Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir el acceso al público.

2º) Serán señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo que razones especiales que exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución.

Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia se fijará, en el acto, la fecha de su reanudación.

3º) Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra.

4º) Empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta minutos, transcurridos los cuales podrán retirarse dejando constancia en el libro de asistencia.

5º) El secretario levantará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo expresado por las partes.

El acta será firmada por el secretario y las partes, salvo cuando alguna de ellas no hubiera querido o podido firmar; en este caso deberá consignarse esa circunstancia.

El juez firmará el acta cuando hubiera presidido la audiencia.

6º) Las audiencias de prueba serán documentadas por el Tribunal. Si éste así lo decidiere, la documentación se efectuará por medio de fonograbación. Esta se realizará en doble ejemplar, uno de los cuales se certificará y conservará adecuadamente hasta que la sentencia quede firme; el otro ejemplar quedará a disposición de las partes para su consulta. Las partes que aporten su propio material tendrán derecho a constancias similares en la forma y condiciones de seguridad que establezca el órgano de superintendencia. Estas constancias carecerán de fuerza probatoria. Los tribunales de alzada, en los casos de considerarlo necesario para la resolución de los recursos sometidos a su decisión podrán requerir la transcripción y presentación de la fonograbación, dentro del plazo que fijen al efecto a la parte que propuso el medio de prueba de que se trate o a la que el propio tribunal decida, si la prueba fuere común.

7º) En las condiciones establecidas en el inciso anterior, el tribunal podrá decidir la documentación de las audiencias de prueba por cualquier otro medio técnico.

CAPITULO IV

Expedientes

Artículo 123º: Préstamo.- Los expedientes únicamente podrán ser retirados de la secretaría, bajo la responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos o escribanos, en los casos siguientes:

1º) Para alegar de bien probado, en el juicio ordinario.

2º) Para practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de contabilidad; mensura y deslinde; división de bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas.

3º) Cuando el juez lo dispusiere por resolución fundada.

En los casos previstos en los dos últimos incisos, el juez fijará el plazo dentro del cual deberán ser devueltos.

Artículo 124º: Devolución.- Si vencido el plazo no se devolviese el expediente, quien lo retiró será pasible de una multa de medio jurista por cada día de retardo, salvo que manifestase haberlo perdido, en cuyo caso además se aplicará lo dispuesto en el Artículo 126º, si correspondiere. El secretario deberá intimar su inmediata devolución a quien lo retenga, y si ésta no se cumpliere, el juez mandará secuestrar el expediente con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de remitir los antecedentes a la justicia penal.

Artículo 125º: Procedimiento de Reconstrucción.- Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstrucción, la que se efectuará en la siguiente forma:

1º) El nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstrucción.

2º) El juez intimará a la parte actora, o iniciadora de las actuaciones, en su caso, para que dentro del plazo de cinco días presente las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder y correspondieren a actuaciones cumplidas en el expediente perdido. De ellas se dará traslado a la otra u otras partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad y presenten, a su vez, las que tuvieren en su poder. En este último supuesto también se dará traslado a las demás partes por igual plazo.

3º) El secretario agregará copia de todas las resoluciones correspondientes al expediente extraviado que obren en los libros del juzgado o tribunal, y recabará copias de los actos y diligencias que pudieren obtenerse de las oficinas o archivos públicos.

4º) Las copias que se presentaren u obtuvieren serán agregadas al expediente por orden cronológico.

5º) El juez podrá ordenar, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considerare necesarias. Cumplidos los trámites enunciados dictará resolución teniendo por reconstruido el expediente.

Artículo 126º: Sanciones.- Si se comprobare que la pérdida del expediente fuere imputable a alguna de las partes o a un profesional, éstos serán pasibles de una multa entre uno y cien juristas, sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal.

CAPITULO V

Oficios y Exhortos

Artículo 127º: Oficios Dirigidos a Jueces y Otras Autoridades. - Toda comunicación dirigida a jueces provinciales o nacionales se hará mediante oficio, salvo lo que establecieron los convenios sobre comunicaciones entre magistrados.

Podrán entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos urgentes, podrán expedirse o anticiparse telegráficamente o por el medio electrónico que establezcan las leyes.

Se dejará copia fiel en el expediente de todo oficio que se libre.

Los jueces podrán dirigirse directamente por oficio a cualquier autoridad u oficina de la provincia, dentro o fuera del territorio de su competencia, las que practicarán los actos y evacuarán los informes que se les soliciten en el plazo que se establezcan en la comunicación.

Artículo 128º: Comunicaciones Dirigidas a Autoridades Judiciales Extranjeras o Provenientes de Éstas.- Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhorto.

Se dará cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulte que han sido dispuestas por tribunales competentes según las reglas argentinas de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte principios de orden público del derecho argentino. En su

caso, se aplicarán los demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así como la reglamentación de superintendencia.

CAPITULO VI

Notificaciones

Artículo 129º: Principio General.- Salvo los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes. Si uno de ellos fuere feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente día hábil.

No se considerará cumplida tal notificación:

1º) Si el expediente no se encontrare en el tribunal y se hiciere constar esta circunstancia en el libro de asistencia que deberá llevarse a ese efecto.

2º) Si hallándose en él no se exhibiere a quien lo solicita y se hiciere constar tal circunstancia en el libro de asistencia por las personas indicadas en el artículo siguiente, que deberá llevarse a ese efecto.

Incurrirá en falta grave el secretario que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado.

Artículo 130º: Notificación Tácita.- El retiro del expediente, conforme al Artículo 123º, importará la notificación de todas las resoluciones.

El retiro de las copias de escritos por la parte, o su apoderado, o su letrado o persona autorizada, implica notificación personal del traslado que respecto del contenido de aquellos se hubiere conferido.

Artículo 131º: Notificación Personal o Por Cédula.- Sólo serán notificadas personalmente o por cédula las siguientes resoluciones:

1º) La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvenición y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones.

2º) La que dispone el traslado de las excepciones y la que las resuelva.

3º) La que ordena la apertura a prueba y designa audiencia preliminar conforme al Artículo 345º.

4º) La que declare la cuestión de puro derecho, salvo que ello ocurra en la audiencia preliminar.

5º) Las que se dicten entre el llamamiento para la sentencia y ésta.

6º) Las que ordenan intimaciones o apercibimientos no establecidos directamente por la ley, hacen saber medidas cautelares o su modificación o levantamiento, disponen la reanudación de plazos suspendidos por tiempo indeterminado, o aplican correcciones disciplinarias.

7º) La providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando no haya habido notificación de la resolución de alzada.

8º) La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los tribunales, o haya estado paralizado o fuera de secretaría mas de tres meses.

9º) Las que disponen vista de liquidaciones o rendiciones de cuentas.

10º) La que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería.

11º) La que dispone la citación de personas extrañas al proceso.

12º) Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad que la ley señala para su cumplimiento.

13º) Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales y sus aclaratorias, con excepción de las que resuelvan caducidad de la prueba por negligencia.

14º) La providencia que deniega o concede los recursos de apelación y los recursos extraordinarios.

15º) La providencia que hace saber al juez o tribunal que va a conocer en caso de recusación o excusación o admisión de las excepciones de incompetencia.

16º) La que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia.

17º) La que dispone el traslado de la prescripción en los supuestos del Artículo 331º, párrafos segundo y tercero.

18º) Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley o determine el tribunal excepcionalmente, por resolución fundada.

No se notificarán mediante cédula las decisiones dictadas en la audiencia preliminar a quienes se hallaren presentes o debieron encontrarse en ella.

Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho. Deberán devolverlo dentro del tercer día, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar.

Artículo 132º: Medios de Notificación.- En los casos en que este Código u otras leyes establezcan la notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios:

- 1º) Acta notarial.
- 2º) Telegrama con copia certificada y aviso de entrega.
- 3º) Carta documento con aviso de entrega.
- 4º) Medios electrónicos que establezcan leyes especiales.

La notificación de los traslados de la demanda, reconvencción, citación de personas extrañas al juicio, la sentencia definitiva y todas aquellas que deban practicarse con entrega de copias, se efectuarán por cédula o acta notarial, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del Superior Tribunal de Justicia.

Se tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido en la carta documento, telegrama o medios electrónicos.

La elección del medio de notificación se realizará por los letrados, sin necesidad de manifestación alguna en las actuaciones.

Los gastos que arrojen las notificaciones integrarán la condena en costas.

Ante el fracaso de la diligencia de notificación no será necesario la reiteración de la solicitud del libramiento de una nueva, la que incluso podrá ser intentada por otra vía.

Artículo 133º: Contenido y Firma de la Cédula.- La cédula y los demás medios previstos en el artículo precedente contendrán:

- 1º) Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste.
- 2º) Juicio en que se practica.
- 3º) Juzgado y secretaría en que tramita el juicio.
- 4º) Transcripción de la parte pertinente de la resolución.
- 5º) Objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta.

En caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la pieza deberá contener detalle preciso de aquéllas.

El documento mediante el cual se notifique será suscripto por el letrado patrocinante o el procurador de la parte que tenga interés en la notificación, o por el síndico, tutor o curador "ad litem", notario o secretario en su caso, quienes deberán aclarar su firma con el sello correspondiente.

La presentación del documento a que se refiere esta norma en la secretaría del tribunal, oficina de correos o el requerimiento al notario, importará la notificación de la parte patrocinada o representada.

Deberán ser firmados por el secretario los instrumentos que notifiquen medidas cautelares o entrega de bienes y aquellos en que no intervenga letrado, síndico, tutor o curador ad litem, salvo notificación notarial.

El juez podrá ordenar que el secretario suscriba los instrumentos de notificación cuando fuere conveniente por razones de urgencia o por el objeto de la providencia.

Artículo 134º: Diligenciamiento.- Las cédulas se entregarán al empleado comisionado para efectuar la notificación o se enviarán directamente a la oficina de notificaciones, dentro de las veinticuatro horas, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación de superintendencia.

La demora en la agregación de las cédulas se considerará falta grave del jefe de despacho.

Cuando la diligencia deba cumplirse fuera de la ciudad asiento del tribunal, una vez selladas, se devolverán en el acto y previa constancia en el expediente, al letrado o apoderado.

Artículo 135º: Copias de Contenido Reservado.- En los juicios relativos al estado y capacidad de las personas, cuando deba practicarse la notificación en el domicilio, las copias de los escritos de demanda, reconvencción y contestación de ambas, así como las de otros escritos cuyo contenido pudiere afectar el decoro de quien ha de recibirlas, serán entregadas bajo sobre cerrado. Igual requisito se observará respecto de las copias de los documentos agregados a dichos escritos.

El sobre será cerrado por personal de la oficina, con constancia de su contenido, el que deberá ajustarse, en cuanto al detalle preciso de copias, de escritos o documentos acompañados, a lo dispuesto en el Artículo 133º.

Artículo. 136º: Entrega de la Cédula o Acta Notarial al Interesado.- Si la notificación se hiciera por cédula o acta notarial, el funcionario o empleado encargado de practicarla dejará al interesado copia del instrumento haciendo constar, con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia,

suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiese firmar, de lo cual se dejará constancia.

Artículo 137º: Entrega del Instrumento a Persona Distinta.- Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiese entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.

Artículo 138º: Forma de la Notificación Personal.- La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el empleado a cargo de mesa de entradas.

En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniera en el proceso como apoderado, estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el Artículo 131º.

Si no lo hicieran, previo requerimiento que les formulará el empleado a cargo de mesa de entradas, o si el interesado no supiere o no pudiese firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del secretario.

Artículo 139º: Régimen de la Notificación por Telegrama o Carta Documento.- Cuando se notifique mediante telegrama o carta documento certificada con aviso de recepción, la fecha de notificación será la constancia de la entrega al destinatario.

Quien suscriba la notificación deberá agregar a las actuaciones copia de la pieza impuesta y la constancia de entrega.

Artículo 140º: Notificación por Edictos.- Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorare. En este último caso deberá expresarse bajo juramento, que se han realizado sin éxito gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar.

Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio o que pudo conocerlo empleando la debida diligencia, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad, y será condenada a pagar una multa de uno a cien juristas.

Artículo 141º: Publicación de los Edictos.- En los supuestos previstos por el artículo anterior la publicación de los edictos se hará en el Boletín Oficial y en un periódico del lugar del último domicilio del citado, si fuere conocido o, en su defecto, del lugar del juicio, y se acreditará mediante la agregación al expediente de un ejemplar de aquellos y del recibo del pago efectuado. A falta de periódicos en los lugares precedentemente mencionados, la publicación se hará en la localidad más próxima que los tuviera, y el edicto se fijará, además en la tablilla del juzgado y en los sitios que aseguren su mayor difusión. El Superior Tribunal determinará los requisitos que deberán llenar los periódicos en que se publicarán edictos.

Con excepción del proceso sucesorio, cuando los gastos que demandare la publicación fueren desproporcionados con la cuantía del juicio, se prescindirá de los edictos; la notificación se practicará en la tablilla del juzgado.

Artículo 142º: Forma de los Edictos.- Los edictos contendrán, en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción sumaria de la resolución.

El número de publicaciones será el que en cada caso determine este Código.

La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última publicación.

El Superior Tribunal de Justicia podrá disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de los edictos.

El Poder Ejecutivo podrá establecer que, en el Boletín Oficial, los edictos a los que corresponda un mismo texto se publiquen en extracto, agrupados por juzgados y secretarías, encabezados por una fórmula común.

Artículo 143º: Notificación por Radiodifusión o Televisión.- En todos los casos en que este Código autoriza la publicación de edictos, a pedido del interesado, el juez podrá ordenar que aquellos se anuncien por radiodifusión o televisión.

Las transmisiones se harán en el modo y por el medio que determine la reglamentación de superintendencia. Su número coincidirá con el de las publicaciones que este Código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acreditará agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora o de televisión, en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió.

La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica o televisiva.

Respecto a los gastos que irrogare esta forma de notificación, regirá lo dispuesto en el anteuúltimo párrafo del Artículo 132º.

Artículo 144º: Nulidad de la Notificación.- Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores, siempre que la irregularidad fuere grave e impidiere al interesado cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica. Cuando del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.

El pedido de nulidad tramitará por incidente aplicándose las normas de los Artículos 167º y 168º. El funcionario o empleado que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurrirá en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable.

CAPITULO VII

Vistas y Traslados

Artículo 145º: Plazo y Carácter.- El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, será de cinco días. Todo traslado se considerará decretado en calidad de autos, debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite.

Toda resolución dictada previa vista o traslado, será inapelable para la parte que no los haya contestado.

La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria.

Artículo 146º: Juicios de Divorcio y de Nulidad de Matrimonio.- En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio sólo se dará vista a los representantes del ministerio público en los siguientes casos:

1º) Luego de contestada la demanda o la reconvenición.

2º) Una vez vencido el plazo de presentación de los alegatos.

3º) Cuando se plantee alguna cuestión vinculada a la representación que ejercen. En este caso, la vista será conferida por resolución fundada del juez.

CAPITULO VIII

El Tiempo en los Actos Procesales

SECCION 1ª

Tiempo Hábil

Artículo 147º: Días y Horas Hábiles.- Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.

Son días hábiles todos los del año, con las excepciones establecidas por la ley orgánica de tribunales.

Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Superior Tribunal; pero respecto de las diligencias que los jueces, funcionarios o empleados deben practicar fuera de la oficina, son hábiles las que medien entre las siete y las veinte horas.

Para la celebración de audiencias de prueba serán horas hábiles las que median entre las siete y las diecinueve horas.

Artículo 148º: Habilitación Expresa.- A petición de parte o de oficio, los jueces y tribunales deberán habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este Código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo podrá recurrirse por reposición, siempre que aquélla fuera denegatoria.

Incurrirá en falta grave el juez que, reiteradamente, no adoptare las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal.

Artículo 149º: Habilitación Tácita.- La diligencia iniciada en día y hora hábil, podrá llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continuará en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el juez o tribunal.

Cuando por cualquier motivo se declare feriado o inhábil el día en que se hubiere fijado fecha y hora para la realización de actuaciones judiciales, ellas tendrán lugar el día siguiente hábil a la misma hora, sin necesidad de notificación o publicación alguna.

SECCION 2ª

Plazos

Artículo 150º: Carácter.- Los plazos legales o judiciales son perentorios; podrán ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados.

Cuando este Código no fijare expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señalará el juez de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia.

Artículo 151º: Comienzo.- Los plazos comenzarán a correr desde el día o la hora siguiente a la notificación, según fuere el fijado de días o de horas. Si se tratare de plazo común se considerará la última notificación.

No se tendrán en cuenta los días inhábiles.

Artículo 152º: Suspensión y Abreviación Convencional. Declaración de Interrupción y Suspensión.- Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de veinte días sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad de sus mandantes.

Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito.

Los jueces y tribunales deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente.

Artículo 153º: Ampliación.- Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, quedarán automáticamente ampliados los plazos fijados por este Código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien.

Artículo 154º: Extensión a los Funcionarios Públicos.- El ministerio público y los funcionarios que a cualquier título intervinieren en el proceso estarán sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados.

CAPITULO IX

Resoluciones Judiciales

Artículo 155º: Providencias Simples.- Las providencias simples solo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del juez o presidente del tribunal, o del secretario, en su caso.

Artículo 156º: Sentencias Interlocutorias.- Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán contener:

- 1º) Los fundamentos.
- 2º) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
- 3º) El pronunciamiento sobre costas.

Artículo 157º: Sentencias Homologatorias.- Las sentencias que recayesen en los supuestos de los Artículos 293º, 296º y 297º, se dictarán en la forma establecida en los Artículos 155º y 156º, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación.

Artículo 158º: Sentencia Definitiva de Primera Instancia.- La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener:

- 1º) La mención del lugar y fecha.
- 2º) El nombre y apellido de las partes.
- 3º) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio.
- 4º) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior.
- 5º) Los fundamentos y la aplicación de la ley.

Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones.

6º) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvenición, en su caso, en todo o en parte.

La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.

7º) El plazo que se otorgase para su cumplimiento si fuere susceptible de ejecución.

8º) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia en los términos del Artículo 31º, inciso 6º.

9º) La firma del juez.

Artículo 159º: Sentencia Definitiva de Segunda o Ulterior Instancia.- La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia deberá contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo anterior y se ajustará a lo dispuesto en los Artículos 264º y 266º, según el caso.

Las sentencias de cualquier instancia podrán ser dadas a publicidad salvo que, por la naturaleza del juicio, razones de decoro aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará. Si afectare la intimidad de las partes o de terceros, los nombres de éstos serán eliminados de las copias para la publicidad.

Artículo 160º: Monto de la Condena al Pago de Frutos, Intereses, Daños y Perjuicios.- Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación.

Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determinará en proceso sumarísimo.

La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.

Artículo 161º: Actuación del Juez Posterior a la Sentencia.- Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla.

Le corresponderá, sin embargo:

1º) Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el Artículo 33º, inciso 6º). Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia.

2º) Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

3º) Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes.

4º) Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios.

5º) Proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado.

6º) Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el Artículo 242º.

7º) Ejecutar oportunamente la sentencia.

Artículo 162º: Retardo de Justicia.- Los jueces y tribunales que, por recargo de tareas u otras razones atendibles, no pudieren pronunciar las sentencias definitivas dentro de los plazos fijados por este Código y otro tanto más, deberán hacerlo saber al Superior Tribunal, con anticipación de diez días al del vencimiento de aquellos. El Superior, si considerare admisible la causa invocada, señalará el plazo en que la sentencia debe dictarse, por el mismo juez o tribunal o por otro, cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren.

El juez o tribunal que no remitiere oportunamente la comunicación a que se refiere el párrafo anterior y no sentenciare dentro del plazo legal más otro tanto, o que habiendo cursado la comunicación no pronunciare el fallo dentro del plazo que se le hubiese fijado, perderá automáticamente la jurisdicción para entender en el juicio, y deberá hacerlo saber al Superior Tribunal para que éste determine el juez o tribunal que deba intervenir.

Será nula la sentencia que se dicte con posterioridad.

En los tribunales colegiados, el juez que hubiere incurrido en pérdida de jurisdicción deberá pasar de inmediato el proceso a quien le sigue en orden de sorteo, en cuyo caso aquellos se integrarán de conformidad con lo dispuesto por la ley orgánica del Poder Judicial.

Las disposiciones de este artículo sólo afectan la jurisdicción del juez titular y no a la que se ejerza interinamente por sustitución, en caso de vacancia o licencia del titular.

Al hacerse cargo del juzgado, luego de un período de vacancia, aquél podrá solicitar una ampliación general de los plazos, proporcionada al número de causas pendientes.

Artículo 163º: Causal de Mal Desempeño.- La pérdida de jurisdicción en que incurrieren los jueces de primera instancia o de cámara, conforme a lo establecido en el artículo anterior, será causal de acusación ante el jurado en los términos de la ley de enjuiciamiento para magistrados si se produjere tres veces dentro del año calendario.

CAPITULO X

Nulidad de los Actos Procesales

Artículo 164º: Trascendencia de la Nulidad.- Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción.

Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.

No se podrá declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado.

Artículo 165º: Subsanación.- La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuera tácitamente, por la parte interesada en la declaración.

Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto.

Artículo 166º: Inadmisibilidad.- La parte que hubiere dado lugar a la nulidad, no podrá pedir la invalidez del acto realizado.

Artículo 167º: Iniciativa para la Declaración. Requisitos.- La nulidad podrá ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido.

Quien promoviere el incidente deberá expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no haya podido oponer.

Si la nulidad fuere manifiesta no se requerirá sustanciación.

Artículo 168º: Rechazo "In Limine".- Se desestimarán sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente.

La resolución será apelable con efecto devolutivo.

Artículo 169º: Efectos.- La nulidad de un acto no importará la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto.

La nulidad de una parte del acto no afectará a las demás partes que sean independientes de aquélla.

TITULO IV

Contingencias Generales

CAPITULO I

Incidentes

Artículo 170º: Principio General.- Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se hallare sometida a un procedimiento especial, tramitará en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo.

Artículo 171º: Suspensión del Proceso Principal.- Los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviera el juez cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución será irrecurrible.

Artículo 172º: Formación del Incidente.- El incidente se formará con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indicaren las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hará el secretario o jefe de despacho.

Artículo 173º: Requisitos.- El escrito en que se plantee el incidente deberá ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba.

Artículo 174º: Rechazo "In Limine".- Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el juez deberá rechazarlo sin más trámite. La resolución será apelable en efecto devolutivo.

Artículo 175º: Traslado y Contestación.- Si el juez resolviera admitir el incidente, dará traslado por cinco días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba.

El traslado se notificará personalmente o por cédula dentro del tercer día de dictada la providencia que lo ordenare.

Artículo 176º: Recepción de la Prueba.- Si hubiere de producirse prueba que requiera audiencia, el juez la señalará para una fecha que no podrá exceder de diez días desde que se hubiere contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; citará a los testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adoptará las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo será tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare.

Artículo 177º: Prórroga o Suspensión de la Audiencia.- La audiencia podrá postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez días, cuando hubiere imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella.

Artículo 178º: Prueba Pericial y Testimonial.- La prueba pericial, cuando procediere, se llevará a cabo por un solo perito designado de oficio. No se admitirá la intervención de consultores técnicos.

No podrá proponerse más de cinco testigos por cada parte y las declaraciones no podrán recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquellos.

Artículo 179º: Cuestiones Accesorias.- Las cuestiones que surgieren en el curso de los incidentes y que no tuvieran entidad suficiente para constituir otro autónomo, se decidirán en la interlocutoria que los resuelva.

Artículo 180º: Resolución. - Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el juez, sin más trámite, dictará resolución.

Artículo 181º: Tramitación Conjunta.- Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deberán ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestimarán sin más trámite los que se entablen con posterioridad.

Artículo 182º: Incidentes en Procesos Sumarísimos.- En los procesos sumarísimos regirán los plazos que fije el juez, quien asimismo adoptará de oficio las medidas adecuadas para que el incidente no desnaturalice el procedimiento principal.

CAPITULO II

Acumulación de Procesos

Artículo 183º: Procedencia.- Procederá la acumulación de procesos cuando hubiere sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto en el Artículo 85º y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros.

Se requerirá, además:

1º) Que los procesos se encuentren en la misma instancia.

2º) Que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. A los efectos de este inciso no se considerarán distintas las materias civil y comercial.

3º) Que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Sin embargo, podrán acumularse dos o más procesos de conocimiento, o dos o más procesos de ejecución sujetos a distintos trámites, cuando su acumulación resultare indispensable en razón de concurrir la circunstancia prevista en la última parte del primer párrafo. En tal caso, el juez determinará el procedimiento que corresponde imprimir al juicio acumulado.

4º) Que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta, sin producir demora perjudicial o injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados.

Artículo 184º: Principio de Prevención.- La acumulación se hará sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Si los jueces intervinientes en los procesos tuvieran distinta competencia por razón del monto, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía.

Artículo 185º: Modo y Oportunidad de Disponerse.- La acumulación se ordenará de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda o, posteriormente, por incidente que podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el Artículo 183 inciso 4º.

Artículo 186º: Resolución del Incidente.- El incidente podrá plantearse ante el juez que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente.

En el primer caso, el juez conferirá traslado a los otros litigantes, y si considerare fundada la petición solicitará el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dictará sin más trámite resolución, contra la cual no habrá recurso y la hará conocer a los juzgados donde tramitaban los procesos.

En el segundo caso, dará traslado a los otros litigantes, y si considerare procedente la acumulación remitirá el expediente al otro juez, o bien le pedirá la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su juzgado, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución será inapelable.

Si se declarase improcedente el pedido, la resolución será apelable.

Artículo 187º: Conflicto de Acumulación.- Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el juez requerido no accediere, deberá elevar el expediente a la cámara que constituya su alzada; ésta, sin sustanciación alguna, resolverá en definitiva si la acumulación es procedente.

Artículo 188º: Suspensión de Trámites.- El curso de todos los procesos se suspenderá, si tramitasen ante un mismo juez, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante jueces distintos, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez respectivo. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio.

Artículo 189º: Sentencia Única.- Los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite resultare dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, podrá el juez disponer, sin recurso, que cada proceso se sustancie por separado, dictando una sola sentencia.

CAPITULO III

Medidas Cautelares

SECCION 1ª

Normas Generales

Artículo 190º: Oportunidad y Presupuesto.- Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente.

El escrito deberá expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida.

Artículo 191º: Medida Decretada por Juez Incompetente.- Los jueces deberán abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia.

Sin embargo, la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia.

El juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente.

Artículo 192º: Trámites Previos.- La información sumaria para obtener medidas precautorias podrá ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los testigos y la declaración de éstos, ajustada a los Artículos 423º, primera parte, 424º y 426º, y firmada por ellos.

Los testigos deberán ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia.

Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admitirán sin más trámite, pudiendo el juez encomendarlas al secretario.

Las actuaciones permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitarán por expediente separado, al cual se agregarán, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal.

Artículo 193º: Cumplimiento y Recursos.- Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento.

Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogare la demora.

La providencia que admitiere o denegare una medida cautelar será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa.

El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concederá en efecto devolutivo.

Artículo 194º: Contracautela.- La medida precautoria sólo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en los supuestos previstos en el primer párrafo del Artículo 203º.

En los casos de los Artículos 205º, incisos 2º) y 3º) y 207º, incisos 2º) y 3º), la caución juratoria se entenderá prestada en el pedido de medida cautelar.

El juez graduará la calidad y monto de la caución de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso.

Podrá ofrecerse la garantía de instituciones bancarias o de personas de acreditada responsabilidad económica.

Artículo 195º: Exención de la Contracautela.- No se exigirá caución si quien obtuvo la medida:

1º) Fuere la Nación, una provincia, una de sus reparticiones, una municipalidad o persona que justifique ser reconocidamente abonada.

2º) Actuare con beneficio de litigar sin gastos.

Artículo 196º: Mejora de Contracautela.- En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se hubiere hecho efectiva una medida cautelar podrá pedir que se mejore la caución probando sumariamente que es insuficiente. El juez resolverá previo traslado a la otra parte.

Artículo 197º: Carácter Provisional.- Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento.

Artículo 198º: Modificación.- El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada.

El deudor podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor. Podrá, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere.

La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco días, que el juez podrá abreviar según las circunstancias.

Artículo 199º: Facultades del Juez.- El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger.

Artículo 200º: Peligro de Pérdida o Desvalorización.- Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes afectados o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fijará según la urgencia del caso, el juez podrá ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas.

Artículo 201º: Establecimientos Industriales o Comerciales.- Cuando la medida se trabare sobre bienes muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el juez podrá autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización.

Artículo 202º: Caducidad.- Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los diez días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso; una vez iniciado este, podrá ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia.

Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco años de la fecha de su anotación en el registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió en el proceso.

Artículo 203º: Responsabilidad.- Salvo en el caso de los Artículos 204º inciso 1º) y 207º, cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo hubiese solicitado.

La determinación del monto se sustanciará por el trámite de los incidentes o por juicio sumarísimo, según que las circunstancias hicieren preferible uno u otro procedimiento a criterio del juez, cuya decisión sobre este punto será irrecurrible.

SECCION 2ª

Embargo Preventivo

Artículo 204º: Procedencia.- Podrá pedir embargo preventivo el acreedor de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes:

1º) Que el deudor no tenga domicilio en la República.

2º) Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor, certificada la firma por escribano público o abonada por información sumaria de dos testigos.

3º) Que fundándose la acción en un contrato bilateral, se justifique su existencia en la misma forma del inciso anterior, debiendo en este caso probarse además sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor, salvo que éste ofreciese cumplirlo, o que su obligación fuese a plazo.

4º) Que la deuda esté justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o resulte de boleto de corredor de acuerdo con sus libros, en los casos en que éstos puedan servir de prueba, o surja de la certificación realizada por contador público en el supuesto de factura conformada.

5º) Que estando la deuda sujeta a condición o plazo, el actor acredite sumariamente que su deudor trata de enajenar u ocultar sus bienes, o transportarlos comprometiendo la garantía, o siempre que justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del deudor después de contraída la obligación.

Artículo 205º: Otros Casos.- Podrán igualmente pedir el embargo preventivo:

1º) El coheredero, el condómino o el socio, sobre los bienes de la herencia, del condominio, o de la sociedad, si acreditaren la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora.

2º) El propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de arrendamiento, respecto de las cosas afectadas a los privilegios que les reconoce la ley. Deberá acompañar a su petición el título de propiedad o el contrato de locación, o intimar al locatario para que formule previamente las manifestaciones necesarias.

3º) La persona a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles, siempre que el crédito se justificare en la forma establecida en el Artículo 204º inciso 2º.

4º) La persona que haya de demandar por acción reivindicatoria, petición de herencia, nulidad de testamento o simulación, respecto de la cosa demandada, mientras dure el juicio, y siempre que se presentaren documentos que hagan verosímil la pretensión deducida.

Artículo 206º: Demanda por Escrituración.- Cuando se demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa, si el derecho fuese verosímil el adquirente podrá solicitar el embargo del bien objeto de aquél.

Artículo 207º: Situaciones Derivadas del Proceso.- Además de los supuestos contemplados en los artículos anteriores, durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo:

1º) En el caso del Artículo 60º.

2º) Siempre que por confesión expresa o ficta, derivada de la incomparecencia del absolvente a la audiencia de posiciones, o en el caso del Artículo 341º, inciso 1º), resultare verosímil el derecho alegado.

3º) Si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida.

Artículo 208º: Forma de la Traba.- En los casos en que deba efectuarse el embargo, se tramará en la forma prescripta para el juicio ejecutivo. Se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas.

Mientras no se dispusiere el secuestro, la designación de tercero depositario o la administración judicial de lo embargado, el deudor podrá continuar en el uso normal de la cosa.

Artículo 209º: Mandamiento.- En el mandamiento se incluirá siempre la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se dejará constancia de la habilitación de día y hora y del lugar.

Contendrá, asimismo, la prevención de que el embargado deberá abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiese causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren.

Artículo 210º: Suspensión.- Los funcionarios encargados de la ejecución del embargo sólo podrán suspenderlo cuando el deudor entregue la suma expresada en el mandamiento.

Artículo 211º: Depósito.- Si los bienes embargados fuesen muebles, serán depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el embargado y fuesen susceptibles de embargo, aquél será constituido en depositario de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible.

El depositario de los objetos embargados a la orden judicial deberá presentarlos dentro del día siguiente a la intimación judicial. No podrá eludir la entrega invocando el derecho de retención.

Si no lo hiciere, el juez remitirá los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del depositario hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar.

Artículo 212º: Prioridad del Primer Embargante.- El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de concurso.

Artículo 213º: Embargos Posteriores.- Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.

Artículo 214º: Bienes Inembargables.- No se trabará nunca embargo:

1º) En el lecho cotidiano del deudor, de su cónyuge e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.

2º) Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales.

3º) En los demás bienes exceptuados de embargo por ley.

Ningún otro bien quedará exceptuado.

Artículo 215º: Levantamiento de Oficio y en Todo Tiempo.- El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo anterior podrá ser levantado, de oficio o a pedido del deudor o de su cónyuge o hijos, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida.

SECCION 3ª

Secuestro

Artículo 216º: Procedencia.- Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegure por sí solo el derecho invocado por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procederá, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva.

El juez designará depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga; fijará su remuneración y ordenará el inventario, si fuese indispensable.

SECCION 4ª

Intervención Judicial

Artículo 217º: Ámbito.- Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes sustanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, podrán disponerse las que se regulan en los artículos siguientes.

Artículo 218º: Interventor Recaudador.- A pedido de acreedor y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, podrá designarse un interventor recaudador, si aquélla debiere recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limitará exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración.

El juez determinará el monto de la recaudación, que no podrá exceder del cincuenta por ciento de las entradas brutas; su importe deberá ser depositado a la orden del juzgado dentro del plazo que éste determine.

Artículo 219º: Interventor Informante.- De oficio o a petición de parte, el juez podrá designar un interventor informante para que dé noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe.

Artículo 220º: Disposiciones Comunes a Toda Clase de Intervención.- Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación:

1º) El juez apreciará su procedencia con criterio restrictivo; la resolución será dictada en la forma prescripta en el Artículo 156º.

2º) La designación recaerá en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrá; será, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida.

3º) La providencia que designe al interventor determinará la misión que debe cumplir y el plazo de duración, que sólo podrá prorrogarse por resolución fundada.

4º) La contracautela se fijará teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas.

5º) El interventor sólo podrá retener fondos o disponer de ellos con el objeto de pagar los gastos normales de la administración, entendiéndose por tales los que habitualmente se invierten en el bien, sociedad o asociación intervenida.

6º) Los gastos extraordinarios serán autorizados por el juez previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el interventor deberá informar al juzgado dentro del tercer día de realizados.

El nombramiento de auxiliares requerirá siempre autorización previa del juzgado.

Artículo 221º: Deberes del Interventor. Remoción.- El interventor deberá:

1º) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el juez.

2º) Presentar los informes periódicos que disponga el juzgado y uno final, al concluir su cometido.

3º) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirles daño o menoscabo.

El interventor que no cumpliere eficazmente su cometido podrá ser removido de oficio; si mediare pedido de parte, se dará traslado a las demás y al interventor.

Artículo 222º: Honorarios.- El interventor sólo percibirá los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del juez justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijarán éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios.

Para la regulación del honorario definitivo se atenderá a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso.

Carece de derecho a cobrar honorarios el interventor removido del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, aquel derecho a honorarios o la proporción que corresponda será determinado por el juez.

El pacto de honorarios celebrado por el interventor será nulo e importará ejercicio abusivo del cargo.

SECCION 5ª

Inhibición General de Bienes y Anotación de Litis

Artículo 223º: Inhibición General de Bienes.- En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante.

El que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor; así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes.

La inhibición sólo surtirá efecto desde la fecha de su anotación salvo para los casos en que el dominio se hubiere transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general.

No concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad.

Artículo 224º: Anotación de Litis.- Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro correspondiente y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del juicio.

Si la demanda hubiere sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida.

SECCION 6ª

Prohibición de Innovar, Prohibición de Contratar

Artículo 225º: Prohibición de Innovar.- Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio, siempre que:

1º) El derecho fuere verosímil.

2º) Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible.

3º) La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.

Artículo 226º: Prohibición de Contratar.- Cuando por ley o contrato o para asegurar la ejecución forzada de los bienes objeto del juicio, procediere la prohibición de contratar sobre determinados bienes, el juez ordenará la medida. Individualizará lo que sea objeto de la prohibición, disponiendo se inscriba en los registros correspondientes y se notifique personalmente o por cédula a los interesados y a los terceros que mencione el solicitante.

La medida quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda dentro del plazo del Artículo 202º y en cualquier momento en que se demuestre su improcedencia.

SECCION 7ª

Medidas Cautelares Genéricas y Normas Subsidiarias

Artículo 227º: Medidas Cautelares Genéricas.- Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

Artículo 228º: Normas Subsidiarias.- Lo dispuesto en este capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente.

SECCION 8ª

Protección de Personas

Artículo 229 Procedencia. - Podrá decretarse la guarda:

1º) De menor de edad que intente contraer matrimonio, entrar en comunidad religiosa o ejercer determinada actividad contra la voluntad de sus padres o tutores.

2º) De menores o incapaces que sean maltratados por sus padres, tutores, curadores o guardadores, o inducidos por ellos a actos ilícitos o deshonestos o expuestos a graves riesgos físicos o morales.

3º) De menores o incapaces abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estén impedidos de ejercer sus funciones.

4º) De los incapaces que estén en pleito con sus representantes legales.

Artículo 230º: Juez Competente.- La guarda será decretada por el juez del domicilio de la persona que haya de ser amparada, con intervención del defensor de menores e incapaces.

Cuando existiere urgencia o circunstancias graves, se resolverá provisionalmente sin más trámite.

Artículo 231º: Procedimiento.- En los casos previstos en el Artículo 229º incisos 2º, 3º y 4º, la petición podrá ser deducida por cualquier persona, y formulada verbalmente ante el defensor de menores e incapaces, en cuyo caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida en el día al juzgado que corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de violencia familiar.

Artículo 232º: Medidas Complementarias.- Al disponer la medida, el juez ordenará que se entreguen a la persona a favor de quien ha sido ordenada, las ropas, útiles y muebles de su uso y profesión.

Ordenará, asimismo, que se le provea de alimentos por el plazo de treinta días, a cuyo vencimiento quedarán sin efecto si no se iniciare el juicio correspondiente. La suma será fijada prudencialmente por el juez, previa vista a quien deba pagarlos y sin otro trámite.

Artículo 233º: Exclusión o Reintegro al Hogar.- En el supuesto del Artículo 231º del Código Civil el juez podrá disponer, ante pedido fundado de parte y a título de medida cautelar, la exclusión del hogar conyugal de alguno de los cónyuges, o su reintegro al mismo, cuando los motivos fundantes estén sumariamente acreditados y medien razones de urgencia impostergables.

Cuando la exclusión o inclusión se promueva como pretensión de fondo, antes de la promoción de la demanda de separación personal o de divorcio vincular tramitará según las normas del proceso sumarísimo y por incidente cuando la demanda se encontrase iniciada.

CAPITULO IV

Recursos Ordinarios

SECCIÓN 1ª

Recurso de Reposición

Artículo 234º: Procedencia.- El recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el juez o tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio.

Artículo 235º: Plazo y Forma.- El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto.

Si el recurso fuese manifiestamente inadmisibile, el juez o tribunal podrá rechazarlo sin ningún otro trámite.

Artículo 236º: Trámite.- El juez dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarlo dentro del plazo de tres días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia.

La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será resuelta sin sustanciación.

Cuando la resolución dependiere de hechos controvertidos, el juez podrá imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes.

Artículo 237º: Resolución.- La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos, que:

1º) El recurso de reposición hubiere sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable.

2º) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso podrá apelar la parte contraria, si correspondiere.

SECCIÓN 2ª

Recurso de Apelación. Recurso de Nulidad.

Artículo 238º: Procedencia.- El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de:

1º) La resolución que rechaza de oficio la demanda y la que declara la cuestión de puro derecho.

2º) Las providencias cautelares y las que apliquen sanciones procesales.

3º) Las sentencias interlocutorias que deciden las excepciones previas y el incidente de nulidad.

4º) Las resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación.

5º) Las sentencias definitivas.

6º) Las demás resoluciones que expresamente sean declaradas apelables por este Código.

Artículo 239º: Formas y Efectos.- El recurso de apelación será concedido libremente o en relación; y en este último caso, en efecto suspensivo o devolutivo.

El recurso contra la sentencia definitiva en el juicio ordinario será concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. En el caso que la cámara tuviere su asiento en la misma localidad, será fundado en las condiciones y plazos establecidos para el recurso libremente concedido.

En el caso que la cámara tuviere su asiento en distinta localidad los actos procesales de los Artículos 251º, 252º, 253º y 256º se cumplirán ante el tribunal de primera instancia, y los actos procesales de los Artículos 254º, 255º, 260º y siguientes hasta la decisión del recurso ante el tribunal de alzada, al que será remitido el expediente o actuación dentro del plazo de cinco días a contar del vencimiento del plazo para contestar el traslado del Artículo 253º, o desde la contestación del traslado en su caso.

Procederá siempre en efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea en el devolutivo.

Los recursos concedidos en relación lo serán, asimismo, en efecto diferido, cuando la ley así lo disponga.

Artículo 240º: Plazo.- No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar será de cinco días.

Artículo 241º: Forma de Interposición del Recurso.- El recurso de apelación se interpondrá por escrito o verbalmente. En este último caso se hará constar por diligencia que el secretario o el jefe de despacho asentará en el expediente.

El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se mandará devolver el escrito, previa anotación que el secretario o el jefe de despacho pondrá en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso.

Artículo 242º: Apelación en Relación sin Efecto Diferido.- Cuando procediere la apelación en relación sin efecto diferido, el apelante deberá fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde.

Del escrito que presente se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el apelante no presentare memorial, el juez de primera instancia declarará desierto el recurso.

Artículo 243º: Efecto Diferido.- La apelación en efecto diferido se fundará, en el juicio ordinario, en la oportunidad del Artículo 252º, y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia.

En los procesos de ejecución de sentencia si la resolución recurrida fuere posterior a la mencionada en el Artículo 491º, el recurso se fundará en la forma establecida en el párrafo primero del Artículo 242º.

En el proceso ordinario la cámara resolverá con anterioridad a la sentencia definitiva.

Artículo 244º: Apelación Subsidiaria.- Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación.

Artículo 245º: Constitución de Domicilio.- Cuando el tribunal que haya de conocer del recurso tuviere su asiento en distinta localidad, y aquél procediere libremente, en el escrito o diligencia a que se refiere el Artículo 241º el apelante y el apelado, dentro del quinto día de concedido el recurso, deberán constituir domicilio en dicha localidad.

Si el recurso procediere en relación, las partes deberán constituir domicilio en los escritos mencionados en el Artículo 242º.

En ambos casos, la parte que no hubiese cumplido el requisito impuesto por este artículo quedará notificada por ministerio de la ley.

Artículo 246º: Efecto Devolutivo.- Si procediere el recurso en efecto devolutivo, se observarán las siguientes reglas:

1º) Si la sentencia fuere definitiva, se remitirá el expediente a la cámara y quedará en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser presentada por el apelante. La providencia que conceda el recurso señalará las piezas que han de copiarse.

2º) Si la sentencia fuere interlocutoria, el apelante presentará copia de lo que señale del expediente y de lo que el juez estime necesario. Igual derecho asistirá al apelado. Dichas copias y los memoriales serán remitidos a la cámara, salvo que el juez considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original.

3º) Se declarará desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el apelante no presentare las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciera el apelado, se prescindirá de ellas.

Artículo 247º: Objeción Sobre el Modo y Efecto de Concesión del Recurso.- Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso concedido en relación ha debido otorgarse libremente, podrá solicitar, dentro de tres días, que el juez rectifique el error. Igual pedido podrán formular las partes si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Idéntico procedimiento se seguirá si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso no ha sido concedido en el efecto correspondiente.

Estas normas regirán sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 267º y 273º.

Artículo 248º: Remisión del Expediente o Actuación.- En los casos de los Artículos 241º y 246º, el expediente o las actuaciones se remitirán a la cámara dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza separada, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del secretario. En el caso del Artículo 242º dicho plazo se contará desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo para hacerlo.

Si la cámara tuviese su asiento en distinta localidad, la remisión se efectuará por el medio que por acordada disponga el Superior Tribunal de Justicia y dentro del mismo plazo, contado desde la presentación del apelado constituyendo domicilio o contestando el traslado, o desde que venció el plazo para cumplir tales actos.

Artículo 249º: Pago del Impuesto.- La falta de pago del impuesto y sellado de justicia no impedirá en ningún caso la concesión o trámite del recurso.

Artículo 250º: Nulidad.- El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. El tribunal al declararla resolverá también sobre el fondo del litigio.

SECCION 3ª

Procedimiento Ordinario en Segunda Instancia

Artículo 251º: Trámite Previo. Expresión de Agravios.- Cuando el recurso se hubiese concedido respecto de sentencia definitiva dictada en proceso ordinario, en el día en que el expediente llegue a la cámara, el secretario dará cuenta y se ordenará que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notificará a las partes personalmente o por cédula. El apelante deberá expresar agravios dentro del plazo de diez días.

Artículo 252º: Fundamento de las Apelaciones Diferidas, Actualización de las Cuestiones y Pedido de Apertura a Prueba.- Dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes deberán:

1º) Fundar los recursos que se hubiesen concedido en efecto diferido. Si no lo hicieren, quedarán firmes las respectivas resoluciones.

2º) Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear en los términos de los Artículos 363º y 369º in fine. La petición será fundada y resuelta sin sustanciación alguna.

3º) Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos.

4º) Exigir declaración judicial a la parte contraria sobre hechos que no hubiesen sido objeto de esa prueba en la instancia anterior.

5º) Pedir que se abra la causa a prueba cuando:

a) Se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el Artículo 350º o se tratase del caso a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 351º.

b) Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2º de este artículo.

Artículo 253º: Traslado.- De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1º), 3º) y 5º), apartado a) del artículo anterior, se correrá traslado a la parte contraria, quien deberá contestarlo dentro del quinto día.

Artículo 254º: Prueba y Alegatos.- Las pruebas que deban producirse ante la cámara se regirán, en cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia.

Para alegar sobre su mérito, las partes no podrán retirar el expediente. El plazo para presentar el alegato será de seis días.

Artículo 255º: Producción de Prueba.- Los miembros del tribunal asistirán a todos los actos de prueba en los supuestos que la ley establece o cuando así lo hubiere solicitado oportunamente alguna de las partes en los términos del Artículo 31º inciso 1º). En ellos llevará la palabra el presidente. Los demás jueces, con su autorización, podrán preguntar lo que estimaren oportuno.

Artículo 256º: Informe "in Voce".- Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el Artículo 251º, las partes manifestarán si van a informar "in voce". Si no hicieren esa manifestación o no informaren, se resolverá sin dichos informes.

Artículo 257º: Contenido de la Expresión de Agravios. Traslado.- El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito se dará traslado por diez días al apelado.

Artículo 258º: Deserción del Recurso.- Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o no lo hiciera en la forma prescripta en el artículo anterior, se declarará desierto el recurso, señalando en su caso, cuáles son las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas.

Declarada la deserción del recurso la sentencia quedará firme para el recurrente.

Artículo 259º: Falta de Contestación de la Expresión de Agravios.- Si el apelado no contestase el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado en el Artículo 257º, no podrá hacerlo en adelante y la instancia seguirá su curso.

Artículo 260º: Llamamiento de Autos. Sorteo de la Causa.- Con la expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta y, en su caso, sustanciadas y resueltas las cuestiones a que se refieren los Artículos 252º y siguientes, se llamará autos y, consentida esta providencia, el expediente pasará a acuerdo sin más trámite. El orden para el estudio y votación de las causas será determinado por sorteo, el que se realizará al menos dos veces cada mes.

Artículo 261º: Libro de Sorteos.- La secretaría llevará un libro que podrá ser examinado por las partes, sus mandatarios o abogados, en el cual se hará constar el sorteo de las causas, la fecha de remisión de los expedientes a los jueces y la de su devolución.

Artículo 262º: Estudio del Expediente.- Los miembros de la cámara se instruirán cada uno personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia.

Artículo 263º: Acuerdo.- El acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del tribunal y del secretario. La votación se hará en el orden en que los jueces hubiesen sido sorteados. Cada miembro fundará su voto o adherirá al de otro. La sentencia se dictará por mayoría, y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.

Artículo 264º: Sentencia.- El acuerdo se insertará en el expediente, suscripto por los vocales del tribunal y autorizado por el secretario, precediendo a la sentencia que firmarán los vocales. Una copia del acuerdo y sentencia autorizados por el secretario, serán incorporados al libro respectivo.

Podrá pedirse aclaratoria en el plazo de cinco días.

Artículo 265º: Providencias de Trámite.- Las providencias simples serán dictadas por el presidente. Si se pidiere revocatoria, decidirá el tribunal sin lugar a recurso alguno.

Artículo 266: Apelación en Relación.- Si el recurso se hubiese concedido en relación, recibido el expediente con sus memoriales, la cámara, si el expediente tuviere radicación de sala, resolverá inmediatamente. En caso contrario dictará la providencia de autos.

No se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos.

No será necesario proceder en la forma prescrita en el Artículo 263º pudiendo redactarse la sentencia en forma impersonal, sin perjuicio de que el vocal disidente emita su voto por separado. Si existiere acuerdo el tribunal podrá fallar con dos de sus miembros.

Cuando la apelación se concediere en efecto diferido, se procederá en la forma establecida en el Artículo 252º inciso 1º).

Artículo 267º: Examen del Modo de Concesión del Recurso.- Si la apelación se hubiese concedido libremente, debiendo serlo en relación, el tribunal de oficio, o a petición de parte hecha dentro del tercer día, así lo declarará, mandando poner el expediente en secretaría para la presentación de memoriales en los términos del Artículo 242º.

Si el recurso se hubiese concedido en relación, debiendo serlo libremente, la cámara dispondrá el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 252º.

Artículo 268º: Poderes del Tribunal.- El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. No obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.

Artículo 269º: Omisiones de la Sentencia de Primera Instancia.- El tribunal podrá decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios.

Artículo 270º: Costas y Honorarios.- Cuando la sentencia o resolución fuere revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, el tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aunque no hubiesen sido materia de apelación.

SECCION 4ª

Queja por Recurso Denegado

Artículo 271º: Denegación de la Apelación.- Si el juez denegare la apelación, la parte que se considere agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la cámara, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente.

El plazo para interponer la queja será de cinco días, con la ampliación que corresponda por razón de la distancia, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 153º.

Artículo 272º: Trámite. - Son requisitos de admisibilidad de la queja:

1º) Acompañar copia simple suscripta por el letrado del recurrente:

- a) Del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la sustanciación, si ésta hubiese tenido lugar;
- b) De la resolución recurrida;
- c) Del escrito de interposición del recurso y, en su caso, de la del recurso de revocatoria si la apelación hubiese sido interpuesta en forma subsidiaria;
- d) De la providencia que denegó la apelación.

2º) Indicar la fecha en que:

- a) Quedó notificada la resolución recurrida;
- b) Se interpuso la apelación;
- c) Quedó notificada la denegatoria del recurso;
- d) Personería invocada y carácter en que actúa en los autos a los que se refiere la queja.

La cámara podrá requerir copia de otras piezas que considere necesarias y, si fuere indispensable, la remisión del expediente.

Presentada la queja en forma, la cámara decidirá, sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado; en este último caso, dispondrá que se tramite.

Mientras la cámara no conceda la apelación no se suspenderá el curso del proceso.

Artículo 273º: Objeción sobre el Efecto del Recurso.- Las mismas reglas se observarán cuando se cuestionare el efecto con que se hubiese concedido el recurso de apelación.

Artículo 274º: Queja por Denegación del Recurso de Inaplicabilidad de Ley.- Cuando se dedujere queja por denegación del recurso de inaplicabilidad de ley, se observarán las reglas establecidas en los Artículos 271º y 272º pero no será obligatoria la presentación de las copias junto con la interposición de la queja. El tribunal podrá exigir su presentación si lo estimare conveniente.

CAPITULO V

Recursos Extraordinarios

SECCION 1ª

Inaplicabilidad de Ley

Artículo 275º: Admisibilidad.- El recurso de inaplicabilidad de la ley para ante la Sala en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia, sólo será admisible contra la sentencia definitiva de las cámaras de apelaciones que viole o haga errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal establecida de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 283º y 284º a la fecha del fallo recurrido.

Artículo 276º: Concepto de Sentencia Definitiva y Cuestiones Excluidas.- Se entenderá por sentencia definitiva la que, aún recayendo sobre cuestión incidental, terminare el pleito o hiciere imposible su continuación.

Este recurso no será admisible cuando pudiere seguirse otro juicio sobre el mismo objeto.

Artículo 277º: Apoderados.- Los apoderados no estarán obligados a interponer el recurso. Para deducirlo no necesitarán poder especial.

Artículo 278º: Prohibiciones.- No se admitirá la agregación de documentos ni se podrá ofrecer prueba o denunciar hechos nuevos.

Artículo 279º: Plazo. Fundamentación. Depósito.- El recurso se interpondrá dentro de los diez días de notificada la sentencia definitiva, ante la cámara o sala que la pronunció, constituyendo domicilio en Paraná si la cámara no tuviere su asiento en esa ciudad. La parte que no cumpliere con dicho requisito quedará notificada por ministerio de la ley.

En el escrito en que se lo deduzca, se señalará en términos claros y precisos, cuál es la ley o doctrina violada o erróneamente aplicada y en qué consiste la violación o el error, y se expresarán los fundamentos que, a juicio de la parte, demuestren la procedencia del recurso. El incumplimiento de estos requisitos determinará su inadmisibilidad, debiendo el tribunal especificar con precisión cuáles son los que faltan.

El recurrente, cuando el recurso se deduzca respecto de sentencia confirmatoria, acompañará constancia de haber depositado a disposición de la Sala, una cantidad equivalente al diez por ciento del valor del litigio sin computar intereses ni costas, que no podrá ser inferior a nueve juristas ni superior a cuarenta y cinco juristas.

La actualización del valor jurista no será aplicable a los recursos que, a la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial, hubieran sido ya interpuestos ante el tribunal que dictó la sentencia, ni a las quejas por denegatoria a esa fecha ya presentadas ante la sala del Superior Tribunal.

Si el valor del pleito fuere indeterminado o insusceptible de apreciación pecuniaria, el depósito será por el monto de seis juristas.

No tendrán obligación de depositar quienes estén autorizados a litigar sin gastos, los representantes del Ministerio Pupilar y los que intervengan por nombramiento de oficio o desempeño de cargo público.

La cantidad depositada se devolverá al recurrente si el recurso le fuera favorable. En caso contrario, la perderá a favor de la otra parte. En ambos supuestos será destinada a la biblioteca del Poder Judicial si no es requerida por el interesado dentro del plazo de diez días a partir de que quede firme la resolución correspondiente.

Del escrito de recurso se dará traslado a la otra parte, por el plazo de diez días.

Artículo 280º: Declaración sobre la Admisibilidad. Concesión del Recurso.- Contestado el traslado a que se refiere el artículo anterior o, en su caso, vencido el plazo para hacerlo, la cámara determinará si concurren los requisitos formales de admisibilidad del recurso mencionándolos pormenorizadamente, en cuyo caso lo concederá en efecto suspensivo y remitirá los autos a la Sala del Superior Tribunal.

Si lo declarare inadmisibile, señalará puntualmente qué requisitos de admisibilidad han sido omitidos.

En ambos casos la resolución será irrecurrible. Regirá en lo pertinente lo dispuesto en el Artículo 248º.

Artículo 281º: Resolución del Presidente.- Recibido el expediente, el secretario dará cuenta y el presidente de la Sala dictará la providencia de autos y, sin más trámite, quedará la causa conclusa para definitiva.

Artículo 282º: Resolución.- La decisión se tomará por el voto de la mayoría de los miembros de la Sala, pudiendo adoptarse por acuerdo o redactarse en forma impersonal.

Artículo 283º: Sentencia. - En la sentencia, que deberá dictarse en el plazo de sesenta días, la sala decidirá si existe violación o error en los términos del Artículo 275º. Si así lo determinare, establecerá la ley o doctrina aplicable y, cuando dejare sin efecto el fallo que motiva el recurso, pronunciará nueva sentencia con arreglo a la ley o doctrina cuya aplicación se declara.

Artículo 284º: Obligatoriedad del Fallo.- La interpretación de la ley establecida en la forma prescripta en el artículo anterior será obligatoria para las cámaras y para los jueces de primera instancia, sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión personal. Sólo podrá modificarse dicha doctrina por medio de una nueva sentencia dictada bajo el trámite de la presente Sección.

SECCION 2ª

Apelación Extraordinaria ante La Corte Suprema

Artículo 285º: Procedencia. Forma, Plazo y Trámite.- El recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema procederá en los supuestos previstos por el Artículo 14º de la Ley Nro. 48, la que la modifique o sustituya. Se interpondrá por escrito ante el órgano que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de diez días contados desde la notificación, debiendo fundarse en los términos prescriptos en el Artículo 15º de la Ley Nro. 48, la que la modifique o sustituya. De la presentación en que se deduzca el recurso se dará traslado por diez días a las partes interesadas, notificándolas personalmente o por cédula. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso. Si lo concediere, previa notificación personal o por cédula de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de cinco días contados desde la última notificación. La remisión se efectuará, a costa del Poder Judicial, por el medio que por acordada disponga el Superior Tribunal.

Regirá en lo pertinente lo dispuesto en el Artículo 280º.

CAPITULO VI

Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Mediación

SECCION 1ª

Disposiciones Generales

Artículo 286º: Obligatoriedad.- Previo a todo juicio, salvo lo que se dispone en el artículo siguiente, las partes deberán intentar la solución extrajudicial de la controversia, a cuyo fin se convocará obligatoriamente al procedimiento de mediación, que se regirá por las disposiciones del presente capítulo.

Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si acreditaren que antes del inicio de la causa existió mediación privada ante mediadores registrados ante el Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 286º bis: Excepciones.- El procedimiento de mediación obligatoria no será de aplicación en los siguientes supuestos:

1º) Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador.

2º) Procesos de declaración de incapacidad y rehabilitación.

3º) Causas en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte.

4º) Interdictos.

5º) Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas, agotándose respecto de ellas las instancias recursivas ordinarias, continuando luego el trámite de la mediación.

6º) Diligencias preliminares y prueba anticipada.

7º) Juicios sucesorios y voluntarios.

8º) Concursos preventivos y quiebras.

En los procesos de ejecución y juicios de desalojo, la mediación será optativa para el reclamante, pero si éste opta por esa instancia, será obligatorio para el requerido concurrir a ella.

Artículo 287º: Confidencialidad.- Las actuaciones serán estrictamente confidenciales, a cuyo fin todos los participantes y el mediador suscribirán un acuerdo de confidencialidad al iniciarse la mediación. El mediador tendrá amplia libertad para sesionar con las partes y, en su caso, con terceros, pudiéndolo hacer en forma conjunta o por separado, cuidando de no favorecer con su conducta a una de ellas y de no violar el deber de confidencialidad.

Artículo 287º bis: En todos los casos se propiciará la intervención de un comediador. Uno de los mediadores deberá ser abogado y el otro un profesional universitario de cualquier otra disciplina, ambos matriculados en la Provincia. En caso de profesionales universitarios no colegiados deberán acreditar y registrar su título ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Los mediadores deberán contar con título de mediador expedido por institución reconocida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y con veinte (20) horas anuales de capacitación continua.

SECCION 2º

Mediador. Excusaciones y Recusaciones. Procedimiento

Artículo 288º: Presentación. Designación del mediador. Excusación y recusación del mediador.- El reclamante formalizará su pretensión ante la mesa de entradas que corresponda, detallando la misma en un formulario cuyos requisitos establecerá la reglamentación. Cumplida la presentación se procederá al sorteo del mediador y, en su caso, del comediador, y a la asignación del juzgado que eventualmente entenderá en la litis.

La mesa de entradas remitirá el formulario debidamente intervenido al mediador y comediador designados dentro del plazo de tres días.

El mediador y el comediador deberán excusarse bajo pena de inhabilitación como tales, en todos los casos previstos en el Artículo 14º para los jueces, pudiendo ser recusados con expresión de causa por las partes conforme lo determina este Código.

De no aceptar el mediador o el comediador la recusación, ésta será decidida por el juez asignado mediante el procedimiento establecido en el párrafo primero, cuya resolución será irrecurrible.

Producida la excusación o acogida la recusación se practicará inmediatamente un nuevo sorteo.

El mediador no podrá asesorar ni patrocinar a ninguna de las partes intervinientes en la mediación durante el lapso de un año desde que cesó su inscripción como mediador. La prohibición será absoluta en la causa en que haya intervenido como mediador.

Artículo 288º bis: Audiencia. Notificaciones. Contacto previo.- El mediador, dentro del plazo de diez días de haber tomado conocimiento de su designación, fijará la fecha de la audiencia a la que deberán comparecer las partes.

El mediador deberá notificar la fecha de la audiencia a las partes mediante cédula, adjuntando copia del formulario previsto en el artículo anterior. Dicha cédula será librada por el mediador y deberá ser diligenciada por el requirente, aplicándose en lo pertinente los Artículos 132º a 137º. Las partes podrán tomar contacto con el mediador designado antes de la fecha de la audiencia, con el objeto de hacer conocer el alcance de sus pretensiones.

Artículo 288º ter: Plazo.- El plazo para la mediación será de hasta sesenta días corridos a partir de la última notificación al requerido y/o al tercero en su caso; salvo en los supuestos previstos en el último párrafo del Artículo 286º bis en los que el plazo se reduce a treinta días corridos.

En cualquier caso el plazo se podrá prorrogar por acuerdo de partes.

SECCION 3ª

Partes y Terceros

Artículo 289º: Comparecencia de las partes. Asistencia Letrada. Sanciones.- Dentro de los plazos establecidos en el artículo anterior el mediador podrá convocar a las partes y, en su caso, a terceros, a todas las audiencias necesarias para el cumplimiento de los fines de la mediación.

A las mencionadas sesiones deberán concurrir las partes personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a los domiciliados en extraña jurisdicción de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación.

La asistencia letrada será obligatoria.

Si la mediación fracasare por la incomparecencia de cualquiera de las partes a la primera audiencia, cada uno de los incomparecientes deberá abonar una multa cuyo monto será el equivalente a dos veces la retribución básica que le corresponda percibir al mediador por su gestión.

Habiendo comparecido personalmente y previa intervención del mediador, las partes podrán dar por terminado el procedimiento de mediación.

Artículo 289º bis: Intervención de terceros.- Cuando el mediador advirtiere que es necesaria la intervención de un tercero, solicitado por las partes o de oficio, podrá citarlo a fin de que comparezca a la instancia mediadora.

Si el tercero incurriese en incomparecencia o incumplimiento del acuerdo transaccional que lo involucre, le alcanzarán las sanciones previstas en los Artículos 289º y 290º.

SECCION 4ª

Acuerdo. Ejecución

Artículo 290º: Acuerdo. Ejecutoriedad. Sanción por incumplimiento. Percepción y Destino de las Multas.- Si se produjese el acuerdo, se labrará acta en la que deberán constar los términos del mismo, firmada por el mediador, las partes y los letrados intervinientes.

El mediador deberá comunicar el resultado de la mediación, con fines estadísticos, al Superior Tribunal de Justicia.

En caso de incumplimiento, lo acordado podrá ejecutarse ante el juez designado mediante el procedimiento de ejecución de sentencia.

En el supuesto de llegar a la instancia de ejecución, el juez deberá aplicar la multa establecida en el Artículo 42º.

Las sumas resultantes de las multas establecidas en el presente y en el Artículo 289º serán destinadas por el Superior Tribunal de Justicia al fondo de financiamiento de la mediación que deberá crear por vía de reglamentación.

Se podrá perseguir el cobro de las multas no abonadas por el trámite de la ejecución de sentencia, a cuyo fin el Superior Tribunal de Justicia certificará la deuda existente y librará el certificado respectivo que tendrá carácter de título ejecutivo.

Artículo 290º bis: Fracaso de la mediación.- Si no se arribase a un acuerdo en la mediación, igualmente se labrará acta en la que se dejará constancia de tal resultado, cuya copia deberá entregarse a las partes.

En este caso el reclamante quedará habilitado para iniciar la vía judicial correspondiente, acompañando la constancia de la mediación fracasada.

SECCION 5ª

Retribuciones

Artículo 291º: Retribución del mediador. – El mediador percibirá por su tarea una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias serán establecidos por la reglamentación. Dicha suma será a cargo de la o las partes conforme al acuerdo transaccional arribado.

En el supuesto de mediación fracasada, los honorarios del mediador serán abonados por el fondo de financiamiento de acuerdo a las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Las sumas abonadas por este concepto integrarán las costas de la litis que con posterioridad entablen las partes, las que se reintegrarán al fondo de financiamiento aludido.

A tal fin, y vencido el plazo para su depósito judicial, el Superior Tribunal de Justicia promoverá su cobro mediante el procedimiento de ejecución de sentencia.

Artículo 291º bis: Retribución de los letrados.- A falta de convenio, si el o los letrados intervinientes solicitaren regulación de los honorarios que deberán abonar sus patrocinados por la tarea en el trámite de mediación, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la ley de aranceles de abogados y procuradores. Si la mediación lograre evitar el litigio, se regulará como juicio terminado con una reducción de un treinta por ciento; si fracasare, se computará como un incidente del proceso.

TITULO V

Otros Modos de Terminación del Proceso

CAPITULO I

Desistimiento

Artículo 292º: Desistimiento del Proceso.- En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez quien, sin más trámite, lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones.

Cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda deberá requerirse la conformidad del demandado, a quien se dará traslado notificándosele personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa.

Artículo 293º: Desistimiento del Derecho.- En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo anterior, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá la conformidad del demandado debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio, y a dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa.

Artículo 294º: Revocación.- El desistimiento no se presume y podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la contraria.

CAPITULO II

Allanamiento

Artículo 295º: Oportunidad y Efectos.- El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia.

El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado.

Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada en la forma prescripta en el Artículo 156º.

CAPITULO III

Transacción

Artículo 296º: Forma y Trámite.- Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, y la homologará o no. En este último caso, carecerá de efectos y los autos seguirán según su estado.

CAPITULO IV

Conciliación

Artículo 297º: Efectos.- Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste, tendrán autoridad de cosa juzgada.

CAPITULO V

Caducidad de la Instancia

Artículo 298º: Plazos.- Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:

1º) De seis meses, en primera o única instancia.

2º) De tres meses, en segunda o tercera instancia.

3º) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor de los indicados precedentemente.

4º) De un mes, en el incidente de caducidad de instancia.

La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado y termina con el dictado de la sentencia.

Artículo 299º: Cómputo.- Los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del tribunal, juez, secretario o jefe de despacho, que tenga por efecto impulsar el procedimiento; correrán durante los días inhábiles salvo los que correspondan a las ferias judiciales.

Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez o tribunal, siempre que la reanudación del trámite no quedare supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso.

Artículo 300º: Litisconsorcio.- El impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficiará a los restantes.

Artículo 301º: Improcedencia.- No se producirá la caducidad:

1º) En los procedimientos de ejecución de sentencia, salvo si se tratare de incidentes que no guarden relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha.

2º) En los procesos sucesorios y, en general, en los voluntarios, salvo en los incidentes y juicios incidentales que en ellos se suscitaren.

3º) Cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este

Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al jefe de despacho.

4º) Si se hubiere llamado autos para sentencia, salvo si se dispusiere prueba de oficio cuya producción dependiere de la actividad de las partes; en tal caso la carga de impulsar el procedimiento existirá desde el momento en que éstas tomaren conocimiento de las medidas ordenadas.

Artículo 302º: Contra Quiénes se Opera.- La caducidad se operará también contra el estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Esta disposición no se aplicará a los incapaces o ausentes que carecieren de representación legal en el juicio.

Artículo 303º: Quiénes Pueden Pedir la Declaración. Oportunidad.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en los incidentes, por el contrario de quien lo hubiere promovido; en los recursos, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria.

El pedido de caducidad de la segunda instancia importa, en el caso de que éste prospere, el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario, excepto que el mismo versare exclusivamente sobre el monto de los honorarios regulados.

Artículo 304º: Modo de Operarse.- La caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el Artículo 298º, pero antes que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. El secretario deberá informar al juez o tribunal sobre el transcurso de los plazos del Artículo 298º.

Artículo 305º: Resolución.- La resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente. En segunda o ulterior instancia, la resolución sólo será susceptible de reposición si hubiese sido dictada de oficio.

Artículo 306º: Efectos de la Caducidad.- La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida.

La caducidad de la instancia principal comprende la reconvencción y los incidentes; pero la de éstos no afecta la instancia principal.

PARTE ESPECIAL

LIBRO II

PROCESOS DE CONOCIMIENTO

TITULO I

Disposiciones Generales

CAPITULO I

Clases

Artículo 307º: Principio General.- Todas las contiendas judiciales que no tuvieran señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este Código autorice al juez a determinar la clase de proceso aplicable.

Cuando leyes especiales remitan al juicio o proceso sumario se entenderá que el litigio tramitará conforme al procedimiento del juicio ordinario o sumarísimo en su caso. Cuando la controversia versare sobre derechos que no sean apreciables en dinero o existan dudas sobre el valor reclamado y no correspondiere juicio sumarísimo o un proceso especial, el juez determinará el tipo de proceso aplicable.

En estos casos así como en todos aquellos en que este Código autoriza al juez a fijar la clase de juicio, la resolución será irrecurrible.

Artículo 308º: Proceso Sumarísimo.- Será aplicable el procedimiento establecido en el Artículo 481º:

1º) A los procesos de conocimiento que excedan de la competencia atribuida a la justicia de paz, en los que el valor cuestionado no exceda la suma de pesos cinco mil, la que podrá ser modificada por acuerdo plenario del Superior Tribunal de Justicia.

2º) En los demás casos previstos por este Código u otra ley.

Si de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor no procediere el trámite del juicio sumarísimo, el juez resolverá cuál es la clase de proceso que corresponde. La resolución no será recurrible.

Artículo 309º: Acción Meramente Declarativa.- Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión al actor.

Si el actor pretendiera que la cuestión tramite por las reglas establecidas para el juicio sumarísimo, el juez resolverá de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite pretendido por aquel, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida. Esta resolución no será recurrible.

CAPITULO II

Diligencias Preliminares

Artículo 310º: Enumeración. Caducidad.- El proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar, o quien, con fundamento, prevea que será demandado:

1º) Que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada, por escrito y dentro del plazo que fije el juez, sobre algún hecho relativo a su personalidad sin cuya comprobación no pueda entrarse en juicio.

2º) Que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida precautoria que corresponda.

3º) Que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si no pudiera obtenerlo sin recurrir a la justicia.

4º) Que, en caso de evicción, el enajenante o adquirente exhiba los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida.

5º) Que el socio o comunero o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba.

6º) Que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción que exija conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, exprese a qué título la tiene.

7º) Que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate.

8º) Que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los cinco días de notificado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 38º.

9º) Que se practique una mensura judicial.

10º) Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas.

11º) Que se practique reconocimiento de mercaderías en los términos del Artículo 773º.

Salvo en los casos de los incisos 9º), 10º), 11º) y del Artículo 313º, no podrán invocarse diligencias decretadas a pedido de quien pretende demandar, si no se dedujere la demanda dentro de los treinta días de su realización. Si el reconocimiento a que se refieren el inciso 1º) y el Artículo 311º fuere ficto, el plazo correrá desde que la resolución que lo declare hubiere quedado firme.

Artículo 311º: Trámite de la Declaración Jurada.- En el caso del inciso 1º) del artículo anterior, la providencia se notificará por cédula o acta notarial, con entrega del interrogatorio. Si el requerido no respondiere dentro del plazo, se tendrán por ciertos los hechos consignados en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que se produjera una vez iniciado el juicio.

Artículo 312º: Trámite de la Exhibición de Cosas e Instrumentos.- La exhibición o presentación de cosas o instrumentos se hará en el tiempo, modo y lugar que determine el juez, atendiendo a las circunstancias. Cuando el requerido no los tuviere en su poder deberá indicar, si lo conoce, el lugar en que se encuentre o quién los tiene.

Artículo 313º: Prueba Anticipada.- Los que sean o vayan a ser parte de un proceso de conocimiento y tuvieren motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el período de prueba, podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes:

1º) Declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país.

2º) Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos, o el estado, calidad o condición de cosas o de lugares.

3º) Pedido de informes.

La declaración de las partes podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado.

Artículo 314º: Pedido de Medidas Preliminares, Resolución y Diligenciamiento.- En el escrito en que solicitaren medidas preliminares se indicará el nombre de la futura parte contraria, su domicilio si fuere conocido y los fundamentos de la petición.

El juez accederá a las pretensiones si estimare justas las causas en que se fundan, repeliéndolas de oficio en caso contrario.

La resolución será apelable únicamente cuando denegare la diligencia.

Si hubiese de practicarse la prueba se citará a la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor oficial. El diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de prueba, salvo en el caso de la pericial, que estará a cargo de un perito único, nombrado de oficio.

Artículo 315º: Producción de Prueba Anticipada Después de Trabada la Litis.- Después de trabada la litis, la producción anticipada de prueba sólo tendrá lugar por las razones de urgencia indicadas en el Artículo 313º salvo la atribución conferida al juez por el Artículo 33º inciso 2º).

Artículo 316º: Responsabilidad por Incumplimiento.- Cuando sin justa causa el interpelado no cumpliera la orden del juez en el plazo fijado o diere informaciones falsas o que pudieren inducir a error o destruyere u ocultare los instrumentos o cosas cuya exhibición o presentación se hubiese requerido, se le aplicará una multa que no podrá ser menor de cinco ni mayor de cincuenta juristas, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que hubiere incurrido.

La orden de exhibición o presentación de instrumentos o cosa mueble, que no fuere cumplida, se hará efectiva mediante secuestro y allanamiento de lugares, si resultare necesario.

Cuando la diligencia preliminar consistiere en la citación para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas, pero en el juicio a que se refiere el Artículo 635º se declare que la rendición corresponde, el juez impondrá al demandado una multa que no podrá ser menor de cinco ni mayor de cincuenta juristas cuando la negativa hubiere sido maliciosa.

Si correspondiere, por la naturaleza de la medida preparatoria y la conducta observada por el requerido, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones conminatorias, en los términos del Artículo 34º.

TITULO II

Proceso Ordinario

CAPITULO I

Demanda

Artículo 317º: Forma de la Demanda.- La demanda será deducida por escrito y contendrá:

1º) El nombre y domicilio del demandante.

2º) El nombre y domicilio del demandado.

3º) La cosa demandada, designándola con toda exactitud.

4º) Los hechos en que se funde, explicados claramente.

5º) El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias.

6º) La petición en términos claros y positivos.

La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En estos supuestos, no procederá la excepción de defecto legal.

La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas.

Artículo 318º: Transformación y Ampliación de la Demanda.- El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Podrá, asimismo, ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciará únicamente con un traslado a la otra parte.

Si la ampliación, expresa o implícitamente, se fundare en hechos nuevos, se aplicarán las reglas establecidas en el Artículo 350º.

Artículo 319º: Agregación de la Documental y Ofrecimiento de las Demás Pruebas.- Con la demanda, reconvencción y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas de que las partes intentaren valerse.

Cuando la prueba documental no estuviera a su disposición, la parte interesada deberá individualizarla, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública y persona en cuyo poder se encuentre.

Si se tratare de prueba documental oportunamente ofrecida, los letrados patrocinantes, una vez interpuesta la demanda, podrán requerir directamente a entidades privadas, sin necesidad de previa petición judicial, y mediante oficio en el que se transcribirá este artículo, el envío de la

pertinente documentación o de su copia auténtica, la que deberá ser remitida directamente a la secretaría, con transcripción o copia del oficio.

Artículo 320º: Hechos no Invocados en la Demanda o Contrademanda.- Cuando en el responde de la demanda o de la reconvencción se alegaren hechos no considerados en la demanda o contrademanda, los accionantes o reconvinientes, según el caso, podrán ofrecer prueba y agregar la documental referente a esos hechos, dentro de los cinco días de notificada la providencia respectiva. En tales casos se dará traslado de los documentos a la otra parte, quien deberá cumplir con la carga que prevé el Artículo 342º, inciso 1º).

Artículo 321º: Documentos Posteriores o Desconocidos.- Después de interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber antes tenido conocimiento de ellos. En tales casos se dará traslado a la otra parte, quien deberá cumplir la carga que prevé el Artículo 341º inciso 1º).

Artículo 322º: Demanda y Contestación Conjuntas.- El demandante y el demandado, de común acuerdo, podrán presentar al juez la demanda y contestación en la forma prevista en los Artículos 317º y 341º, ofreciendo la prueba en el mismo escrito.

El juez, sin otro trámite, dictará la providencia de autos si la causa fuere de puro derecho. Si hubiese hechos controvertidos, procederá de conformidad a lo previsto en el Artículo 345º.

Artículo 323º: Rechazo "In Limine".- Los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan.

Si no resultare claramente de ellas que son de su competencia, mandarán que el actor exprese lo necesario a ese respecto.

Artículo 324º: Traslado de la Demanda.- Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro de quince días.

Cuando el demandado fuese el estado provincial, el plazo para comparecer y contestar la demanda será de treinta días con más la ampliación que corresponda por la distancia conforme al Artículo 153º de este Código.

Si se demandare conjuntamente al estado provincial y organismos autárquicos o descentralizados, empresas o sociedades estatales, el plazo para comparecer y contestar la demanda será para todos los codemandados de treinta días, computándose el mismo desde la última de las notificaciones practicadas.

CAPITULO II

Citación del Demandado

Artículo 325º: Demandado Domiciliado o Residente en la Jurisdicción del Juzgado.- La citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real, si aquél fuere habido, juntamente con las copias a que se refiere el Artículo 117º.

Si no se le encontrare, se le dejará aviso para que espere al día siguiente y si tampoco entonces se le hallare se procederá según se prescribe en el Artículo 137º.

Si el domicilio asignado al demandado por el actor fuere falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante.

Artículo 326º: Demandado Domiciliado o Residente Fuera de la Jurisdicción.- Cuando la persona que ha de ser citada no se encontrare en el lugar donde se le demanda, la citación se hará por medio de oficio o exhorto a la autoridad judicial de la localidad en que se halle, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en la ley de trámite uniforme sobre exhortos.

Artículo 327º: Ampliación y Fijación de Plazo.- En los casos del Artículo 326º, el plazo de quince días quedará ampliado en la forma prescripta en el Artículo 153º.

Si el demandado residiese fuera de la República, el juez fijará el plazo en que haya de comparecer, atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

Artículo 328º: Demandado Incierto o con Domicilio o Residencia Ignorados.- La citación a personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se ignore se hará por edictos publicados por dos días en la forma prescripta por los Artículos 140º, 141º y 142º.

Si vencido el plazo de los edictos o el anuncio por radiodifusión o televisión no compareciere el citado, se nombrará un abogado de la lista para que lo represente en el juicio. El defensor deberá tratar de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia del juicio.

Se tendrá por deducido el recurso de apelación de la sentencia dictada contra el demandado citado por edictos cuando el defensor no hubiere recurrido de ella.

Artículo 329º: Demandados con Domicilios o Residencias en Diferentes Jurisdicciones.- Si los demandados fueren varios y se hallaren en diferentes jurisdicciones, el plazo de la

citación será para todos el que resulte mayor, sin atender al orden en que las notificaciones fueron practicadas.

Artículo 330º: Citación Defectuosa.- Si la citación se hiciera en contravención a lo prescripto en los artículos que preceden, será nula y se aplicará lo dispuesto en el Artículo 144º.

CAPITULO III

Excepciones Previas

Artículo 331º: Forma de Deducirlas, Plazos y Efectos.- Las excepciones que se mencionan en el artículo siguiente se opondrán únicamente como de previo y especial pronunciamiento, en un solo escrito juntamente con la contestación de la demanda o la reconvencción.

Si se opusieran excepciones, deberá simultáneamente oponerse la de prescripción, cuando el demandado la estimare procedente. El rebelde solo podrá oponer la prescripción con posterioridad siempre que justifique haber incurrido en rebeldía por causas que no hayan estado a su alcance superar.

En los casos en que la obligación de comparecer surgiere con posterioridad al plazo acordado al demandado o reconvenido para contestar, podrá oponerla en su primera presentación.

La prescripción se resolverá como excepción previa si la cuestión fuere de puro derecho, en caso contrario se resolverá en la sentencia definitiva, debiendo producirse la prueba junto con la de las restantes cuestiones o defensas de fondo.

Artículo 332º: Excepciones Admisibles.- Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones:

1º) Incompetencia.

2º) Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente.

3º) Falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva.

4º) Litispendencia.

5º) Defecto legal en el modo de proponer la demanda.

6º) Cosa juzgada. Para que proceda esta excepción, el examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se trata de un mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve.

7º) Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.

8º) Las defensas temporarias que se consagren en las leyes generales tales como el beneficio de inventario o el de excusión, o las previstas en los Artículos 2.486º y 3.357º del Código Civil. La existencia de cosa juzgada o de litispendencia podrá ser declarada de oficio, en cualquier estado de la causa.

Artículo 333º: Arraigo.- Si el demandante no tuviere domicilio ni bienes inmuebles en la Provincia será también excepción previa la del arraigo por las responsabilidades inherentes a la demanda.

Artículo 334º: Requisitos de Admisión.- No se dará curso a las excepciones:

1º) Si la de incompetencia lo fuere por razón de distinta nacionalidad y no se acompañare el documento que acredite la del oponente; si lo fuere por distinta vecindad y no se presentare la libreta o partida que justifique la ciudadanía argentina del oponente; si lo fuere por haberse fijado de común acuerdo por las partes el juez competente cuando ello es admisible, y no se hubiere presentado el documento correspondiente.

2º) Si la de litispendencia no fuere acompañada del testimonio del escrito de demanda del juicio pendiente.

3º) Si la de cosa juzgada no se presentare con el testimonio de la sentencia respectiva.

4º) Si las de transacción, conciliación y desistimiento del derecho no fueren acompañadas de los instrumentos o testimonios que las acrediten.

En los supuestos de los incisos 2º), 3º) y 4º), podrá suplirse la presentación del testimonio si se solicitare la remisión del expediente con indicación del juzgado y secretaría donde tramita.

Artículo 335º: Planteamiento de las Excepciones y Traslado.- Con el escrito en que se propusieren las excepciones, se agregará toda la prueba instrumental y se ofrecerá la restante. De todo ello se dará traslado al actor, quien deberá cumplir con idéntico requisito.

Artículo 336º: Audiencia de Prueba.- Vencido el plazo con o sin respuesta, el juez designará audiencia dentro de diez días para recibir la prueba ofrecida, si lo estimare necesario. En caso contrario, resolverá sin más trámite.

Artículo 337º: Efectos de la Resolución que Desestima la Excepción de Incompetencia.- Una vez firme la resolución que desestima la excepción de incompetencia, las partes no podrán argüir la incompetencia en lo sucesivo. Tampoco podrá ser declarada de oficio.

Artículo 338º: Resolución y Recursos.- El juez resolverá previamente sobre la declinatoria y la litispendencia. En caso de declararse competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás excepciones previas.

La resolución será apelable en relación, salvo cuando se tratase de la excepción prevista en el inciso 3º del Artículo 332º y el juez hubiere resuelto que la falta de legitimación no era manifiesta, en cuyo caso y sin perjuicio de lo establecido en dicho inciso la decisión será irrecurrible.

Artículo 339º: Efectos de la Admisión de las Excepciones.- Una vez firme la resolución que declare procedentes las excepciones previas, se procederá:

1º) A remitir el expediente al tribunal considerado competente, si perteneciere al territorio nacional. En caso contrario, se archivará.

2º) A ordenar el archivo si se tratase de cosa juzgada, falta de legitimación manifiesta, prescripción o de las previstas en el inciso 8º del Artículo 332º salvo, en este último caso, cuando sólo correspondiere la suspensión del procedimiento.

3º) A remitirlo al tribunal donde tramite el otro proceso si la litispendencia fuese por conexidad. Si ambos procesos fueren idénticos, se ordenará el archivo del iniciado con posterioridad.

4º) A fijar el plazo dentro del cual deben subsanarse los defectos o arraigar, según se trate de las contempladas en los incisos 2º) y 5º) del Artículo 332º o en el Artículo 333º. En este último caso se fijará también el monto de la caución.

Vencido el plazo sin que el actor cumpla lo resuelto se lo tendrá por desistido del proceso, imponiéndosele las costas.

Subsanado el defecto legal, se correrá nuevo traslado, por el plazo establecido en el Artículo 324º.

CAPITULO IV

Contestación a la Demanda y Reconvención

Artículo 340º: Plazo.- El demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo establecido en el Artículo 324º con la ampliación que corresponda en razón de la distancia.

Artículo 341º: Contenido y Requisitos.- En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas de que intente valerse.

Deberá además:

1º) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general al contestar, o la no contestación a la demanda se tendrán como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran, y de la autenticidad y recepción de los documentos exhibidos, salvo la prueba en contrario.

No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor oficial y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba.

2º) Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa.

3º) Observar, en lo aplicable, los requisitos prescriptos en el Artículo 317º.

Artículo 342º: Reconvención.- En el mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir reconvención, en la forma prescripta para la demanda, si se creyere con derecho a proponerla. No haciéndolo entonces, no podrá deducirla después, salvo su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio.

La reconvención será admisible si las pretensiones en ella deducidas derivaren de la misma relación jurídica o fueren conexas con las invocadas en la demanda.

Artículo 343º: Traslado de la Reconvención y de los Documentos.- Propuesta la reconvención o presentándose documentos por el demandado se dará traslado al actor quien deberá responder dentro de quince o cinco días respectivamente, observando las normas establecidas para la contestación de la demanda.

Para el demandado regirá lo dispuesto en el Artículo 321º.

Artículo 344º: Trámite Posterior Según la Naturaleza de la Cuestión.- Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, resueltas las excepciones previas, si la cuestión pudiera ser resuelta como de puro derecho,

así se decidirá y firme que se encuentre la providencia, se llamará autos para sentencia. Si se hubiesen alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez recibirá la causa a prueba procediendo de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 345º. La audiencia allí prevista se celebrará también en el proceso sumarísimo.

CAPITULO V

Audiencia Preliminar y Prueba

SECCION 1ª

Normas Generales

Artículo 345º: Audiencia Preliminar. Reglas.- Si hubiere hechos controvertidos el juez deberá señalar una audiencia a realizarse dentro de los treinta días de dictada la providencia que tiene por contestada la demanda o reconvención, en su caso, o firme el interlocutorio que resuelve las excepciones previas.

La audiencia preliminar se realizará según las siguientes reglas:

1º) Será presidida por el juez, con carácter indelegable. Si el juez no se hallare presente no se realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia de la comparecencia de las partes en el libro de asistencia. Las explicaciones o aclaraciones que el juez requiera o las fórmulas conciliatorias que proponga, no constituirán prejuzgamiento.

2º) Las partes serán notificadas en sus domicilios reales y procesales; deberán concurrir en forma personal y por medio de sus representantes legales en caso de menores o incapaces, con asistencia letrada, quedando notificadas de todo lo que aconteciera en el acto. En casos extremos el juez, por resolución fundada, podrá autorizar a la parte a comparecer por representante. Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, alguna de las partes no pudiere comparecer, el tribunal podrá diferir la audiencia.

La parte que no concurriera a la audiencia quedará también notificada en el acto de todas las resoluciones que allí se dicten, no pudiendo plantear ningún recurso al respecto, y su ausencia injustificada podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos articulados por la contraparte en el escrito constitutivo.

3º) Cuando alguna de las partes sea una persona jurídica, deberá indicar, con anterioridad a la audiencia, quien la representará en el acto. La persona designada deberá conocer acabadamente el objeto del juicio y se la tendrá por notificada con la presentación del escrito. En caso de no efectuarse la indicación prevista por este artículo, deberá concurrir a la audiencia la persona que legalmente represente a la parte.

Artículo 346º: Desarrollo de la Audiencia Preliminar.- En el curso de la audiencia preliminar el juez:

1º) Podrá requerir explicaciones o aclaraciones a las partes o a sus letrados y apoderados indistintamente, acerca de los hechos y pretensiones articulados en sus respectivos escritos tratando de eliminar la oscuridad o ambigüedad que contengan.

2º) Deberá intentar la conciliación de las partes en forma total o parcial. A tal fin las instará a que formulen propuestas de arreglo y, si no lo hicieren, podrá proponerles una o más fórmulas conciliatorias. En caso de conciliación total o parcial, el juez la homologará en el acto, salvo en los casos que existan menores o incapaces interesados y deba requerir el dictamen previo.

3º) Resolverá cualquier cuestión previa que se encontrare pendiente o pudiere presentarse, expidiéndose también sobre los hechos nuevos denunciados conforme al Artículo 350º.

4º) Dejará establecidos los hechos pertinentes acerca de los cuales no exista controversia entre las partes, procurando a tal fin, eliminar las discrepancias que existan. Fijará asimismo, según las pautas del Artículo 349º, los hechos conducentes que deban ser objeto de la prueba.

5º) De admitirse prueba pericial fijará los puntos de pericia designándose el perito en el acto conforme al Artículo 444º primer párrafo.

Abrirá la causa a prueba por un plazo no mayor a los cuarenta días, salvo que se diera la situación prevista en el Artículo 353º, ordenando la producción de la ofrecida por las partes que sea conducente. Para decidir cuáles serán las pruebas que mandará a producir, el juez aplicará los principios establecidos en el Artículo 349º.

Si alguna de las partes se opusiere a la apertura a prueba, la cuestión se resolverá en el mismo acto, previa sustanciación. Sólo será apelable la resolución que deniegue la apertura a prueba. En su caso, el recurso deberá interponerse y fundarse en el acto, debiendo en la misma oportunidad, responder la parte apelada. Cumplido se elevará sin más trámite a la cámara de apelaciones.

6º) Si como resultado del tratamiento de los incisos anteriores no hubiera prueba pendiente a producir, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 344º.

7º) Podrá disponer una nueva audiencia a realizarse en su presencia para recibir la prueba testimonial, las declaraciones de las partes y las explicaciones que se requieran a los peritos.

Artículo 347º: Prescendencia de Apertura a Prueba de Conformidad de Partes.- Si en la audiencia prevista en el Artículo 345º todas las partes manifestaren que no tienen ninguna prueba a producir, o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documentación ya agregada y no cuestionada, la causa quedará concluida para definitiva y el juez llamará autos para sentencia.

Artículo 348º: Clausura del Período de Prueba.- El período de prueba quedará clausurado antes de su vencimiento, sin necesidad de declaración expresa, cuando todas hubiesen quedado producidas, o las partes renunciaren a las pendientes.

Artículo 349º: Pertinencia y Admisibilidad de la Prueba.- No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados en la demanda, reconvención y, en su caso, sus contestaciones, que sean conducentes y resulten controvertidos.

No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias.

Artículo 350º: Hechos Nuevos.- Cuando, con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención, ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta cinco días después de notificada la audiencia prevista en el Artículo 345º del presente Código, acompañando la prueba documental y ofreciendo las demás de las que intenten valerse.

Del escrito en que se alegue, si se lo considerase pertinente, se dará traslado a la otra parte, quien, dentro del plazo para contestarlo, podrá alegar otros hechos en contraposición a los nuevamente alegados.

El juez decidirá en la audiencia del Artículo 345º la admisión o el rechazo de los hechos nuevos.

Artículo 351º: Inapelabilidad.- La resolución que admitiere el hecho nuevo será inapelable. La que lo rechazare será apelable en efecto diferido.

Artículo 352º: Plazo Ordinario de Prueba.- El plazo de prueba será fijado por el juez y no excederá de cuarenta días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de la fecha de celebración de la audiencia prevista en el Artículo 345º del presente Código.

Artículo 353º: Prueba a Producir en el Extranjero.- Cuando se ofrezca prueba que deba producirse fuera de la república, en el escrito en que se pide deberá expresarse a qué hechos controvertidos se vinculan y los demás elementos de juicio que permitan establecer si son esenciales, o no.

Artículo 354º: Especificaciones.- Si se tratare de prueba testimonial, deberán expresarse los nombres, profesión y domicilio de los testigos y acompañarse los interrogatorios. Si se requiriere el testimonio de documentos, se mencionarán los archivos o registros donde se encuentren.

Artículo 355º: Inadmisibilidad.- No se admitirá la prueba si en el escrito de ofrecimiento no se cumplieren los requisitos establecidos en los dos artículos anteriores.

Artículo 356º: Facultad de la Contraparte. Deber del Juez.- La parte contraria y el juez tendrán, respectivamente, la facultad y el deber atribuidos por el Artículo 437º.

Artículo 357º: Prescendencia de Prueba no Esencial.- Si producidas todas las demás pruebas quedare pendiente en todo o en parte únicamente la que ha debido producirse fuera de la república, y de la ya acumulada resultare que no es esencial, se pronunciará sentencia prescindiendo de ella. Podrá ser considerada en segunda instancia si fuere agregada cuando la causa se encontrare en la alzada, salvo si hubiere mediado declaración de caducidad por negligencia.

Artículo 358º: Costas.- Cuando solo una de las partes hubiere ofrecido prueba a producir fuera de la república y no la ejecutare oportunamente, serán a su cargo las costas originadas por ese pedido, incluidos los gastos en que haya incurrido la otra para hacerse representar donde debieran practicarse las diligencias.

Artículo 359º: Continuidad de los Plazos de Prueba.- Salvo en los supuestos del Artículo 152º, el plazo de prueba no se suspenderá por ningún incidente o recurso.

Artículo 360º: Constancias de Expedientes Judiciales.- Cuando la prueba consistiere en constancias de otros expedientes judiciales no terminados, la parte agregará los testimonios o certificados de las piezas pertinentes, sin perjuicio de la facultad del juez de requerir dichas

constancias o los expedientes, en oportunidad de encontrarse el expediente en estado de dictar sentencia.

Artículo 361º: Carga de la Prueba.- Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer.

Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

Si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no hubiere sido probada, el juez podrá investigar su existencia, y aplicarla a la relación jurídica materia del litigio.

Artículo 362º: Medios de Prueba.- La prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten a la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez.

Artículo 363º: Inapelabilidad.- Serán inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas; si se hubiere negado alguna medida, la parte interesada podrá solicitar a la cámara que la diligencie cuando el expediente fuere remitido para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva.

Artículo 364º: Cuadernos de Prueba.- En la audiencia del Artículo 345º el juez decidirá acerca de la conveniencia y/o necesidad de formar cuadernos separados de la prueba de cada parte, la que en su caso se agregará al expediente al vencimiento del plazo probatorio.

Artículo 365º: Prueba Dentro del Radio del Juzgado.- Los jueces asistirán a las actuaciones de prueba que deban practicarse fuera de la sede del juzgado o tribunal, pero dentro del radio urbano del lugar.

Artículo 366º: Prueba Fuera del Radio del Juzgado.- Cuando las actuaciones deban practicarse fuera del radio urbano, pero dentro de la circunscripción judicial, los jueces podrán trasladarse para recibirlas, o encomendar la diligencia a los de las respectivas localidades.

Si se tratare de un reconocimiento judicial, los jueces podrán trasladarse a cualquier lugar de la República donde deba tener lugar la diligencia.

Artículo 367º: Plazo Para el Libramiento de Oficios y Exhortos.- Las partes, oportunamente, deberán gestionar el libramiento de los oficios y exhortos, retirarlos para su diligenciamiento y hacer saber, cuando correspondiere, en qué juzgado y secretaría ha quedado radicado. En el supuesto de que el requerimiento consistiese en la designación de audiencias o cualquier otra diligencia respecto de la cual se posibilita el contralor de la otra parte, la fecha designada deberá ser informada en el plazo de cinco días contados desde la notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que la fijó.

Regirán las normas sobre caducidad de pruebas por negligencia.

Artículo 368º: Negligencia.- Las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas oportunamente.

Si no lo fueren por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados pedir que se practiquen antes de los alegatos siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado de las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar su producción.

Artículo 369º: Prueba Producida y Agregada.- Se desestimaré el pedido de declaración de negligencia cuando la prueba se hubiere producido y agregado antes de vencido el plazo para contestarlo. También, y sin sustanciación alguna, si se acusare negligencia respecto de la declaración de las partes y la prueba de testigos antes de la fecha y hora de celebración de la audiencia, o de peritos, antes de que hubiese vencido el plazo para presentar la pericia.

En estos casos, la resolución del juez será irrecurrible. En los demás, quedará a salvo el derecho de los interesados para replantear la cuestión en la alzada, en los términos del Artículo 252º inciso 2º).

Artículo 370º: Apreciación de la Prueba.- Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción, respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas y cada una de las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.

SECCIÓN 2ª

Prueba Documental

Artículo 371º: Exhibición de Documentos.- Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio, estarán obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos, sin sustanciación alguna, dentro del plazo que señale.

Artículo 372º: Documentos en Poder de una de las Partes.- Si el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlos, constituirá una presunción en su contra.

Artículo 373º: Documentos en Poder de Tercero.- Si el documento que deba reconocerse se encontrare en poder de tercero, se le intimará para que lo presente. Si lo acompañare, podrá solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el expediente.

El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio.

Ante la oposición formal del tenedor del documento no se insistirá en el requerimiento.

Artículo 374º: Cotejo.- Si el requerido negare la firma que se le atribuye o manifestare no conocer la que se atribuya a otra persona, deberá procederse a la comprobación del documento de acuerdo con lo establecido en los Artículos 443º y siguientes, en lo que correspondiere.

En los escritos a que se refiere el Artículo 443º las partes indicarán los documentos que han de servir para la pericia.

Artículo 375º: Estado del Documento.- A pedido de parte, el secretario certificará sobre el estado material del documento de cuya comprobación se trate, indicando las enmiendas, entrerrenglonaduras u otras particularidades que en él se adviertan.

Artículo 376º: Reemplazo del Certificado.- Dicho certificado podrá ser reemplazado por copia fotográfica a costa de la parte que la pidiere.

Artículo 377º: Documentos Indubitados.- Si los interesados no se hubiesen puesto de acuerdo en la elección de documentos para la pericia, el juez sólo tendrá por indubitados:

1º) Las firmas consignadas en documentos auténticos.

2º) Los documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se atribuya el que sea objeto de comprobación.

3º) El impugnado, en la parte en que haya sido reconocido como cierto por el litigante a quien perjudique.

4º) Las firmas registradas en establecimientos bancarios.

Artículo 378º: Cuerpo de Escritura.- A falta de documentos indubitados, o siendo ellos insuficientes, el juez podrá ordenar que la persona a quien se atribuya la letra forme un cuerpo de escritura al dictado y a requerimiento del perito. Esta diligencia se cumplirá en el lugar que el juez designe y bajo apercibimiento de que si no compareciere o rehusare escribir, sin justificar impedimento legítimo, se tendrá por reconocido el documento.

Artículo 379º: Redargución de Falsedad.- La redargución de falsedad de un instrumento público o de instrumento privado reconocido tramitará por incidente que deberá promoverse dentro del plazo de diez días de realizada la impugnación, bajo apercibimiento de tenerla por desistida. Será inadmisibles si no se indican los elementos y no se ofrecen las pruebas tendientes a demostrar la falsedad.

Admitido el requerimiento, el juez suspenderá el pronunciamiento definitivo, para resolver el incidente juntamente con la sentencia.

Será parte el oficial público que extendió el instrumento.

SECCIÓN 3ª

Prueba de Informes. Requerimiento de Expedientes.

Artículo 380º: Procedencia.- Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso. Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del informante.

Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados, relacionados con el juicio.

Artículo 381º: Sustitución o Ampliación de Otros Medios Probatorios.- No será admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos.

Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión del expediente sólo podrá ser negado si existiere justa causa de reserva o de secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro del quinto día de recibido el oficio.

Artículo 382º: Recaudos y Plazos para la Contestación.- Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de los diez días hábiles, salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiere fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. No podrán establecer recaudos que no estuvieran autorizados por ley. Los oficios librados deberán ser recibidos obligatoriamente a su presentación.

El juez a pedido de parte deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso injustificado en las contestaciones de informes. La apelación que se dedujera contra la resolución que impone sanciones conminatorias tramitará en expediente separado.

Cuando se tratare de la inscripción de la transferencia de dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble, los oficios que se libren a la Dirección General de Rentas y/o a la municipalidad de que se trate, contendrán el apercibimiento de que, si no fueran contestados dentro del plazo de diez días, el bien se inscribirá como si estuviese libre de deudas.

Artículo 383º: Atribuciones de los Letrados Patrocinantes.- Los pedidos de informes, testimonios y certificados, así como los de remisión de expedientes ordenados en el juicio, serán requeridos por medio de oficios firmados, sellados y diligenciados por el letrado patrocinante con transcripción de la resolución que los ordena y que fija el plazo en que deberán remitirse. Deberá, asimismo, consignarse la prevención que corresponda según el Artículo 382º.

Los oficios dirigidos a bancos, oficinas públicas o entidades privadas que tuvieren por único objeto acreditar el haber del juicio sucesorio, serán presentados directamente por el abogado patrocinante, sin necesidad de previa petición judicial.

Deberá otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse las contestaciones directamente a la secretaría con transcripción o copia del oficio.

Cuando en la redacción de los oficios los profesionales se apartaren de lo establecido en la providencia que los ordena, o de las formas legales, su responsabilidad disciplinaria se hará efectiva de oficio o a petición de parte.

Artículo 384º: Compensación.- Las entidades privadas que no fueren parte en el proceso, al presentar el informe y si los trabajos que han debido efectuar para contestarlo implicaren gastos extraordinarios, podrán solicitar una compensación, que será fijada por el juez, previo traslado a las partes. En este caso el informe deberá presentarse por duplicado. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente por separado.

Artículo 385º: Caducidad.- Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la ofreció, sin sustanciación alguna, si dentro del quinto día no solicitare al juez la reiteración del oficio.

Artículo 386º: Impugnación por Falsedad.- Sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse, en caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación.

La impugnación sólo podrá ser formulada dentro del quinto día de notificada por ministerio de la ley la providencia que ordena la agregación del informe.

Cuando, sin causa justificada, la entidad privada no cumpliera el requerimiento, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones conminatorias, en los términos del Artículo 34º y a favor de la parte que ofreció la prueba.

SECCIÓN 4ª

Declaración de las Partes. Confesión.

Artículo 387º: Declaraciones.- En la oportunidad establecida para el ofrecimiento de prueba según el tipo de proceso que se trate, cada parte podrá exigir que el litigante que tenga en el pleito un interés distinto al propio, sea interrogado sobre la cuestión que se ventila.

Artículo 388º: Quienes Pueden ser Citados.- Podrán, asimismo, ser citados a declarar:

1º) Los representantes de los incapaces por los hechos en que hayan intervenido personalmente en ese carácter.

2º) Los apoderados, por hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato; y por hechos anteriores cuando estuvieren sus representados fuera del lugar en que

se sigue el juicio, siempre que el apoderado tuviese facultades para ello y la parte contraria lo consienta.

3º) Los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas, que tuvieren facultad para obligarlas.

Artículo 389º: Elección del Declarante.- La persona jurídica, sociedad o entidad colectiva podrá oponerse, en la audiencia preliminar, a que declare el representante elegido por quien la hubiera ofrecido, siempre que:

1º) Alegare que aquél no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos.

2º) Indicare el nombre del representante que prestará declaración.

El juez, sin sustanciación alguna, dispondrá que declare el propuesto.

No habiéndose formulado oportunamente dicha oposición o hecha la opción, en su caso, si el declarante manifestare en la audiencia que ignora los hechos, se tendrá por reconocida la versión de los mismos efectuada por la contraria.

Artículo 390º: Declaración por Oficio.- Cuando litigare la Nación, una provincia, una municipalidad o una repartición o ente autárquico nacional, provincial o municipal, la declaración deberá requerirse por oficio al funcionario facultado por ley para representarla, bajo apercibimiento de que el tribunal podrá tener por cierta la versión de los hechos expuestos por la contraria y sobre los cuales se le interrogó, si no es contestado dentro del plazo que el tribunal fije o no lo fuere en forma clara y categórica, afirmando o negando.

Artículo 391º: Incidentes.- Si antes de la contestación de la demanda se promoviese algún incidente, las partes podrán interrogarse sobre lo que sea objeto de éste.

Artículo 392º: Forma de la Citación.- El que deba declarar será citado por cédula, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa podrá ser tenido por confeso en los términos del Artículo 400º.

La cédula deberá diligenciarse con tres días de anticipación por lo menos. En casos de urgencia debidamente justificada este plazo podrá ser reducido por el juez, mediante resolución que en su parte pertinente se transcribirá en la cédula; en este supuesto la anticipación en su diligenciamiento no podrá ser inferior a un día.

Las partes serán notificadas en su domicilio real.

No procede citar por edictos para la declaración de partes.

Artículo 393º: Reserva del Pliego e Incomparecencia de Quien Pidió la Declaración.- La parte que ofreciere la prueba podrá reservar el interrogatorio hasta la audiencia en que deba tener lugar la declaración, limitándose a pedir la citación del declarante. El interrogatorio deberá ser entregado en secretaría en sobre cerrado al que se le pondrá cargo.

La parte que pidió la declaración perderá el derecho de exigirla si no compareciere sin justa causa a la audiencia ni hubiese presentado interrogatorio, y compareciese el citado.

Artículo 394º: Forma de las Preguntas.- Las preguntas serán claras y precisas; no contendrán más de un hecho; y solo deberán versar sobre puntos controvertidos que puedan ser de conocimiento personal del declarante.

El declarante o su letrado podrán oponerse a las preguntas formuladas que no se ajusten a lo prescripto en el párrafo anterior, la que se sustanciará con la contraria.

El juez podrá modificar de oficio y sin recurso alguno, el orden y los términos de las preguntas propuestas por las partes, sin alterar su sentido. Podrá, asimismo, eliminar los que fuesen manifiestamente inútiles.

Artículo 395º: Forma de las Contestaciones.- El declarante responderá por sí mismo de palabra y en presencia del contrario, si asistiese, sin valerse de consejos ni de borradores, pero el juez podrá permitirle la consulta de anotaciones o apuntes, cuando deba referirse a nombres, cifras u operaciones contables, o cuando así lo aconsejaren circunstancias especiales.

No se interrumpirá el acto por falta de dichos elementos, a cuyo efecto el declarante deberá concurrir a la audiencia munido de ellos.

La forma y el desarrollo del acto se regirán, en lo pertinente, conforme a lo dispuesto por el Artículo 122º.

Artículo 396º: Falta de Contestación.- Cuando, a pesar del apercibimiento que se le formulare, el declarante manifestare no recordar el hecho acerca del cual se le pregunta, el juez podrá tenerlo por confeso en la sentencia, siempre que las circunstancias hicieren inverosímil la contestación.

Artículo 397º: Pregunta Impertinente.- Si el declarante estimare impertinente una pregunta, podrá negarse a contestarla en la inteligencia de que el juez podrá tenerlo por confeso si al

sentenciar la juzgare procedente. De ello sólo se dejará constancia en el acta, sin que la cuestión pueda dar lugar a incidente o recurso alguno.

Artículo 398º: Preguntas Recíprocas.- Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzgaren convenientes con autorización o por intermedio del juez. Este podrá también interrogarlas de oficio, sobre todas las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad.

Artículo 399º: Interrupción de la Declaración.- Al que interrumpiese a la parte en su declaración, podrá imponérsele una multa de uno a cinco juristas. En caso de reincidencia podrá procederse conforme a lo dispuesto en el Artículo 32º, en cuanto correspondiere.

Artículo 400º: Confesión Ficta.- Si alguna de las partes no compareciere a declarar dentro de la media hora de la fijada para la audiencia, o si habiendo comparecido rehusare responder o respondiere de una manera evasiva, el juez, al sentenciar podrá tener por ciertos los hechos articulados por la parte contraria en el escrito constitutivo y sobre los cuales versare el interrogatorio, y aplicará lo dispuesto en el Artículo 158º inciso 5º párrafo tercero, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y las demás pruebas producidas.

En caso de incomparecencia del declarante, aunque no se hubiese extendido acta, se aplicará lo establecido en el párrafo anterior, si quien propuso la declaración hubiese presentado oportunamente el interrogatorio y el declarante estuviese debidamente notificado.

Artículo 401º: Enfermedad del Declarante.- En caso de enfermedad del que deba declarar, el juez o uno de los miembros del tribunal comisionado al efecto, se trasladará al domicilio o lugar en que se encontrare el declarante, donde se llevará a cabo la declaración en presencia de la otra parte, si asistiere, o del apoderado, según aconsejen las circunstancias.

Artículo 402º: Justificación de la Enfermedad.- La enfermedad deberá justificarse con anticipación suficiente a la audiencia, mediante certificado médico. En éste deberá consignarse la fecha, el lugar donde se encuentra el enfermo y el tiempo que durará el impedimento para concurrir al tribunal.

Si quien ofreció la prueba impugnar el certificado, el juez ordenará el examen del citado por un médico forense. Si se comprobare que pudo comparecer, se estará a los términos del Artículo 400º, párrafo primero.

Artículo 403º: Litigante Domiciliado Fuera de la Sede del Juzgado.- La parte que tuviere domicilio a menos de doscientos kilómetros del asiento del juzgado, deberá concurrir a declarar ante el juez de la causa, en la audiencia que se señale.

Artículo 404º: Ausencia del País.- Si luego de citado, el declarante tuviere que ausentarse del país, deberá requerir al juez que anticipe o postergue la audiencia, si fuere posible.

Si no formulare oportunamente dicho pedido, la audiencia se llevará a cabo y se tendrá a dicha parte por confesa, si no compareciere, en los términos del Artículo 400º.

Artículo 405º: Declaraciones en Primera y Segunda Instancia.- Las declaraciones podrán pedirse una vez en cada instancia; en la primera, en la oportunidad establecida por el Artículo 387º; y en la alzada, en el supuesto del Artículo 252º, inciso 4º).

Artículo 406º: Efectos de la Confesión Expresa.- Si de la declaración judicial surgiere confesión expresa, ésta constituirá plena prueba, salvo cuando:

1º) Dicho medio de prueba estuviere excluido por la ley respecto de los hechos que constituyen el objeto del juicio, o incidiere sobre derechos que el confesante no puede renunciar o transigir válidamente.

2º) Recayere sobre hechos cuya investigación prohiba la ley.

3º) Se opusiere a las constancias de instrumentos fehacientes de fecha anterior, agregados al expediente.

Artículo 407º: Alcance de la Confesión.- En caso de duda, la confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace.

La confesión es indivisible, salvo cuando:

1º) El confesante invocare hechos impositivos, modificativos o extintivos, o absolutamente separables, independientes unos de otros.

2º) Las circunstancias calificativas expuestas por quien confiesa fueren contrarias a una presunción legal o inverosímiles.

3º) Las modalidades del caso hicieren procedente la divisibilidad.

Artículo 408º: Confesión Extrajudicial.- La confesión hecha fuera de juicio, por escrito o verbalmente, frente a la parte contraria o a quien la represente, obliga en el juicio siempre que esté acreditada por los medios de prueba establecidos por la ley. Quedará excluida la testimonial, cuando no hubiere principio de prueba por escrito.

La confesión hecha fuera de juicio a un tercero, constituirá fuente de presunción simple.

SECCIÓN 5ª

Prueba de Testigos

Artículo 409º: Procedencia.- Toda persona mayor de catorce años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por ley. Los testigos que tengan su domicilio fuera del lugar del asiento del tribunal pero dentro de un radio de setenta kilómetros, están obligados a comparecer para prestar declaración ante el tribunal de la causa, si lo solicitare la parte que los propone y el testigo no justificare imposibilidad de concurrir ante dicho tribunal, en cuyo caso prestarán declaración ante el juez o juez de paz de su domicilio. También lo harán ante estos últimos los testigos domiciliados a una distancia mayor a la mencionada precedentemente.

Artículo 410º: Testigos Excluidos.- No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado legalmente, salvo si se tratare de reconocimiento de firmas.

Artículo 411º: Oposición.- Sin perjuicio de la facultad del juez de desestimar de oficio y sin sustanciación alguna el ofrecimiento de prueba testimonial que no fuese admisible, o de testigos cuya declaración no procediese por disposición de la ley, las partes podrán formular oposición si indebidamente se la hubiere ordenado.

Artículo 412º: Ofrecimiento.- Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, deberán presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio. Si por las circunstancias del caso a la parte le fuere imposible conocer alguno de esos datos, bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su citación.

El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban presentarse los testigos.

Artículo 413º: Número de Testigos.- Cada parte podrá ofrecer hasta cinco testigos, máximo que el juez podrá ampliar a ocho, si mediara petición expresa y debidamente fundada que justifique el ofrecimiento de este mayor número.

También podrán las partes proponer, subsidiariamente, hasta tres testigos para reemplazar a quienes no pudieren declarar por causa de muerte, incapacidad o ausencia. Si el juez hubiere ampliado el número, podrán ofrecer hasta cinco.

Artículo 414º: Audiencia.- Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el juez mandará recibirla en la audiencia que señalará, en las condiciones previstas en el Artículo 346º.

Cuando el número de los testigos ofrecidos por las partes permitiese suponer la imposibilidad de que todos declaren en el mismo día, deberá habilitarse hora y, si aún así fuere imposible completar las declaraciones en un solo acto, se señalarán tantas audiencias como fuesen necesarias en días inmediatos, determinando qué testigos depondrán en cada una de ellas, de conformidad con la regla establecida en el Artículo 422º.

El juzgado fijará una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en fecha próxima, para que declaren los testigos que faltasen a las audiencias preindicadas.

Al citar al testigo se le notificarán ambas audiencias, con la advertencia de que si faltare a la primera sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa de hasta treinta juristas.

Artículo 415º: Caducidad de la Prueba.- A pedido de parte y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistida del testigo a la parte que lo propuso si:

- 1º) No hubiere activado la citación del testigo y éste no hubiese comparecido por esa razón.
- 2º) No habiendo comparecido aquél a la primera audiencia, sin invocar causa justificada, no requiriere oportunamente las medidas de compulsión necesarias.
- 3º) Fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, ésta no solicitare nueva audiencia dentro del quinto día.

Artículo 416º: Forma de la Citación.- La citación a los testigos se efectuará por cédula. Esta deberá diligenciarse con tres días de anticipación por lo menos, y en ella se transcribirá la parte del Artículo 414º que se refiere a la obligación de comparecer y a su sanción.

Artículo 417º: Carga de la Citación.- El testigo será citado por el juzgado, salvo cuando la parte que lo propuso asumiere la carga de hacerlo comparecer a la audiencia; en este caso, si el testigo no concurriere sin justa causa, de oficio o a pedido de parte y sin sustanciación alguna se lo tendrá por desistido.

Artículo 418º: Justificación de la Inasistencia.- Además de las causas de justificación de la inasistencia libradas a la apreciación judicial, lo serán las siguientes:

1º) Si la citación fuere nula.

2º) Si el testigo hubiese sido citado con intervalo menor al prescrito en el Artículo 416º, salvo que la audiencia se hubiese anticipado por razones de urgencia y constare en el texto de la cédula esa circunstancia.

Artículo 419º: Testigo Imposibilitado de Comparecer.- Si alguno de los testigos se hallare imposibilitado de comparecer al juzgado o tuviere alguna otra razón atendible a juicio del juez para no hacerlo, será examinado en su casa, ante el secretario, presentes o no las partes, según las circunstancias.

La enfermedad deberá justificarse en los términos del Artículo 402º, párrafo primero. Si se comprobare que pudo comparecer, se le impondrá multa de hasta treinta juristas y, ante el informe del secretario, se fijará audiencia de inmediato, la que deberá realizarse dentro del quinto día, notificándose a las partes con habilitación de días y horas y disponiendo la comparecencia del testigo por medio de la fuerza pública.

Artículo 420º: Incomparecencia y Falta de Interrogatorio.- Si la parte que ofreció el testigo no concurriera a la audiencia por sí o por apoderado y no hubiese dejado interrogatorio, se la tendrá por desistida de aquél, sin sustanciación alguna.

Artículo 421º: Pedido de Explicaciones a las Partes.- Si las partes estuviesen presentes, el juez o el secretario, en su caso, podrá pedirles las explicaciones que estimare necesarias sobre los hechos. Asimismo, las partes podrán formularse recíprocamente las preguntas que estimaren convenientes.

Artículo 422º: Orden de las Declaraciones.- Los testigos estarán en lugar desde donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Serán llamados sucesiva y separadamente, alternándose, en lo posible, los del actor con los del demandado, a menos que el juzgado estableciere otro orden por razones especiales.

Artículo 423º: Juramento o Promesa de Decir Verdad.- Antes de declarar, los testigos prestarán juramento o formularán promesa de decir verdad, a su elección, y serán informados de las consecuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas o reticentes.

Artículo 424º: Interrogatorio Preliminar.- Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados:

1º) Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio.

2º) Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, y en qué grado.

3º) Si tiene interés directo o indirecto en el pleito.

4º) Si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes.

5º) Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos.

Aunque las circunstancias individuales declaradas por el testigo no coincidieran totalmente con los datos que la parte hubiese indicado al proponerlo, se recibirá su declaración si indudablemente fuere la misma persona y, por las circunstancias del caso, la contraria no hubiere podido ser inducida en error.

Artículo 425º: Forma del Examen.- Los testigos serán libremente interrogados, por el juez o por quien lo reemplace legalmente, acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos, respetando la sustancia de los interrogatorios propuestos.

La parte contraria a la que ofreció el testigo, podrá solicitar que se formulen las preguntas que sean pertinentes, aunque no tengan estricta relación con las indicadas por quien lo propuso.

Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el Artículo 394º, párrafo tercero.

Se podrá prescindir de continuar interrogando al testigo cuando las preguntas que se propongan, o las respuestas dadas, demuestren que es ineficaz proseguir la declaración.

La forma y el desarrollo del acto se regirán, en lo pertinente, conforme a lo dispuesto por el Artículo 122º.

Artículo 426º: Forma de las Preguntas.- Las preguntas no contendrán más de un hecho; serán claras y concretas; no se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o vejatorias. No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo si fueran dirigidas a personas especializadas.

Artículo 427º: Negativa a Responder.- El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas:

1º) Si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor.

2º) Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial.

Artículo 428º: Forma de las Respuestas.- El testigo contestará sin poder leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta, se le autorizara. En este caso, se dejará constancia en el acta de las respuestas dadas mediante lectura.

Deberá siempre dar la razón de su dicho; si no lo hiciere, el juez la exigirá.

Artículo 429º: Interrupción de la Declaración.- Al que interrumpiere al testigo en su declaración podrá imponérsele una multa que no exceda de cinco juristas. En caso de reiteración incurrirá en el doble de la multa sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieren.

Artículo 430º: Permanencia.- Después que prestaren su declaración, los testigos permanecerán en la sala del juzgado hasta que concluya la audiencia, a no ser que el juez dispusiese lo contrario.

Artículo 431º: Careo.- Se podrá decretar el careo entre testigos o entre éstos y las partes.

Si por residir los testigos o las partes en diferentes lugares el careo fuere dificultoso o imposible, el juez podrá disponer nuevas declaraciones por separado, de acuerdo con el interrogatorio que él formule.

Artículo 432º: Falso Testimonio u Otro Delito.- Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de falso testimonio u otro delito, el juez podrá decretar la detención de los presuntos culpables, remitiéndolos a disposición del juez competente, a quien se enviará también testimonio de lo actuado.

Artículo 433º: Suspensión de la Audiencia.- Cuando no puedan examinarse todos los testigos el día señalado, se suspenderá el acto para continuarlo en los siguientes sin necesidad de nueva citación, expresándolo así en el acta que se extienda.

Artículo 434º: Reconocimiento de Lugares.- Si el reconocimiento de algún sitio contribuyese a la eficacia del testimonio, podrá hacerse en él el examen de los testigos.

Artículo 435º: Prueba de Oficio.- El juez podrá disponer de oficio la declaración en el carácter de testigos, de personas mencionadas por las partes en los escritos de constitución del proceso o cuando, según resultare de otras pruebas producidas, tuvieren conocimiento de hechos que puedan gravitar en la decisión de la causa.

Asimismo, podrá ordenar que sean examinados nuevamente los ya interrogados, para aclarar sus declaraciones o proceder al careo.

Artículo 436º: Testigos Domiciliados Fuera de la Jurisdicción del Juzgado.- En el escrito de ofrecimiento de prueba, la parte que hubiese presentado testigos que deban declarar fuera del lugar del juicio, acompañará el interrogatorio e indicará los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio, quienes deberán ser abogados o procuradores de la matrícula de la jurisdicción del tribunal requerido, excepto cuando por las leyes locales estuvieren autorizadas otras personas. Los comisionados podrán sustituir la autorización.

No se admitirá la prueba si en el escrito no se cumplieren dichos requisitos.

Artículo 437º: Depósito y Examen de los Interrogatorios.- En el caso del artículo anterior el interrogatorio quedará a disposición de la parte contraria, la que podrá, dentro del quinto día, proponer preguntas. El juez examinará los interrogatorios, pudiendo eliminar las preguntas superfluas y agregar las que considere pertinentes.

Artículo 438º: Informe acerca del Juzgado de Radicación.- Asimismo, en el caso del Artículo 436º, fijará el plazo dentro del cual la parte que ofreció la prueba debe informar acerca del juzgado en que ha quedado radicado el oficio o exhorto y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.

Artículo 439º: Ampliación del Interrogatorio.- En el acto de la declaración ante el juzgado oficiado, las personas autorizadas podrán ampliar el interrogatorio, facultad de la que se deberá dejar constancia en el oficio o exhorto.

Artículo 440º: Excepciones a la Obligación de Comparecer.- Exceptúanse de la obligación de comparecer a prestar declaración: al Presidente y Vicepresidente de la Nación, Gobernadores y Vicegobernadores de las Provincias, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de los poderes ejecutivos de la Nación y de las provincias, Legisladores nacionales y provinciales, Magistrados judiciales, Obispos, Embajadores, Ministros plenipotenciarios y Cónsules generales, Intendentes municipales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas en servicio activo.

Dichos testigos declararán por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir verdad, dentro del plazo que fije el juzgado, debiendo entenderse que no excederá de diez días si no se lo hubiese indicado especialmente.

La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá presentar un pliego de preguntas a incluir en el interrogatorio.

Artículo 441º: Idoneidad de los Testigos.- Dentro del plazo de prueba las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.

SECCIÓN 6ª

Prueba de Peritos

Artículo 442º: Procedencia.- Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiriere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada.

Artículo 443º: Ofrecimiento. Puntos de Pericia.- Al ofrecer la prueba pericial se indicará la especialización que ha de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia; si la parte ejerciera la facultad de designar consultor técnico, deberá indicar, en el mismo escrito, su nombre, profesión y domicilio.

La otra parte, al contestar el traslado, podrá formular la manifestación a que se refiere el Artículo 462º o, en su caso, proponer otros puntos que a su juicio deban constituir también objeto de la prueba, observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció, y ejercer la facultad de designar consultor técnico cumpliendo los mismos recaudos señalados en el primer párrafo.

Si se hubiesen presentado otros puntos de pericia u observado la procedencia de los propuestos por la parte que ofreció la prueba, se otorgará traslado a ésta.

Artículo 444º: Designación de Peritos y Consultores Técnicos.- La prueba pericial estará a cargo de un perito único designado de oficio por el juez, salvo cuando una ley especial establezca un régimen distinto.

En los procesos de declaración de incapacidad y de inhabilitación, se estará a lo dispuesto en el Artículo 607º, inciso 3º).

En el juicio por nulidad de testamento, el juez podrá nombrar de oficio tres peritos cuando por la importancia y complejidad del asunto lo considere conveniente.

Si los peritos fuesen tres, el juez les impartirá las directivas sobre el modo de proceder para realizar las operaciones tendientes a la producción y presentación del dictamen.

Cada parte tiene la facultad de designar un consultor técnico. Cuando los litisconsortes no concordaran en la designación del consultor técnico de su parte, el juzgado desinsaculará a uno de los propuestos.

Artículo 445º: Acuerdo de Partes. Determinación de los Puntos de Pericia. Plazo.- De no existir acuerdo de partes proponiendo perito y puntos de pericia y designando consultores técnicos, en la audiencia prevista en el Artículo 345º el juez designará perito por sorteo y fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos, y señalará el plazo dentro del cual el perito deberá cumplir su cometido. Si la resolución no fijase dicho plazo se entenderá que es de quince días.

Artículo 446º: Anticipo de Gastos.- Si el o los peritos lo solicitaren dentro del tercer día de haber aceptado el cargo, y si correspondiere por la índole de la pericia, la o las partes que han ofrecido la prueba deberán depositar la suma que el juzgado fije para gastos de las diligencias. Dicho importe deberá ser depositado dentro del quinto día, plazo que comenzará a correr a partir de la notificación personal o por cédula de la providencia que lo ordena; se entregará al perito, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de honorarios. La resolución sólo será susceptible de recurso de reposición.

La falta de depósito dentro del plazo importará el desistimiento de la prueba.

Artículo 447º: Idoneidad.- Si la profesión estuviese reglamentada, el o los peritos deberán tener título habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales deban expedirse.

En caso contrario, o cuando no hubiere en el lugar del proceso perito con título habilitante, podrá ser nombrada cualquier persona con conocimientos en la materia.

Artículo 448º: Recusación.- Los peritos podrán ser recusados por justa causa, dentro del quinto día de la audiencia preliminar.

Podrán también ser recusados por causa sobreviniente a la designación, o cuya existencia se hubiese conocido con posterioridad, hasta tres días después de conocida.

Artículo 449º: Causales.- Son causas de recusación del perito las previstas respecto de los jueces; también, la falta de título o incompetencia en la materia de que se trate, en el supuesto del Artículo 450º, párrafo segundo.

Artículo 450º: Trámite. Resolución.- Deducida la recusación se hará saber al perito para que en el acto de la notificación o dentro del tercer día manifieste si es o no cierta la causal. Reconocido el hecho o guardado silencio, será reemplazado; si se lo negare, el incidente tramitará por separado, sin interrumpir el curso del proceso.

De la resolución no habrá recurso pero esta circunstancia podrá ser considerada por la alzada al resolver sobre lo principal.

Artículo 451º: Reemplazo.- En caso de ser admitida la recusación, el juez, de oficio, reemplazará al perito o peritos recusados, sin otra sustanciación.

Artículo 452º: Reemplazo del Consultor Técnico.- El consultor técnico podrá ser reemplazado por la parte que lo designó; el reemplazante no podrá pretender una intervención que importe retrogradar la práctica de la pericia.

Artículo 453º: Aceptación del Cargo.- Dentro del tercer día de notificados de su designación, los peritos aceptarán el cargo o se excusarán por justa causa ante el secretario; en el caso de no tener título habilitante, la aceptación se hará bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Serán citados por cédula u otro medio autorizado por este Código.

Si el perito no aceptare, no se excusare o no concurriere dentro del plazo fijado, o no aceptare el cargo dentro del segundo día de notificado del rechazo de la excusación, el juez nombrará otro en su reemplazo, de oficio y sin más trámite.

La ley orgánica de tribunales determinará el plazo durante el cual quedarán excluidos de la lista los peritos que reiterada o injustificadamente se hubieran negado a aceptar el cargo, o incurrieren en la situación prevista por el artículo siguiente.

Artículo 454º: Remoción.- Será removido el perito que después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El juez, de oficio, nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen, salvo el caso de renuncia fundada.

El reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios.

En los supuestos previstos por el Artículo 444º, segundo, tercero y cuarto párrafos, la negligencia de uno de los peritos no excusará a los otros.

Artículo 455º: Práctica de la Pericia.- La pericia estará a cargo del perito designado por el juez.

Los consultores técnicos, las partes y sus letrados podrán presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideraren pertinentes.

Artículo 456º: Dictamen Inmediato.- Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de tal naturaleza que permita al perito dictaminar inmediatamente, podrá dar su informe por escrito o en audiencia; en el mismo acto los consultores técnicos podrán formular las observaciones pertinentes.

Artículo 457º: Planos, Exámenes Científicos y Reconstrucción de los Hechos.- De oficio o a pedido de parte, el juez podrá ordenar:

1º) Ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas o de otra especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos técnicos.

2º) Exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos.

3º) Reconstrucción de hechos para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de una manera determinada.

A estos efectos podrá disponer que comparezcan el perito y los testigos y hacer saber a las partes que podrán designar consultores técnicos o hacer comparecer a los ya designados para que participen en las tareas, en los términos de los Artículos 455º y, en su caso, 459º.

Artículo 458º: Presentación del Dictamen.- El perito presentará su dictamen por escrito, con copias para las partes. Contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funde.

Los consultores técnicos de las partes podrán presentar por separado sus respectivos informes, dentro del plazo fijado al perito y cumpliendo los mismos requisitos.

Artículo 459º: Traslado. Explicaciones. Nueva Pericia.- Del dictamen del perito se dará traslado a las partes, que se notificará por cédula. De oficio o a instancia de cualquiera de ellas,

el juez podrá ordenar que el perito dé las explicaciones que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso.

Si el acto se cumpliera en audiencia y los consultores técnicos estuvieran presentes, con autorización del juez, podrán observar lo que fuere pertinente; si no comparecieran esa facultad podrá ser ejercida por los letrados.

Si las explicaciones debieran presentarse por escrito, las observaciones a las dadas por el perito podrán ser formuladas por los consultores técnicos o, en su defecto, por las partes, dentro del quinto día de notificadas por ministerio de la ley. La falta de impugnaciones o pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito, no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 460º.

Cuando el juez lo estimare necesario podrá disponer que se practique otra pericia, o se perfeccione o amplíe la anterior, por el mismo perito u otro de su elección.

El perito que no concurriere a la audiencia o no presentare el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo, perderá su derecho a cobrar honorarios, total o parcialmente.

Artículo 460º: Eficacia Probatoria del Dictamen.- La eficacia probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme a los Artículos 456º y 459º y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.

Artículo 461º: Consultas Científicas o Técnicas.- A petición de parte o de oficio, el juez podrá requerir opinión a universidades, academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización.

Artículo 462º: Impugnación. Desinterés. Cargo de los Gastos y Honorarios.- Los jueces deberán regular los honorarios de los peritos y demás auxiliares de la justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos. Los honorarios del consultor técnico integrarán la condena en costas.

Al contestar el traslado a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 443º, la parte contraria a la que ha ofrecido la prueba pericial podrá:

1º) Impugnar su procedencia por no corresponder conforme a lo dispuesto en el Artículo 442º; si no obstante haber sido declarada procedente, de la sentencia resultare que no ha constituido uno de los elementos de convicción coadyuvante para la decisión, los gastos y honorarios del perito y consultores técnicos serán a cargo de la parte que propuso la pericia.

2º) Manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstendrá, por tal razón, de participar en ella; en este caso, los gastos y honorarios de los peritos y consultores técnicos serán siempre a cargo de quien la solicitó, excepto cuando para resolver a su favor se hiciere mérito de aquélla.

SECCIÓN 7ª

Reconocimiento Judicial

Artículo 463º: Medidas Admisibles. - El juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a pedido de parte:

1º) El reconocimiento judicial de lugares o de cosas.

2º) La concurrencia de peritos y testigos a dicho acto.

3º) Las medidas previstas en el Artículo 457º.

Al decretar el examen se individualizará lo que deba constituir su objeto y se determinará el lugar, fecha y hora en que se realizará. Si hubiere urgencia, la notificación se hará de oficio y con un día de anticipación.

Artículo 464º: Forma de la Diligencia.- A la diligencia asistirá el juez o los miembros del tribunal que éste determine. Las partes podrán concurrir con sus representantes, consultores técnicos y letrados y formular las observaciones pertinentes, de las que se dejará constancia en acta.

El tribunal y las partes podrán interrogar en ese acto a los testigos y peritos sobre el objeto del reconocimiento.

SECCIÓN 8ª

Conclusión de la Causa Para Definitiva

Artículo 465º: Alternativa.- Cuando no hubiese mérito para recibir la causa a prueba, deberá procederse con arreglo a lo establecido en el Artículo 344º, en lo pertinente.

Artículo 466º: Agregación de las Pruebas. Alegatos.- Producida toda la prueba ordenada, el secretario, sin necesidad de gestión alguna de los interesados, o sin sustanciarla si se hiciere, ordenará que se agregue al expediente.

Cumplido este trámite el secretario pondrá los autos en secretaría para alegar; esta providencia se notificará por cédula y una vez firme se entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de seis días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyesen conveniente el escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común.

Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviese perderá el derecho de alegar sin que se requiera intimación. El plazo para presentar el alegato es común.

Artículo 467º: Llamamiento de Autos.- Sustanciado el pleito en el caso del Artículo 465º, o transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior, el secretario, sin petición de parte, pondrá el expediente a despacho agregando los alegatos si se hubiesen presentado. El juez, acto continuo, llamará autos para sentencia.

Artículo 468º: Efectos del Llamamiento de Autos.- Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiese en los términos del Artículo 33º, inciso 4º. Estas deberán ser ordenadas en un solo acto.

Artículo 469º: Notificación de la Sentencia.- La sentencia será notificada de oficio, dentro del tercer día. En la cédula se transcribirá la parte dispositiva. Al litigante que lo pidiere, se le entregará una copia simple de la sentencia, firmada por el secretario o por el jefe de despacho.

TITULO III

Procesos Monitorio y Sumarísimo

CAPITULO I

Proceso de Estructura Monitoria

Artículo 470º: Supuestos.- Se aplicarán las normas del presente título a las controversias que versen sobre:

- a) obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios o de dar cosas muebles ciertas y determinadas;
- b) división de condominio, cuando la división en especie fuera imposible;
- c) restitución de la cosa mueble dada en comodato;
- d) desalojo de bienes inmuebles urbanos y rurales por vencimiento del plazo contractual;
- e) desalojo de bienes inmuebles urbanos y rurales por falta de pago, siempre que se hubiere justificado por medio fehaciente la interpelación al locatario;
- f) obligación de otorgar escritura pública y transferencia de automotores;
- g) cancelación de prenda o hipoteca;
- h) los procesos de ejecución, en los casos autorizados por este Código u otras leyes, con excepción de la ejecución de sentencia.

Artículo 471º: Requisitos.- Para acceder al proceso monitorio, a excepción del supuesto contemplado en el Artículo 470º inciso h), el actor deberá presentar instrumento público o instrumento privado reconocido judicialmente o cuya firma estuviere certificada por escribano público, de cuyo contenido surja el derecho en que se funda la acción.

Artículo 472º: Preparación del Proceso Monitorio.- Podrá prepararse el proceso monitorio pidiendo previamente el interesado que sea reconocido el instrumento privado. La citación al futuro demandado para que efectúe el reconocimiento de su firma se hará en la forma prescripta en los Artículos 325º y 326º bajo apercibimiento de que si no compareciere o no contestare categóricamente se tendrá por reconocido el documento. Será de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en los Artículos 510º a 514º.

Artículo 473º: Sentencia.- Solicitada la apertura del procedimiento monitorio, el juez examinará cuidadosamente si el título cumple con los recaudos legales. En caso afirmativo, dictará sentencia monitoria conforme a la pretensión deducida y a las particularidades que en cada caso establece la ley.

Artículo 474º: Notificación.- La sentencia monitoria se notificará en el domicilio real mediante cédula, acta notarial o medio equivalente, que permita la adjunción y entrega de las copias de la demanda y documental acompañada. En caso que se ignorase el actual domicilio del

destinatario de la notificación, ésta se practicará por edictos que se publicarán por una vez en el Boletín Oficial y en un periódico, cumpliéndose los recaudos previstos por los Artículos 140º, 141º y 142º.

Artículo 475º: Oposición a la Sentencia Monitoria.- En los supuestos previstos por los incisos a), f) y g) del Artículo 470º, el demandado podrá articular oposición, la que deberá deducirse en la forma y en el término previstos por los Artículos 324º, 331º y 341º, ofreciendo toda la prueba de que intente valerse. De ser procedente, se correrá traslado al actor por el término de cinco días quien podrá ofrecer su prueba.

En los demás casos, la oposición, que deberá ser acompañada con el ofrecimiento de la prueba, se formulará dentro de los cinco días. De ser procedente, se correrá traslado por igual término al actor, quien podrá ofrecer prueba.

La continuación del trámite se regirá por las normas que este Código específicamente prevé en cada supuesto o las leyes que regulen el procedimiento de que se trate.

Artículo 476º: Trámites Ulteriores. Sentencia que Resuelve la Oposición.- En todo lo no establecido para el caso específico, el trámite de la oposición se regirá por las normas del proceso sumarísimo. No se requerirá decisión expresa sobre la admisibilidad de las defensas o excepciones. La sentencia que resuelva la oposición tendrá los efectos que correspondan conforme la naturaleza procesal y sustancial de la pretensión deducida por vía monitoria.

Artículo 477º: Rechazo “In Limine”.- Deberá rechazarse “in limine” aquella oposición que, sobre el fondo de la cuestión, no la funde ni ofrezca prueba tendiente a desacreditar la eficacia probatoria del documento que fue base de la sentencia monitoria.

Las prescripciones del párrafo anterior no se aplicarán a los procesos de ejecución, los que se regirán por sus normas específicas.

Artículo 478º: Prueba Admisibles.- La prueba a ofrecer para fundar la oposición planteada no podrá limitarse a la declaración de parte.

Artículo 479º: Ejecución. Costas.- En defecto de oposición o resuelta ésta por decisión firme, se continuará con la ejecución de la sentencia monitoria, aplicándose en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la prestación debida, las normas del Libro III, Título I, Capítulo I de este Código.

La impugnación de la regulación de honorarios mediante el recurso de reposición con apelación en subsidio tramitará por vía incidental sin suspender la ejecución.

Artículo 480º: Apelación. Procedencia.- La sentencia que resuelva la oposición será apelable en relación cuando:

- 1º) Las defensas articuladas hubieran sido declaradas inadmisibles;
- 2º) Cuando las defensas hubieran sido tramitadas como de puro derecho;
- 3º) Cuando se hubiera producido prueba respecto de las opuestas;
- 4º) Cuando versaren sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso monitorio o causaren gravamen irreparable en el juicio de conocimiento ulterior.

CAPITULO II

Proceso Sumarísimo

Artículo 481º: Trámite.- En los casos en que se promoviese juicio sumarísimo, presentada la demanda, el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida, resolverá de oficio y como primera providencia si correspondiese que la controversia se sustancie por esta clase de proceso. Si así lo decidiese, el trámite se ajustará a lo establecido para el proceso ordinario, con estas modificaciones:

- 1º) No serán admisibles excepciones de previo y especial pronunciamiento, ni reconvencción.
- 2º) Todos los plazos serán de tres días, con excepción del de contestación de demanda y el otorgado para fundar la apelación y contestar el traslado del memorial, que será de cinco días.
- 3º) Contestada la demanda se procederá conforme al Artículo 344º. La audiencia prevista en el Artículo 345º deberá ser señalada dentro de los diez días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.
- 4º) No procederá la presentación de alegatos.
- 5º) Solo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias. La apelación se concederá en relación y en efecto devolutivo, salvo cuando el cumplimiento de la sentencia pudiese ocasionar un perjuicio irreparable en cuyo caso se otorgará en efecto suspensivo.

LIBRO III

PROCESOS DE EJECUCIÓN

TÍTULO I

Ejecución de Sentencias

CAPÍTULO I

Sentencias de Tribunales Argentinos

Artículo 482º: Resoluciones Ejecutables.- Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo.

Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia aunque se hubiere interpuesto recurso ordinario o extraordinario contra ella, por los importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme. El título ejecutivo consistirá, en este caso, en un testimonio que deberá expresar que ha recaído sentencia firme respecto del rubro que se pretende ejecutar por haber sido consentido.

Si hubiere duda acerca de la existencia de ese requisito se denegará el testimonio; la resolución del juez que lo acuerde o, en su caso, lo deniegue, será irrecurrible.

Artículo 483º: Aplicación a Otros Títulos Ejecutables.- Las disposiciones de este título serán asimismo aplicables:

1º) A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados.

2º) A la ejecución de multas procesales.

3º) Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.

Artículo 484º: Competencia.- Será juez competente para la ejecución:

1º) El que pronunció la sentencia.

2º) El de otra competencia territorial si así lo impusiere el objeto de la ejecución, total o parcialmente.

3º) El que haya intervenido en el proceso principal si mediare conexión directa entre causas sucesivas.

Artículo 485º: Suma Líquida. Embargo.- Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada, a instancia de parte se procederá al embargo de bienes, de conformidad con las normas establecidas para el juicio ejecutivo.

Se entenderá que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el monto de la liquidación, aún cuando aquél no estuviere expresado numéricamente.

Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

Artículo 486º: Liquidación.- Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiese presentado la liquidación dentro de diez días contados desde que aquélla fuere ejecutable, podrá hacerlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que en la sentencia se hubiesen fijado.

Presentada la liquidación se dará traslado a la otra parte por cinco días.

Artículo 487º: Conformidad. Objeciones.- Expresada la conformidad por el deudor, o transcurrido el plazo sin que se hubiese contestado el traslado, se procederá a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescripta por el Artículo 485º.

Si mediare impugnación se aplicarán las normas establecidas para los incidentes en los Artículos 173º y siguientes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y en los dos anteriores, el acreedor podrá solicitar se intime por cédula al ejecutado el pago de lo adeudado, cuando se trate de cantidad líquida y determinada o hubiere liquidación aprobada.

Artículo 488º: Citación de Venta.- Trabado el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes embargados.

Las excepciones deberán oponerlas y probarlas dentro del quinto día.

Artículo 489º: Excepciones.- Sólo se considerarán legítimas las siguientes excepciones:

1º) Falsedad de la ejecutoria.

2º) Prescripción de la ejecutoria.

3º) Pago.

4º) Quita, espera o remisión.

Artículo 490º: Prueba.- Las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio.

Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la excepción sin sustanciarla. La resolución será irrecurrible.

Artículo 491º: Resolución.- Vencidos los cinco días sin que se dedujere oposición, se mandará continuar la ejecución sin recurso alguno.

Si se hubiese deducido oposición, el juez, previo traslado al ejecutante por cinco días, mandará continuar la ejecución o si declarare procedente la excepción opuesta, levantará el embargo.

Artículo 492º: Recursos.- La resolución que desestime las excepciones será apelable en efecto devolutivo, siempre que el ejecutante diere fianza o caución suficiente.

Todas las apelaciones que fueren admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se concederán en efecto diferido.

Artículo 493º: Cumplimiento.- Consentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor.

Artículo 494º: Adecuación de la Ejecución.- A pedido de parte el juez establecerá las modalidades de la ejecución o ampliará o adecuará las que contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.

Artículo 495º: Condena a Escriturar.- La sentencia que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliera dentro del plazo fijado, el juez la suscribirá por él y a su costa.

La escritura se otorgará ante el registro del escribano que proponga el ejecutante, si aquél no estuviere designado en el contrato.

El juez ordenará las medidas complementarias que correspondan.

Artículo 496º: Condena a Hacer.- En caso que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliera con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inexecución, a elección del acreedor.

Podrán imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el Artículo 34º.

La obligación se resolverá también en la forma que establece este artículo, cuando no fuere posible el cumplimiento por el deudor.

Para hacer efectiva la indemnización se aplicarán las reglas establecidas según que la sentencia haya fijado o no su monto para el caso de inexecución.

La determinación del monto de los daños tramitará ante el mismo juez por las normas de los Artículos 486º y 487º, o por juicio sumarísimo, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

Artículo 497º: Condena a no Hacer.- Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnicen los daños y perjuicios, conforme a lo prescripto en el artículo anterior.

Artículo 498º: Condena a Entregar Cosas.- Cuando la condena fuere de entregar alguna cosa, se librá mandamiento para desapoderar de ella al vencido, quien podrá oponer las excepciones a que se refiere el Artículo 489º, en lo pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse, se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa determinación si fuere necesaria, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de su monto se hará ante el mismo juez, por las normas de los Artículos 486º y 487º o por juicio sumarísimo, según aquél lo establezca. La resolución será irrecurrible.

Artículo 499º: Liquidación en Casos Especiales.- Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil justificación o requirieren conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos árbitros o, si hubiere conformidad de partes, a la de amigables compondores.

La liquidación de sociedades, incluida la determinación del carácter propio o ganancial de los bienes de la sociedad conyugal, impuesta por sentencia, se sustanciará por juicio ordinario o sumarísimo o incidente, según lo establezca el juez de acuerdo con las modalidades de la causa. Esta resolución será irrecurrible.

CAPÍTULO II

Sentencias de Tribunales Extranjeros

Artículo 500º: Conversión en Título Ejecutorio.- Las sentencias de tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país del que provengan.

Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos:

1º) Que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane de tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea

consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero.

2º) Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa.

3º) Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiese sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional.

4º) Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino.

5º) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por un tribunal argentino.

Artículo 501º: Competencia. Recaudos. Sustanciación.- La ejecución de la sentencia dictada por un tribunal extranjero se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando su testimonio legalizado y traducido y de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la sentencia misma.

Para el trámite del exequátur se aplicarán las normas de los incidentes.

Si se dispusiere la ejecución, se procederá en la forma establecida para las sentencias pronunciadas por tribunales argentinos.

Artículo 502º: Eficacia de Sentencia Extranjera.- Cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, ésta sólo tendrá eficacia si reúne los requisitos del Artículo 500º.

Artículo 503º: Laudos de Tribunales Arbitrales Extranjeros.- Los laudos pronunciados por tribunales arbitrales extranjeros podrán ser ejecutados por el procedimiento establecido en los artículos anteriores, siempre que:

1º) Se cumplieren los recaudos del Artículo 500º, en lo pertinente y, en su caso, la prórroga de jurisdicción hubiese sido admisible en los términos del Artículo 1º.

2º) Las cuestiones que hayan constituido el objeto del compromiso no se encuentren excluidas del arbitraje conforme a lo establecido por el Artículo 728º.

TÍTULO II

Juicio Ejecutivo

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 504º: Procedencia.- Se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero, o fácilmente liquidables.

Si la obligación estuviere subordinada a condición o prestación, la vía ejecutiva procederá si del título o de otro instrumento público o privado reconocido que se presente junto con aquél, o de la diligencia prevista en el Artículo 509º, inciso 4º, resultare haberse cumplido la condición o prestación.

Si la obligación fuere en moneda extranjera, la ejecución deberá promoverse por el equivalente en moneda nacional, según la cotización del banco oficial que corresponda al día de la iniciación o la que las partes hubiesen convenido, sin perjuicio del reajuste que pudiere corresponder al día del pago.

Artículo 505º: Opción por Proceso de Conocimiento.- Si, en los casos en que por este Código, correspondiere un proceso de ejecución, el actor optare por uno de conocimiento y hubiere oposición del demandado, el juez, atendiendo a las circunstancias del caso, resolverá cuál es la clase de proceso aplicable. La resolución no será recurrible.

Artículo 506º: Deuda Parcialmente Líquida.- Si del título ejecutivo resultare una deuda de cantidad líquida y otra que fuese ilíquida, podrá procederse ejecutivamente respecto de la primera.

Artículo 507º: Títulos Ejecutivos.- Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes:

1º) El instrumento público presentado en forma.

2º) El instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviere certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo.

3º) La confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución.

4º) La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el Artículo 509º.

5º) La letra de cambio, factura de crédito, cobranza bancaria de factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio o ley especial.

6º) El crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles.

7º) Los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial.

Artículo 508º: Crédito por Expensas Comunes.- Constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal.

Con el escrito de promoción de la ejecución deberán acompañarse certificados de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad y una copia autenticada de éste. Si el reglamento no los hubiere previsto deberá agregarse constancia de la deuda líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios para abonarla, expedida por el administrador o quien haga sus veces.

Artículo 509º: Preparación de la Vía Ejecutiva.- Podrá prepararse la acción ejecutiva, pidiendo previamente:

1º) Que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución.

2º) Que en la ejecución por alquileres o arrendamientos, el demandado manifieste previamente si es locatario o arrendatario y, en caso afirmativo, exhiba el último recibo. Si el requerido negase categóricamente ser inquilino y su condición de tal no pudiese probarse sumariamente en forma indubitada, no procederá la vía ejecutiva y el pago del crédito será reclamado por juicio ordinario. Si durante la sustanciación de éste se probare el carácter de inquilino, en la sentencia se le impondrá una multa a favor de la otra parte, equivalente al treinta por ciento del monto de la deuda.

3º) Que el juez señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago, si el acto constitutivo de la obligación no lo designare o si autorizare al deudor para realizarlo cuando pudiera o tuviese medios para hacerlo. El juez dará traslado y resolverá sin más trámite ni recurso alguno.

4º) Que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda fuese condicional.

Artículo 510º: Citación del Deudor.- La citación al demandado para que efectúe el reconocimiento de su firma se hará en la forma prescripta en los Artículos 325º y 326º, bajo apercibimiento de que si no compareciere o no contestare categóricamente, se tendrá por reconocido el documento, o por confesados los hechos en los demás casos.

El citado deberá comparecer personalmente y formular la manifestación ante el juez. Dicha manifestación no podrá ser reemplazada por un escrito; tampoco podrá formularse por medio de gestor.

Si el citado no compareciere, o no probare justa causa de inasistencia, se hará efectivo inexcusablemente el apercibimiento y se procederá como si el documento hubiere sido reconocido por el deudor personalmente, o hubiese confesado los hechos, en los demás casos. El desconocimiento de la firma por alguno de los coejecutados no impide que se cumpla con lo dispuesto por los Artículos 515º y 526º, respecto de los deudores que la hayan reconocido, o a quienes se los haya tenido por reconocida.

Artículo 511º: Efectos del Reconocimiento de la Firma.- Reconocida la firma del instrumento quedará preparada la acción ejecutiva, aunque se hubiese negado su contenido.

Artículo 512º: Desconocimiento de la Firma.- Si el documento no fuere reconocido, el juez, a pedido del ejecutante, previo dictamen de un perito designado de oficio, declarará si la firma es auténtica. Si lo fuere, se procederá según lo establece el Artículo 515º y se impondrán al ejecutado las costas y una multa equivalente al treinta por ciento del monto de la deuda, que aquél deberá dar a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones. Si no las opusiere, el importe de la multa integrará el capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia de remate.

La resolución que declare la autenticidad de la firma e imponga la multa será apelable en efecto diferido.

Artículo 513º: Caducidad de las Medidas Preparatorias.- Se producirá la caducidad de las medidas preparatorias del juicio ejecutivo, sin necesidad de declaración judicial, si no se dedujere la demanda dentro de los quince días de su realización. Si el reconocimiento fuere ficto, el plazo correrá desde que la resolución que lo declare hubiere quedado firme.

Artículo 514º: Firma por Autorización o a Ruego.- Si el instrumento privado hubiese sido firmado por autorización o a ruego del obligado, quedará preparada la vía ejecutiva si, citado éste, declarase que otorgó la autorización o que es cierta la deuda que el documento expresa.

Si la autorización resultare de un instrumento público, bastará citar al autorizado para que reconozca la firma.

CAPITULO II

Embargo y Excepciones

Artículo 515º: Intimación de Pago y Procedimiento para el Embargo.- El juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, y si hallare que es de los comprendidos en los Artículos 507º y 509º o en otra disposición legal, y que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, librárá mandamiento de embargo, observándose el siguiente procedimiento:

1º) Con el mandamiento, el oficial de justicia requerirá el pago al deudor. Si no se pagare en el acto el importe del capital reclamado, del estimado por el juez en concepto de intereses y costas, y de la multa establecida por el Artículo 512º, en su caso, dicho funcionario procederá a embargar bienes suficientes, a su juicio, para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento. El dinero deberá ser depositado dentro del primer día hábil siguiente en el banco de depósitos judiciales.

2º) El embargo se practicará aún cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará constancia.

En este caso, se le hará saber dentro de los tres días siguientes al de la traba.

Si se ignorase su domicilio, se nombrará al defensor oficial, previa citación por edictos que se publicarán por una sola vez.

3º) El oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes para que manifieste si se encuentran embargados o afectados por prenda u otro gravamen y, en su caso, por orden de qué juez y en qué expediente, y el nombre y domicilio de los acreedores, bajo apercibimiento de lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Si el dueño de los bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se le notificará que debe formular esta manifestación dentro del plazo para oponer excepciones.

Aunque no se hubiese trabado embargo, la ejecución continuará, pudiendo solicitar el ejecutante la medida cautelar que autoriza el Artículo 518º.

Artículo 516º: Denegación de la Ejecución.- Será apelable la resolución que denegare la ejecución.

Artículo 517º: Bienes en Poder de un Tercero. - Si los bienes embargados se encontraren en poder de un tercero, se notificará a éste en el día, personalmente o por cédula.

En el caso del Artículo 736º del Código Civil, si el notificado del embargo pagase indebidamente al deudor embargado, el juez hará efectiva su responsabilidad en el mismo expediente por el trámite de los incidentes o del juicio sumarísimo, según correspondiere atendiendo a las circunstancias del caso.

Artículo 518º: Inhibición General.- Si no se conocieren bienes del deudor o si los embargados resultaren presuntivamente insuficientes para cubrir el crédito del ejecutante, podrá solicitarse contra el ejecutado inhibición general de vender o gravar sus bienes. La medida quedará sin efecto si el deudor presentare bienes a embargo o diere caución bastante.

Artículo 519º: Orden de la Traba. Perjuicios.- El acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros disponibles.

Serán aplicables, además, las normas establecidas en el capítulo relativo a las medidas cautelares en cuanto fueren pertinentes.

Si los bienes muebles embargados formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado.

Artículo 520º: Límites y Modalidades de la Ejecución.- Durante el curso del proceso de ejecución, el juez podrá de oficio o a pedido de parte, y si las circunstancias así lo aconsejaren, fijar una audiencia para que comparezcan ejecutante y ejecutado con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar perjuicios innecesarios.

A esta audiencia deberán comparecer las partes personalmente, y se celebrará con las que concurran. No podrá señalarse una nueva con el mismo objeto, ni tampoco podrá el ejecutado promover posteriormente incidentes por causas anteriores que no fueron invocadas en dicha audiencia.

Artículo 521º: Depositario. Deber de Informar.- El oficial de justicia dejará los bienes embargados en poder de un depositario provisional que podrá ser el deudor si resultare

conveniente, salvo que aquellos se encontraren en poder de un tercero y éste requiriese el nombramiento a su favor.

Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el depositario deberá poner el hecho oportunamente en conocimiento del juez, si no lo hubiese expresado ante el oficial de justicia, lo que se hará saber a las partes a los fines del Artículo 200º.

Artículo 522º: Embargo de Inmuebles o Muebles Registrables.- Si el embargo hubiere de hacerse efectivo en bienes inmuebles o en muebles registrables, bastará su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley.

Los oficios o exhortos serán librados dentro de las cuarenta y ocho horas de la providencia que ordenare el embargo.

Artículo 523º: Costas.- Practicada la intimación, las costas del juicio serán a cargo del deudor moroso, aunque pagare en el acto de realizarse aquélla.

Artículo 524º: Ampliación Anterior a la Sentencia.- Cuando durante el juicio ejecutivo y antes de pronunciarse sentencia, venciere algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede, a pedido del actor podrá ampliarse la ejecución por su importe, sin que el procedimiento retrotraiga, y considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido.

Artículo 525º: Ampliación Posterior a la Sentencia.- Si durante el juicio, pero con posterioridad a la sentencia, vencieren nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, la ejecución podrá ser ampliada pidiéndose que el deudor exhiba dentro del quinto día los recibos correspondientes o documentos que acrediten la extinción de la obligación, bajo apercibimiento de hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidas. Si el deudor no exhibiere recibos o documentos que fuesen reconocidos por el ejecutante, o no se comprobare sumariamente su autenticidad, se hará efectivo el apercibimiento sin recurso alguno.

Lo dispuesto en este artículo y en el anterior regirá también en las ejecuciones por cobro de alquileres y expensas comunes.

La facultad que otorga este artículo no podrá ser ejercida una vez terminada la tramitación del juicio

Artículo 526º: Intimación de Pago, Oposición de Excepciones.- La intimación de pago importará la citación para oponer excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia, del escrito de iniciación y de los documentos acompañados.

Las excepciones se propondrán, dentro de cinco días, en un solo escrito, conjuntamente con el ofrecimiento de prueba.

Deberán cumplirse, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 317º y 341º, determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que se oponen.

La intimación de pago importará, asimismo, el requerimiento para que el deudor, dentro del plazo establecido en el párrafo segundo de este artículo, constituya domicilio, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los términos del Artículo 38º.

Si la ejecución fuese contra el estado provincial, el plazo para oponer excepciones y ofrecer pruebas, será de diez días.

No habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, el juez, sin otra sustanciación, pronunciará sentencia de remate.

Artículo 527º: Trámites Irrenunciables.- Son irrenunciables la intimación de pago, la citación para oponer excepciones y la sentencia.

Artículo 528º: Excepciones.- Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son:

1º) Incompetencia.

2º) Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente.

3º) Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente.

4º) Falsedad o inhabilidad del título con que se pide la ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento; la segunda se limitará a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. El reconocimiento expreso de la firma no impide la admisibilidad de la excepción de falsedad fundada en la adulteración del documento.

Estas excepciones son inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda.

5º) Prescripción.

6º) Pago documentado, total o parcial.

7º) Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución.

8º) Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentados.

9º) Cosa juzgada.

Artículo 529º: Nulidad de la Ejecución.- El ejecutado podrá solicitar dentro del plazo fijado en el Artículo 526º, por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad de la ejecución. Podrá fundarse únicamente en:

1º) No haberse hecho legalmente la intimación de pago, siempre que en acto de pedir la declaración de nulidad, el ejecutado depositare la suma fijada en el mandamiento u opusiere excepciones.

2º) Incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que el ejecutado desconozca la obligación, niegue la autenticidad de la firma, el carácter de locatario, o el cumplimiento de la condición o de la prestación.

Es inadmisibles el pedido de nulidad si el ejecutado no mencionare las excepciones que no ha podido deducir, en términos que demuestren la seriedad de su petición.

Artículo 530º: Subsistencia del Embargo.- Si se anulare el procedimiento ejecutivo o se declarare la incompetencia, el embargo trabado se mantendrá, con carácter preventivo, durante quince días contados desde que la resolución quedó firme. Se producirá la caducidad automática si dentro de ese plazo no se reiniciare la ejecución.

Artículo 531º: Trámite.- El juez desestimarán sin sustanciación alguna las excepciones que no fueren de las autorizadas por la ley, o que no se hubieren opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiese dado. En ese mismo acto dictará sentencia de remate.

Si se hallaren cumplidos los requisitos pertinentes, dará traslado de las excepciones al ejecutante por cinco días, quien al contestarlo ofrecerá la prueba de que intente valerse.

No se hará declaración especial previa acerca de la admisibilidad o in admisibilidad de las excepciones.

Artículo 532º: Excepciones de Puro Derecho. Falta de Prueba.- Si las excepciones fueren de puro derecho o se fundaren exclusivamente en constancias del expediente o no se hubiere ofrecido prueba, el juez pronunciará sentencia dentro de diez días de contestado el traslado o de vencido el plazo para hacerlo.

Artículo 533º: Prueba.- Cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente, el juez acordará un plazo común para producirla, tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse.

Corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones.

El juez, por resolución fundada, desestimarán la prueba manifiestamente inadmisibles, meramente dilatoria o carente de utilidad.

Se aplicarán supletoriamente las normas que rigen el juicio ordinario.

Artículo 534º: Sentencia.- Producida la prueba se declarará clausurado el período correspondiente; el juez pronunciará sentencia dentro de los diez días.

Artículo 535º: Sentencia de Remate.- La sentencia de remate sólo podrá determinar que se lleve la ejecución adelante, en todo o en parte, o su rechazo.

En el primer caso, al ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera u obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier manera hubiese demorado injustificadamente el trámite, se le impondrá una multa a favor del ejecutante, cuyo monto será fijado entre el cinco por ciento y el treinta por ciento del importe de la deuda, según la incidencia de su conducta procesal sobre la demora del procedimiento.

Artículo 536º: Notificación al Defensor Oficial.- Si el deudor con domicilio desconocido no se hubiese presentado, la sentencia se notificará al defensor oficial.

Artículo 537º: Juicio Ordinario Posterior.- Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas.

Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario.

No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado.

Tampoco se podrán discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las

interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución.

La falta de cumplimiento de las condenas impuestas podrá ser opuesta como excepción de previo y especial pronunciamiento.

Artículo 538º: Apelación.- La sentencia de remate será apelable:

1º) Cuando se tratare del caso previsto en el Artículo 531º párrafo primero.

2º) Cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho.

3º) Cuando se hubiese producido prueba respecto de las opuestas.

4º) Cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior.

Artículo 539º: Efecto. Fianza.- Cuando el ejecutante diere fianza de responder de lo que percibiere si la sentencia fuere revocada, el recurso se concederá en efecto devolutivo.

El juez establecerá la clase y el monto de la fianza. Si no se prestare dentro de los cinco días de haber sido concedido el recurso, se elevará el expediente a la cámara.

Si se diere fianza se remitirá también el expediente dejándose, en primera instancia, testimonio de las piezas necesarias para que prosiga la ejecución.

Artículo 540º: Fianza Requerida por el Ejecutado.- La fianza sólo se hará extensiva al resultado del juicio ordinario cuando así lo requiriere el ejecutado en los casos en que, conforme al Artículo 537º, tuviere la facultad de promover el juicio ordinario posterior.

Quedará cancelada:

1º) Si el ejecutado no promoviere el juicio dentro de los treinta días de haber sido otorgada.

2º) Si habiéndolo deducido dentro de dicho plazo la sentencia fuere confirmada.

Artículo 541º: Carácter y Plazo de las Apelaciones.- Las apelaciones en el juicio ejecutivo se concederán en efecto diferido con excepción de las que procedieren contra la sentencia del remate y la providencia que denegare la ejecución.

Artículo 542º: Costas.- Las costas del juicio ejecutivo serán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hayan sido desestimadas.

Si se hubiese declarado procedente la excepción de pago parcial, al ejecutado se le impondrán sólo las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia.

CAPITULO III

Cumplimiento de la Sentencia de Remate

SECCION 1ª

Ámbito. Recursos. Dinero Embargado. Liquidación. Pago Inmediato. Títulos y Acciones.

Artículo 543º: Ámbito.- Si la subasta se dispone a requerimiento de propietario o de condómino y no en cumplimiento de una sentencia de condena, la operación se regirá por las normas del derecho sustancial; en este caso, las que se establecen en este Código sólo serán aplicables en lo que fueren conciliables con aquéllas.

Artículo 544º: Recursos.- Son inapelables, por el ejecutado, las resoluciones que se dictaren durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, salvo las que se refieran a cuestiones que:

1º) No pueden constituir objeto del juicio ordinario posterior.

2º) Debiendo ser objeto del juicio ordinario posterior con arreglo al Artículo 537º, no obstante hayan sido debatidas en la etapa de cumplimiento de la sentencia por haber asentido el ejecutante.

3º) Se relacionen con el reconocimiento del carácter de parte.

4º) En los casos de los Artículos 538º inciso 4º y 575º, segundo y tercer párrafos.

Artículo 545º: Embargo. Sumas de Dinero. Liquidación. Pago Inmediato.- Es requisito del trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, la traba de embargo.

Cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza a que se refiere el Artículo 539º, el acreedor practicará liquidación de capital, intereses y costas, de la que se dará traslado al ejecutado, aplicándose, en lo pertinente, las reglas de los Artículos 486º y 487º. Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare.

Artículo 546º: Adjudicación de Títulos y Acciones.- Si se hubiesen embargado títulos o acciones que se coticen oficialmente en los mercados de valores, el ejecutante podrá pedir que se le den en pago al precio que tuvieren a la fecha de la resolución que así lo dispone. Si no se cotizaren, se observará lo establecido por el Artículo 554º.

SECCIÓN 2ª

Disposiciones Comunes a la Subasta de Muebles, Semovientes o Inmuebles.

Artículo 547º: Martillero. Designación. Carácter de su Actuación. Remoción. - El martillero será designado por las partes, en la audiencia que a tal efecto se señale y que se celebrará con las que concurran, salvo que existiese acuerdo de las partes para proponerlo.

Deberá aceptar el cargo dentro del tercer día de designado, no pudiendo ser recusado. Sin embargo, cuando circunstancias graves lo aconsejaren, el juez, dentro del quinto día de hecho la designación, podrá dejarlo sin efecto.

Deberá ajustar su cometido a las instrucciones que le imparta el juez; si no cumpliera con este deber podrá ser removido; en su caso, se le dará por perdido total o parcialmente el derecho a comisión o se aplicará en lo pertinente la sanción que establece el tercer párrafo del Artículo 549º.

No podrá delegar sus funciones, salvo autorización expresa del juez.

El martillero no es parte en los trámites del cumplimiento de la sentencia de remate; sólo podrá tener intervención en lo que se refiere a su actuación, en los términos establecidos en este Código o en otra ley.

Artículo 548º: Depósito de los Importes Percibidos por el Martillero. Rendición de Cuentas.- El martillero deberá depositar las sumas recibidas y rendir cuentas del remate al juzgado, dentro de los tres días de realizado. Si no lo hiciera oportunamente, sin justa causa, carecerá de derecho a cobrar comisión.

Artículo 549º: Comisión. Anticipo de Fondos.- El martillero percibirá la comisión que corresponda conforme al bien subastado, la que no podrá superar el dos por ciento para los inmuebles y el cinco por ciento para los muebles.

Si el remate se suspendiere o fracasare sin culpa del martillero, el monto de la comisión será fijado por el juez, de acuerdo con la importancia del trabajo realizado; si se anulare, también sin su culpa, tendrá derecho a la comisión que correspondiere. Si el mismo martillero vendiere el bien en un remate posterior, su retribución será determinada atendiendo al efectivo trabajo que le hubiere demandado esa tarea.

Si el remate se anulare por culpa del martillero, éste deberá reintegrar el importe de la comisión que percibió, dentro del tercer día de notificado por cédula de la resolución que decreta la nulidad.

Cuando el martillero lo solicite y el juez lo considere procedente, las partes deben adelantar los fondos que se estimen necesarios para la realización de la subasta.

Artículo 550º: Edictos - El remate se anunciará por edictos, que se publicarán por dos días en el Boletín Oficial y en otro diario, en la forma indicada en los Artículos 140º, 141º y 142º. Si se tratare de bienes de escaso valor, sólo se publicarán en el Boletín Oficial por un día y podrá prescindirse de la publicación si el costo de la misma no guardare relación con el valor de los bienes.

Si se tratare de inmuebles, podrá, asimismo, anunciarse en diarios del lugar donde estén situados.

En los edictos se indicará el juzgado y secretaría donde tramita el proceso, el número del expediente y el nombre de las partes si éstas no se opusieren; el lugar, día, mes, año y hora de la subasta; no tratándose de bienes de escaso valor, se individualizarán las cantidades, el estado y el lugar donde podrán ser revisados por los interesados; se mencionará, asimismo, la obligación de depositar el importe de la seña y de la comisión en el acto de remate y, en su caso, las modalidades especiales del mismo.

Si la subasta fuere de inmuebles, deberá indicarse, además, la base, condiciones de venta, estado de ocupación y horario de visitas; si estuvieren sujetos al régimen de propiedad horizontal, en las publicaciones y en el acto del remate deberá determinarse el monto de las expensas comunes correspondientes al último mes, y la deuda por este concepto, si fuere posible.

En todos los casos, la última publicación deberá realizarse con una anticipación no menor a seis días antes de la fecha del remate.

No podrán denunciarse defectos de publicidad de la subasta vencidos cinco días contados desde la última publicación.

Artículo 551º: Propaganda. Inclusión Indevida de Otros Bienes.- La propaganda adicional será a cargo del ejecutante, salvo si el ejecutado hubiese dado conformidad, o si su costo no excediere del dos por ciento de la base.

No se podrá mencionar en la propaganda, ni subastar en el mismo remate, bajo pena de perder el martillero su comisión, bienes distintos de aquellos cuya venta fue ordenada judicialmente.

Si la propaganda adicional se realizare a través de diarios, será aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior.

Artículo 552º: Preferencia Para el Remate.- Si el bien estuviere embargado en diversos procesos seguidos contra el ejecutado, salvo disposición específica de otra ley que regule ejecuciones especiales, la subasta se realizará en el que estuviere más adelantado en su trámite, con prescindencia de la naturaleza o garantías que tuvieren los créditos.

Artículo 553º: Subasta Progresiva.- Si se hubiese dispuesto la venta de varios bienes, el juez a pedido del ejecutado, podrá ordenar que la subasta se realice en distintas fechas y que se suspenda cuando el precio obtenido alcanzare a cubrir el crédito, intereses y costas reclamados.

Artículo 554º: Posturas Bajo Sobre.- Cualquiera sea la naturaleza de los bienes a subastar, a pedido de parte o de oficio el juez podrá disponer que se admitan posturas en sobre cerrado, en las condiciones que fije, que deberán indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda.

El Superior Tribunal de Justicia podrá establecer las reglas uniformes de aplicación de la presente modalidad del remate.

Si se tratare de subasta de muebles que se realice por intermedio de alguna institución oficial que admita posturas bajo sobre, se aplicará esa modalidad en los términos que establezcan las respectivas reglamentaciones.

Artículo 555º: Compra en Comisión.- El comprador deberá indicar, dentro del tercer día de realizada la subasta, el nombre de su comitente, en escrito firmado por ambos. En su defecto, se lo tendrá por adjudicatario definitivo.

El comitente constituirá domicilio en esa presentación, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 38º, en lo pertinente.

Las disposiciones de este artículo no se aplican al supuesto del Artículo 582º.

Artículo 556º: Regularidad del Acto.- Si existieren motivos fundados y sin perjuicio de la facultad del juez para disponerlo de oficio, el ejecutante, el ejecutado o el martillero podrán solicitar al juzgado la adopción de las medidas necesarias para proveer a la regularidad del remate y al mantenimiento del orden que asegure la libre oferta de los interesados.

SECCIÓN 3ª

Subasta de Muebles o Semovientes

Artículo 557º: Reglas.- Si el embargo hubiere recaído en bienes muebles o semovientes, se observarán las siguientes reglas:

1º) Se ordenará su venta en remate, sin base, al contado o con las facilidades de pago que por resolución fundada se establezca, por un martillero público que se designará observando lo establecido en el Artículo 547º.

2º) En la resolución que dispone la venta se requerirá al deudor para que, dentro del plazo de cinco días, manifieste si los bienes están prendados o embargados. En el primer caso, aquél deberá indicar el nombre y domicilio de los acreedores y el monto del crédito; en el segundo, el juzgado, secretaría y la carátula del expediente.

3º) Se podrá ordenar el secuestro de las cosas, que serán entregadas al martillero para su exhibición y venta; al recibirlas éste, las individualizará con indicación de su estado y del lugar y fecha en que se lleva a cabo la entrega.

4º) Si se tratare de muebles registrables, se requerirá a los registros que correspondiere un informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes.

5º) La providencia que decrete la venta será comunicada a los jueces embargantes; se notificará por cédula a los acreedores prendarios, quienes podrán formular las peticiones que estimaren pertinentes, dentro del tercer día de notificados.

Artículo 558º: Articulaciones Infundadas. Entrega de los Bienes.- Al adjudicatario que plantee cuestiones manifiestamente improcedentes que demoren el pago del saldo del precio, se le impondrá la multa que prevé el Artículo 565º.

Pagado totalmente el precio, el martillero o la parte que, en su caso, correspondiere, entregará al comprador los bienes que éste hubiese adquirido, siempre que el juzgado no dispusiere otra cosa.

SECCIÓN 4ª

Subasta e Inmuebles

A) Decreto de la Subasta

Artículo 559º: Embargos Decretados por Otros Juzgados. Acreedores Hipotecarios.- Decretada la subasta se comunicará a los jueces embargantes e inhibientes.

Se citará a los acreedores hipotecarios para que dentro del tercer día presenten sus títulos. Los de grado preferente, dentro del mismo plazo, podrán solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de sus créditos.

Artículo 560º: Recaudos.- Antes de ordenar la subasta el juez requerirá informes:

1º) Sobre la deuda por impuestos, tasas y contribuciones.

2º) Sobre las deudas por expensas comunes, si se tratare de un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal.

3º) Sobre las condiciones de dominio, embargos e inhibiciones, según las constancias del registro de la propiedad inmueble. Los informes tendrán una vigencia de sesenta días, a cuyo vencimiento deberán ser actualizados.

Asimismo, intimará al deudor para que dentro del tercer día presente el título de propiedad del inmueble, bajo apercibimiento de obtener testimonio a su costa. No se realizará la subasta mientras no se haya agregado el título o, en su caso, el testimonio.

Deberá comprobarse judicialmente el estado de ocupación del bien.

Artículo 561º: Designación de Martillero. Lugar del Remate.- Cumplidos los recaudos a que se refiere el artículo anterior, se ordenará la subasta, designando martillero en los términos del Artículo 547º y se determinará la base. Oportunamente se fijará el lugar donde aquélla debe realizarse que será donde tramita la ejecución, o el de ubicación del inmueble, según lo resolviere el juez de acuerdo con lo que resultare más conveniente; se establecerá también el día y la hora, que no podrán ser alterados salvo autorización del juez o acuerdo de partes expresado por escrito.

Se especificará la propaganda adicional autorizada, en los términos del Artículo 551º.

Artículo 562º: Base. Tasación.- Se fijará como base la valuación fiscal del inmueble.

A falta de valuación, el juez designará de oficio perito ingeniero, arquitecto o agrimensurador para que realice la tasación; la base equivaldrá a las dos terceras partes de dicha tasación.

Para la aceptación del cargo, plazo para el cumplimiento de la tarea y, en su caso, remoción, se aplicarán las reglas de los Artículos 453º y 454º.

De la tasación se dará traslado a las partes, quienes dentro de cinco días comunes expresarán su conformidad o disconformidad. Las objeciones deberán ser fundadas.

El juez tiene la facultad de apartarse de la tasación, fijando la base en una suma que impida que los bienes sean malvendidos.

B) Constitución de Domicilio

Artículo 563º: Domicilio del Comprador.- El martillero requerirá al adjudicatario la constitución de domicilio en el lugar que corresponda al asiento del juzgado. Si el comprador no lo constituyese en ese acto y no lo denunciare oportunamente, se aplicará la norma del Artículo 38º, en lo pertinente.

C) Deberes y Facultades del Comprador

Artículo 564º: Pago del Precio. Suspensión del Plazo.- Dentro de los cinco días de aprobado el remate, el comprador deberá depositar el importe del precio que corresponda abonar al contado, en el banco de depósitos judiciales; si no lo hiciere en esa oportunidad y no invocare motivos fundados para obtener la suspensión del plazo, se ordenará nueva subasta en los términos del Artículo 568º.

La suspensión sólo será concedida cuando medien circunstancias totalmente ajenas a la conducta del adquirente y en situaciones que no pudieren ser superadas con la sola indisponibilidad de los fondos.

El ejecutante y el ejecutado tienen legitimación para requerir el cumplimiento de las obligaciones del comprador.

Artículo 565º: Articulaciones Infundadas del Comprador.- Al adjudicatario que plantee cuestiones manifiestamente improcedentes que demoren el pago del saldo del precio, se le impondrá una multa que podrá ser del cinco al diez por ciento del precio obtenido en el remate.

Artículo 566º: Pedido de Indisponibilidad de Fondos.- El comprador que hubiere realizado el depósito del importe del precio podrá requerir su indisponibilidad hasta tanto se le otorgue la escritura, o se inscriba el bien a su nombre si prescindiere de aquélla, salvo cuando la demora en la realización de estos trámites le fuera imputable.

La indisponibilidad no regirá respecto de los gastos de escrituración y pago de impuestos.

Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en el caso previsto en el Artículo 583º bis inciso 7º).

D) Sobreseimiento del Juicio

Artículo 567º: Sobreseimiento del Juicio.- El ejecutado sólo podrá liberar los bienes depositando el importe del capital y de lo presupuestado en concepto de intereses y costas, sin perjuicio de la liquidación que ulteriormente correspondiere; asimismo, una suma a favor del comprador, integrada por la comisión del martillero, sellados de la subasta y el equivalente a una vez y media del monto de la seña.

Los importes deberán ser satisfechos aunque el martillero hubiera descontado los gastos del remate de la cantidad correspondiente a seña.

La indemnización establecida sobre la base del valor de la seña es sin perjuicio de otras que pudieren corresponder en concepto de responsabilidad civil.

La simple promesa de pago no autoriza a pedir el sobreseimiento; tampoco podrá supeditarse el pago a la exigencia de una liquidación previa.

El ejecutado no podrá requerir el sobreseimiento si el comprador hubiese depositado en pago el saldo del precio dentro de los plazos a que se refiere el Artículo 564º, o antes. Por saldo de precio se entiende el que debe abonarse al contado.

La facultad de solicitar el sobreseimiento sólo podrá ser ejercida por el ejecutado o, en su caso, sus herederos.

Si el adquirente fuera el acreedor autorizado a compensar, el ejecutado podrá requerir el sobreseimiento antes de que se tenga por oblado o compensado el precio de venta con el crédito del adquirente.

En las cuestiones que se plantearan acerca de la suficiencia del pago realizado por el ejecutado, el comprador sólo es parte en lo que se refiere a las sumas que podrían corresponderle de conformidad con lo establecido en el párrafo primero.

E) Nuevas Subastas

Artículo 568º: Nueva Subasta por Incumplimiento del Comprador.- Cuando por culpa del postor cuya oferta hubiese sido aceptada como definitiva en el acto del remate la venta no se formalizara, se ordenará nuevo remate. Dicho postor será responsable de la disminución real del precio que se obtuviere en la nueva subasta, de los intereses acrecidos, de los gastos ocasionados y de las costas causadas con ese motivo.

El cobro del importe que resultare, previa liquidación, tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, quedando embargadas a ese efecto las sumas que el postor hubiere entregado.

Artículo 569º: Falta de Postores.- Si fracasare el remate por falta de postores, se dispondrá otro, reduciendo la base en un veinticinco por ciento. Si tampoco existieren postores, se ordenará la venta sin limitación de precio.

F) Perfeccionamiento de la Venta. Trámites Posteriores. Desocupación del Inmueble.

Artículo 570º: Perfeccionamiento de la Venta.- La venta judicial sólo quedará perfeccionada una vez aprobado el remate, pagado el precio o la parte que correspondiere, si se hubieran otorgado facilidades, y luego de realizada la tradición del inmueble a favor del comprador.

Artículo 571º: Escrituración.- El testimonio de las actuaciones será extendido por el secretario o, si el adquirente pidiera la protocolización, se hará por escribano público sin que sea necesaria la comparecencia del ejecutado.

El adquirente que solicita la escrituración toma a su cargo la realización de las diligencias tendientes a ella.

Artículo 572º: Levantamiento de Medidas Precautorias.- Los embargos e inhibiciones se levantarán al sólo efecto de escriturar, con citación de los jueces que los decretaron.

Una vez escriturado el bien, sin otro trámite, esas medidas cautelares se levantarán definitivamente, si fuere procedente, con la presentación del testimonio para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Los embargos quedarán transferidos al importe del precio.

Artículo 573º: Desocupación de Inmuebles.- No procederá el desahucio de los ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se hubiere pagado el saldo del precio y hecho la tradición.

Las cuestiones que se suscitaren con motivo de la desocupación del inmueble se sustanciarán por el trámite de los incidentes.

SECCIÓN 5ª

Preferencias. Liquidación. Pago. Fianza.

Artículo 574º: Preferencias.- Mientras el ejecutante no esté totalmente desinteresado, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino, salvo que se tratara de las costas de la ejecución, o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado.

Los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación, salvo cuando correspondiere por aplicación de la ley sustancial.

Artículo 575º: Liquidación. Pago. Fianza.- Dentro de los cinco días contados desde que se pagó el precio o desde la aprobación del remate, en su caso, el ejecutante presentará la liquidación del capital, intereses y costas; de ella se dará traslado al ejecutado.

Si el ejecutante no presentare oportunamente liquidación, podrá hacerlo el ejecutado, en cuyo caso se conferirá traslado a aquél. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez resolverá.

La falta de impugnación no obligará a aprobar la liquidación en cuanto ésta no se ajustare a derecho.

Si el ejecutado lo pidiere, el ejecutante deberá prestar fianza para percibir el capital y sus intereses. Dicha fianza quedará cancelada, sin que se requiera declaración expresa, si el deudor no promoviere el proceso ordinario dentro del plazo de treinta días desde que aquélla se constituyó. En este caso se impondrá al ejecutado una multa que no podrá exceder del veinticinco por ciento del importe de la fianza, y que será a favor del ejecutante.

SECCIÓN 6ª

Nulidad de la Subasta.

Artículo 576º: Nulidad de la Subasta a Pedido de Parte.- La nulidad del remate, a pedido de parte, sólo podrá plantearse hasta dentro del quinto día de realizado.

El pedido será desestimado "in limine" si las causas invocadas fueren manifiestamente inatendibles o no se indicare con fundamento verosímil el perjuicio sufrido. Esta resolución será apelable; si la cámara confirmare, se impondrá al peticionario una multa que podrá ser del cinco al diez por ciento del precio obtenido en el remate.

Si el pedido de nulidad fuere admisible, se conferirá traslado por cinco días a las partes, al martillero y al adjudicatario; dicho traslado se notificará personalmente o por cédula.

Artículo 577º: Nulidad de Oficio.- El juez deberá decretar de oficio la nulidad de la subasta cuando las irregularidades de que ella adoleciere comprometieren gravemente la actividad jurisdiccional; no podrá hacerlo si hubiere decretado medidas que importen considerar válido el remate.

SECCIÓN 7ª

Temeridad.

Artículo 578º: Temeridad.- Si el ejecutado hubiere provocado dilación innecesaria en el cumplimiento de la sentencia de remate, el juez le impondrá una multa, en los términos del Artículo 535º, sobre la base del importe de la liquidación aprobada.

TÍTULO III

Ejecuciones Especiales

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 579º: Títulos que las Autorizan.- Los títulos que autorizan las ejecuciones especiales sólo serán aquellos que se mencionan expresamente en este Código o en otras leyes.

Artículo 580º: Reglas Aplicables.- En las ejecuciones especiales se observará el procedimiento establecido para el juicio ejecutivo, con las siguientes modificaciones:

1º) Sólo procederán las excepciones previstas en el capítulo siguiente o en la ley que crea el título.

2º) Sólo se admitirá prueba que deba rendirse fuera de la circunscripción territorial del juzgado cuando el juez, de acuerdo con las circunstancias, lo considerara imprescindible, en cuyo caso fijará el plazo dentro del cual deberá producirse.

CAPITULO II

Disposiciones Específicas

SECCIÓN 1ª

Ejecución Hipotecaria.

Artículo 581º: Excepciones Admisibles.- Además de las excepciones procesales autorizadas por los incisos 1º), 2º), 3º), 4º) y 9º) del Artículo 528º y en el Artículo 529º, el deudor podrá oponer, únicamente, las de prescripción, pago total o parcial, quita, espera y remisión. Las cuatro últimas sólo podrán probarse por instrumentos públicos o privados o actuaciones judiciales que deberán presentarse en sus originales o testimoniadas, al oponerlas.

Dentro del plazo para oponer excepciones podrá invocarse también la caducidad de la inscripción hipotecaria, con los efectos que determina el Código Civil.

Artículo 582º: Informe Sobre Condiciones del Inmueble Hipotecado.- En la providencia que ordenare la intimación de pago y la citación de remate, se dispondrá la anotación del embargo sobre el inmueble hipotecado y el libramiento de oficio al Registro de la Propiedad para que informe:

1º) Sobre las medidas cautelares y gravámenes que afectaren al inmueble hipotecado, con indicación del importe de los créditos, sus titulares y domicilios.

2º) Sobre las transferencias que de aquél se hubieren realizado desde la fecha de constitución de la hipoteca, y nombre y domicilio de los adquirentes.

Sin perjuicio de ello, el deudor deberá, durante el plazo para oponer excepciones, denunciar el nombre y domicilio de los acreedores privilegiados, embargantes y terceros poseedores del inmueble hipotecado.

Artículo 583º: Tercer Poseedor.- Si del informe o de la denuncia a que se refiere el artículo anterior resultare que el deudor transfirió el inmueble hipotecado, dictada la sentencia de remate contra aquél, se intimará al tercer poseedor para que dentro del plazo de cinco días pague la deuda o haga abandono del inmueble, bajo apercibimiento de que la ejecución se seguirá también contra él.

En este último supuesto, se observarán las reglas establecidas en los Artículos 3.165º y siguientes del Código Civil.

Artículo 584º: Trámites Posteriores a la Sentencia.- Dictada la sentencia de trance y remate, se procederá de la siguiente forma:

1º) El juez ordenará verificar el estado físico y de ocupación, designando a tal fin al escribano que proponga el acreedor. Si de esa diligencia resulta que el inmueble se encuentra ocupado, en el mismo acto se intimará a su desocupación en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública.

No verificada en el plazo la desocupación, sin más trámite se procederá al lanzamiento y se entregará la tenencia al acreedor, hasta la aprobación del remate, con intervención del notario al que se refiere el párrafo anterior. A esos fines, el escribano actuante puede requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilio y violentar cerraduras y poner en depósito oneroso los bienes que se encuentren en el inmueble, a costa del deudor.

2º) El acreedor estará facultado para solicitar directamente al Registro de la Propiedad un informe sobre el estado y gravámenes que afectaren el inmueble hipotecado, con indicación del importe de los créditos, sus titulares y domicilios.

3º) Asimismo, el acreedor puede requerir la liquidación de las deudas que existan en concepto de expensas de la propiedad horizontal, impuestos, tasas y contribuciones que pesen sobre el inmueble, bajo apercibimiento de que no contarse con dichas liquidaciones en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de su solicitud, se podrá subastar el bien como si estuviera libre de deudas. Los reclamos que se dedujeran por aplicación de lo dispuesto en este inciso no afectarán el trámite de remate del bien gravado.

4º) La venta quedará perfeccionada una vez pagado el precio en el plazo que se haya estipulado y realizada la tradición a favor del comprador. El pago se podrá realizar directamente al acreedor, quien deberá depositar el remanente dentro del quinto día de verificado el cobro. Si el acreedor ostenta la tenencia del inmueble subastado, podrá transmitirla directamente al comprador; caso contrario y no habiendo mediado desposesión como lo prevé el inciso 1º, deberá ser entregado con intervención del juez. La protocolización de las actuaciones será extendida por intermedio del escribano designado por el comprador, sin que sea necesaria la comparecencia del ejecutado.

5º) El deudor ni el tercero, poseedor del inmueble hipotecado, pueden interponer incidente ni recurso alguno, salvo las defensas del Artículo 64º de la Ley Nro. 24.441, en la oportunidad del Artículo 54º del citado cuerpo legal, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio sumarísimo posterior, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. Si existiera peligro de desprotección de alguno de los interesados, se notificará al defensor oficial para que asuma el control del proceso de ejecución de la garantía.

6º) Una vez realizada la subasta y cancelado el crédito ejecutado, el deudor podrá impugnar por la vía judicial:

a) La liquidación practicada por el acreedor, y

b) El incumplimiento de los recaudos establecidos en el presente artículo por parte del ejecutante.

En todos los casos el acreedor deberá indemnizar los perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas de que se hiciera pasible.

7º) En los casos previstos en el presente artículo, no procederá la compra en comisión ni la indisponibilidad de los fondos de la subasta. No obstante el juez podrá pedir caución suficiente al acreedor.

SECCIÓN 2ª

Ejecución Prendaria.

Artículo 585º: Prenda con Registro.- En la ejecución de prenda con registro sólo procederán las excepciones procesales enumeradas en los incisos 1º), 2º), 3º), 4º), 6º) y 9º) del Artículo 528º y en el Artículo 529º y las sustanciales autorizadas por la ley de la materia.

Artículo 586º: Prenda Civil.- En la ejecución de la prenda civil sólo serán oponibles las excepciones que se mencionan en el Artículo 581º, primer párrafo.

Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones que rigen la ejecución hipotecaria y la ejecución de prenda con registro.

LIBRO IV

PROCESOS ESPECIALES

TÍTULO I

Interdictos y Acciones Posesorias. Denuncia de Daño Temido. Reparaciones Urgentes.

CAPITULO I

Interdictos

Artículo 587º: Clases.- Los interdictos sólo podrán intentarse:

- 1º) Para adquirir la posesión o la tenencia.
- 2º) Para retener la posesión o la tenencia.
- 3º) Para recobrar la posesión o la tenencia.
- 4º) Para impedir una obra nueva.

CAPITULO II

Interdicto de Adquirir.

Artículo 588º: Procedencia.- Para que proceda el interdicto de adquirir se requerirá:

- 1º) Que quien lo intente presente título suficiente para adquirir la posesión o la tenencia con arreglo a derecho.
- 2º) Que nadie tenga título de dueño o usufructuario de la cosa que constituye el objeto del interdicto.
- 3º) Que nadie sea poseedor o tenedor de la misma cosa.

Artículo 589º: Procedimiento.- Promovido el interdicto, el juez examinará el título y requerirá informe sobre las condiciones de dominio. Si lo hallare suficiente, otorgará la posesión o la tenencia, sin perjuicio de mejor derecho, y dispondrá la inscripción del título, si correspondiere. Si otra persona también tuviere título o poseyere el bien, la cuestión deberá sustanciarse en juicio ordinario.

Cuando alguien ejerciera la tenencia de la cosa, la demanda contra él se sustanciará por el trámite del juicio sumarísimo.

Si el título que presenta el actor para adquirir la posesión o la tenencia deriva del que invoca el oponente para resistirla, el juez dispondrá que la controversia tramite por juicio ordinario o sumarísimo, atendiendo a las circunstancias del caso.

Artículo 590º: Anotación de Litis.- Presentada la demanda, podrá decretarse la anotación de litis en el Registro de la Propiedad, si los títulos acompañados y los antecedentes aportados justificaren esa medida precautoria.

CAPITULO III

Interdicto de Retener.

Artículo 591º: Procedencia.- Para que proceda el interdicto de retener se requerirá:

- 1º) Que quien lo intente se encuentre en la actual posesión o tenencia de una cosa, mueble o inmueble.
- 2º) Que alguien amenazare perturbarle o lo perturbare en ellas mediante actos materiales.

Artículo 592º: Procedimiento.- La demanda se dirigirá contra quien el actor denunciare que lo perturba en la posesión o tenencia, sus sucesores o copartícipes, y tramitará por las reglas del proceso sumarísimo.

Artículo 593º: Objeto de la Prueba.- La prueba sólo podrá versar sobre el hecho de la posesión o tenencia invocada por el actor, la verdad o falsedad de los actos de perturbación atribuidos al demandado, y la fecha en que éstos se produjeron.

Artículo 594º: Medidas Precautorias.- Si la perturbación fuere inminente, el juez podrá disponer la medida de no innovar, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones a que se refiere el Artículo 34º.

CAPITULO IV

Interdicto de Recobrar.

Artículo 595º: Procedencia.- Para que proceda el interdicto de recobrar se requerirá:

1º) Que quien lo intente, o su causante, hubiera tenido la posesión actual o la tenencia de una cosa mueble o inmueble.

2º) Que hubiera sido despojado violenta, clandestinamente o por resolución dictada sin su audiencia, o en general que alguien ejerza en el inmueble actos que produzcan el efecto de excluir absolutamente la posesión o tenencia del actor.

Artículo 596º: Procedimiento.- La demanda se dirigirá contra el autor denunciado, sus sucesores, copartícipes o beneficiarios del despojo y tramitará por juicio sumarísimo.

Sólo se admitirán pruebas que tuvieren por objeto demostrar el hecho de la posesión o tenencia invocadas, así como el despojo y la fecha en que éste se produjo.

Artículo 597º: Restitución del Bien. - Cuando el derecho invocado fuere verosímil y pudieran derivar perjuicios si no se decretare la restitución inmediata del bien, el juez podrá ordenarla previa fianza que prestará el reclamante para responder por los daños que pudiera irrogar la medida.

Artículo 598º: Modificación y Ampliación de la Demanda.- Si durante el curso del interdicto de retener se produjere el despojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin retrotraer el procedimiento, en cuanto fuese posible.

Cuando llegare a conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier estado del juicio.

Artículo 599º: Sentencia.- El juez dictará sentencia desestimando el interdicto o mandando restituir la posesión o la tenencia del bien al despojado.

CAPITULO V

Interdicto de Obra Nueva.

Artículo 600º: Procedencia.- Cuando se hubiera comenzado una obra que afectase a un inmueble, su poseedor o tenedor podrá promover el interdicto de obra nueva. Será inadmisibile si aquélla estuviera concluida o próxima a su terminación. La acción se dirigirá contra el dueño de la obra y, si fuera desconocido, contra el director o encargado de ella. Tramitará por el juicio sumarísimo. El juez podrá ordenar preventivamente la suspensión de la obra.

Artículo 601º: Sentencia.- La sentencia que admitiere la demanda dispondrá la suspensión definitiva de la obra o, en su caso, su destrucción y la restitución de las cosas al estado anterior, a costa del vencido.

CAPÍTULO VI

Disposiciones Comunes a los Interdictos.

Artículo 602º: Caducidad.- Los interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva no podrán promoverse después de transcurrido un año de producidos los hechos en que se fundaren.

Artículo 603º: Juicio Posterior.- Las sentencias que se dictaren en los interdictos de adquirir, retener y recobrar no impedirán el ejercicio de las acciones reales que pudieran corresponder a las partes.

CAPÍTULO VII

Acciones Posesorias.

Artículo 604º: Trámite.- Las acciones posesorias del Título III, Libro Tercero del Código Civil, tramitarán por juicio ordinario o sumarísimo, lo que determinará el juez según las circunstancias del caso.

Deducida la acción posesoria o el interdicto, posteriormente sólo podrá promoverse acción real.

CAPÍTULO VIII

Denuncia de Daño Temido. Oposición a la Ejecución de Reparaciones Urgentes.

Artículo 604º bis: Denuncia de Daño Temido. Medidas de Seguridad.- Quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un daño grave e inminente a sus bienes, puede solicitar al juez las medidas de seguridad adecuadas, si no mediare anterior intervención de autoridad administrativa por el mismo motivo.

Recibida la denuncia el juez se constituirá en el lugar y si comprobare la existencia de grave riesgo, urgencia en removerlo y temor de daño serio e inminente, podrá disponer las medidas encaminadas a hacer cesar el peligro. Si la urgencia no fuere manifiesta requerirá la sumaria

información que permita verificar, con citación de las partes y designación de perito, la procedencia del pedido.

La intervención simultánea o ulterior de la autoridad administrativa determinará la clausura del procedimiento y el archivo del expediente.

En su caso, podrán imponerse sanciones conminatorias.

Las resoluciones que se dicten serán apelables en efecto devolutivo.

Artículo 604º ter: Oposición a la Ejecución de Reparaciones Urgentes.- Cuando deterioros o averías producidos en un edificio o unidad ocasionen grave daño a otro, y el ocupante del primero se opusiere a realizar o a permitir que se ejecuten las reparaciones necesarias para hacer cesar la causa del perjuicio, el propietario, copropietario o inquilino directamente afectados o, en su caso, el administrador del consorcio, podrá requerir que se adopten las medidas y se lleven a cabo los trabajos que sean necesarios, disponiéndose el allanamiento de domicilio, si fuere indispensable.

La petición tramitará sin forma de juicio, con la sola audiencia de los interesados y el informe técnico que deberá acompañarse al escrito inicial.

En su caso podrán imponerse sanciones conminatorias.

La resolución del juez es inapelable.

TÍTULO II

Procesos de Declaración de Incapacidad y de Inhabilitación

CAPÍTULO I

Declaración de Demencia.

Artículo 605º: Requisitos.- Las personas que pueden pedir la declaración de demencia se presentarán ante el juez competente exponiendo los hechos y acompañando certificado médico relativo al estado mental del presunto incapaz y su peligrosidad actual.

Artículo 606º: Médico forense.- Cuando no fuere posible acompañar dicho certificado, el juez requerirá la opinión del médico forense, quien deberá expedirse dentro de cuarenta y ocho horas. A ese solo efecto y de acuerdo con las circunstancias del caso, el juez podrá ordenar la internación del presunto incapaz por igual plazo, si fuere indispensable para su examen.

Artículo 607º: Resolución. - Con los recaudos de los artículos anteriores y previa vista al defensor de menores e incapaces, el juez resolverá:

1º) El nombramiento de un curador provisional, que recaerá en un abogado de la matrícula. Sus funciones subsistirán hasta que se discierna la curatela definitiva o se desestime la demanda.

2º) La fijación de un plazo no mayor de treinta días, dentro del cual deberán producirse todas las pruebas.

3º) La designación de oficio de dos médicos con preferencia psiquiatras o legistas, para que acompañados por el médico forense informen, dentro del plazo preindicado, sobre el estado actual de las facultades mentales del presunto insano. Dicha resolución se notificará personalmente a aquél.

Artículo 608º: Prueba.- El denunciante únicamente podrá aportar pruebas que acrediten los hechos que hubiese invocado y el presunto insano las que hagan a la defensa de su capacidad. Las pruebas que aquellos o las demás partes ofrecieren, se producirán en el plazo previsto en el inciso 2º) del artículo anterior.

Artículo 609º: Médicos Oficiales.- Cuando el presunto insano careciere de bienes o éstos sólo alcanzaren para su subsistencia, circunstancia que se justificará sumariamente, el curador provisional desempeñará gratuitamente sus funciones, y la designación de facultativos recaerá en médicos forenses u otros médicos de establecimiento oficial.

Artículo 610º: Medidas Precautorias. Internación.- Cuando la demencia apareciere notoria e indudable, el juez de oficio adoptará las medidas establecidas en el Artículo 148º del Código Civil, decretará la inhibición general de bienes y las providencias que crea convenientes para asegurar la indisponibilidad de los bienes muebles y valores.

Si se tratare de un presunto demente que ofreciere peligro para sí o para terceros, el juez ordenará su internación en un establecimiento público o privado.

Artículo 611º: Pedido de Declaración de Demencia con Internación.- Cuando al tiempo de formularse la denuncia el presunto insano estuviera internado, el juez deberá tomar conocimiento directo de aquél y adoptar todas las medidas que considere necesarias para resolver si debe o no mantenerse la internación.

Artículo 612º: Calificación Médica.- Los médicos, al informar sobre la enfermedad, deberán expedirse con la mayor precisión posible, sobre los siguientes puntos:

- 1º) Diagnóstico.
- 2º) Fecha aproximada en que la enfermedad se manifestó.
- 3º) Pronóstico.
- 4º) Régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano.
- 5º) Necesidad de su internación.

Artículo 613º: Traslado de las Actuaciones.- Producido el informe de los facultativos y demás pruebas, se dará traslado por cinco días al denunciante, al presunto insano y al curador provisional y, con su resultado, se dará vista al defensor de menores e incapaces.

Artículo 614º: Sentencia. Supuesto de Inhabilitación. Recursos. Consulta.- Antes de pronunciar sentencia y si las particularidades del caso lo aconsejaren, el juez hará comparecer al presunto demente a su presencia o se trasladará a su domicilio o lugar de internación.

La sentencia se dictará en el plazo de quince días a partir de la contestación de la vista conferida al defensor de menores e incapaces o, en su caso, del acto a que se refiere el párrafo anterior.

Si no se verificare la incapacidad, pero de la prueba resultare inequívocamente que del ejercicio de la plena capacidad pudiere resultar daño a la persona o al patrimonio de quien sin haber sido hallado demente presente disminución de sus facultades mentales, el juez podrá declararlo inhabilitado en la forma y con el alcance previstos en el Artículo 152º bis del Código Civil. En este caso, o si se declarase la demencia, se comunicará la sentencia al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

La sentencia será apelable por el denunciante, el presunto demente o inhabilitado, el curador provisional y el defensor de menores e incapaces.

En los procesos de declaración de demencia, si la sentencia que la decreta no fuere apelada se elevará en consulta. La cámara resolverá previa vista al defensor de menores e incapaces, sin otra sustanciación.

Artículo 615º: Costas.- Los gastos causídicos serán a cargo del denunciante si el juez considerase inexcusable el error en que hubiere incurrido al formular la denuncia, o si esta fuere maliciosa.

Los gastos y honorarios a cargo del presunto insano no podrán exceder, en conjunto, del diez por ciento del monto de sus bienes.

Artículo 616º: Rehabilitación.- El declarado demente o inhabilitado podrá promover su rehabilitación. El juez designará tres médicos psiquiatras o legistas para que lo examinen y, de acuerdo con los trámites previstos para la declaración de demencia, hará o no lugar a la rehabilitación.

Artículo 617º: Fiscalización del Régimen de Internación.- En los supuestos de dementes, presuntos o declarados, que deban permanecer internados, el juez, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá disponer que el curador provisional o definitivo y el defensor de menores e incapaces visiten periódicamente al internado e informen sobre la evolución de su enfermedad y régimen de atención a que se encontrare sometido. Asimismo, podrá disponer que el director del establecimiento informe periódicamente acerca de los mismos hechos.

CAPÍTULO II

Declaración de Sordomudez.

Artículo 618º: Sordomudo. - Las disposiciones del capítulo anterior regirán, en lo pertinente, para la declaración de incapacidad del sordomudo que no sabe darse a entender por escrito y, en su caso, para la cesación de esta incapacidad.

CAPÍTULO III

Declaración de Inhabilitación.

Artículo 619º: Alcohólicos Habituales, Toxicómanos, Disminuidos. Remisión.- Las disposiciones del Capítulo I del presente Título regirán en lo pertinente para la declaración de inhabilitación a que se refiere el Artículo 152º bis, incisos 1º) y 2º) del Código Civil.

La legitimación para accionar corresponde a las personas que de acuerdo con el Código Civil pueden pedir la declaración de demencia.

En el caso del inciso 3º) del Artículo 152º bis del Código Civil, la causa tramitará por el proceso sumarísimo.

Artículo 620º: Sentencia. Limitación de Actos.- La sentencia de inhabilitación, además de los requisitos generales, deberá determinar, cuando las circunstancias del caso lo exijan, los actos de administración cuyo otorgamiento le es limitado a quien se inhabilita.

La sentencia se inscribirá en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Artículo 620º bis: Divergencias Entre el Inhabilitado y el Curador.- Todas las cuestiones que se susciten entre el inhabilitado y el curador se sustanciarán por el trámite de los incidentes, con intervención del defensor de menores e incapaces.

TÍTULO III

Alimentos y Litisexpensas

Artículo 621º: Recaudos.- La parte que promoviere juicio de alimentos deberá, en un mismo escrito:

- 1º) Acreditar el título en cuya virtud los solicita.
- 2º) Denunciar, siquiera aproximadamente, el caudal de quien deba suministrarlos.
- 3º) Acompañar toda la documentación que tuviere en su poder y que haga a su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 319º.
- 4º) Ofrecer la prueba de que intentare valerse.

Si se ofreciere prueba testimonial, los testigos declararán en primera audiencia.

Artículo 622º: Audiencia preliminar.- El juez, sin perjuicio de ordenar inmediatamente las medidas probatorias que fueren solicitadas, señalará una audiencia que tendrá lugar dentro de un plazo que no podrá exceder de diez días, contado desde la fecha de la presentación.

En dicha audiencia, a la que deberán comparecer las partes personalmente y el representante del ministerio pupilar, si correspondiere, el juez procurará que aquéllas lleguen a un acuerdo directo, en cuyo caso, lo homologará en ese mismo acto, poniendo fin al juicio.

Artículo 623º: Incomparecencia Injustificada del Alimentante. Efectos.- Cuando, sin causa justificada, la persona a quien se le requirieren alimentos no compareciere a la audiencia prevista en el artículo anterior, en el mismo acto el juez dispondrá:

- 1º) La aplicación de una multa, a favor de la otra parte, que fijará entre dos y treinta juristas, y cuyo importe deberá depositarse dentro del tercer día contado desde la fecha en que se notificó la providencia que la impuso.
- 2º) La fijación de una nueva audiencia que tendrá lugar dentro del quinto día, la que se notificará con habilitación de día y hora, bajo apercibimiento de establecer la cuota alimentaria de acuerdo con las pretensiones de la parte actora y lo que resulte del expediente.

Artículo 624º: Incomparecencia Injustificada de la Parte Actora. Efectos.- Cuando quien no compareciere sin causa justificada a la audiencia que prevé el Artículo 622º fuera la parte actora, el juez señalará nueva audiencia, en la misma forma y plazo previstos en el artículo anterior, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su pretensión si no concurriese.

Artículo 625º: Incomparecencia Justificada.- A la parte actora y a la demandada se les admitirá la justificación de la incomparecencia por una sola vez. Si la causa subsistiese, aquellas deberán hacerse representar por apoderado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Artículos 623º y 624º, según el caso.

Artículo 626º: Intervención de la Parte Demandada.- En la audiencia prevista en el Artículo 622º, el demandado, para demostrar la falta de título o derecho de quien pretende los alimentos, así como la situación patrimonial propia o de la parte actora, sólo podrá:

- 1º) Acompañar prueba instrumental.
- 2º) Solicitar informes cuyo diligenciamiento no podrá postergar, en ningún caso, el plazo fijado en el Artículo 627º.

El juez al sentenciar valorará esas pruebas para determinar el monto de la pensión, o para denegarla, en su caso.

Artículo 627º: Sentencia.- Cuando en la oportunidad prevista en el Artículo 622º no se hubiere llegado a un acuerdo, el juez, sin necesidad de petición de parte, deberá dictar sentencia dentro de cinco días, contados desde que se hubiese producido la prueba ofrecida por la parte actora. Admitida la pretensión el juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará abonar por meses anticipados, desde la fecha de interposición de la demanda.

Las cuotas mensuales a que se refiere este artículo, como también las suplementarias previstas en el siguiente, devengarán intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas.

Artículo 628º: Alimentos Atrasados.- Respecto de los alimentos que se devengaren durante la tramitación del juicio, el juez fijará una cuota suplementaria, de acuerdo con las disposiciones sobre inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones, la que se abonará en forma independiente.

La inactividad procesal del alimentario crea la presunción, sujeta a prueba en contrario, de su falta de necesidad y, con arreglo a las circunstancias de la causa, puede determinar la

caducidad del derecho a cobrar las cuotas atrasadas referidas al período correspondiente a la inactividad.

La caducidad no es aplicable a los beneficiarios menores de edad; tampoco, cuando la aparente inactividad del interesado es provocada por la conducta del alimentante.

Artículo 629º: Percepción.- Salvo acuerdo de partes, la cuota alimentaria se depositará en el banco de depósitos judiciales y se entregará al beneficiario a su sola presentación. Su apoderado únicamente podrá percibirla cuando existiere resolución fundada que así lo ordenare.

Artículo 630º: Recursos.- La sentencia que deniegue los alimentos será apelable en ambos efectos.

Si los admitiere, el recurso se concederá en efecto devolutivo. En este último supuesto, una vez deducida la apelación, se expedirá testimonio de la sentencia, el que se reservará en el juzgado para su ejecución, remitiéndose inmediatamente las actuaciones a la cámara.

Artículo 631º: Cumplimiento de la Sentencia.- Si dentro del quinto día de intimado el pago, la parte vencida no lo hubiere hecho efectivo, sin otra sustanciación se procederá al embargo y se decretará la venta de los bienes necesarios para cubrir el importe de la deuda.

Artículo 632º: Divorcio Decretado por Culpa de Uno o de Ambos Cónyuges.- Cuando se tratase de alimentos fijados a favor de uno de los cónyuges durante la sustanciación del juicio de divorcio, y recayese sentencia definitiva decretándolo por culpa de aquél o de ambos, la obligación del alimentante cesará de pleno derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 209º del Código Civil.

Artículo 633º: Trámite para la Modificación o Cesación de los Alimentos.- Toda petición de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se sustanciará por las normas de los incidentes, en el proceso en que fueron solicitados. Este trámite no interrumpirá la percepción de las cuotas ya fijadas.

En el incidente de aumento de la cuota alimentaria, la nueva cantidad fijada rige desde la notificación del pedido.

Artículo 634º: Litisexpensas.- La demanda por litisexpensas se sustanciará de acuerdo con las normas de este Título.

TÍTULO IV

Rendición de Cuentas

Artículo 635º: Obligación de Rendir Cuentas.- La demanda por obligación de rendir cuentas tramitará por juicio sumarísimo, a menos que integrase otras pretensiones que deban sustanciarse en juicio ordinario.

El traslado de la demanda se hará bajo apercibimiento de que si el demandado no la contestare, o admitiere la obligación y no las rindiere dentro del plazo que el juez fije al conferir dicho traslado, se tendrán por aprobadas las que presente el actor, en todo aquello que el demandado no pruebe que sean inexactas.

Artículo 636º: Trámite por Incidente.- Se aplicará el procedimiento de los incidentes siempre que:

1º) Exista condena judicial a rendir cuentas.

2º) La obligación de rendirlas resultare de instrumento público o privado reconocido, o haya sido admitida por el obligado al ser requerido por diligencia preliminar.

Artículo 637º: Facultad Judicial.- En los casos del artículo anterior, si conjuntamente con el pedido, quien promovió el incidente hubiere acompañado una cuenta provisional, el juez dará traslado a la otra parte para que la admita u observe, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera se aprobará la presentada.

El juez fijará los plazos para los traslados y producción de prueba, atendiendo a la complejidad de las cuentas y documentos que se hubiesen acompañado.

Artículo 638º: Documentación. Justificación de Partidas.- Con el escrito de rendición de cuentas deberá acompañarse la documentación correspondiente. El juez podrá tener como justificadas las partidas respecto de las cuales no se acostumbrare a pedir recibos y fueren razonables y verosímiles.

Artículo 639º: Saldos Reconocidos.- El actor podrá reclamar el pago de los saldos reconocidos por el demandado, sin esperar la resolución definitiva sobre las cuentas y sin que por ello se entienda que las ha aceptado.

El pedido se sustanciará por las normas sobre ejecución de sentencias.

Artículo 640º: Demanda por Aprobación de Cuentas.- El obligado a rendir cuentas podrá pedir la aprobación de las que presente. De la demanda, a la que deberá acompañarse boleta

de depósito por el importe del saldo deudor, se dará traslado al interesado, por el plazo que fije el juez, bajo apercibimiento de ser tenido por conforme si no las impugnare al contestar. Se aplicará, en lo pertinente, el procedimiento establecido en los artículos anteriores.

TÍTULO V

Mensura y Deslinde

CAPÍTULO I

Mensura.

Artículo 641º: Procedencia. - Procederá la mensura judicial:

- 1º) Cuando estando el terreno deslindado, se pretendiera comprobar su superficie.
- 2º) Cuando los límites estuvieren confundidos con los de un terreno colindante.

Artículo 642º: Alcance.- La mensura no afectará los derechos que los propietarios pudieran tener al dominio o a la posesión del inmueble.

Artículo 643º: Requisitos de la Solicitud.- Quien promoviere el procedimiento de mensura, deberá:

- 1º) Expresar su nombre, apellido y domicilio real.
- 2º) Constituir domicilio legal, en los términos del Artículo 37º.
- 3º) Acompañar el título de propiedad del inmueble.
- 4º) Indicar el nombre, apellido y domicilio de los colindantes o manifestar que los ignora.
- 5º) Designar el agrimensor que ha de practicar la operación.

El juez desestimará de oficio y sin sustanciación previa la solicitud que no contuviere los requisitos establecidos.

Artículo 644º: Nombramiento del Perito. Edictos.- Presentada la solicitud con los requisitos indicados en el artículo anterior, el juez deberá:

- 1º) Disponer que se practique la mensura por el perito designado por el requirente.
- 2º) Ordenar que se publiquen edictos por tres días, citando a quienes tuvieren interés en la mensura. La publicación deberá hacerse con la anticipación necesaria para que los interesados puedan concurrir a presenciarse, por sí o por medio de sus representantes. En los edictos se expresará la situación del inmueble, el nombre del solicitante, el juzgado y secretaría y el lugar, día y hora en que se dará comienzo a la operación.
- 3º) Hacer saber el pedido de mensura a la Dirección de Catastro.

Artículo 645º: Actuación Preliminar del Perito.- Aceptado el cargo, el agrimensor deberá:

- 1º) Citar por circular a los propietarios de los terrenos colindantes, con la anticipación indicada en el inciso 2º del artículo anterior y especificando los datos en él mencionados.

Los citados deberán notificarse firmando la circular. Si se negaren a hacerlo, el agrimensor deberá dejar constancia en aquella ante dos testigos, que la suscribirán.

Si los propietarios colindantes no pudieren ser notificados personalmente, la diligencia se practicará con quien los represente, dejándose constancia. Si se negare a firmar, se labrará acta ante dos testigos, se expresarán en ella las razones en que fundare la negativa y se lo tendrá por notificado.

Si alguno de los terrenos colindantes fuese de propiedad fiscal, el agrimensor deberá citar a la autoridad administrativa que corresponda y a su representante judicial.

- 2º) Cursar aviso al peticionario con las mismas enunciaciones que se especifiquen en la circular.

- 3º) Solicitar instrucciones a la Dirección de Catastro y cumplir con los requisitos de carácter administrativo correspondientes a la intervención asignada a ese organismo.

Artículo 646º: Oposiciones.- La oposición que se formulare al tiempo de practicarse la mensura no impedirá su realización, ni la colocación de mojones. Se dejará constancia, en el acta, de los fundamentos de la oposición, agregándose la protesta escrita, en su caso.

Artículo 647º: Oportunidad de la Mensura.- Cumplidos los requisitos establecidos en los Artículos 643º a 645º, el perito hará la mensura en el lugar, día y hora señalados, con la presencia de los interesados o de sus representantes.

Cuando por razones climáticas o mal estado del terreno no fuese posible comenzar la mensura en el día fijado en las citaciones y edictos, el profesional y los interesados podrán convenir nueva fecha, todas las veces que ello sea necesario, labrándose siempre acta de cada postergación.

Cuando la operación no pudiere llevarse a cabo por ausencia del profesional, el juzgado fijará la nueva fecha. Se publicarán edictos, se practicarán citaciones a los linderos y se cursarán avisos con la anticipación y en los términos del Artículo 645º.

Artículo 648º: Continuación de la Diligencia.- Cuando la mensura no pudiere terminar en el día, proseguirá en el más próximo posible. Se dejará constancia de los trabajos realizados y de la fecha en que continuará la operación, en acta que firmarán los presentes.

Artículo 649º: Citación a Otros Linderos.- Si durante la ejecución de la operación se comprobare la existencia de linderos desconocidos al tiempo de comenzarla, se los citará, si fuere posible, por el medio establecido en el Artículo 645º, inciso 1º.

El agrimensor solicitará su conformidad respecto de los trabajos ya realizados.

Artículo 650º: Intervención de los Interesados.- Los colindantes podrán:

1º) Concurrir al acto de la mensura acompañados por peritos de su elección, siendo a su cargo los gastos y honorarios que se devengaren.

2º) Formular las reclamaciones a que se creyeren con derecho, exhibiendo los títulos de propiedad en que las funden. El agrimensor pondrá en ellos constancia marginal que suscribirá. Los reclamantes que no exhibieren sus títulos sin causa justificada, deberán satisfacer las costas del juicio que promovieren contra la mensura, cualquiera fuese el resultado de aquél.

La misma sanción se aplicará a los colindantes que, debidamente citados, no hubiesen intervenido en la operación de mensura sin causa justificada.

El perito deberá expresar, oportunamente, su opinión técnica acerca de las observaciones que se hubiesen formulado.

Artículo 651º: Remoción de Mojoneros.- El agrimensor no podrá remover los mojoneros que encontrare, a menos que hubiesen comparecido todos los colindantes y manifestasen su conformidad por escrito.

Artículo 652º: Acta y Trámite Posterior.- Terminada la mensura, el perito deberá:

1º) Labrar acta en la que expresará los detalles de la operación y el nombre de los linderos que la hayan presenciado. Si se hubiese manifestado disconformidad, las razones invocadas.

2º) Presentar al juzgado la circular de citación y, a la Dirección de Catastro, un informe acerca del modo en que ha cumplido su cometido y, por duplicado, el acta y el plano de la mensura. Será responsable de los daños y perjuicios que ocasionare su demora injustificada.

Artículo 653º: Dictamen Técnico Administrativo.- La Dirección de Catastro podrá solicitar al juez el expediente con el título de propiedad. Dentro de los treinta días contados desde la recepción del acta y diligencia de mensura o, en su caso, del expediente requerido al juez, remitirá a éste uno de los ejemplares del acta, el plano y un informe acerca del valor técnico de la operación efectuada.

Artículo 654º: Efectos.- Cuando la Dirección de Catastro no observare la mensura y no existiere oposición de linderos, el juez la aprobará y mandará expedir los testimonios que los interesados solicitaren.

Artículo 655º: Defectos Técnicos.- Cuando las observaciones u oposiciones se fundaren en cuestiones meramente técnicas, se dará traslado a los interesados por el plazo que fije el juez. Contestados los traslados o vencido el plazo para hacerlo, aquel resolverá aprobando o no la mensura según correspondiere, u ordenando las rectificaciones pertinentes, si fuere posible.

CAPÍTULO II

Deslinde.

Artículo 656º: Deslinde por Convenio.- La escritura pública en que las partes hubiesen efectuado el deslinde deberá presentarse al juez, con todos sus antecedentes. Previa intervención de la Dirección de Catastro se aprobará el deslinde, si correspondiere.

Artículo 657º: Deslinde Judicial.- La acción de deslinde tramitará por las normas establecidas para el juicio sumario.

Si el o los demandados no se opusieren a que se efectúe el deslinde, el juez designará de oficio perito agrimensor para que realice la mensura. Se aplicarán, en lo pertinente, las normas establecidas en el capítulo primero de este título, con intervención de la Dirección de Catastro.

Presentada la mensura, se dará traslado a las partes por diez días, y si expresaren su conformidad, el juez la aprobará estableciendo el deslinde. Si mediare oposición a la mensura, el juez, previo traslado y producción de prueba por los plazos que fijare, dictará sentencia.

Artículo 658º: Ejecución de la Sentencia que Dispone el Deslinde.- La ejecución de la sentencia que declare procedente el deslinde se llevará a cabo de conformidad con las normas establecidas en el artículo anterior. Si correspondiere, se efectuará el amojonamiento.

TÍTULO VI

División de Cosas Comunes.

Artículo 659º: Trámite.- La demanda por división de cosas comunes se sustanciará y resolverá por el procedimiento del juicio ordinario o sumarísimo, lo que determinará el juez atendiendo a las circunstancias del caso, cuya decisión será irrecurrible.

La sentencia deberá contener, además de los requisitos generales, la decisión expresa, cuando fuere posible, sobre la forma de la división, de acuerdo con la naturaleza de la cosa.

Artículo 660º: Peritos.- Ejecutoriada la sentencia, se citará a las partes a una audiencia para el nombramiento de un perito tasador, partidador o martillero, según corresponda, y para que convengan la forma de la división, si no se hubiere establecido en la sentencia. Para su designación y procedimientos ulteriores, se aplicarán las disposiciones relativas a la división de herencia, en el primer caso, o las del juicio ejecutivo, en el segundo.

Artículo 661º: División Extrajudicial. - Si se pidiere la aprobación de una división de bienes hecha extrajudicialmente, el juez, previas las ratificaciones que correspondieren, y las citaciones necesarias en su caso, resolverá aprobándola o rechazándola, sin recurso alguno.

TÍTULO VII

Desalojo

Artículo 662º: Procedimiento.- La acción de desalojo de inmuebles urbanos y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido por este Código para el juicio ordinario, con las modalidades que se establecen en el presente título:

1º) Las excepciones se resolverán en la sentencia definitiva.

2º) No se admitirá reconvencción.

3º) En la demanda y en la contestación las partes deberán expresar si existen o no sublocatarios u ocupantes terceros. El actor, si lo ignora, podrá remitirse a lo que resulte de la diligencia de notificación, de la contestación a la demanda, o de ambas.

4º) Sólo serán apelables las resoluciones que pongan fin al juicio o que impidan su continuación, la sentencia definitiva, las providencias que decreten medidas precautorias y la resolución que decida el incidente de nulidad.

El recurso se concederá en relación y, el interpuesto respecto de la decisión que desestima la nulidad, en efecto diferido. El deducido contra la providencia que decreta medidas precautorias tramitará en incidente por separado.

Artículo 663º: Procedencia. Acumulación de Cobro de Arrendamientos.- La acción de desalojo procederá contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible.

Podrá acumularse a la acción de desalojo la de cobro de arrendamientos, siguiéndose el procedimiento indicado en el artículo anterior, sin admitirse respecto de aquellos más pruebas de su pago que las previstas en el Artículo 666º bis.

Artículo 663º bis: Entrega del Inmueble al Accionante.- En los casos que la acción de desalojo se dirija contra tenedor precario o intruso, en cualquier estado del juicio después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa caución por los eventuales daños y perjuicios que se puedan irrogar.

Artículo 664º: Reconocimiento Judicial.- Cuando el desalojo se fundare en las causales de cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar antes del traslado de la demanda un reconocimiento judicial dentro de los cinco días de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial. Igual previsión deberá tomarse cuando se diera la causal prevista en el Artículo 663º bis.

Artículo 665º: Notificaciones.- Si en el contrato no se hubiese constituido domicilio especial y el demandado no tuviese su domicilio real dentro de la jurisdicción, la notificación de la demanda podrá practicarse en el inmueble cuyo desalojo se requiere, siempre que en él hubiese algún edificio habitado.

Artículo 665º bis: Localización del Inmueble.- Si faltase la chapa indicadora del número del inmueble donde debe practicarse la notificación, el notificador procurará localizarlo inquiriendo a los vecinos. Si obtuviese indicios suficientes, requerirá en el inmueble la identificación de los ocupantes, pidiéndoles razón de su relación con el demandado.

Si la notificación debiere hacerse en una casa de departamentos y en la cédula no se hubiere especificado la unidad, o se la designare por el número y en el edificio estuviere designada por letras, o viceversa, el notificador inquirirá al encargado y vecinos si el demandado vive en el edificio; lo notificará si lo hallare, identificándolo. En caso contrario devolverá la cédula informando el resultado de la diligencia.

Artículo 665º ter: Deberes y Facultades del Notificador.- Cuando la notificación se cumpla en el inmueble reclamado, el notificador:

1º) Deberá hacer saber la existencia del juicio a cada uno de los sublocatarios u ocupantes presentes en el acto, aunque no hubiesen sido denunciados, previniéndoles que la sentencia que se pronuncie producirá efectos contra todos ellos y que, dentro del plazo fijado para contestar la demanda, podrán ejercer los derechos que estimen corresponderles.

2º) Identificará a los presentes e informará al juez sobre el carácter que invoquen y acerca de otros sublocatarios u ocupantes cuya presunta existencia surja de las manifestaciones de aquellos. Aunque existiesen sublocatarios u ocupantes ausentes en el acto de la notificación, no se suspenderán los trámites y la sentencia de desalojo producirá efectos también respecto de ellos.

3º) Podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y exigir la exhibición de documentos de identidad u otros que fueren necesarios.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo y en el anterior constituirá falta grave del notificador.

Artículo 666º: Desalojo por Falta de Pago o Vencimiento de Contrato. Desocupación Inmediata.- En los supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuere la de falta de pago o vencimiento del contrato, el actor podrá también, bajo caución real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el Artículo 663º bis, no resultando en tales casos necesario el reconocimiento judicial previsto en el artículo 664º. Para el supuesto que se probare que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos que configuraren la relación locativa o el pago de alquileres, además de la inmediata ejecución de la caución se le impondrá una multa de hasta mil juristas en favor de la contraparte.

Artículo 666º bis: Prueba.- En los juicios fundados en las causales de falta de pago o por vencimiento del plazo sólo se admitirá la prueba documental, la de confesión y la pericial.

Artículo 667º: Alcance de la Sentencia. Lanzamiento.- La sentencia se hará efectiva contra todos los que ocupen el inmueble, aunque no hayan sido mencionados en la diligencia de la notificación o no se hubiesen presentado en el juicio.

El plazo para el desahucio será de diez días si las leyes no acordaran otro mayor o menor. Vencido el mismo a petición de parte, se procederá al lanzamiento por la fuerza pública a costa del ocupante.

Artículo 668º: Condena de futuro.- La demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la desocupación deberá cumplirse una vez vencido aquél.

Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de haberse allanado a la demanda, cumpliera su obligación de desocupar oportunamente el inmueble o de devolverlo en la forma convenida.

TÍTULO VIII

Adquisición del Dominio por Usucapión

Artículo 669º: Procedimiento.- Para justificar la adquisición del dominio de inmuebles por la posesión, se seguirá el procedimiento del juicio ordinario con las siguientes modificaciones:

1º) Con la demanda se acompañará certificado del Registro Público donde consten, además de la condición jurídica del inmueble, todos los datos sobre el titular o titulares del dominio, y plano de mensura aprobado por la Dirección de Catastro de la Provincia.

2º) Será parte en el juicio, corriéndosele traslado de la demanda, quien resulte titular del dominio de acuerdo con las constancias del Registro Público, escrituras u otros documentos o antecedentes del título.

Si no se pudiere determinar el propietario, se procederá como lo establece el Artículo 328º.

3º) Se citará además por edictos publicados por dos días, a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble. Esta publicación, en su caso, podrá hacerse conjuntamente con la requerida en el inciso anterior.

4º) Se dará intervención al agente fiscal o a la municipalidad correspondiente a la ubicación del inmueble.

5º) Se admitirá toda clase de pruebas pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial.

Artículo 670º: Sentencia.- Si la sentencia acoge la demanda se dispondrá su inscripción en el Registro Público y la cancelación de la anterior. El fallo hará cosa juzgada material.

TÍTULO IX

Conflictos de Poderes

Artículo 671º: Existencia de Conflicto.- Se entenderá que existe conflicto de poderes en los términos del Artículo 167º inciso 1º) de la Constitución Provincial:

1º) Cuando un poder o una municipalidad o una rama de la corporación municipal, se atribuye o ejerce competencia, invade o ejercita atribuciones que corresponden a otro poder o a otra municipalidad o a la otra rama del poder.

2º) Cuando una rama de la corporación municipal niegue o desconozca la existencia legal de la otra, o su autoridad o los actos que practicare, entorpezca o impida el libre ejercicio de sus funciones.

Artículo 672º: Demanda.- En la demanda se expondrán los antecedentes constitutivos del conflicto y se acompañará toda la prueba instrumental que estuviere en poder de la parte. Si no la tuviere a su disposición la individualizará indicando su contenido y el lugar donde se encuentra.

Artículo 673º: Trámite y Resolución.- Deducida la demanda el Superior Tribunal dará traslado a la otra parte en conflicto para que, en el plazo de diez días, conteste y agregue los antecedentes y documentos pertinentes de que dispusiere, bajo apercibimiento de resolver con los presentados por el demandante.

Presentado el responde o vencido el plazo para hacerlo, se dará traslado al fiscal por ocho días. Contestado el traslado se dictará resolución en el plazo de treinta días.

Si resultare que el poder o la rama vencida no hubiere procedido con motivo atendible, sus miembros serán penados con multa de tres a doce juristas.

TITULO X

Procesos ante los Juzgados de Paz

Artículo 674º: Representación. - La representación podrá acreditarse por instrumento privado firmado ante el secretario o escribano público, o por declaración verbal que se hará constar en acta ante el secretario.

Artículo 675º: Demanda. Traslado.- Presentada la demanda con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 317º, se señalará audiencia para oír a las partes dentro de un plazo que no excederá de diez días.

El demandado será citado y emplazado con anticipación no menor de cinco días a la fecha de la audiencia, en la forma ordinaria, bajo apercibimiento de que si no comparece se dictará sentencia de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda, y si comparece y no niega categóricamente cada uno de los hechos pertinentes expuestos por el actor, la autenticidad de los documentos y la recepción de las cartas y telegramas presentados, se lo tendrá por reconocido de los mismos.

Si no asistiere el demandante se celebrará la audiencia sin su intervención.

Artículo 676º: Audiencia. Contestación de la Demanda.- En la audiencia se contestará la demanda, se opondrán todas las excepciones admisibles y la reconvencción si fuere procedente, ofreciéndose toda la prueba de que intenten valerse las partes.

Si se hubiere deducido reconvencción y el actor expresare que no está en condiciones de contestarla, el juez señalará audiencia a ese objeto dentro de los cinco días siguientes.

En la audiencia el juez tratará de avenir a las partes proponiendo los medios de conciliación que su prudencia le sugiera.

De todo lo expuesto en la audiencia se levantará acta conforme a lo prescripto en el Artículo 122º.

Artículo 677º: Pruebas.- Si se hubiere ofrecido prueba el juez mandará producirla en el plazo que acordare, el que no podrá exceder de veinte días, fijando la audiencia en que tendrán lugar las declaraciones de las partes, la testimonial y, eventualmente, las explicaciones que debe dar el perito. Asimismo ordenará los exhortos y oficios que hayan sido solicitados por las partes.

Artículo 678º: Sentencia y Recurso.- Terminada la audiencia que prescribe el Artículo 676º si no se hubieren ofrecido pruebas, o practicadas y agregadas las producidas, se dictará sentencia en el plazo de treinta días.

Únicamente será apelable la sentencia definitiva y las resoluciones que pongan fin al juicio o impidan su continuación, pero el superior podrá, al conocer de lo principal, decidir respecto de otras resoluciones dictadas por el inferior en el curso del juicio siempre que, al notificarse de ellas, el agraviado hubiere formulado la reserva del caso y en su oportunidad, expresare agravios al respecto.

La apelación se interpondrá por escrito o verbalmente, en cuyo caso se hará constar en diligencia, dentro del plazo de cinco días.

El recurso se concederá en relación para ante el juez de primera instancia en lo civil de la circunscripción judicial. Deberá fundarse en el juzgado de paz dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo concede. Del escrito que se presente se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el apelante no presentare memorial en el plazo establecido, el juez de paz declarará desierto el recurso. Regirá en lo pertinente lo dispuesto en el Artículo 248º. Recibido el expediente en el superior el secretario dará cuenta. El juez dictará resolución en el plazo de treinta días.

Artículo 679º: Aplicabilidad de Otras Normas.- Regirán respecto de este proceso las normas previstas para el proceso ordinario y las generales que fueren compatibles con el mismo.

Los juicios ejecutivos se tramitarán conforme al procedimiento previsto en los Artículos 504º a 578º y en los apremios fiscales se aplicará el previsto en el Código Fiscal.

LIBRO V

PROCESOS UNIVERSALES

TÍTULO I

Proceso Sucesorio

CAPITULO I

Disposiciones Generales.

Artículo 680º: Requisitos de la Iniciación.- Quien solicitare la apertura del proceso sucesorio, deberá justificar, prima facie, su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del causante.

Si éste hubiere hecho testamento y el solicitante conociere su existencia deberá presentarlo, cuando estuviere en su poder, o indicar el lugar donde se encontrare, si lo supiere.

Cuando el causante hubiera fallecido sin haber testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los herederos o representantes legales conocidos.

Artículo 681º: Medidas Preliminares y de Seguridad.- El juez hará lugar o denegará la apertura del proceso, previo examen de su competencia y recepción de la prueba que resultare necesaria.

Dentro del tercer día de iniciado el procedimiento, el presentante deberá comunicarlo al Registro de Juicios Universales, en la forma y con los recaudos que establece la reglamentación respectiva.

A petición de parte interesada, o de oficio, en su caso, el juez dispondrá las medidas que considere convenientes para la seguridad de los bienes y documentación del causante.

El dinero, los títulos y acciones se depositarán en el banco de depósitos judiciales. Respecto de las alhajas se adoptará la misma medida, salvo que los herederos decidieren que quedaren bajo su custodia.

Artículo 682º: Simplificación de los Procedimientos.- Cuando en el proceso sucesorio el juez advirtiere que la comparecencia personal de las partes y de sus letrados podría ser beneficiosa para la concentración y simplificación de los actos procesales que deban cumplirse, de oficio o a pedido de parte, señalará una audiencia, a la que aquellos deberán concurrir personalmente, bajo apercibimiento de imponer una multa de diez a cien juristas en caso de inasistencia injustificada.

En dicha audiencia el juez procurará que las partes establezcan lo necesario para la más rápida tramitación del proceso.

Artículo 683º: Administrador Provisional.- A pedido de parte, el juez podrá fijar una audiencia para designar administrador provisional. El nombramiento recaerá en el cónyuge supérstite o en el heredero que, prima facie, hubiere acreditado mayor aptitud para el desempeño del cargo. El juez sólo podrá nombrar a un tercero cuando no concurrieren estas circunstancias.

Artículo 684º: Intervención de Interesados.- La actuación de las personas y funcionarios que pueden promover el proceso sucesorio o intervenir en él, tendrá las siguientes limitaciones:

1º) El ministerio público cesará de intervenir una vez aprobado el testamento, dictada la declaratoria de herederos, o reputada vacante la herencia.

2º) Los tutores ad-litem cesarán de intervenir cuando a sus pupilos se los designe representante legal definitivo, o desaparezca la incapacidad o la oposición de intereses que dio motivo a su designación.

3º) La autoridad encargada de recibir la herencia vacante deberá ser notificada por cédula de los procesos en los que pudiere llegar a tener intervención. Las actuaciones sólo se le remitirán cuando se reputare vacante la herencia. Su intervención cesará una vez aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos.

Artículo 685º: Intervención de los Acreedores.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 3.314º del Código Civil, los acreedores sólo podrán iniciar el proceso sucesorio después de transcurridos cuatro meses desde el fallecimiento del causante. Sin embargo, el juez podrá ampliar o reducir el plazo cuando las circunstancias así lo aconsejaren. Su intervención cesará cuando se presente al juicio algún heredero o se provea a su representación en forma legal, salvo inacción manifiesta de éstos, en cuyo supuesto los acreedores podrán activar el procedimiento.

Artículo 686º: Fallecimiento de Herederos.- Si falleciere un heredero o presunto heredero, dejando sucesores, éstos deberán acreditar ese carácter y comparecer, bajo una sola representación, dentro del plazo que el juez fije. Se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en el Artículo 51º.

Artículo 687º: Acumulación.- Cuando se hubiesen iniciado dos juicios sucesorios, uno testamentario y otro ab-intestato, para su acumulación prevalecerá en principio el primero. Quedará a criterio del juez la aplicación de esta regla, teniendo en cuenta el grado de adelanto de los trámites realizados y las medidas útiles cumplidas en cada caso, siempre que la promoción del proceso o su sustanciación no revelaren el propósito de obtener una prioridad indebida.

El mismo criterio se aplicará en caso de coexistencia de juicios testamentarios o ab-intestato.

Artículo 688º: Audiencia.- Dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento, el juez convocará a audiencia que se notificará por cédula a los herederos y legatarios de parte alícuota, en su caso, y a los funcionarios que correspondiere, con el objeto de efectuar las designaciones de administrador definitivo, inventariador, tasador y las demás que fueren procedentes.

Artículo 689º: Sucesión Extrajudicial.- Aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos, en su caso, si todos los herederos fueren capaces y hubiere conformidad entre ellos, los ulteriores trámites del proceso sucesorio podrán continuar extrajudicialmente a cargo del o de los profesionales intervinientes.

En este supuesto, las operaciones de inventario, avalúo, partición y adjudicación deberán efectuarse con la intervención y conformidad de los organismos administrativos que correspondan.

Cumplidos estos recaudos los letrados podrán solicitar directamente la inscripción de los bienes registrables y entregar las hijuelas a los herederos, previa acreditación ante los Registros Públicos del cumplimiento de la Ley de Caja Forense.

Si durante la tramitación extrajudicial se suscitaren desinteligencias entre los herederos, o entre éstos y los organismos administrativos, aquéllas deberán someterse a la decisión del juez del proceso sucesorio.

El monto de los honorarios por los trabajos efectuados será el que correspondería si aquellos se hubiesen realizado judicialmente. No se regularán dichos honorarios hasta tanto los profesionales que hubiesen tenido a su cargo el trámite extrajudicial presenten al juzgado copia de las actuaciones cumplidas para su agregación al expediente.

Tampoco podrán inscribirse los bienes registrables sin el certificado expedido por el secretario en el que conste que se han agregado las copias a que se refiere el párrafo anterior.

CAPITULO II

Sucesiones Ab-Intestato.

Artículo 690º: Providencia de Apertura y Citación a los Interesados. - Cuando el causante no hubiera testado o el testamento no contuviese institución de heredero, en la providencia de apertura del proceso sucesorio, el juez dispondrá la citación de todos los que se consideraren con derecho a los bienes dejados por el causante, para que dentro del plazo de diez días lo acrediten.

A tal efecto ordenará:

1º) La notificación por cédula, oficio o exhorto a los herederos denunciados en el expediente que tuvieran domicilio conocido en el país.

2º) La publicación de edictos por tres días en el Boletín Oficial y en otro periódico del lugar del juicio, salvo que el monto del haber hereditario no excediere, prima facie, de la suma equivalente a cien juristas, en cuyo caso sólo se publicarán en el Boletín Oficial.

Si el haber hereditario sobrepasare en definitiva la suma precedentemente indicada, se ordenarán las publicaciones que correspondan.

El plazo fijado por el Artículo 3.539º del Código Civil comenzará a correr desde el día siguiente al de la última publicación y se computará en días corridos, salvo los que correspondieren a ferias judiciales.

Artículo 691º: Declaratoria de Herederos.- Cumplidos el plazo y los trámites a que se refiere el artículo anterior y acreditado el derecho de los sucesores, el juez dictará declaratoria de herederos.

Si no se hubiere justificado el vínculo de alguno de los presuntos herederos, se diferirá la declaratoria por el plazo que el juez fije para que, durante su transcurso, se produzca la prueba correspondiente. Vencido dicho plazo, el juez dictará declaratoria a favor de quienes hubiesen acreditado el vínculo, o reputará vacante la herencia.

Artículo 692º: Admisión de Herederos.- Los herederos mayores de edad, que hubieran acreditado el vínculo conforme a derecho, podrán, por unanimidad, admitir coherederos que no lo hubiesen justificado, sin que ello importe reconocimiento del estado de familia. Los herederos declarados podrán, en iguales condiciones, reconocer acreedores del causante.

Artículo 693º: Efectos de la Declaratoria. Posesión de la Herencia.- La declaratoria de herederos se dictará sin perjuicio de terceros.

Cualquier pretendiente podrá promover demanda impugnando su validez o exactitud, para excluir al heredero declarado, o para ser reconocido con él.

Aún sin decisión expresa, la declaratoria de herederos otorgará la posesión de la herencia a quienes no la tuvieren por el solo hecho de la muerte del causante.

Artículo 694º: Ampliación de la Declaratoria.- La declaratoria de herederos podrá ser ampliada por el juez en cualquier estado del proceso, a petición de parte legítima, si correspondiere.

CAPITULO III

Sucesión Testamentaria

SECCION 1ª

Protocolización del Testamento

Artículo 695º: Testamentos Ológrafos y Cerrados.- Quien presentare testamento ológrafo deberá ofrecer dos testigos para que reconozcan la firma y letra del testador.

El juez señalará audiencia a la que citará a los beneficiarios y a los presuntos herederos cuyos domicilios fueren conocidos, y al escribano y testigos, si se tratare de testamento cerrado.

Si el testamento ológrafo se acompañare en sobre cerrado, el juez lo abrirá en dicha audiencia en presencia del secretario.

Artículo 696º: Protocolización.- Si los testigos reconocieren la letra y firma del testador, el juez rubricará el principio y fin de cada una de las páginas del testamento y el secretario expedirá testimonio que se protocolizará en el libro de autos y sentencias del juzgado.

Artículo 697º: Oposición a la Protocolización.- Si reconocida la letra y la firma del testador por los testigos, se formularen objeciones sobre el cumplimiento de las formalidades prescriptas, o reclamos que no se refieran a la validez del testamento, la cuestión se sustanciará por el trámite de los incidentes.

SECCION 2ª

Disposiciones Especiales

Artículo 698º: Citación.- Presentado el testamento, o cumplido el trámite previsto en el Artículo 696º en su caso, el juez dispondrá la notificación personal de los herederos instituidos, de los demás beneficiarios y del albacea para que se presenten dentro de treinta días.

Si se ignorase el domicilio de las personas mencionadas en el apartado anterior, se procederá en la forma dispuesta en el Artículo 140º.

Artículo 699º: Aprobación del Testamento.- En la providencia a que se refiere el artículo anterior, el juez se pronunciará sobre la validez del testamento, cualquiera fuere su forma. Ello importará otorgar la posesión de la herencia a los herederos que no la tuvieren de pleno derecho.

CAPITULO IV

Administración

Artículo 700º: Designación de Administrador. - Si no mediare acuerdo entre los herederos para la designación de administrador, el juez nombrará al cónyuge supérstite, y a falta, renuncia o inidoneidad de éste, al propuesto por la mayoría, salvo que se invocasen motivos especiales que, a criterio del juez, fueren aceptables para no efectuar ese nombramiento.

Artículo 701º: Aceptación del Cargo.- El administrador aceptará el cargo ante el secretario y será puesto en posesión de los bienes de la herencia por intermedio del oficial de justicia. Se le expedirá testimonio de su nombramiento.

Artículo 702º: Expedientes de Administración.- Las actuaciones relacionadas con la administración tramitarán en expedientes separados, cuando la complejidad e importancia de aquélla así lo aconsejaren.

Artículo 703º: Facultades del Administrador.- El administrador de la sucesión sólo podrá realizar actos conservatorios de los bienes administrados.

Solo podrá retener fondos o disponer de ellos con el objeto de pagar los gastos normales de la administración. En cuanto a los gastos extraordinarios se estará a lo dispuesto por el Artículo 220º inciso 5º).

No podrá arrendar inmuebles sin el consentimiento de todos los herederos.

Cuando no mediare acuerdo entre los herederos, el administrador podrá ser autorizado por el juez para promover, proseguir o contestar las demandas de la sucesión. Si existieren razones de urgencia, podrá prescindir de dicha autorización, pero deberá dar cuenta al juzgado de esa circunstancia en forma inmediata.

Artículo 704º: Rendición de Cuentas.- El administrador de la sucesión deberá rendir cuentas trimestralmente, salvo que la mayoría de los herederos hubiere acordado fijar otro plazo. Al terminar sus funciones rendirá una cuenta final.

Tanto las rendiciones de cuentas parciales como la final se pondrán en secretaría a disposición de los interesados durante cinco días y diez días, respectivamente. Si no fueren observadas, el juez las aprobará, si correspondiere. Cuando mediaren observaciones, se sustanciarán por el trámite de los incidentes.

Artículo 705º: Sustitución y Remoción.- La sustitución del administrador se hará de acuerdo con las reglas contenidas en el Artículo 700º. Podrá ser removido de oficio o a pedido de parte, cuando su actuación importare mal desempeño del cargo. La remoción se sustanciará por el trámite de los incidentes.

Si las causas invocadas fueren graves y estuvieren prima facie acreditadas, el juez podrá disponer su suspensión y reemplazo por otro administrador. En este último supuesto, el nombramiento se regirá por lo dispuesto en el Artículo 700º.

Artículo 706º: Honorarios.- El administrador no podrá percibir honorarios con carácter definitivo hasta que haya sido rendida y aprobada la cuenta final de la administración. Cuando ésta excediera de seis meses, el administrador podrá ser autorizado a percibir periódicamente sumas, con carácter de anticipos provisionales, las que deberán guardar proporción con el monto aproximado del honorario total.

CAPITULO V

Inventario y Avalúo

Artículo 707º: Inventario y Avalúo Judiciales.- El inventario y el avalúo deberán hacerse judicialmente:

1º) A pedido de un heredero que no haya perdido o renunciado al beneficio de inventario, o en el caso del Artículo 3.363º del Código Civil.

2º) Cuando se hubiere nombrado curador de la herencia.

3º) Cuando lo solicitaren los acreedores de la herencia o de los herederos, y resultare necesario a criterio del juez.

4º) Cuando correspondiere por otra disposición de la ley.

No tratándose de alguno de los casos previstos en los incisos anteriores, las partes podrán sustituir el inventario por la denuncia de los bienes, previa conformidad del ministerio pupilar si existieran incapaces. En el mismo caso se tendrá por avalúo el que fijen las partes de común acuerdo.

Artículo 708º: Inventario Provisional.- El inventario se practicará en cualquier estado del proceso, siempre que lo solicitare alguno de los interesados. El que se realizare antes de dictarse la declaratoria de herederos o aprobarse el testamento, tendrá carácter provisional.

Artículo 709º: Inventario Definitivo.- Dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento, se hará el inventario definitivo. Sin embargo, con la conformidad de las partes podrá asignarse este carácter al inventario provisional, o admitirse el que presentaren los interesados, a menos que, en este último caso, existieran incapaces o ausentes.

Artículo 710º: Nombramiento del Inventariador.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 707º, último párrafo, el inventario será efectuado por un escribano que se propondrá en la

audiencia prevista en el Artículo 688º o en otra, si en aquella nada se hubiere acordado al respecto.

Para la designación bastará la conformidad de la mayoría de los herederos presentes en el acto. En su defecto, el inventariador será nombrado por el juez.

Artículo 711º: Bienes Fuera de la Jurisdicción.- Para el inventario de bienes existentes fuera del lugar donde se tramita el proceso sucesorio se comisionará al juez de la localidad donde se encontraren.

Artículo 712º: Citaciones. Inventario.- Las partes, los acreedores y legatarios serán citados para la formación del inventario, notificándoseles por cédula, en la que se les hará saber el lugar, día y hora de la realización de la diligencia.

El inventario se hará con intervención de las partes que concurren.

El acta de la diligencia contendrá la especificación de los bienes, con indicación de la persona que efectúe la denuncia. Si hubiese título de propiedad sólo se hará una relación sucinta de su contenido.

Se dejará constancia de las observaciones o impugnaciones que formularen los interesados.

Los comparecientes deberán firmar el acta. Si se negaren se dejará también constancia, sin que ello afecte la validez de la diligencia.

Artículo 713º: Avalúo.- Sólo serán valuados los bienes que hubiesen sido inventariados, y siempre que fuere posible, las diligencias de inventario y avalúo se realizarán simultáneamente. El o los peritos serán designados de conformidad con lo establecido en el Artículo 710º.

Podrán ser recusados por las causas establecidas para los peritos.

Artículo 714º: Otros Valores.- Si hubiere conformidad de partes se podrá tomar para los inmuebles la valuación fiscal y para los títulos y acciones la cotización de la bolsa de comercio o mercado de valores.

Si se tratare de los bienes de la casa habitación del causante, la valuación por peritos podrá ser sustituida por declaración jurada de los interesados.

Artículo 715º: Impugnación al Inventario o al Avalúo.- Agregados al proceso el inventario y el avalúo, se los pondrá de manifiesto en la secretaría por cinco días. Las partes serán notificadas por cédula.

Vencido el plazo sin haberse deducido oposición, se aprobarán ambas operaciones sin más trámite.

Artículo 716º: Reclamaciones.- Las reclamaciones de los herederos o de terceros sobre inclusión o exclusión de bienes en el inventario se sustanciarán por el trámite de los incidentes.

Si las reclamaciones versaren sobre el avalúo, se convocará a audiencia a los interesados y al perito para que se expidan sobre la cuestión promovida, resolviendo el juez lo que correspondiere.

Si no compareciere quien dedujo la oposición, se lo tendrá por desistido, con costas. En caso de inasistencia del perito, éste perderá el derecho a cobrar honorarios por los trabajos practicados, cualquiera sea la resolución que se dicte respecto de las impugnaciones.

Si las observaciones formuladas requiriesen, por su naturaleza, sustanciación más amplia, la cuestión tramitará por juicio sumario o por incidente. La resolución del juez no será recurrible.

CAPITULO VI

Partición y Adjudicación

Artículo 717º: Partición Privada.- Una vez aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, si todos los herederos están presentes y son capaces, podrán convenir la partición en la forma y por el acto que, por unanimidad, juzguen conveniente, pudiendo apartarse del procedimiento. Podrán igualmente solicitar que se inscriban la declaratoria de herederos o el testamento.

En ambos casos, previamente se pagará la tasa de justicia, gastos causídicos y honorarios, de conformidad con lo establecido en este Código y en las leyes impositivas y de aranceles. No procederá la inscripción si mediare oposición de acreedores o legatarios.

Artículo 718º: Partidor.- El partidor, que deberá tener título de abogado o contador público, será nombrado en la forma dispuesta para el inventariador.

Cuando la partición sea efectuada por contador, el mismo deberá tener patrocinio letrado.

Artículo 719º: Plazo.- El partidor deberá presentar la partición dentro del plazo que el juez fije, bajo apercibimiento de remoción. El plazo podrá ser prorrogado si mediare pedido fundado del partidor o de los herederos.

Artículo 720º: Desempeño del Cargo.- Para hacer las adjudicaciones, el perito, si las circunstancias lo requirieren, oír a los interesados a fin de obrar de conformidad con ellos en todo lo que acordaren, o de conciliar, en lo posible, sus pretensiones.

Las omisiones en que incurrieren deberán ser salvadas a su costa.

Artículo 721º: Certificados.- Antes de ordenarse la inscripción en el Registro de la Propiedad de las hijuelas, declaratoria de herederos, o testamento, en su caso, deberá solicitarse certificado sobre las condiciones de dominio de los inmuebles.

Si se tratare de bienes situados en otra jurisdicción, en el exhorto u oficio se expresará que la inscripción queda supeditada al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes registrales.

Artículo 722º: Presentación de la Cuenta Particionaria.- Presentada la partición, el juez la pondrá de manifiesto en la secretaría por diez días. Los interesados serán notificados por cédula. La manifestación y notificación no serán necesarias cuando exista conformidad de todos los interesados.

Vencido el plazo sin que se haya formulado oposición, el juez, previa vista al ministerio pupilar, si correspondiere, aprobará la cuenta particionaria sin recurso, salvo que violare normas sobre división de la herencia o hubiere incapaces que pudieren resultar perjudicados.

Sólo será apelable la resolución que rechace la cuenta.

Artículo 723º: Trámite de la Oposición.- Si se dedujere oposición el juez citará a audiencia a las partes, al ministerio pupilar, en su caso, y al partidor, para procurar el arreglo de las diferencias. La audiencia tendrá lugar cualquiera fuese el número de interesados que asistiere. Si quien ha impugnado la cuenta particionaria dejare de concurrir, se lo tendrá por desistido, con costas. En caso de inasistencia del perito, perderá su derecho a los honorarios.

Si los interesados no pudieren ponerse de acuerdo, el juez resolverá dentro de los diez días de celebrada la audiencia.

CAPITULO VII

Herencia Vacante

Artículo 724º: Reputación de Vacancia. Curador.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 690º o, en su caso, la ampliación que prevé el Artículo 691º, si no se hubieran presentado herederos o los presentados no hubieran acreditado su calidad de tales, la sucesión se reputará vacante y se designará curador al representante del Consejo General de Educación, quien desde ese momento será parte.

Artículo 725º: Inventario y Avalúo.- El inventario y el avalúo se practicarán por peritos designados a propuesta del Consejo General de Educación. Se realizarán en la forma dispuesta en el capítulo quinto.

Artículo 726º: Trámites Posteriores.- Los derechos y obligaciones del curador, la liquidación de los bienes y la declaración de vacancia y sus efectos se regirán por el Código Civil, aplicándose supletoriamente las disposiciones sobre administración de la herencia contenidas en el capítulo cuarto y leyes especiales.

LIBRO VI

PROCESO ARBITRAL

TITULO I

Juicio Arbitral

Artículo 727º: Objeto del Juicio.- Toda cuestión entre partes, excepto las mencionadas en el Artículo 728º, podrá ser sometida a la decisión de jueces árbitros, antes o después de deducida en juicio y cualquiera fuere el estado de éste.

La sujeción a juicio arbitral puede ser convenida en el contrato o en un acto posterior.

Artículo 728º: Cuestiones Excluidas.- No podrán comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción.

Artículo 729º: Capacidad.- Las personas que no pueden transigir no podrán comprometer en árbitros.

Cuando la ley exija autorización judicial para realizar actos de disposición, también aquella será necesaria para celebrar el compromiso. Otorgada la autorización, no se requerirá la aprobación judicial del laudo.

Artículo 730º: Forma del Compromiso.- El compromiso deberá formalizarse por escritura pública o instrumento privado, o por acta extendida ante el juez de la causa, o ante aquel a quien hubiese correspondido su conocimiento.

Artículo 731º: Contenido.- El compromiso deberá contener, bajo pena de nulidad:

1º) Fecha, nombre y domicilio de los otorgantes.

2º) Nombre y domicilio de los árbitros, excepto en el caso del Artículo 734º.

3º) Las cuestiones que se sometan al juicio arbitral, con expresión de sus circunstancias.

4º) La estipulación de una multa que deberá pagar, a la otra parte, la que dejare de cumplir los actos indispensables para la realización del compromiso.

Artículo 732º: Cláusulas Facultativas.- Se podrá convenir, asimismo, en el compromiso:

1º) El procedimiento aplicable y el lugar en que los árbitros hayan de conocer y fallar. Si no se indicare el lugar, será el de otorgamiento del compromiso.

2º) El plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo.

3º) La designación de un secretario, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 740º.

4º) Una multa que deberá pagar la parte que recurra del laudo, a la que lo consienta, para poder ser oído, si no mediase la renuncia que se menciona en el inciso siguiente.

5º) La renuncia del recurso de apelación y del de nulidad, salvo los casos determinados en el Artículo 751º.

Artículo 733º: Demanda.- Podrá demandarse la constitución del tribunal arbitral, cuando una o más cuestiones deban ser decididas por árbitros.

Presentada la demanda con los requisitos del Artículo 317º, en lo pertinente, ante el juez que hubiese sido competente para conocer en la causa, se conferirá traslado al demandado por diez días y se designará audiencia para que las partes concurran a formalizar el compromiso. Si hubiese resistencia infundada, el juez proveerá por la parte que incurriere en ella, en los términos del Artículo 731º.

Si la oposición a la constitución del tribunal arbitral fuese fundada, el juez así lo declarará, con costas, previa sustanciación por el trámite de los incidentes, si fuere necesario.

Si las partes concordaren en la celebración del compromiso, pero no sobre los puntos que ha de contener, el juez resolverá lo que corresponda.

Artículo 734º: Nombramiento.- Los árbitros serán nombrados por las partes, pudiendo el tercero ser designado por ellas, o por los mismos árbitros, si estuviesen facultados. Si no hubiere acuerdo, el nombramiento será hecho por el juez competente.

La designación sólo podrá recaer en personas mayores de edad y que estén en el pleno ejercicio de los derechos civiles.

Artículo 735º: Aceptación del Cargo.- Otorgado el compromiso se hará saber a los árbitros para la aceptación del cargo ante el secretario del juzgado, con juramento o promesa de fiel desempeño.

Si alguno de los árbitros renunciare, admitiere la recusación, se incapacitare o falleciere, se lo reemplazará en la forma acordada en el compromiso. Si nada se hubiese previsto, lo designará el juez.

Artículo 736º: Desempeño de los árbitros.- La aceptación de los árbitros dará derecho a las partes para compelerlos a que cumplan con su cometido, bajo pena de responder por daños y perjuicios.

Artículo 737º: Recusación. - Los árbitros designados por el juzgado podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces. Los nombrados de común acuerdo por las partes, únicamente por causas posteriores al nombramiento.

Los árbitros no podrán ser recusados sin causa. Sólo serán removidos por consentimiento de las partes y decisión del juez.

Artículo 738º: Trámite de la Recusación.- La recusación deberá deducirse ante los mismos árbitros, dentro de los cinco días de conocido el nombramiento.

Si el recusado no la admitiere, conocerá de la recusación el juez ante quien se otorgó el compromiso o el que hubiese debido conocer si aquél no se hubiere celebrado.

Se aplicarán las normas de los Artículos 14º y siguientes, en lo pertinente.

La resolución del juez será irrecurrible.

El procedimiento quedará suspendido mientras no se haya decidido sobre la recusación.

Artículo 739º: Extinción del Compromiso.- El compromiso cesará en sus efectos:

1º) Por decisión unánime de los que lo contrajeron.

2º) Por el transcurso del plazo señalado en el compromiso, o del legal en su defecto, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños e intereses, si por su culpa hubiese transcurrido inútilmente el plazo que corresponda, o del pago de la multa mencionada en el Artículo 731º inciso 4º), si la culpa fuese de alguna de las partes.

3º) Si durante tres meses las partes o los árbitros no hubiesen realizado ningún acto tendiente a impulsar el procedimiento.

Artículo 740º: Secretario.- Toda la sustanciación del juicio arbitral se hará ante un secretario, quien deberá ser persona capaz, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles e idónea para el desempeño del cargo.

Será nombrado por las partes o por el juez, en su caso, a menos que en el compromiso se hubiese encomendado su designación a los árbitros. Prestará juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo ante el tribunal arbitral.

Artículo 741º: Actuación del Tribunal.- Los árbitros designarán a uno de ellos como presidente. Este dirigirá el procedimiento y dictará, por sí solo, las providencias de mero trámite.

Sólo las diligencias de prueba podrán ser delegadas en uno de los árbitros; en lo demás actuarán siempre formando tribunal.

Artículo 742º: Procedimiento.- Si en la cláusula compromisoria, en el compromiso, o en un acto posterior de las partes no se hubiese fijado el procedimiento, los árbitros observarán el del juicio ordinario o sumarísimo según lo establecieron, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia económica de la causa. Esta resolución será irrecurrible.

Artículo 743º: Cuestiones Previas.- Si a los árbitros les resultare imposible pronunciarse antes de que la autoridad judicial haya decidido alguna de las cuestiones que por el Artículo 728º no pueden ser objeto de compromiso u otras que deban tener prioridad y no les hayan sido sometidas, el plazo para laudar quedará suspendido hasta el día en que una de las partes entregue a los árbitros un testimonio de la sentencia ejecutoriada que haya resuelto dichas cuestiones.

Artículo 744º: Medidas de Ejecución.- Los árbitros no podrán decretar medidas compulsorias, ni de ejecución. Deberán requerirlas al juez y éste deberá prestar el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral.

Artículo 745º: Contenido del Laudo.- Los árbitros pronunciarán su fallo sobre todas las pretensiones sometidas a su decisión, dentro del plazo fijado en el compromiso, con las prórrogas convenidas por los interesados en su caso.

Se entenderá que han quedado también comprometidas las cuestiones meramente accesorias y aquellas cuya sustanciación ante los árbitros hubiese quedado consentida.

Artículo 746º: Plazo.- Si las partes no hubieren establecido el plazo dentro del cual debe pronunciarse el laudo, lo fijará el juez atendiendo a las circunstancias del caso.

El plazo para laudar será continuo y sólo se interrumpirá cuando deba procederse a sustituir árbitros.

Si una de las partes falleciere, se considerará prorrogado por treinta días.

A petición de los árbitros, el juez podrá prorrogar el plazo, si la demora no les fuese imputable.

Artículo 747º: Responsabilidad de los Árbitros.- Los árbitros que, sin causa justificada, no pronunciaren el laudo dentro del plazo, carecerán de derecho a honorarios. Serán asimismo responsables por los daños y perjuicios.

Artículo 748º: Mayoría.- Será válido el laudo firmado por la mayoría si alguno de los árbitros se hubiese resistido a reunirse para deliberar o para pronunciarlo.

Si no pudiese formarse mayoría porque las opiniones o votos contuviesen soluciones inconciliables en la totalidad de los puntos comprometidos, se nombrará otro árbitro para que dirima.

Si hubiese mayoría respecto de algunas de las cuestiones, se laudará sobre ellas. Las partes o el juez, en su caso, designarán un nuevo integrante del tribunal para que dirima sobre las demás y fijarán el plazo para que se pronuncie.

Artículo 749º: Recursos.- Contra la sentencia arbitral podrán interponerse los recursos admisibles respecto de las sentencias de los jueces si no hubiesen sido renunciados en el compromiso.

Artículo 750º: Interposición.- Los recursos deberán deducirse ante el tribunal arbitral, dentro de los cinco días, por escrito fundado.

Si fueren denegados, serán aplicables los Artículos 271º y 272º en lo pertinente.

Artículo 751º: Renuncia de Recursos. Aclaratoria. Nulidad.- Si los recursos hubiesen sido renunciados, se denegarán sin sustanciación alguna.

La renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a la admisibilidad del de aclaratoria y de nulidad fundado en vicio esencial del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos. En este último caso, la nulidad será parcial si el pronunciamiento fuere divisible.

Este recurso se resolverá sin sustanciación alguna, con la sola vista del expediente.

Artículo 752º: Laudo Nulo.- Será nulo el laudo que contuviere en la parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí.

Se aplicarán subsidiariamente las disposiciones sobre nulidades establecidas por este Código.

Si el proceso se hubiese sustanciado regularmente y la nulidad fuese únicamente del laudo, a petición de parte, el juez pronunciará sentencia, que será recurrible por aplicación de las normas comunes.

Artículo 753º: Pago de la Multa.- Si se hubiese estipulado la multa indicada en el Artículo 732º inciso 4º, no se admitirá recurso alguno, si quien lo interpone no hubiese satisfecho su importe.

Si el recurso deducido fuese el de nulidad por las causales expresadas en los Artículos 751º y 752º, el importe de la multa será depositado hasta la decisión del recurso. Si se declarase la nulidad, será devuelto al recurrente. En caso contrario, se entregará a la otra parte.

Artículo 754º: Recursos.- Conocerá de los recursos el tribunal jerárquicamente superior al juez a quien habría correspondido conocer si la cuestión no se hubiera sometido a árbitros, salvo que el compromiso estableciera la competencia de otros árbitros para entender en dichos recursos.

Artículo 755º: Pleito Pendiente.- Si el compromiso se hubiese celebrado respecto de un juicio pendiente en última instancia, el fallo de los árbitros causará ejecutoria.

Artículo 756º: Jueces y Funcionarios.- A los jueces y funcionarios del Poder Judicial les está prohibido, bajo pena de nulidad, aceptar el nombramiento de árbitros o amigables componedores, salvo si en el juicio fuese parte la Nación o una provincia.

TITULO II

Juicio de Amigables Componedores

Artículo 757º: Objeto. Clases de Arbitrajes.- Podrán someterse a la decisión de arbitadores o amigables componedores, las cuestiones que puedan ser objeto del juicio de árbitros.

Si nada se hubiese estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser de derecho o de amigables componedores, o si se hubiese autorizado a los árbitros a decidir la controversia según equidad, se entenderá que es de amigables componedores.

Artículo 758º: Normas Comunes.- Se aplicará al juicio de amigables componedores lo prescripto para los árbitros respecto de:

- 1º) La capacidad de los contrayentes.
- 2º) El contenido y forma del compromiso.
- 3º) La calidad que deban tener los arbitadores y forma de nombramiento.
- 4º) La aceptación del cargo y responsabilidad de los arbitadores.
- 5º) El modo de reemplazarlos.
- 6º) La forma de acordar y pronunciar el laudo.

Artículo 759º: Recusaciones.- Los amigables componedores podrán ser recusados únicamente por causas posteriores al nombramiento.

Sólo serán causales legales de recusación:

- 1º) Interés directo o indirecto en el asunto.
- 2º) Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con alguna de las partes.
- 3º) Enemistad manifiesta con aquellas, por hechos determinados.

En el incidente de recusación se procederá según lo prescripto para la de los árbitros.

Artículo 760º: Procedimiento. Carácter de la Actuación.- Los amigables componedores procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes y documentos que las partes les presentasen, a pedirles las explicaciones que creyeren convenientes, y a dictar sentencia según su saber y entender.

Artículo 761º: Plazo.- Si las partes no hubiesen fijado plazo, los amigables componedores deberán pronunciar el laudo dentro de los tres meses de la última aceptación.

Artículo 762º: Nulidad.- El laudo de los amigables componedores no será recurrible, pero si se hubiese pronunciado fuera del plazo o sobre puntos no comprometidos, las partes podrán demandar su nulidad dentro de cinco días de notificado.

Presentada la demanda, el juez dará traslado a la otra parte por cinco días. Vencido este plazo, contestado o no el traslado, el juez resolverá, acerca de la validez o nulidad del laudo, sin recurso alguno.

Artículo 763º: Costas. Honorarios.- Los árbitros y amigables componedores se pronunciarán acerca de la imposición de las costas, en la forma prescripta en los Artículos 65º y siguientes.

La parte que no realizare los actos indispensables para la realización del compromiso, además de la multa prevista en el Artículo 731º, inciso 4º, si hubiese sido estipulada, deberá pagar las costas.

Los honorarios de los árbitros, secretario del tribunal, abogados, procuradores y demás profesionales, serán regulados por el juez.

Los árbitros podrán solicitar al juez que ordene el depósito o embargo de la suma que pudiere corresponderles por honorarios, si los bienes objeto del juicio no constituyesen garantía suficiente.

TITULO III

Juicio Pericial

Artículo 764º: Procedencia. Régimen.- La pericia arbitral procederá en el caso del Artículo 499º y cuando las leyes establezcan ese procedimiento con el nombre de juicio de árbitros, arbitradores, peritos o peritos árbitros, para que resuelvan exclusivamente cuestiones de hecho concretadas expresamente.

Son de aplicación las reglas del juicio de amigables componedores, debiendo tener los árbitros peritos especialidad en la materia; bastará que el compromiso exprese la fecha, los nombres de los otorgantes y del o de los árbitros, así como los hechos sobre los que han de laudar, pero será innecesario cuando la materia del pronunciamiento y la individualización de las partes resulten determinados por la resolución judicial que disponga la pericia arbitral o determinables por los antecedentes que lo han provocado.

Si no hubiere plazo fijado, deberán pronunciarse dentro de los treinta días a partir de la última aceptación.

Si no mediare acuerdo de las partes, el juez determinará la imposición de costas y regulará los honorarios.

La decisión judicial que, en su caso, deba pronunciarse en todo juicio relacionado con las cuestiones de hecho laudadas, se ajustará a lo establecido en la pericia arbitral.

LIBRO VII

PROCESOS VOLUNTARIOS, NORMAS COMPLEMENTARIAS Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TITULO I

Procesos Voluntarios

CAPITULO I

Autorización para Contraer Matrimonio.

Artículo 765º: Trámite.- El pedido de autorización para contraer matrimonio tramitará en juicio verbal, privado y meramente informativo, con intervención del interesado, de quien deba darla y del representante del ministerio público.

La licencia judicial para el matrimonio de los menores o incapaces, sin padres, tutores, o curadores, será solicitada y sustanciada en la misma forma.

Artículo 766º: Apelación.- La resolución será apelable dentro del quinto día. El tribunal de alzada deberá pronunciarse, sin sustanciación alguna, en el plazo de diez días.

CAPITULO II

Tutela. Curatela.

Artículo 767º: Trámite.- El nombramiento de tutor o curador y la confirmación del que hubieren efectuado los padres, se hará a solicitud del interesado o del ministerio público, sin forma de juicio, a menos que alguien pretendiere tener derecho a ser nombrado. Si se promoviere cuestión, se sustanciará en juicio sumarísimo. La resolución será apelable en los términos del Artículo 766º.

Artículo 768º: Acta.- Confirmado o hecho el nombramiento, se procederá al discernimiento del cargo, extendiéndose acta en que conste el juramento o promesa de desempeñarlo fiel y legalmente y la autorización judicial para ejercerlo.

CAPITULO III

Copia y Renovación de Títulos.

Artículo 769º: Segunda o Ulteriores Copias de Escrituras Públicas.- La segunda o ulterior copia de una escritura pública, cuando su otorgamiento requiera intervención judicial, se otorgará previa vista fiscal.

Cuando de la escritura surja que la misma instrumenta obligaciones cuyo cumplimiento pueda exigirse cuantas veces se presente la copia, no se entregará el segundo o ulterior testimonio sin previa citación de quienes hubiesen participado en aquella o, en su defecto, del ministerio público.

Si se dedujere oposición, se seguirá el trámite del juicio sumarísimo.

La segunda o ulterior copia se expedirá previo informe del Registro Público acerca de la inscripción del título y estado del dominio, en su caso.

Artículo 770º: Renovación de Títulos. - La renovación de títulos mediante prueba sobre su contenido, en los casos en que no fuere posible obtener segunda copia, se sustanciará en la forma establecida en el artículo anterior.

El título supletorio deberá protocolizarse en el registro del lugar del tribunal que designe el interesado.

CAPITULO IV

Autorización para Comparecer en Juicio y ejercer Actos Jurídicos.

Artículo 771º: Trámite.- Cuando la persona interesada o el ministerio pupilar a su instancia, solicitare autorización para comparecer en juicio y ejercer actos jurídicos, se citará inmediatamente a aquella, a quien deba otorgarla y al representante del ministerio pupilar, a una audiencia que tendrá lugar dentro del tercer día y en la que se recibirá toda la prueba.

En la resolución en que se conceda autorización a un menor para estar en juicio, se le nombrará tutor especial.

En la autorización para comparecer en juicio queda comprendida la facultad de pedir litisexpensas.

Si se trata de enajenar bienes, deberá justificarse la conveniencia o necesidad de la venta.

CAPITULO V

Examen de los Libros por el Socio.

Artículo 772º: Trámite.- El derecho del socio para examinar los libros de la sociedad se hará efectivo, sin sustanciación, con la sola presentación del contrato, decretándose las medidas necesarias si correspondiere.

El juez podrá requerir el cumplimiento de los recaudos necesarios para establecer la vigencia de aquél. La resolución será irrecurrible.

CAPITULO VI

Reconocimiento, Adquisición y Venta de Mercaderías.

Artículo 773º: Reconocimiento de Mercaderías.- Cuando el comprador se resistiese a recibir las mercaderías compradas, sosteniendo que su calidad no es la estipulada, si no se optare por el procedimiento establecido en el Artículo 764º, el juez decretará, sin otra sustanciación, a solicitud del vendedor o de aquél, su reconocimiento por uno o tres peritos, según el caso, que designará de oficio. Para el acto de reconocimiento y al solo efecto de controlarlo y formular las protestas escritas que considere pertinentes, citará a la otra parte, si se encontrare en el lugar, o al defensor de ausentes, en su caso, con habilitación de día y hora.

Igual procedimiento se seguirá siempre que la persona que deba entregar o recibir mercaderías, quisiera hacer constar su calidad o el estado en que se encontraren.

Artículo 774º: Adquisición de Mercaderías por Cuenta del Vendedor.- Cuando la ley faculta al comprador para adquirir mercaderías por cuenta del vendedor, la autorización se concederá con citación de éste, quien podrá alegar sus defensas dentro de tres días.

Si el vendedor no compareciere o no se opusiere, el tribunal acordará la autorización. Formulada oposición, el tribunal resolverá previa información verbal.

La resolución será irrecurrible y no causará instancia.

Artículo 775º: Venta de Mercaderías por Cuenta del Comprador.- Cuando la ley autoriza al vendedor a efectuar la venta de mercaderías por cuenta del comprador, el tribunal decretará el remate público con citación de aquél, si se encontrare en el lugar, o del defensor de ausentes, en su caso, sin determinar si la venta es o no por cuenta del comprador.

CAPITULO VII

Normas Complementarias.

Artículo 776º: Casos no Previstos.- Cuando se promuevan otras actuaciones cuyo fin sea requerir la intervención o autorización de los jueces, exigidas por la ley, para acordar autenticidad o relevancia a hechos o situaciones que puedan producir efectos jurídicos, el procedimiento en tanto no estuviere previsto expresamente en este Código, se ajustará a las siguientes prescripciones:

1º) La petición se formulará de acuerdo con las disposiciones relativas a la demanda del proceso ordinario, en cuanto fueren aplicables. En el mismo escrito se indicarán los elementos de información que hayan de hacerse valer.

2º) Se dará intervención, en su caso, al ministerio público.

3º) Regirán para la información las disposiciones relativas a la prueba del proceso ordinario en cuanto fueren aplicables.

4º) Si mediare oposición del ministerio público, se sustanciará por el trámite del juicio sumarísimo.

5º) Las resoluciones que aprueben, homologuen o desechen el pedido son susceptibles de apelación en relación.

6º) Si mediare oposición de terceros, el juez examinará en forma preliminar su procedencia. Si advirtiere que no obsta a la declaración solicitada, la sustanciará en la forma prevenida en el inciso 4º). Si la oposición planteada constituye una cuestión de tal importancia que obsta a todo pronunciamiento, sobreseerá los procedimientos, disponiendo que los interesados promuevan la demanda que consideren pertinente. Contra esta resolución podrá recurrirse en apelación, la que se concederá en relación.

Artículo 777º: Efectos de la Declaración.- Las declaraciones emitidas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no hacen cosa juzgada.

Artículo 778º: Aplicación Subsidiaria.- Las disposiciones de este capítulo, se aplicarán supletoriamente a los procedimientos de jurisdicción voluntaria, regulados especialmente en este título.

TÍTULO II

Disposiciones Transitorias

Artículo 779º: Vigencia Temporal. - Las disposiciones de este Código entrarán en vigor a los ciento ochenta días de su publicación, prorrogables por el Poder Ejecutivo por ciento ochenta días más por única vez y serán aplicables a todos los juicios que se inicien a partir de entonces. Se aplicarán a partir de la fecha que el Poder Ejecutivo determine, también a los juicios pendientes, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o empezado su curso, los cuales se regirán por las disposiciones hasta entonces aplicables.

Artículo 780º: Plazos.- En todos los casos en que este Código otorga plazos más amplios para la realización de actos procesales, se aplicarán éstos a partir de la fecha que el Poder Ejecutivo haya determinado en orden a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior.

Artículo 781º: Acordadas.- Dentro de los sesenta días de publicada la presente ley, el Superior Tribunal de Justicia dictará las acordadas que sean necesarias, para la aplicación de las nuevas disposiciones que contiene este Código.

Artículo 782º: Derogación Expresa e Implícita.- Al tiempo de entrar en vigor este Código quedarán derogados el Código Procesal Civil y Comercial sancionado por la Ley Nro. 4.870 y sus modificatorias, así como todas las leyes y disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a lo dispuesto en este Código. Estas normas continuarán vigentes hasta la fecha que se hace referencia en el segundo párrafo del Artículo 779º de este Código, únicamente para los juicios allí enunciados.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) - En consideración.

SR. CRESTO – Pido la palabra.

Señor Presidente, la Comisión de Reformas del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos creada por Decreto Nro. 4.265/04, integrada por los doctores Leonor Pañeda, Juan José Papetti y Juan Carlos Ardoy como representantes del Superior Tribunal de Justicia; los doctores Ricardo Italo Moreni, Roberto Croux, Angel Luis Dieci, por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos; los doctores Valentina Ramírez Amable, Graciela Aida Basaldua de Torrealday y Luis María Ortiz Mallo, por el Instituto Alberdi; el doctor Guillermo Enderle por la Facultad Católica de Abogacía —Subsede Paraná—; los doctores Oscar Daniel Benedetto, René Saadi Bonfils y Juan Antonio Irurueta, por el Colegio de Abogados de Entre Ríos; la doctora María Mercedes Maiztegui Martínez, por el INECIP; el doctor Enrique Genaro Máximo Pita, como especialista invitado y el doctor Virgilio Alejandro Galanti, como coordinador de la misma, elaboró el presente proyecto de ley en virtud de la tarea que el Poder Ejecutivo Provincial le encomendara. Para ello ha desarrollado sus actividades desde el mes de septiembre de 2.004 en forma ininterrumpida.

Me permito destacar que para la confección y redacción del presente proyecto la referida comisión ha efectuado consultas a personalidades de la ciencia del derecho y a diferentes instituciones y las decisiones se han tomado siempre con un criterio de unanimidad en sus propuestas.

Sin embargo debo destacar que la tarea desarrollada por esta Comisión de Reformas, y nobleza obliga reconocerlo, no se ha circunscripto a efectuar una simple copia del digesto nacional, sino en la incorporación de las reformas obrantes en aquél que, luego de ser

analizadas, se han considerado lo suficientemente positivas como para ser receptadas o adaptadas a nuestro ordenamiento.

En cambio, en otros puntos, se ha mantenido la redacción del Código Provincial tal como se halla en la actualidad, por considerarse que la norma vigente se adecua mejor que la nacional a nuestra organización judicial y nuestras necesidades, no justificándose su modificación.

Los objetivos perseguidos y las modificaciones más importantes las detallo a continuación.

El primer objetivo intentado con la adecuación normativa ha sido la búsqueda de la celeridad del proceso, verbigracia, mediante la supresión del juicio sumario, adaptando la estructura de éste al ordinario, o la incorporación de la estructura del proceso denominado monitorio para algunos juicios especiales.

También se ha buscado mejorar aspectos técnicos del juicio, dotando a los litigantes de algunas herramientas procesales hoy inexistentes en nuestro Código, tales como la figura del consultor técnico o la notificación notarial, etcétera.

Asimismo, si bien no como un objetivo directo pero sí como una consecuencia positiva de la labor emprendida, debe considerarse la posibilidad de aprovechar la abundante doctrina y jurisprudencia nacional en beneficio de los litigantes y magistraturas que la requieran.

También se han introducido reformas tendientes a evitar el litigio mediante la resolución extrajudicial de los conflictos – conocida como mediación- o la terminación anticipada del juicio no evitado extrajudicialmente, mediante la audiencia preliminar.

En este último caso la reforma permite además empezar a transitar el camino hacia la oralidad del proceso civil, aunque sin llegarse a una reforma total en tal sentido. El tiempo dirá si esta experiencia justifica adentrarse más aún en este sistema oral, para lo cual también se requerirá una modificación de las estructuras judiciales existentes que así lo permitan. Pero en ese caso se contará con la experiencia acumulada en la aplicación de las nuevas instituciones ahora incorporadas, especialmente la audiencia preliminar.

Se destaca como una de las reformas principales la simplificación de los procesos de conocimiento a dos clases (Artículo 307º en adelante), adecuándose la estructura del actual proceso ordinario, prácticamente en desuso, con algunas de las ventajas del proceso sumario, que se elimina, tales como el ofrecimiento de la prueba en los escritos iniciales y la limitación recursiva.

Las alternativas del proyecto son el juicio sumarísimo y el ordinario asimilado al sumario actualmente vigente. Al eliminar uno de los tres hoy existentes se ha optado por mantener la estructura del sumario –además del sumarísimo– por ser el que se utiliza con habitualidad y no haber tenido inconvenientes en su aplicación. Además la opción por este proceso supone la aceleración de los juicios dada la existencia de plazos menores y una etapa (ofrecimiento de prueba) procesal menos.

Otra importante modificación es la introducción del Instituto de la Mediación Prejudicial obligatoria en los Artículos 286º a 291º bis del Código. Se han seguido para su redacción los lineamientos de la Ley Nacional de Mediación Nro. 24.573. Este mecanismo persigue evitar la llegada a juicio de aquellas cuestiones que pueden ser resueltas en etapas prejudiciales, descomprimiendo el trabajo jurisdiccional y resultando en un beneficio indiscutible para los ciudadanos de la Provincia.

En los Artículos 346º y siguientes se prevé la audiencia preliminar, con carácter obligatorio para las partes y con la presencia forzosa e indelegable del juez – cabe aclarar que en algunos Juzgados de la ciudad de Paraná se está realizando–, la cual supone una importante innovación procesal. Para redactar la estructura de esta audiencia se han tenido en cuenta los Códigos de la Nación, La Pampa y la propia experiencia de algunos magistrados, como recién decía, de esta ciudad, que aún no estando legislada como tal, la han venido poniendo en prácticas utilizando las facultades que el texto vigente les confiere en el Artículo 33º, inc. 4º), con promisorios resultados.

No escapa a esta comisión que esta audiencia implicará un esfuerzo adicional al que hoy tienen los sobrecargados Jueces de Primera Instancia, pero nos hallamos convencidos que a la postre redundará en un beneficio para los mismos y para los litigantes todos, no sólo por el porcentaje de juicios que se logren conciliar sino por la depuración de la prueba y el encaminamiento del proceso de un modo ágil, útil, económico y más justo hacia la sentencia.

Otras modificaciones que merecen destacarse en especial son la incorporación de los procesos de estructura monitoria atenuado, limitado a lo documental, la sustitución de la absolucón de posiciones por el libre interrogatorio a las partes.

Resulta pues evidente que con las modificaciones propuestas al texto vigente conllevará necesariamente a brindar a los justiciables un mejor y más ágil servicio de Justicia. En el entendimiento que, y tal como fuera manifestado en repetidas ocasiones: "la Justicia lenta no es Justicia".

En virtud de lo manifestado intereso a mis pares la aprobacón del presente proyecto, y desde la Comisión de Legislación General el acompañamiento prácticamente por unanimidad en las cuestiones generales de este proyecto, quedando por debatir algunas cuestiones en particular que se modificarán en el Recinto.

SR. FERNÁNDEZ – Pido la palabra.

Señor Presidente, tal como lo adelantamos desde nuestro bloque en la sesión pasada, compartimos en general la propuesta de actualizar el Código ritual en materia de proceso Civil y Comercial de Entre Ríos, una vieja aspiración para lo cual se viene trabajando desde hace mucho tiempo como bien se ha señalado, y en cuyo texto han coincidido representantes de diversos sectores vinculados al quehacer de la Justicia, como así también al ámbito académico y a lo que tiene que ver la representación institucional profesional por parte del Colegio de Abogados.

La coincidencia en general no impide, tal como también lo señalamos oportunamente, que dejemos en claro que esta iniciativa de alguna forma queda a mitad de camino, porque en realidad la aspiración de los judiciables, en todo caso, hubiese sido concretar el paso más firme y seguro rumbo a la incorporación de la oralidad en el ámbito del Procedimiento Civil y Comercial. No por eso vamos a dejar de señalar que la mediación obligatoria y la audiencia preliminar, son atisbos o esbozos de esa intención de una mayor oralidad en el Proceso Civil y Comercial en procura, como se ha dicho, de establecer la celeridad del proceso pensando en que la rapidez en la solución de los litigios en definitiva beneficia a las partes, sobre todo a los justiciables en tiempos en que la demanda de la sociedad pasa precisamente por una mayor rapidez en la solución de las controversias y por una mayor agilidad en el funcionamiento de los mecanismos que forman parte de la maquinaria judicial.

Se ha hecho a través del miembro informante de la Bancada Justicialista una síntesis de las principales propuestas que contiene este proyecto y no podemos dejar de señalar que también en el texto de la proyecto de ley que se va a someter a votación se están creando ocho nuevos cargos de jueces para el ámbito civil y comercial, lo cual debe ser debidamente utilizado a los efectos de solucionar los distintos requerimientos de cada uno de los departamentos judiciales existentes en la provincia, en algunos de los cuales, como el caso de Gualaguay, existe una imperiosa necesidad de poner en marcha otro Juzgado Civil y Comercial, tal como se ha propuesto oportunamente en esta Cámara y así lo hemos acompañado desde nuestro bloque. Seguramente otras peticiones habrá desde los distintos ámbitos jurisdiccionales en la Provincia y de esta forma se estará dando un paso en ese sentido para solucionar estos inconvenientes que por supuesto no atienden a la totalidad de las solicitudes, requerimientos y demandas que provienen del ámbito judicial como así también en la expresión de las distintas representaciones del Colegio de Abogados.

Es cierto que en este texto que se pone a votación se han receptado prácticamente la totalidad de las reformas introducidas en el ámbito nacional por las Leyes Nros. 22.434 y 25.488, en este sentido la comisión redactora de este proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos ha hecho una depuración, previo análisis, de todos aquellos instrumentos que se ajustan adecuadamente a las necesidades de nuestro ámbito.

La eliminación del proceso sumario, como decíamos, la incorporación de la mediación obligatoria como así también de la audiencia preliminar o la incorporación del proceso de estructura monitoria, aún limitado, nos da ese atisbo, ese inicio que mencionaba en cuanto a buscar simplificar los procesos de conocimiento, eliminar rémoras u obstáculos y en definitiva procurar una mayor celeridad.

En concreto nuestro bloque va a acompañar en general esta iniciativa, auspiciando que en su implementación se deje en claro que entendemos que es necesario avanzar aun más en la oralidad del Proceso Civil y Comercial en la Provincia de Entre Ríos.

En particular tenemos algunas diferencias que planteamos en la sesión anterior respecto de lo que originalmente se determinaba como un límite para los honorarios de los

martilleros no estábamos de acuerdo y entendíamos y así se acordó al menos con el bloque oficialista dejar el texto tal cual estaba en la vigencia del Código de manera tal de no poner ningún tipo de límite o reglamentación en la materia que debe ser objeto de una ley específica que está bajo tratamiento en esta Legislatura.

Del mismo modo vamos a proponer y en este sentido ya se ha acordado, que se incorpore más allá que va a ser objeto de un detalle en particular, el Artículo 560º bis al Texto Ordenado que vamos a votar y que hace relación en el caso de los proceso de ejecución a aquellas acreencias de origen financiero que puedan comprometer la vivienda única de uso del núcleo familiar. Esto tiene que ver con un debate en el que esta Legislatura ha tenido un rol activo en función de que hay muchísimas familias, no sólo en Entre Ríos sino en el país, cuya vivienda única está pendiente de una resolución judicial en función de deudas contraídas en el sistema financiero y en una relación económica financiera que se ha visto alterada por la brusca salida de la convertibilidad en la relación un peso un dólar, frente a hechos en este caso del Estado que han conmovido esa vinculación contractual entre un particular y un ente financiero que ha llevado en consecuencia a agravar la situación del deudor y a poner en riesgo el remate de la residencia familiar.

De modo tal que en el texto que se va a someter a votación instamos a que se incorpore el Artículo 560º bis que se ha arrimado a Secretaría y donde también se hace referencia al Artículo 567º del Código de Procedimiento con lo cual hemos ajustado la numeración para no alterar ese ordenamiento que se había producido precisamente con motivo del diferimiento en el tratamiento de este proyecto que solicitamos en la sesión anterior para emprolijar algunas cuestiones.

Otro tema, que también auspiciamos desde nuestro bloque en un aspecto particular, se refiere a temas que pueden ser objeto de procedimiento de mediación obligatoria. En este sentido entendemos que cuando en el Artículo 286º bis se establecen excepciones, es decir, materias que no son objeto de este procedimiento, debe dejarse fuera de la excepción, es decir, incluirse en la posibilidad de mediación todo lo atinente a régimen de visitas o tenencias de hijos menores, como así también todo lo que tenga que ver con procesos de partición de herencias en juicios sucesorios y voluntarios. También compartimos que deben ser objeto de mediación las cuestiones patrimoniales vinculadas a las acciones de separación personal y divorcios, nulidad de matrimonios, filiación y patria potestad. No se nos escapa que en la práctica judicial el juez intenta el acuerdo o el avenimiento de las partes cuando de por medio hay cuestiones de familia, pero entendemos que por una cuestión de prolijidad y coherencia en el contexto de lo que plantea la reforma, éstas salvedades que hacemos en cuanto a que deben ser materias incorporadas en el objeto de la mediación, deben ser expresamente señaladas.

Respecto a otras cuestiones, desde el bloque se van a proponer algunas modificaciones en cuanto a los alcances de la comediación; en mi caso particular no la comparto y quiero dejar debidamente señalado que en este sentido nuestro bloque nos ha dejado en total libertad para votar según las convicciones y la conciencia de cada uno. En todo lo que tiene que ver, salvo en lo que recién señalé respecto de las materias objeto del procedimiento de mediación, voy a acompañar en forma personal y en particular el texto del proyecto tal cual está redactado respecto de la mediación obligatoria, el papel del mediador abogado y el rol del comediador, que no teniendo el título de abogado tiene otro título universitario y está debidamente inscripto por ante el Superior Tribunal de Justicia. Inclusive, para que quede demostrada la coherencia del planteo que estoy haciendo –insisto– en forma personal, cuando se propone el texto del Artículo 560º bis, en referencia a la vivienda única familiar que pueda ser objeto de una ejecución hipotecaria proveniente, precisamente, de un compromiso con una entidad financiera, se deja a salvo la instancia de llevar adelante una conciliación en la que deberán intervenir mediadores especializados, seleccionados por el Superior Tribunal de Justicia. Es decir que estamos hablando de aquel mediador estrictamente especializado, que excede los conocimientos de un abogado, por lo que obviamente en este caso se necesita de su asistencia y presencia para que las partes puedan llegar a una solución que contemple los distintos intereses en juego, sobre todo cuando está de por medio la vivienda única sede de la familia.

Del mismo modo en el texto, tal cual se ordenó y tal cual se va a someter a votación, no queda excluida o marginada la mediación, porque expresamente se prevé que la mediación privada puede ser objeto de recepción y aceptación, como así también la posibilidad de que intervenga un comediador cuando sean necesarios conocimientos especializados, del mismo

modo como recién he reseñado cuando se trate de incidentes que proponemos en el ámbito de la ejecución hipotecaria de una vivienda única donde resida la familia.

De modo tal que, con estas salvedades y las que –insisto– se van a desarrollar por parte del Bloque en cuanto a que se han receptado algunas iniciativas vinculadas a un papel mayor en referencia a los comediantes, nosotros vamos a acompañar este texto en general; en particular reiteramos el pedido de incorporación, como se ha acordado, del texto del Artículo 560º bis y las demás reformas que auspiciamos en relación al capítulo de la mediación, con la salvedad que he expuesto en forma personal. Entendemos que, con la aprobación que hoy vamos a dar a este proyecto, el Senado desarrollará una eficaz y rápida labor para que, con la mayor celeridad y en el más breve plazo, tengamos en la provincia de Entre Ríos un nuevo Código de Procedimiento Civil y Comercial para que en el desarrollo de su práctica vayamos entendiendo que es clave incorporar más oralidad, para que sea realidad la Justicia, para todos aquellos que demandan una solución para un litigio o controversia.

SR. ROGEL – Pido la palabra.

En primer lugar solicito que por Secretaría se nos informe la metodología para realizar la votación, habida cuenta que tal cual lo establece el presente proyecto de ley, al votar el Artículo 1º ya se estaría votando el proyecto en general. Por este motivo es necesario establecer un mecanismo para ver qué modificaciones va a votar cada legislador aquí presente.

Y en este orden lo primero que quiero simplificar para quienes están presentes es que, como lo ha dicho el diputado Fernández –a quien el Bloque le ha encargado la coordinación del presente proyecto de ley de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia– estamos coincidiendo en los aspectos fundamentales del proyecto y se ha manifestado aquí cuáles son los avances y las cosas que creemos que todavía han quedado a mitad de camino. Puntualmente las modificaciones consisten en tres puntos que se han acercado a Secretaría y también han sido alcanzadas a los demás Bloques.

En primer lugar, el punto donde hay coincidencias con todos los Bloques es el mantenimiento del Artículo 552º bis que ha sido modificado y expresado ya por el diputado Fernández y que corresponde al Artículo 560º, y que en su inciso b) el Artículo 569º sea reemplazado por el Artículo 567º.

Señor Presidente, la necesidad de mantener este Artículo 552º bis –ahora llevará el 560º– guarda una relación de coherencia en dos aspectos en términos legislativos de lo que hemos votado aquí y en términos de la realidad económica y social de la República.

Esto que mencionamos fue un avance de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, fuimos los primeros en el país que votamos la prórroga de las ejecuciones de los remates, que sucedieron al proceso de devaluación de nuestro país, para quienes tuvieran vivienda única. Nos animamos después a hacer dos redacciones y una corrección con la incorporación del Artículo 552º bis que le abre una instancia obligatoria al juez para llamar a las partes y poner en alguna situación más o menos de igualdad al acreedor y a quien con un recibo de sueldo, y frente a un proceso de devaluación, concurrió a una entidad financiera, porque los procesos económicos tenían una disparidad absoluta.

La incorporación del Artículo 552º bis hace necesario –y así lo han entendido los demás Bloques– que nosotros lo mantengamos. Hago la salvedad por Secretaría que donde dice “552º” debe decir “560º” y en el inciso b) donde dice “569º”, debe decir “567º”.

La segunda modificación ya la ha explicado el diputado Fernández y tiene que ver con la ampliación de las competencias, es decir, qué materias pueden ser sujetas a la mediación. Estas modificaciones también son las que nuestro bloque en conjunto va a votar en particular y en las que según se nos ha informado, el Bloque Justicialista no estaría coincidiendo con nosotros.

Y la tercera modificación, a la que me voy a referir, que comparte nuestro Bloque, con excepción del diputado Fernández como ya lo ha adelantado, en la que tampoco habría acuerdo, por lo que ya ha manifestado el diputado Castrillón en la sesión pasada, es en el debate que se ha generado, y particularmente en estos últimos quince días, sobre la incorporación de manera obligatoria del comediador.

Señor Presidente, señores diputados, no pretendo bajo ningún punto de vista –nunca lo hago en este Recinto– sino responder a la representación política de quienes nos han votado para estar aquí; ni usurpar títulos ni avanzar en la explicación técnica y en el caso, jurídica o de otras características, que reviste la figura de la mediación. Simplemente me toca como

Presidente de Bloque y habiendo una disidencia, tratar de fundamentar por qué el Bloque va a acompañar la incorporación del mediador de manera obligatoria en este proyecto de ley.

La denominación de carácter interdisciplinario se da a aquellos estudios que se realizan con la cooperación de varias disciplinas, decían algunos borradores que nos han alcanzado. Decían también que la suma de estas distintas visiones sobre una misma cuestión permite una visión mucho más integradora que trasciende la visión particular a la vez que resulta un proceso y un producto de confluencia de todas estas miradas.

Por otra parte, la mediación en la República Argentina nació como un proyecto interdisciplinario, basándose en modelos y teorías provenientes de distintos y diferentes campos de pensamiento. Sostener que la resolución alternativa de conflictos es patrimonio exclusivo de los profesionales de una sola área en este caso, ya sea abogacía o cualquier otra, implica que se pierda la riqueza que pueden aportar otras profesiones, así como también –por qué no decirlo– implica dejar de lado el fin último que persiguen estos métodos, tal es ayudar a que las personas entiendan y se entiendan en esta diversidad y puedan resolver pacíficamente los conflictos planteados.

La mediación es una práctica que trasciende el derecho. Cuando ayer recibíamos a algunas de las personas especialistas, se planteaba la disyuntiva entre lo que es la litis y lo que es la mediación, casi contrapuestas, casi hablando de dos situaciones absolutamente distintas.

La mediación se construye, se nutre y se desarrolla gracias al aporte de muchos saberes; prueba de ello es el indiscutible desarrollo que adquirió en este año la mediación privada, comunitaria y educativa, entre otras. Dicen algunos informes que ellas han crecido fundamentalmente en base a esta interdisciplina que es la idea fuerza que se plantea.

Desde el Bloque Radical sabemos que éste es un tema complejo, que ha suscitado posiciones encontradas y fundamentalmente de lo que estamos hablando y lo que dio origen a lo que iba a ser el mediador, cuestión que iba a ser saldada y que nosotros vamos a acompañar la idea de que el mediador sea un profesional, abogado, que tenga que tener un curso de mediación. Y la controversia que se planteó allí desde el origen se refiere a los requisitos exigidos para desempeñar la tarea, en especial, particularmente la calidad de abogado. Esta es la cuestión que ha dividido las aguas en varias posturas.

Una, obviamente, la que sostiene que tratándose de un proceso judicial el único título habilitante sería el de abogado ya que el conocimiento del derecho resultaría indispensable para el ejercicio de la función de mediador. Otra vertiente se inclina a pensar que otros profesionales están capacitados tanto o más que el abogado para ejercer y la tercera, una posición más inclusiva, propicia la comediación y la comediación interdisciplinaria ya que el ideal sería que coordine el proceso quien se encuentra más capacitado según la materia que se trate, recibiendo aportes de otra profesión.

Señor Presidente, señores legisladores, al establecer alguna supremacía no me asusta que se hable de defensa corporativa; yo no soy abogado, no me asusta que quienes tienen la profesión de abogado defiendan la posibilidad de que, planteado el conflicto judicial deba ser un abogado con capacitación en mediación el que lleve adelante la mediación. Pero es verdad que en estos quince días hemos escuchado importantes e interesantes opiniones de lo que es para nosotros el proceso previo y evitable de la judicialización de los conflictos. En este caso el proceso de la mediación es el que ha estado absolutamente subsumido y desvirtuado al momento de darle la identidad necesaria como un instrumento para la resolución de los conflictos. Por eso y en consecuencia, señor Presidente, la exclusión de otras profesiones no pertenecientes en este caso al Derecho para la enseñanza y la práctica de la mediación y otros métodos de resolución de conflictos, no está basada en ningún fundamento teórico ni conceptual, creemos que no constituir allí y colocar al lado la figura del comediador desmerece y empobrece el instituto de la mediación, desconoce y es discriminatorio.

Por lo tanto creemos que en el avance y para culminar de esta modificación del Código Civil y Procedimiento de la Provincia, es atinado como una manera de avanzar sobre la resolución de los conflictos en un paso previo al conflicto judicial, que se incorpore de manera obligatoria la figura del comediador.

Quiero hacer una salvedad porque veo en el Recinto que están presentes algunos representantes del Colegio de Martilleros, que también ya estaba resuelto y me lo ha manifestado el Presidente del Bloque Justicialista, el diputado Castrillón, que se va a mantener lo que anteriormente habíamos votado que son los porcentajes que establece la ley para el cobro judicial en las distintas instancias que tienen participación los martilleros públicos.

Por lo expresado anteriormente quiero que por Secretaría, después que se den todas las fundamentaciones, se nos indique la manera de realizar la votación, habida cuenta que en el Artículo 1º estaríamos votando en general y habría que establecer claramente cuáles son de estas cuatro modificaciones, con la de los martilleros, cuáles se van a acompañar y cuáles no.

SRA. GRIMALT - Pido la palabra.

Señor Presidente, primero quisiera que el diputado Rogel leyera la redacción que él propone del Artículo 287º bis.

SR. ROGEL - Pido la palabra.

Señor Presidente, la diputada Grimalt junto con los demás Bloques, como me comprometí en Labor Parlamentaria, tienen en su poder las copias de las modificaciones que estamos planteando.

SRA. GRIMALT - Estoy de acuerdo con la redacción que propone el diputado Rogel con respecto a este artículo relacionado con la mediación, este instituto que se incorpora hoy en esta reforma del Código de Procedimiento, lo que ha generado debate y donde creo que es necesario que esta Cámara pueda arribar a un consenso. Por eso requerí que el diputado Rogel lo leyera, porque me parece que esa redacción es la que mejor expresa...

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – El señor diputado Rogel le solicita una interrupción.

SRA. GRIMALT – Sí, señor Presidente.

SR. ROGEL – Obra en Secretaría y en manos de todos los Bloques una copia de la propuesta, así que seguramente al momento del tratamiento... si se quiere leer por Secretaría no hay inconveniente.

SRA. GRIMALT – Creo que esa redacción es la que mejor expresa el consenso de todos aquellos que entendemos y destacamos la importancia de incorporar a nuestro Código este instituto de la mediación, que el mismo tenga este rango de obligatoriedad y en esto de avanzar en lograr el texto más perfecto de manera que puesto en ejecución dé los resultados esperados a la hora de lograr una mejor resolución de los conflictos y evitar la judicialización. Esto lo digo porque ayer tuve la oportunidad, por una actividad realizada en este Recinto, organizada por los diputados Mainez y Grilli, de asistir a un rico debate entre personas que integran la Defensoría de Paraná, los mediadores, con varios integrantes de la comisión que tuvo a su cargo la redacción de este trabajo que hoy tratamos.

De esta discusión para mí ha quedado muy claro que el proceso de la mediación tiene más posibilidades de lograr el fin, que es la resolución del conflicto, en la medida que participen varias disciplinas. También se desprende de la redacción actual que es errado a partir del concepto de que el mediador, en realidad, vendría a ser las veces de un perito; aquí estamos hablando de lo que significa el proceso de mediación, y creemos que lo más óptimo es que el mismo sea llevado adelante por dos mediadores. Por eso, apelo a que los diputados presentes podamos llegar a un consenso respecto a este artículo que es el que en realidad del vasto articulado que incluye la reforma es en el que no hemos podido concluir en una misma mirada.

Recuerdo a todos que esta modificación al Código tan esperada y sobre la cual hay que hacer un reconocimiento a la comisión que ha estado trabajando, involucra a los que precisamente hoy están al frente de todo este tipo de situaciones que se suscitan en la Justicia, y vaya un reconocimiento, desde nuestro lugar, como legisladores. En este punto en particular no veo cuál es el obstáculo o la objeción para no consensuar en un texto como el que propone el diputado Rogel porque creo que es el que mejor resume lo que se quiere conseguir con el Instituto de la Mediación, un proceso que sea llevado adelante por dos personas para asegurar un resultado más óptimo para resolver el conflicto.

SR. BESCOS – Pido la palabra.

Señor Presidente, venimos en el día de hoy a acompañar esta iniciativa en general con la responsabilidad que nos corresponde como legisladores y por eso queremos afirmar desde este Bloque que lo vamos a hacer con absoluta seriedad.

Obviamente este proceso de reforma del Código Procesal Civil y Comercial tal vez no haya sido sometido suficientemente al debate como correspondería por la importancia que reviste esta iniciativa, pero creo que siempre suceden estas cosas. Se intenta buscar un agiornamiento de este Código a las nuevas circunstancias y a los nuevos tiempos que estamos viviendo; la sociedad demanda justicia y también demanda que los procesos judiciales se compadezcan con las necesidades mismas de la sociedad.

Obviamente con respecto al tema de la mediación hay posiciones encontradas. Nosotros entendemos que la mediación no tiene que ver con una especialización determinada en ninguno de los casos. No obstante eso, abogamos para que desde este rico debate lleguemos a la mejor solución y podamos ofrecer a nuestra sociedad un Código Procesal Civil y Comercial adecuado a sus necesidades.

Con esto quiero decir que debe quedar bien claro que venimos a acompañar, como siempre lo hemos hecho, pero también hay que recordar que la crítica y el debate son positivos cuando son bien intencionados, por lo tanto abogamos por encontrar un entendimiento con respecto a los puntos que están en debate y que tienen diferentes opiniones de nuestros colegas para que podamos encontrar la mejor solución.

SRA. DEMONTE – Pido la palabra.

Desde nuestro bloque vamos a apoyar el tratamiento en general de este proyecto de ley que consideramos muy importante como una respuesta, como decían los diputados preopinantes, a las demandas que la sociedad nos ha venido haciendo en cuanto al procedimiento civil y comercial que es lo que en este caso nos convoca.

En lo puntual, cuando se dé el tratamiento de cada uno de los artículos, vamos a ir acompañando, seguramente, parte de lo que ha expresado el Bloque Radical con respecto a algunos artículos que tienen que ver sobre todo con el tema del deudor hipotecario, y, fundamentalmente en este caso, el que creo es el artículo más serio en la discusión de este tema, el que tiene que ver con la participación de la mediación como resolución del conflicto.

Entidades de especialistas en este tema han estado, como me imagino que lo han hecho con otros legisladores, con nosotros discutiendo y dando sus puntos de vista acerca de por qué se entiende que el concepto interdisciplinario de la mediación nos lleva a que no sea fundamental la especificidad del tema, sino el abordaje del conflicto; y en eso sí tenemos referencias no solamente en Argentina, sino internacionalmente, en el uso de esta intermediación donde lo interdisciplinario es lo que enriquece la posibilidad de llegar a esa comunicación que permite, justamente, que la mediación surta su efecto.

Por ello, coincidiendo con lo que la diputada Grimalt estableció respecto de la redacción del dictamen en minoría del Bloque de la Unión Cívica Radical, donde se encuentra la forma más apropiada, es lo que nosotros estaríamos acordando sobre la participación del mediador abogado, y del comediador como forma obligatoria, para completar esa mirada más global, más interdisciplinaria que, decíamos, nos permitirá llegar a un mejor resultado en breve tiempo, entendiendo que siempre la mediación va a ser un elemento de mucha importancia porque no solamente va a abreviar lo que es el litigio sino también en el tema de las relaciones humanas, en la parte de los recursos humanos, es un ahorro de esfuerzos si se consigue llegar a esos entendimientos, que en realidad es lo que estamos pidiendo en todos los órdenes de la vida.

Para nosotros, los trabajadores de la educación, es un tema que manejamos mucho en estos últimos años, justamente en lo que es el conflicto escolar, y podemos dar fe de que realmente esta forma de trabajo, la mediación, ha resuelto muchos de los temas donde parecía imposible llegar a una solución feliz, y sin embargo han ido creciendo las posibilidades de comunicación humana a partir de esta mediación.

SR. CASTRILLÓN – Pido la palabra.

Señor Presidente, señores diputados, en primer lugar quiero aclarar, antes de herir susceptibilidades, sin que aparezca como agresivo como normalmente lo quieren hacer aparecer, que el proyecto en tratamiento –Expte. Nro. 15.233–, tal cual lo hemos propuesto y está en Secretaría, posee cuatro artículos de fondo y uno de forma.

Quiero que presten atención porque después pedir explicaciones al señor Secretario de lo que se va a votar y cómo se va a votar, me parece que más o menos es como decirle –al señor Secretario– que baje a las bancas y haga el trabajo que tienen que hacer quienes han sido electos por el pueblo.

Para eso tenemos un Reglamento...

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Le solicita una interrupción el señor diputado Rogel.

SR. CASTRILLÓN – No se la concedo, señor Presidente.

Decía que para eso tenemos un Reglamento, tenemos un proceso de formación de las leyes en la Constitución, tanto en sentido formal, como norma que refieren a la ley, y en sentido material.

No serán especialistas en Derecho, como pretenden que no seamos ninguno de nosotros, pero al final tienen que prestar atención o concurrir asesorados con la gran cantidad de asesores abogados que posee esta Cámara, sobre todo los bloques, asesorados por cada uno de estos trabajadores que coadyuvan en la actividad de los señores legisladores.

El proyecto en tratamiento, señor Presidente, muestra claramente que la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos por una convocatoria efectuada por el único Gobernador que en los últimos 20 años se ha preocupado por poner en orden los Procedimientos Penal y Civil en la Provincia de Entre Ríos que es el actual Gobernador Jorge Pedro Busti, producto de él es la creación de la comisión para la formación del proyecto del Código de Procedimiento Penal y también la creación de la Comisión de la Reforma del Procedimiento Civil.

Esto muestra la actitud de determinadas posiciones gubernativas que indudablemente al darle participación a todos los sectores políticos y a todos los sectores del universo representativo del Derecho, la participación social y demás, da muestras claras de que el Derecho no es la Carta Orgánica del Partido Justicialista sino que pretende ser la regla clara que rija el proceso penal en su caso o el proceso civil en una pretendida regulación de la coexistencia humana normativamente pensada en función de justicia.

En tal sentido, así como a algunos les molesta que los señores legisladores puedan ser abogados o puedan ser más o menos buenos formadores de leyes porque toman como exclusiva su quinta, a los señores legisladores no les molesta tener otras opiniones para que a través de la opinión de personas que tienen conocimiento acabado de procedimiento en este caso civil se pueda proponer en una provincia donde no hay derecho de iniciativa, que lo hubiera podido tener si se acompañaba la convocatoria del Gobernador si se hubieran animado a reformar la Constitución, cosa que propusimos hartos, hasta el cansancio, señor Presidente, le demos la posibilidad de iniciativa al Colegio de Abogados, a entidades intermedias, al Superior Tribunal de Justicia, a Asociación de Magistrados, al Instituto Alberdi, etcétera, etcétera, etcétera. Más amplitud imposible, señor Presidente, para asegurar la independencia.

Es más debemos marcar claramente que cuando en el Artículo 1º del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo habla de aprobar y téngase por ley de la Provincia el Código Procesal Civil redactado por la comisión especial designada por Decreto Nro. 4.265/04 y da la nómina de quienes la integraban, no comienza en el Artículo 1º. Esto no será aplicable en el caso de que exista un juramento por Perón y por Evita, en cuyo caso se omitirá la producción de la prueba y se le dará razón a quien efectúe tal juramento, dando muestras claras de que el Derecho no es la política partidaria el Derecho son las normas que establecen formalmente, en un contenido material que en este caso es aportado por instituciones prestigiosas a los señores legisladores que tienen como función, y como manda el Artículo 87º de la Constitución, establecer este tipo de normas.

Algunos pícaros piensan que esto es distinto, esos pícaros deberían decir la excepción establecer excepciones como ésta para decir que esto es político partidario o decir en un Gobierno radical no se aplicarán las inhabilidades para todos aquellos que fueran afiliados radicales o prestan juramento por Yrigoyen y por Alem.

Esto que parece jocoso, señor Presidente, tiende a ubicarnos en lo que debe ser un plexo normativo que debe regir la vida del procedimiento en la solución de los conflictos y los diferendos entre los entrerrianos, en este caso la aplicación del Derecho de fondo al caso concreto a través de los organismos naturales que es el Poder Judicial.

Este proyecto de ley, señor Presidente, que vamos a votar aprobando en su conjunto el Código redactado al cual le podemos hacer o plantear correcciones antes, y aceptarlas o no, antes, caso contrario lo estaríamos aprobando tal cual está en poder del señor Secretario y del señor Presidente, si no después aparece como picardía de que se aprueba el Artículo 1º y se asustan, pero es así la ley y hay que leer los proyectos se refiere al Código de Procedimientos de la Provincia de Entre Ríos que busca actuar en consonancia con lo que es el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.

¿Por qué, señor Presidente? Usted y todos los profesionales del Derecho y quienes tienen incumbencia en el ámbito del proceso civil conocen claramente que nuestro Código de Procedimiento actual, vigente, excepto muy raras excepciones, tiene su correlato casi textual con el Código de Procedimiento Nacional. Al ser modificado aquel Código de Procedimiento Nacional nuestro Código en muchos de sus artículos ha quedado totalmente descorrelacionado. Este proyecto de reforma busca precisamente volver a correlacionar aquellas normas del proceso nacional con las normas del proceso que tiene la provincia de Entre Ríos. Es más, la mayoría de los autores refieren a doctrinas y comentarios del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que no es ni más ni menos –con diferencias de artículos– que el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos tal cual está vigente en la actualidad.

En ese caso se trata de responder a una situación, y así lo tomó también la Nación, de la sociedad que pretende mayor inmediatez y velocidad en la solución de los conflictos, terminar con el abarrotamiento en los juzgados, que hace que muchas veces la Justicia llegue tarde y lenta, o que sea tan lenta que terminan vulnerándose los derechos sagrados, individuales –tanto patrimoniales como personales– de cada uno de los ciudadanos, en este caso de la provincia de Entre Ríos.

Se traen como modificaciones esenciales, en primer lugar, la introducción de la mediación previa al proceso; en tal caso se presenta quien pretende ser parte de un proceso, identificando las partes, identificando el objeto, identificando la medida, el quantum, y el juez – así está estructurado– designa un mediador para que trate de acercar las partes. Esta mediación aparece como obligatoria y lo que buscan estos dos elementos: mediación y audiencia conciliatoria es acortar el proceso y tratando que el mismo termine lo antes posible, dejando satisfecha la voluntad de las partes y quitándole litigiosidad al procedimiento, de tal manera de no llegar a un juicio que lleve tres, cuatro o cinco años y termine abarrotando un Juzgado Civil y Comercial.

He escuchado en el tema de la mediación que los señores diputados han reiterado posiciones que tienen distintos sectores de la actividad relacionada con la mediación, pero no he escuchado ningún tipo de evaluación propia, de tal manera de decir cuál es el objeto de la mediación, adónde apunta y qué es lo que tenemos que tratar de asegurar, y si estamos seguros o no de cuál es el resultado buscado por el autor de este proyecto, que es en definitiva el fondo de la cuestión que está en tratamiento en esta Cámara.

En tal sentido si hay algo que siempre se ha cuidado es no encarecer los juicios y no entorpecerlos de tal manera de hacer imposible la llegada a la Justicia; que exista un mediador, dos, tres o cuatro es también desde el punto de vista de generar trabajo o empleo, pero desde el punto de generar mayores gastos en una instancia previa del juicio, en la mayoría de los casos significa aumentar el costo que tiene que afrontar quien resulte perdedor, o en su caso, para quien termina fuera de la mediación logrando una conciliación en la audiencia conciliatoria.

En primer lugar, señor Presidente, al estar asistidas cada una de las partes por un abogado, podrán decir lo que quieran, pero quienes somos abogados y hemos trabajado como abogados sabemos que nosotros sustentamos una posición con nuestro cliente, la otra parte también sustenta la suya; si nosotros le aclaramos al cliente cuánto gana, cuánto pierde, qué posibilidades tiene de ganar o de perder, y la otra parte hace lo mismo, lo más probable es que la conciliación se haga entre los abogados, excepto que exista un problema personal entre los abogados.

Indudablemente, en los aspectos que son netamente cuestiones de puro derecho o de interpretación de la doctrina, de la ley o de la norma aplicable, los docentes pueden ser buenos mediadores en el ámbito educativo, pueden ser buenos mediadores en el ámbito de lo que plantea la Defensoría del Pueblo de Paraná, en cuanto a qué pasa con la humedad, con la medianera, con los ruidos molestos; pero cuando la cuestión es de puro derecho, no cabe ninguna duda que el único elemento posible para poder acercar a las partes es la existencia de un abogado.

Tal como está instrumentado el artículo que refiere a los mediadores y comediadores habla claramente de que el mediador designado podrá pedir la asistencia de otra persona que también tenga el título de mediador reconocido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando el caso y el tema a tratamiento así lo requiera. Tomado así, sería como tomar un perito en forma previa en un antejuicio; y realmente vemos que la posibilidad de que actúen dos mediadores juntos, sin especificar en cada una de las áreas qué

mediador es el que necesitamos, caeríamos en el encarecimiento por el encarecimiento mismo. Es más: si no establecemos un juego de prelación entre dos o más mediadores o comediadores, se daría la circunstancia de que no saber quién es el principal y quién es el adjunto; y si tienen dos partes que sostienen igual posición, también deberíamos fijar cuál es la posición predominante en el caso de que hubiera disparidad entre los dos mediadores. Esto no lo resolvió esta comisión eminente que efectuó la redacción.

Conforme con el dicho que dice: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar", nosotros, muy modestamente, pensamos que esto en Entre Ríos puede andar mejor o peor que en otras provincias, mejor o peor que en la Nación; pero tenemos que ver andar esto. Porque para que esto sirva tiene que haber un alto porcentaje de mediaciones que terminen en el arreglo del juicio, o bien, si no se produce este efecto, provocar las modificaciones del articulado correspondiente a la mediación para tratar que, dentro de la mediación, logremos el objetivo de acortar el procedimiento, llegando al avenimiento de las partes.

Opinamos, señor Presidente, señores diputados, que todos los mediadores y comediadores tienen que ser profesionales universitarios matriculados en la Provincia. Van a decir por qué quedan afuera los Licenciados Políticos, porque tiene que sancionar la Legislatura el Colegio de Licenciados Políticos. Ahora, pretender que no sean matriculados en la Provincia, es pretender tener mediadores o comediadores que no tengan ningún tipo de contralor a través de un organismo que regule la profesión y efectúe la superintendencia de la misma. Por lo tanto creo que en eso no puede existir ninguna duda.

Este profesional universitario tiene que contar con título de mediador expedido y reconocido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; no existe ninguna duda. Existen situaciones como las de puro derecho, referidas a que la controversia entre los hechos controvertidos fueran exclusivamente materia de interpretación o de aplicación de la ley, doctrina y derecho aplicable, en que el mediador debe ser abogado; no nos cabe ninguna duda.

Tampoco nos caben dudas en los casos que se refieren a derechos reales, transferencias de derechos reales y situaciones que son volcadas por los instrumentos públicos o privados certificados y la validez o no, y nulidad o no, de los instrumentos públicos o instrumentos privados con participación de funcionario público. En ese caso nosotros creemos que la comediación necesaria de un escribano le da la claridad para que quienes están disputando esta situación cuenten con alguien que sea especialista en lo que es un análisis de estudio de título, un análisis de tipo de certificación de antecedentes registrales y sobre todo en antecedentes catastrales, que no es tan común, excepto en materia de sucesorias, que lo hagan los abogados. Por eso proponemos que en los casos referidos a derechos reales registrables y/o a la validez y efectos de instrumentos públicos y/o privados con intervención de funcionario público, actúe como comediador necesario un notario matriculado en la provincia de Entre Ríos. Y en los demás casos en que la naturaleza de los hechos controvertidos hiciera necesaria la participación de un comediador con conocimientos especiales de alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica, el mediador requerirá su designación a la Mesa de Entradas que corresponda en la forma prevista en el Artículo 288º.

Fíjense, señor Presidente y señores diputados, que resultaría fácil poner dos o tres mediadores, no sería tal el problema; el problema sería si nosotros tuviéramos una ley o este Código hiciera remisión a la aplicación de la Ley Nro. 7.046, de los honorarios de los abogados, según la cual todos los abogados que representan a una parte se consideran una sola parte a los efectos de la regulación; no la tenemos en este caso. En este caso los honorarios de los mediadores se dejan sujetos a lo que establezca la reglamentación en tal sentido, que podrá fijar más o menos, lo cierto es que hasta que no esté la reglamentación y se ponga a andar este procedimiento, nosotros no tenemos una medida cabal de lo que va a costar en el tema de honorarios el mediador, y cuánto menos cuando existe más de un mediador.

Podrá decir alguien por ahí que esto va a guardar relación con el costo del juicio, con el monto del juicio, con el tipo de juicio; lo dirá la reglamentación, esto no lo dice. Lo que nosotros nos permitimos hacer, porque el tema de la mediación es importante siempre y cuando logre su efecto y a su vez que no cause un dislate presupuestario innecesario, fue poner que la mediación fracasada se paga con los fondos de financiamiento que establece el Código de Procedimiento para la mediación, que son las multas por incomparecencia, por incumplimiento de los acuerdos arreglados por los mediadores.

En tal sentido, no tenemos una medida de en cuánto se va a integrar ese fondo de mediación y su correlación con lo que establezca la reglamentación como retribución del

mediador, por lo tanto no queremos arriesgar de entrada, cuando no sabemos a ciencia cierta – y esperemos que cumpla su finalidad– en qué porcentaje va a cumplir la finalidad esta mediación preliminar obligatoria y en qué caso no; y cuánto va a cubrir este fondo de financiamiento constituido conforme está previsto en este proyecto de Código de Procedimiento relacionado con lo que se dicte en la reglamentación, que no la tenemos prevista ni la conocemos y que se deberá hacer dentro de los 360 días subsiguientes a la aprobación.

Es por eso que hemos agregado que en ningún caso la actuación de comedidores podrá significar la fijación conforme a la retribución prevista en el Artículo 291º de retribuciones de mediadores que en su conjunto supere el 25 por ciento en más de la asignación para los mediadores que actúen en forma exclusiva.

¿Por qué introducimos esto? El diputado Mainez nos decía, si es una sola parte, ¿qué problema hay? Pero no es una sola parte, va a ser una sola parte si la reglamentación dice que será considerada como una sola parte cuando fije la retribución. Mientras tanto decimos, le ponemos a la reglamentación un límite, más allá que la considere una sola parte o no, en el caso en que actúe más de uno podrá cobrar el 125 por ciento de lo que cobre uno, no más de eso.

Por supuesto no es fácil hacer evaluaciones previas cuando no se ha hecho andar, pero no es menos cierto porque forma parte de las normas de prudencia, tener este tipo de reparos que sobre todo cuando sea lo suficientemente bajo el monto fijado para el mediador no habrá interés de parte de los mediadores, como muchas veces ocurre en determinados juicios con relación a los peritos y si establecemos lo suficientemente alto encareceríamos notablemente el costo del proceso que tal vez también vulnere con la posibilidad y el derecho de acceder a la justicia de cada uno de los ciudadanos entrerrianos sobre todo en determinados tipo de juicios.

Más allá de atender, por supuesto, lo que han podido precisar los señores legisladores de la oposición, tanto el diputado Rogel como las señoras diputadas Grimalt y Demonte, creemos que el límite a esto en un comienzo de la aplicación de la mediación, estaría dado por la redacción que hemos hecho conocer.

Por otra parte, ya la habíamos arrimado con anterioridad a los distintos bloques y subbloques que tiene esta Cámara.

El otro elemento fundamental que tiene este Código de Procedimientos es la audiencia conciliatoria que ya se venía aplicando por algunos jueces haciendo una interpretación de normas que si bien no lo expresaban en forma directa la posibilitaban y que en muchos casos, no en todos, y en muchos lugares no en todos, había dado buenos resultados pero que indudablemente tienden al mismo objeto es decir como acortamos los tiempos del proceso de tal manera que la solución del conflicto sea lo más cercano posible al momento de promoción del conflicto entre las partes.

En ese sentido también este Código resulta innovador en el tema de lo que es la confesión en la prueba confesional, atento que ya era costumbre decir va el abogado y le dice: “para que fuera cierto vos decí a todo que no es cierto, y fijate bien porque si te pregunta una barbaridad entonces decí sí es cierto”. Nos da la posibilidad que la confesional sea con la posibilidad de preguntar e interrogar libremente y que se puedan dar aportes a la claridad y no solamente al aspecto formal de la confesional que se venía tergiversando, o bien únicamente caía uno que se lo encontraba muy someramente informado o mirando tal vez alguna estrella.

Tiene como elemento también lo que algún abogado del interior, donde no había Cámaras ya hace creo que 13 años, cuando el Artículo 248º penaba a los que no tenían Cámaras porque eran de una ciudad o departamento que no tenía Cámara de Apelaciones y perdían la posibilidad del recurso cuando no acompañaba las estampillas, cuando en definitiva, los que viven mejor, los que están más cerca de los centros urbanos importantes o los que tenían mejor lobby para conseguir la Cámara, no tenían esa pérdida de recursos en aquel momento promovimos y obtuvimos la sanción de la ley por la cual la estampilla no era condición sine quanon para declarar la admisibilidad del recurso.

Como no se previó en aquel entonces la forma de remisión que nosotros lo preveíamos a través de la Policía, este Código establece que se establezca por Acordada del Superior Tribunal de Justicia.

Y en el aspecto de los procesos este Código trae como innovación cambiar de un Código en el que estaba el proceso ordinario sumario y los procesos ejecutivos, transformarlo al ordinario prácticamente en sumario haciendo que en la demanda y en la contestación se

ofrezca la prueba acortando los plazos del ordinario al sumario y buscando llegar al mismo objetivo: ¿cómo acortamos el proceso?, también en la producción de la prueba.

Establece un proceso monitorio que se da en los casos donde la discusión es de puro derecho y a su vez los hechos controvertidos están sustentados en documentos públicos o privados con firmas certificadas, o que previamente se hayan reconocido las firmas en una actuación preliminar en el procedimiento mismo; en tal caso existe la posibilidad o no de oposición a la sentencia monitoria y esa sentencia monitoria que se transforma en un proceso corto, parecido al sumarísimo, logra una sentencia que es ejecutable por vía de ejecución de sentencia.

Sí es cierto que se había omitido, ya que por un lado en este Código se introducía un límite para los honorarios de los martilleros, en la redacción actual no está establecido, por lo que preferimos prudentes mantener la redacción sin poner el 2 por ciento y el 5 por ciento, ya que en la práctica la situación actual es que cobran un 4 por ciento sobre los bienes inmuebles y 10 por ciento en los muebles. Decidimos mantener ese criterio, pero la verdad es que nos han hecho llegar en forma expresa los señores representantes de los abogados, los representantes del Superior Tribunal de Justicia y representantes de los Magistrados y funcionarios el texto correcto para ello. Esto no es intromisión de un Poder en otro, esto es aporte de un Poder a otro. Cuando valoran algunas cosas ven como una intromisión de un Poder a otro; cuando aportan los otros es aporte de un Poder a otro, pero nosotros receptamos los aportes, más allá que de antemano teníamos claro lo que íbamos a resolver en relación a los honorarios de los martilleros.

Por último, está el tema referido a las ejecuciones hipotecarias a las que ha hecho referencia el diputado Fernández; estamos dispuestos a corregir el texto antes de pasar a votación el Artículo 1º del proyecto. En síntesis, el Artículo 287º bis con la redacción que proponemos y acercamos a Secretaría, con el único aditamento del Artículo 560º bis –tal cual lo ha propuesto el diputado Fernández– es lo que nosotros vamos a pretender poner a votación como Artículo 1º en forma integral. La otra modificación es la referida al que era el Artículo 551º, sobre lo que debo advertir que a veces algunos tienen que aplicar las normas jurídicas y para aplicarlas hay que conocer el proceso de formación de dichas normas, tanto en el sentido material como en el formal; cuando alguien que aplica las normas jurídicas y pretende imponer y sugerir un texto nuevo como Código de Procedimiento y en el texto nuevo refieren que cierto artículo se deroga, quiere decir que tienen que volver a releer lo que es la formación de las leyes en el sentido formal, de tal manera de poder interpretar cabalmente una ley desde su nacimiento, tomar el espíritu del legislador en el sentido formal y material de la ley que tiene que aplicarla al caso concreto en su función de judicabilidad en el Poder Judicial.

Este artículo relacionado a los señores martilleros es el Artículo 549º, que va a tener la misma redacción de lo que era el Artículo 551º en el otro texto, que es la redacción que contiene el artículo del Código de Procedimiento vigente. Con esas tres modificaciones, señor Presidente y señores legisladores, nuestro Bloque, Subbloque y nuevo Bloque, porque ahora tenemos seis bloques, vamos a aconsejar votar afirmativamente este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, con las sugerencias enriquecedoras no consideradas intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo.

A la posibilidad de que los mediocres concedores del Derecho, pero obligados formadores de las leyes por voluntad de los constituyentes de 1.933, –nosotros, los legisladores–, le demos a la provincia de Entre Ríos un Código de Procedimientos acorde con lo que exige la sociedad, es decir, una mayor celeridad en los procesos judiciales y una mayor atención en la resolución de las causas civiles. A esta posibilidad –decía– le hemos agregado la creación de ocho cargos de jueces, porque la creación de juzgados era una materia pendiente de los legisladores. Es necesario crear los ocho cargos de jueces para que en la aplicación del nuevo Código de Procedimientos vaya surgiendo que esto no da el efecto de romper el abarrotamiento actual, entonces el Superior Tribunal de Justicia podrá con elasticidad ir ocupando esos cargos de juez para lograr un equilibrio en cantidad de causas a lo largo y a lo ancho de la provincia, de tal manera de superar los escollos insalvables aun con la aplicación de este nuevo Código de Procedimiento, que por disposición transitoria se comenzará a aplicar a los 180 días de sanción, prorrogables por 180 días más.

En tal sentido, con las modificaciones aceptadas por nuestro Bloque, propiciamos votar afirmativamente el proyecto del Poder Ejecutivo, con el agregado de la creación de ocho cargos de juez que he relacionado precedentemente.

SR. ROGEL – Pido la palabra.

En primer lugar, señor Presidente, no puedo dejar pasar algo que constituye una falta de deferencia hacia mi persona por parte del diputado Castrillón, que no merezco, porque durante tres años en este Recinto jamás he proferido ningún tipo de insinuación sobre la calificación intelectual ni el trabajo de ninguno de los legisladores. Seguramente la pasión que él ha puesto en este trabajo –que me consta– lo ha llevado a no entender el comentario que he hecho sobre el tratamiento parlamentario que va a tener este proyecto de ley.

Este Bloque ha responsabilizado con su presencia la institucionalidad y el funcionamiento de esta Cámara. Quien habla jamás ha faltado a una sesión y soy de los legisladores que ha tenido, lamentablemente, que perder muchas posibilidades políticas y personales para cumplir con esta responsabilidad, como lo ha hecho la mayoría de los integrantes de este bloque. Jamás hemos llegado al Recinto sin la lectura adecuada de los proyectos, y quien habla, por ser el Presidente del Bloque, ha tenido que leer el 99,99 por ciento de los proyectos. Hemos colaborado con esta Cámara, frente al desconocimiento palmario, en muchas ocasiones, con el normal funcionamiento del Cuerpo.

Jamás hemos llegado a este Recinto sin tener una reunión de bloque previa los días martes a las 18 horas, jamás hemos bajado a este Recinto sin una reunión previa al tratamiento de cada uno de los temas, y hemos sido los impulsores de la coordinación de los trabajos en la reunión de Labor Parlamentaria, jamás en este Recinto hemos venido a plantear una cuestión ajena a lo que ha sido el tratamiento de la reunión de Labor Parlamentaria, por lo tanto, señor Presidente, en mi persona, pero reivindicando la tarea de todo este bloque; creo que chico favor nos hacemos frente a tamaña labor que ha realizado, en este particularmente –y me consta– el diputado Castrillón, haciendo alusión a que no estamos entendiendo cómo funciona el sistema legislativo en la provincia de Entre Ríos para el tratamiento y sanción de las leyes.

Lo digo no por mi persona, Señor Presidente, lo digo porque en esta Cámara, y no fue por cuestiones nuestras, hubo tratamientos de leyes que no han tenido claridad y hemos tenido que mandar notas para el esclarecimiento, porque de la lectura de la versión taquigráfica por allí surgían algunas cuestiones en el tratamiento final de las leyes, que fueron zanjadas a partir de contestaciones que el señor Secretario nos ha enviado por nota; me refiero puntualmente al tratamiento de las modificaciones a la Ley Nro. 3.001, y no por mi, señor diputado Castrillón, señores legisladores, no por mi persona, sino porque varios legisladores me preguntaban de qué manera se iban a introducir las modificaciones habida cuenta que como usted había manifestado en el Artículo 1º se subsumía la aprobación en general, no por una cuestión de descalificar a los demás legisladores sino para que por Secretaría, o por Presidencia, se les informara el tratamiento del proyecto de ley.

Reitero, no me animaba ninguna cuestión, y reivindico el trabajo parlamentario que se hace permanentemente en esta Cámara, sobre todo porque sé con absoluta claridad, y me consta quienes son los legisladores que han hecho funcionar la tarea legislativa, por eso sinceramente no lo quería dejar pasar, porque con el diputado Castrillón durante esos casi tres años siento que hemos tenido la responsabilidad de hacer funcionar gran parte de esta Legislatura y de esta Cámara.

Yendo brevemente a la cuestión que se ha planteado, no quería abrir la discusión pero se ha hablado con mucha convicción por parte del diputado Castrillón, y pareciera que quienes no somos entendidos en Derecho estamos incorporando la figura del mediador a partir de algún desconocimiento jurídico, pero como se ha abierto la discusión voy a precisar algunas cuestiones.

En primer lugar, creo que hay una confusión entre la abreviación del juicio y el ahorro de costo cuando se está hablando de una acción prejudicial; si se está hablando de establecer una medida como es la mediación para evitar la posibilidad que se vaya a juicio, no sé cómo se puede sostener que la presencia de un mediador alarga o encarece el juicio, si de lo que estamos hablando es de un concepto prejudicial para evitar, justamente, el juicio.

En segundo lugar, creo que se ha confundido la figura de los peritos, que son especialistas, con la figura del mediador, son dos cosas distintas. Al equiparar la especialización de un mediador, o de un mediador, con el concepto de especialización, estamos hablando lisa y llanamente de peritos, no de un mediador. Repito, el concepto que acá se ha dicho que no se ha dicho: “La mediación es una práctica que trasciende el Derecho –así lo leí–, se construye, nutre y desarrolla gracias al aporte de muchos saberes, nació en la República Argentina con una característica interdisciplinaria”.

Si tuviera que hacer un análisis profundo de la manera como se ha defendido acá la presencia del mediador como profesional, abogado en este caso, diría: señores, si la mediación prácticamente viene a meterse por la ventana en el proceso judicial no debería existir; no podemos reconocer, como hemos hecho acá, que es uno de los avances que tiene la audiencia previa. No podemos hablar de la mediación como uno de los avances y después subsumirla diciendo que la mediación existe y sirve en tanto y en cuanto la ejerce un profesional, abogado, y la presencia de un comediador que no sea abogado prácticamente la desvirtúa; o sirve como proceso de avance frente a la construcción de la posibilidad de evitar el litigio judicial, o no sirve.

Porque creo, señor Presidente, que si existe la posibilidad y la tarea de la mediación y no se la habilita para que concurran otros profesionales que no sean solamente abogados, es porque se le está habilitando a los otros profesionales la posibilidad que sean mediadores, en todo caso sino tendrán que replantearse quienes están a cargo de los procesos de mediación en Argentina, que se establezca clara y exclusivamente que deben ser abogados todos los que asistan a los procesos y cursos de mediación.

No creo que nadie, de ninguna profesión en general, quiera solamente prestarse en un proceso de mediación – como se lo ha querido resumir aquí, al tema de las medianeras o conflictos vecinales menores.

Estamos hablando de un concepto y no lo conozco si no desde concepciones humanas, y no tengo la capacidad intelectual para explicarlo en términos de lo que es la sociología, la filosofía y otras ciencias que explican este proceso como es la mediación, estamos hablando de un proceso absolutamente distinto y complementario a lo sumo, no le quiero dar más jerarquía, que viene a posibilitar nada más ni nada menos que evitar la judicialización del conflicto.

Por lo tanto, señor Presidente, con estas otras consideraciones no voy a opinar sobre la cuestión de los honorarios, en eso creo que el diputado Castrillón y el diputado Fernández con la práctica de la profesión sabrán a la hora de resolver los honorarios qué es lo que constituye un esfuerzo fundamental en el juicio para los abogados y qué es lo que no constituye, me parece lógico y de eso no voy a opinar, pero sí creo que la figura del comediador establece una posibilidad importante donde no creo bajo ningún punto de vista, señor Presidente, que estemos ni alargando ni encareciendo ni desvirtuando lo que son las competencias, en este caso de los abogados. Para nada, en todo caso creo que lo que sí está haciendo falta acá, y nos hubiera hecho falta, lo digo sinceramente, es que nada menos que este avance –todos lo han reconocido como un avance– que es la mediación, nos hubiera encontrado en esta Cámara en un debate de dos o tres exposiciones sobre lo que significa la mediación como un aporte a la solución de los conflictos de los seres humanos en una sociedad absolutamente cada vez más conflictuada y que en definitiva necesita de nuevas formas y nuevos aportes para que de alguna manera la actitud animal que siempre sale de nosotros en algún momento, la actitud irracional que siempre está en nosotros, no siempre termine en el estrado judicial y en una resolución de sentencia, sino en la posibilidad de que los seres humanos, que para algo somos distintos de los animales, podamos resolver nuestros conflictos de una manera, creo yo, un tanto más civilizada que el juicio.

SR. CASTRILLÓN - Pido la palabra.

Haré una aclaración, Señor Presidente, en primer lugar, no hice relación y si lo tomé así le pido que no lo tome como una cuestión personal, al tema referido a cómo se va a votar. Sí le hice mucho hincapié y le di mucho énfasis atento a que se tomó por los medios periodísticos cuando tratamos el proyecto de ley de reforma de la Ley Nro. 3.001 como una triquiñuela por parte de nuestro Bloque, cuando en definitiva lo que formalmente correspondía era eso.

Está claro, no hay problemas con relación a lo manifestado, es más, no hacía referencia a ningún señor legislador en especial, sino a lo que se entendía para afuera de que había sido como una chantada, una sinvergüenzada para obtener la sanción de la Ley Nro. 3.001.

Con relación a la actuación del comediador, ya hemos manifestado que no tenemos problemas ni objeción en la forma en que efectuó la redacción esta honorable comisión redactora de este proyecto. Con relación al tiempo, no objetamos en ningún momento que pueda demandar más o menos tiempo, por último dejamos en claro que ya la mediación con el sólo hecho de ser posterior a la presentación en la esfera judicial de quien ejerce la pretensión,

forma parte de la judiciabilidad del sistema de mediación, o sea el sistema de mediación tal cual está previsto en el Código de Procedimiento ya ingresa en la esfera del Poder Judicial cuando es necesaria la presentación ante el juez competente para que se ponga en marcha el mecanismo de la mediación.

SR. ROGEL - Pido la palabra.

Señor Presidente, antes no lo dije, pero en todo caso, como lo ha propuesto para la votación el diputado Castrillón, nosotros vamos a proponer para que se vote el proyecto de reforma del Código de Procedimiento de la Provincia con las tres modificaciones que se han alcanzado por Secretaría y tal cual consta en la redacción pertinente.

SR. ZACARÍAS - Pido la palabra.

En primer lugar, seguramente cuando terminemos nuestro mandato cada uno de nosotros haremos nuestra propia evaluación de cuál ha sido no solamente la capacidad intelectual para elaborar un proyecto de ley sino qué derechos hemos defendido o qué derechos hemos protegido en el marco de esta responsabilidad que tenemos como legisladores de la Provincia, porque a veces se pueden elaborar muchísimos proyectos de ley que tienden a entregar el patrimonio de la República Argentina o no defender la causa de los trabajadores o de las empresas nacionales, o la materia prima de nuestro subsuelo. Digo esto porque esta Argentina, sin entrar en un debate particular con el diputado Castrillón sino desde un punto de vista filosófico, ha tenido expresiones muy claras en el campo intelectual desde el punto de vista profesional, pero han tenido objetivos que nada han tenido que ver con la defensa de los intereses nacionales que algunos de nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad de ejercer un derecho constitucional como legislador nacional o provincial, hemos mantenido.

En segundo lugar, quiero contestarle al legislador Castrillón, sin dejar de reconocer en su persona su capacidad legislativa, más aún lo he hecho públicamente a este rescate de su conocimiento en la actividad que hace al campo legislativo, pero sí nuestro bloque, tanto la diputada Demonte como quien habla, hemos tenido claras objeciones a aquellos abogados que ejercen el doble cargo, la doble responsabilidad y la doble profesión en forma simultánea, que son abogados y legisladores a la vez. Me parece que es una contradicción muy grande, es no entender el primer elemento de lo que significa la independencia de las instancias del Estado.

Digamos que no comprendemos que cuando hablamos de independencia de las instancias del Estado estamos hablando de la independencia de quienes integran esas instancias; no entra en mi idea que un legislador que tiene la responsabilidad de elaborar leyes para mejorar los principios elementales y el sentido común de una sociedad a la vez pueda ejercer el derecho de abogado yendo en contraposición de esos mismos derechos globales, sociales y del conjunto de la sociedad. Nosotros nos oponemos a eso de la misma manera en que nos oponemos a que un gerente o representante de una empresa privada prestadora de un servicio sea a la vez funcionario de un Gobierno Provincial o Nacional. Me parece que es una contradicción muy grande, no entra en el marco de nuestra idea de lo que significa la independencia del Estado respecto del sector privado, de la independencia del Estado respecto de una profesión. ¿Por qué decimos esto?

Porque a lo largo de nuestra historia, lamentablemente, hubo corporaciones profesionales y corporaciones empresariales, económicas, privadas, que han ejercido, a través de su conducción, su influencia para promover dirigentes o funcionarios para condicionar la libertad y la independencia del Gobierno, ya sea Municipal, Provincial o Nacional.

Simplemente quería decir esto, señor Presidente. Yo he entendido que a mi actividad legislativa tenía que incorporarle el ordenamiento intelectual que tenemos que tener, y por eso, sin ninguna vergüenza, digo que voy a estudiar a la facultad, para formarme como un hombre de esta sociedad, entendiendo mi responsabilidad legislativa. Quiero aclarar que nosotros no desmerecemos al legislador abogado; al contrario, rescatamos del diputado Castrillón que sea abogado y a la vez legislador. Pero no compartimos que un abogado tenga la misma libertad de ejercer esa profesión con libertad y a la vez legislar en el campo de lo que significa esta obligación que tenemos y el juramento que hemos ante la Constitución de la Provincia.

Ahora, señor Presidente, me quiero referir al rol del mediador. La mediación es un acto natural y genuino que no puede requerir como obligación un título profesional. Recién la diputada Demonte decía que la escuela es el ámbito más natural de la mediación y que los docentes ejercen el rol de mediadores, sin ningún tipo de obligación estatutaria ni jurídica y sin

haber sido formados previamente para ello. A pesar de esto, los docentes median entre los alumnos y entre los alumnos y sus padres. Esta actividad puede ejercerse en cualquier campo del desarrollo social. El médico, el dirigente político, el sacerdote, el docente, cada uno de los hombres que tienen responsabilidad de conducción institucional podrían ser mediadores, sin necesidad de ser abogados; cualquiera de estos hombres podría ejercer esa obligación natural que tenemos que tener los seres humanos para acercar a las partes en conflicto.

Si tuviésemos una visión clara sobre lo que significa acercar a las partes para mediar en los problemas que existen en la sociedad, quizá nos daríamos cuenta de que para llevar a cabo esta tarea necesitaríamos dirigentes sociales, fueran abogados o no; porque en el desarrollo de su actividad comunitaria, el dirigente social conoce las necesidades de los integrantes de la sociedad.

Por estas reflexiones nosotros vamos a mantener la posición que ha desarrollado la diputada Demonte. Con estas expresiones en ningún sentido queremos contradecir la posición del Partido Justicialista en el marco del Bloque que preside el diputado Castrillón; solamente tenemos posiciones e ideas diferentes que vamos a sostener con nuestro voto.

SR. CRESTO – Pido la palabra.

Tanto desde nuestro bloque como desde la Comisión de Legislación General ya se dejó aclarado este tema; pero quiero agregar con respecto a los representantes del Colegio de Martilleros, algunos presentes aquí, que estuvieron también en la sesión anterior, donde se habría votado la reforma de este Código que se pasó para esta sesión. Pero más que nada era dejar en claro que escuchamos su propuesta, la tomamos y la dejamos plasmada en los porcentajes que ellos pretendían por la sola aplicación del principio de equidad, respetando más que nada la labor del martillero en el término de los procesos judiciales, en lo que son las subastas, donde tienen un papel fundamental por no decir el primordial, y teniendo en cuenta también que esta Cámara, cuando se planteó el tema de los honorarios de los abogados, también ha escuchado y ha tenido un papel fundamental cuando la Justicia de esta Provincia prácticamente dejó de funcionar porque consideraban que con la devaluación se había afectado el principio de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces y tuvimos que actuar y hacer la propuesta de la actualización de esas remuneraciones porque considerábamos que era un valor fundamental esa intangibilidad.

Creo que la labor del martillero también es fundamental y más teniendo en cuenta no solamente el principio de equidad sino aplicando el sentido común, porque este gasto lo va a afrontar el que va a comprar en un remate, ya sea de un mueble o de un inmueble, y sabemos también que los porcentajes que están aquí en discusión son mucho más pequeños que los porcentajes en que se evalúan esos bienes en un remate.

Así que usando el sentido común es que dejamos plasmado esto y queríamos dejar en claro que no fue un capricho sino que fue un tema que se ha debatido y se ha consensuado y pienso que no habrá ninguna moción en contrario en este tema porque creo que por unanimidad nos hemos puesto de acuerdo.

SRA. GRIMALT – Pido la palabra.

Señor Presidente, el artículo que más ha traído el debate aquí es el que habla de la posibilidad de definir que el proceso de mediación sea integrado siempre por dos mediadores, uno abogado y otro de otra disciplina; y quisiera abogar un poco más porque fundamentalmente vamos a votar en forma dividida con respecto a este tema.

Traigo a colación que en la reunión que se realizó ayer por la tarde en este Recinto a instancia de los diputados Mainez y Grilli, que hoy no están aquí presentes, había integrantes de la comisión que es la que tuvo la responsabilidad, la que trabajó, la que realmente ha realizado un arduo trabajo para tratar de plasmar en este texto todas las modificaciones y adecuaciones en lo que tiene que ver con el Código de la Nación. Y cuando se va dando el debate, la comisión que redactó estas modificaciones ya se había expedido, entonces sus miembros no podían estar hablando en representación de la comisión, pero sí se expresaban a título personal, en lo cual no había una objeción de fondo en ningún momento con respecto al tema que plantea el diputado Castrillón –que también lo planteaba ayer cuando estuve hablando con él–, en cuanto a su preocupación respecto a que el problema de tener dos mediadores podría implicar un aumento en el costo de todo el proceso. En ningún momento ese argumento se puso como algo de peso como para oponerse a esto que se estaba debatiendo, donde se ve que el proceso de mediación siempre es mucho más óptimo y tiene

más posibilidades de resolver el conflicto si es llevado adelante por dos mediadores que actúen en forma interdisciplinaria, que es sobre lo que los diputados que sostenemos esta posición nos hemos explayado y fundamentado.

Sinceramente no veo cuál es el obstáculo. Ayer, en realidad, de la reunión en la que estuve saqué en limpio que los integrantes de la comisión que tuvo a su cargo la responsabilidad de proponer las modificaciones al Código, no veían como un problema o un obstáculo que se modificara la redacción y se perfeccionara. Me parece lamentable que marchemos a una votación dividida cuando en el resto del texto estamos de acuerdo y eso es lo más importante. Justamente un integrante de la comisión dijo que había que estar viendo en vez de el vaso medio vacío, verlo medio lleno, creo que de eso se trata.

Por eso vuelvo a apelar a los diputados que no comparten esta visión, porque los integrantes de la comisión después de escuchar las propuestas o las visiones de los mediadores que estaban presentes, en ningún momento dijeron: no, tiene que ser como nosotros lo redactamos por esto o por esto, al contrario, dijeron que en realidad no había problemas que estuvieran en el proceso de mediación dos mediadores, un abogado y un profesional de otra disciplina.

SR. CRESTO - Pido la palabra.

Solicito, señor Presidente, el cierre del debate y que pasemos a votar el proyecto.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) - Se va a votar la moción de cierre del debate.

-Resulta afirmativa.

SR. CASTRILLÓN - Pido la palabra.

Solicito, señor Presidente, por una cuestión de orden, que primero sea sometido a votación el texto tal cual obra en Secretaría con las tres modificaciones que hemos planteado nosotros, posteriormente en el caso de no reunir los votos para la aprobación, que se pongan a votación las otras opciones propuestas por los señores diputados.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) - En primer lugar al constar de más de un artículo el proyecto de ley, se va a votar necesariamente en general y sobre eso no hay discusión.

-Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) - A continuación se pone en consideración en particular el Artículo 1º que incluye la totalidad del texto de más de 700 artículos.

SR. CRESTO - Pido la palabra.

Señor Presidente, creo que el único Capítulo donde no hay unidad de criterios es en el de la mediación, por lo que propongo que votemos en particular todos los otros Capítulos con excepción de ese al que dejaríamos para una votación posterior. Seguramente después habrá una moción de minoría y una de mayoría para ese Capítulo.

SR. CASTRILLÓN - Pido la palabra.

Con todo respeto, señor Presidente, el Artículo 1º refiere a la aprobación del proyecto y hemos propuesto tres modificaciones; vuelvo a reiterar que sería conveniente y oportuno poner a consideración el Artículo 1º conforme al texto que hemos propuesto, con las tres modificaciones que acercamos a Secretaría; en caso de que ese texto no resultara triunfante por los votos, que se ponga a consideración el resto de los textos con las modificaciones propuestas por los señores diputados.

SR. ROGEL - Pido la palabra.

No tenemos inconveniente en poder aceptar esta metodología pero sí quiero que quede expresa mención que el no acompañamiento por parte de los legisladores de esta Bancada –no sé qué dirán los demás bloques– implica que estamos reiterando las modificaciones que hemos propuesto, tanto para el sistema de mediación como para la modificación específicamente del Artículo 552º bis que, como ya lo ha dicho el diputado Cresto, está en un capítulo aparte. Pero particularmente sobre este capítulo insistimos en las

modificaciones donde se amplían las incumbencias o materias en que puede darse la mediación y en lo que hace al comediador como forma obligatoria.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Para pasar a la votación en particular, por Secretaría se precisará lo que se pondrá a votación.

SR. SECRETARIO (Gómez) – La propuesta del diputado Castrillón refiere a la modificación del Artículo 287º bis, correspondiente a mediadores y comediadores; la modificación del Artículo 549º, que corresponde a comisión y anticipo de fondos y el agregado o incorporación del Artículo 560º bis.

18

CUARTO INTERMEDIO

SR. ROGEL - Pido la palabra.

Solicito, señor Presidente, que la Cámara pase a un breve cuarto intermedio.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Rogel.

-Resulta afirmativa.

-Eran las 14 y 28.

19

REANUDACIÓN DE LA SESIÓN

-Siendo las 14 y 29, dice él:

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Continúa la sesión.

Se va a votar en particular, en primer lugar, con las precisiones hechas por Secretaría, entendiendo que la votación en particular del Artículo 1º indica la aprobación total del texto del proyecto de ley.

SR. CRESTO – Pido la palabra.

Señor Presidente, si se ha propuesto modificar el Artículo 287º, opino que tenemos que debatir este artículo y después pasar a votar el Artículo 1º del proyecto de ley.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – La Presidencia aclara que el Artículo 1º del proyecto de ley en consideración contiene la totalidad del Código, razón por la cual la moción que hemos precisado por Secretaría...

SR. CRESTO – Pido la palabra.

Se ha propuesto la inserción del Artículo 287º bis con la siguiente redacción: “En todos los casos se establecerá el trabajo en comediación: uno de los mediadores deberá ser abogado y el otro profesional universitario en cualquiera otra disciplina, ambos matriculados en la provincia. En caso de profesiones universitarias no colegiadas deberán acreditar y registrar su título ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Los mediadores deberán contar con título de mediador expedido por institución reconocida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y con veinte horas anuales de capacitación continua”.

También se ha propuesto que el comediador no sea obligatorio en el proceso.

SR. ZACARÍAS – Pido la palabra.

Evidentemente, señor Presidente, el Artículo 287º es sobre el que, casualmente, no se quiere mediar. Estamos hablando de mediar pero no se quiere mediar... Qué contradicción: estamos hablando de la necesidad de incorporar la mediación en los conflictos y no se posibilita mediar en esta Legislatura.

Creo que tenemos que hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad. Si estamos de acuerdo en todos artículos menos en el 287º, pasemos a debatir este artículo. Éste es un

problema de sentido común, señor Presidente: o mediamos y encontramos la síntesis; o votamos, pero votamos en forma individual el Artículo 287º.

SR. FERNÁNDEZ – Pido la palabra.

He sido totalmente claro respecto mi posición personal, así que nadie puede confundirse respecto de lo que voy a decir a continuación. Me parece que la moción del diputado Cresto es la que más se ajusta a la posibilidad de que cada legislador y cada Bloque exprese cabalmente a través de su voto su pensamiento y su convicción. De modo tal que voy a apoyar la moción del diputado Cresto que, insisto, permite a cada bloque y a cada legislador expresar su posición. En el caso de nuestro bloque y personalmente sobre la mediación tengo una posición coincidente con la que vino de la comisión redactora de este proyecto de reforma del procedimiento civil y comercial. Si no se hace lugar a la propuesta del diputado Cresto, ni en mi caso personal podré expresar totalmente mi posición, como tampoco lo podrá hacer el resto del Bloque Radical, que propone otro texto; ni tampoco lo podrán hacer los demás bloques.

Al votar de la forma reseñada por la Presidencia se va a dar la incongruencia o la contradicción de obligar que se vote en contra porque hay diferencia en dos artículos, cuando todos estamos de acuerdo en los 815 artículos restantes. Por eso, apoyo la moción del diputado Cresto.

SR. ZACARÍAS – Pido la palabra.

Coincido con el diputado preopinante, y además solicito que la votación del Artículo 287º se haga en forma nominal, para que quede claramente identificado el voto en la versión taquigráfica.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Se va a votar la moción del diputado Zacarías en el sentido de que la votación sea nominal...

SR. FERNÁNDEZ – Primero debe votarse la votación del diputado Cresto, señor Presidente.

SR. ZACARÍAS – Que la votación del Artículo 287º sea nominal...

SR. CASTRILLÓN – Pido la palabra.

La verdad, señor Presidente, que el Artículo 1º del proyecto de ley es claro. Pido que por Secretaría, porque quiero estar presente en la votación, cuando logre aclarar lo que es el Artículo 1º, me llamen a la oficina y voy a venir a votar.

No lo tome como un desprecio, señor Presidente, sino que creo que estamos entrando en una situación que legislativamente no es así; pero como no soy el dueño de la verdad cuando aclaren la verdad que por Secretaría me convoquen y vendré a votar.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Se va a votar el Artículo 1º conforme la precisión hecha por Secretaría.

-Luego de unos instantes dice el:

SR. SECRETARIO (Gómez) – Informo, señor Presidente, que han votado once diputados por la negativa y diez por la afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – Queda rechazada la moción.

-Se retiran los integrantes del Bloque Justicialista.

SR. PRESIDENTE (Engelmann) – No habiendo quórum para continuar sesionando, queda levantada la sesión.

-Eran las 14 y 38.

Graciela R. Pasi de Garelli
Directora Cuerpo de Correctores

Claudia Ormazábal
Directora Diario de Sesiones